

DERECHO EN SOCIEDAD

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

VOLUMEN 19. NO. 1. MARZO 2025
PUBLICACIÓN SEMESTRAL. ISSN 2215-2490



EQUIPO EDITORIAL

DIRECTOR

M.Sc. Josué Fernández Araya

Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, Costa Rica

EDITOR EN JEFE

Ph.D. Dennis Petri

Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, Costa Rica
dpetrik299@ulacit.ed.cr

CONSEJO EDITORIAL

Lic. José Armando Madrigal Segura

Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, Costa Rica

M.Sc. Álvaro Pérez Roda

Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, Costa Rica

M.Sc. Luciano Fernando Donadi

Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, Costa Rica

M.Sc. David Garnier Méndez

Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, Costa Rica

M.Sc. Erick Méndez Monge

Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología, Costa Rica

DISEÑO GRÁFICO

Alexánder Salazar Arroyo

CONSEJO CIENTÍFICO

M.Sc. Mayren Vargas Araya

Universidad Nacional de San Martín
en Buenos Aires, Argentina

Dr. Ludger Niemann

The Hague University of
Applied Sciences, Países Bajos

M.Sc. David Gamboa Solano

Instituto de Estudios Políticos de Paris,
Francia

Dr. Bernie Arauz Cantón

University of Bradford, Reino Unido

Dr. Javier Saldaña Serrano

Universidad Nacional Autónoma de México, Mé-
xico

M.Sc. José Rojas Alvarado

University of Oxford, Reino Unido

Dr. Charles J. Russo

University of Dayton, Estados Unidos

Dr. Jonathan Fox

Universidad Bar-Ilan, Israel

Dr. Felipe Gaytán Alcalá

Universidad La Salle, México

Dr. Jason Klocek

Universidad de Nottingham, Reino Unido

Dr. Ariel Liberman

Emory University, Estados Unidos

Lic. Efraín Nieves Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México, Mé-
xico

Dra. Silvia Irene Verdugo Guzmán

Universidad Internacional de La Rioja, España

DERECHO EN SOCIEDAD

REVISTA ELECTRÓNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE ULACIT
VOLUMEN 19. NO. 1. MARZO 2025. PUBLICACIÓN SEMESTRAL. ISSN 2215-2490

EDITORIAL

Dr. Dennis P. Petri, editor-en-jefe

ARTICLES / ARTÍCULOS

The Wolf in Sheep's Skin: The Discrepancy between the Promises of Religious Freedom in the Constitution of the People's Republic of China and the Actual Practices in Mainland China

Grace Gaffet

“Fatally Flawed”: How the one-sided UNGA Resolution 77/247 has led to the one-sided Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Occupied Palestinian Territory

Paulina Guerrero, Alessandro Spinillo & Andrew Tucker

Barriers for Peace Mediators when shifting to an online environment: A Case Study of The UN in Yemen

Brian Oliver Bruggeman

Derecho al Olvido digital en materia judicial en Colombia: ¿Defensa de la Intimidad o Riesgo de Censura?

Laura Alejandra Alzate Mayorga

El diálogo entre Cortes: el vínculo entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Alex Rojas Ortega

Los movimientos nacionalistas como claves para la solución del conflicto palestino – israelí

Bryan Acuña Obando

Eficiencia Legislativa en Costa Rica: Estrategias Modernas para la Optimización de Despachos Legislativos

Camila Valerín-Montero

ESSAYS / ENSAYOS

El precio de la denuncia en América latina

Claire Launay Gama

El peritaje cultural: Puente para el entendimiento intercultural en procesos judiciales con pueblos indígenas

Cindy Ariana Céspedes López & Glen Calvo Céspedes

Freedom of Conscience and Religion in the Americas: Following OAS General Assembly resolutions to promote pluralism and strengthen communities

Emily A. Cole

Global Cities: A New Hierarchy and Critical Assessment of the Post-Colonial Legacy

David Garnier Méndez

The Fintech Revolution: Why the Predictions Have (Not) Come True

Jeroen Haans

Global Suppliers and their effect on the global supply chain for food

Abigail Orozco Bolaños, Hans Johann Burckhardt & Léonie Menard

El antisemitismo en las redes sociales de Costa Rica: Análisis de comentarios en medios de alta circulación (octubre 2023 - diciembre 2024)

María D. Rodríguez Rodríguez

What do Constitutions say about religious freedom? More than you would think, and less than you would like!

Dennis P. Petri & Jonathan Fox

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

Barrio Tournón, San José, Costa Rica

Teléfono: 506 - 2523-4000

www.ulacit.ac.cr

Copyrights ©

Derechos reservados. La presente publicación pertenece a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, con sede en Costa Rica y está bajo una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA). Esto permite a otros distribuir, remezclar, adaptar y crear a partir del material en

cualquier medio o formato solo para fines no comerciales, siempre que se atribuya el crédito al creador. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales.

ISSN: 2215-2490

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Costa Rica, no se hace responsable de la opinión vertida por las personas autoras en los distintos artículos.

Hecho el depósito legal.



EDITORIAL

Por: Dr. Dennis P. Petri, editor en jefe

Es un placer presentar una nueva edición de *Derecho en Sociedad*, en la que reafirmamos nuestro compromiso con la internacionalización y la profesionalización de la revista.

Este número incluye siete artículos y ocho ensayos, más de la mitad en inglés. La mayoría de estos trabajos son el resultado de colaboraciones con cuatro prestigiosas instituciones académicas.

Uno de nuestros principales esfuerzos de internacionalización ha sido la alianza con *Canopy Forum*, una plataforma digital del *Center for the Study of Law and Religion de Emory University* en Estados Unidos. En el marco de esta colaboración, publicamos primero versiones cortas de los ensayos en *Canopy Forum* y luego versiones más extensas en nuestra revista. En esta edición, presentamos tres trabajos fruto de esta alianza: un artículo de Grace Gaffet sobre la libertad religiosa en China, un ensayo de Emily Cole sobre la promoción de la libertad de conciencia y religión en la *Organización de los Estados Americanos*, y un ensayo de mi autoría junto con Jonathan Fox sobre las cláusulas de libertad religiosa en las constituciones del mundo.

También establecimos una colaboración con el *Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) del Instituto de Estudios Políticos de París*, que nos permitió publicar un ensayo de Claire Launay Gama sobre el proyecto de pódcast *Alertas!*, dedicado a casos de *whistleblowers* en América Latina.

Todos los episodios de ese pódcast son relevantes, pero destaco el que aborda la denuncia de una activista pro derechos humanos en Nicaragua. Es preocupante el acelerado deterioro del estado de derecho en este país vecino, un fenómeno del que, lamentablemente, se habla muy poco en Costa Rica.

Nuestra tercera colaboración es con *The Hague Initiative for International Cooperation*, gracias a la cual publicamos un análisis de Paulina Guerrero, Alessandro Spinillo y Andrew Tucker sobre la polémica Opinión Consultiva de la *Corte Internacional de Justicia* respecto a los Territorios Palestinos Ocupados.

La cuarta colaboración es con el *Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el*

Medio Oriente, lo que permitió la publicación de dos importantes trabajos: un artículo de Bryan Acuña sobre el papel del nacionalismo en la resolución del conflicto palestino-israelí y un ensayo de María Rodríguez sobre el preocupante auge del antisemitismo en Costa Rica, reflejado en redes sociales.

A través de estas dos últimas colaboraciones, buscamos aportar análisis rigurosos sobre un tema que ha generado desinformación y polarización: el resurgimiento del conflicto en Medio Oriente y, en particular, la posición de Israel. Como revista académica, asumimos la responsabilidad de contribuir al debate con información objetiva y fundamentada.

Además, en esta edición el lector encontrará una variedad de investigaciones que abordan temas clave en el ámbito jurídico y político. Brian Bruggeman analiza la mediación para la paz en Yemen que tuvo que virtualizarse debido a la pandemia. Laura Alzate Mayorga examina el derecho al olvido digital desde la justicia colombiana. Alex Rojas Ortega explora la relación entre la *Sala Constitucional de Costa Rica* y la *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Camila Valerín-Montero propone estrategias para mejorar la eficiencia de la *Asamblea Legislativa de Costa Rica*.

Asimismo, presentamos ensayos de Cindy Céspedes y Glen Calvo sobre el peritaje cultural en procesos judiciales de pueblos indígenas. David Garnier aborda el surgimiento de las ciudades globales desde una perspectiva crítica. Jeroen Haans analiza los efectos de la revolución fintech, mientras que Abigail Orozco Bolaños, Hans Johann Burckhardt y Léonie Menard examinan los desafíos de la cadena global de alimentos.

Quisiera dedicar esta edición al profesor Olivier Dabène, del Instituto de Estudios Políticos de París, quien ha sido un mentor fundamental en mi carrera académica. Fue director de mi tesis de maestría y miembro del tribunal de mi tesis doctoral, pero su impacto va mucho más allá de lo personal: ha dejado una huella profunda en la ciencia política en Costa Rica, desde la publicación de su monografía *Juicio a la democracia en 1992*. Este año se pensiona, dejando un legado que seguirá inspirando a muchos.

Agradezco profundamente a todos los autores, revisores y miembros de nuestros comités editorial y científico por su valiosa contribución a esta edición.

Les deseo una lectura enriquecedora de los trabajos originales que conforman este volumen.

ARTICLE

The Wolf in Sheep's Skin: The Discrepancy between the Promises of Religious Freedom in the Constitution of the People's Republic of China and the Actual Practices in Mainland China

El lobo con piel de oveja: La discrepancia entre las promesas de libertad religiosa en la Constitución de la República Popular China y las prácticas reales en la China Continental

Grace Gaffet ^{1 2}

How to cite:

Gaffet, G. (2025). The Wolf in Sheep's Skin: The Discrepancy between the Promises of Religious Freedom in the Constitution of the People's Republic of China and the Actual Practices in Mainland China. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 1-19. Doi: 10.63058/des.v19i1.307

Submission received: 15 August 2024. **Accepted:** 2 December 2024.

¹ Grace Gaffet is a Master's student in Theology and Religious Studies at Evangelische Theologische Faculteit Leuven; she holds a Master's degree in Affaires Internationales from Institut International du Commerce et du Développement de Paris; Violent Incident Database Researcher at the International Institute for Religious Freedom (IIRF). ORCID: 0009-0009-4432-8159. Email: grace.gaffet@proton.me

² This manuscript builds upon a publication that originally appeared in Canopy Forum, a digital platform from the Center for the Study of Law and Religion at Emory University: <https://canopyforum.org/canopy-forum-in-collaboration-with-derecho-en-sociedad/>

Abstract

This article analyzes how the Chinese authorities guarantee the freedom of religion and belief in the Constitution of the People's Republic of China, yet simultaneously violate it under Xi Jinping's leadership. The religious demography and historical background of politics and religion offer reasons for the Chinese Communist Party to hold a negative perception of religion, including the five official religions and other beliefs. It also explains the Party's motivations for overseeing and restricting the religious freedom of all individuals and groups. The Constitution of China states its respect for the freedom of religion and belief for all individuals and groups. However, some terms in the Constitution are ambiguous and may indicate certain implications. In practice, the Chinese authorities do not respect their Constitution and have established the State Administration for Religious Affairs to monitor all religious groups. Under Xi Jinping's leadership, various regulations, measures, and policies reveal that the Party-state actively implements its anti-religion agenda. The illustrated incidents demonstrate that the religious freedom of minorities, such as Catholics, Protestants, Hui and Uyghur Muslims, and Tibetan Buddhists, is especially violated. Spiritual groups are regarded as "evil cults" and are arrested under the Criminal Law. The atheist and authoritarian state considers that all these religious groups may use their religion to threaten the stability of China.

Keywords: constitutions, regulations, China, religious freedom, religious minorities

Resumen

Este artículo analiza cómo las autoridades chinas garantizan la libertad de religión y creencias en la Constitución de la República Popular China y, al mismo tiempo, la violan bajo el liderazgo de Xi Jinping. La demografía religiosa y el trasfondo histórico de la política y la religión ofrecen razones para que el Partido Comunista Chino tenga una percepción negativa de la religión, incluidas las cinco religiones oficiales y otras religiones y creencias. También se explica la motivación del Partido para supervisar y restringir la libertad religiosa de todos los individuos y grupos religiosos. La Constitución de China establece su respeto por la libertad de religión y creencias de todos los individuos y grupos religiosos. Sin embargo, algunos términos en la Constitución pueden ser ambiguos e indicar ciertas implicaciones. En la práctica, las autoridades chinas no respetan su Constitución y establecen la Administración Estatal para Asuntos Religiosos para monitorear a todos los grupos religiosos. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, diferentes regulaciones, medidas y políticas indican que el Partido-estado implementa activamente su trabajo antirreligioso. Los incidentes ilustrados muestran que la libertad religiosa de las minorías religiosas, como los católicos, protestantes, musulmanes Hui y uigures, y los budistas tibetanos, es especialmente violada. Los grupos espirituales son considerados como "cultos malignos" y son arrestados bajo la Ley Penal. El estado ateo y autoritario considera que todos estos grupos religiosos pueden utilizar su religión para amenazar la estabilidad de China.

Palabras clave: constituciones, reglamentos, China, libertad religiosa, minorías religiosas

Introduction

China has a long history. In its relationship with the West, China dominated trade initially due to its superior civilization. However, the Industrial Revolution in Europe reversed this situation. In the Opium War in 1842, the British defeated China and signed a treaty. This became the basis for a sequence of wars and diplomatic dealings that altered China's international status. In the nineteenth century, foreign powers grew, and China was repressed by signing treaties.

Nowadays, the Chinese central government adopts a top-down leadership structure and infringes on human rights in various aspects, most notably through its tightened control over the media and education in recent years. President Xi Jinping has stated that all media are entirely under the leadership of the Party (Rhodes & Yu, 2023). Information sharing to and from China requires the Party-state's authorization and is used as a propaganda tool to promote the Party's political agenda, ensuring the regime's leadership and the nation's stability are upheld and propagated. Additionally, education and research at all levels are co-opted to control people's knowledge through propaganda. The Patriotic Education Law, passed during a session of the National People's Congress Standing Committee, took effect on 1 January 2024. Its goal is to indoctrinate students to love and devote themselves to the Chinese Communist Party and its leadership, strengthening their national identity and the core values of socialism.

Religion can hardly escape from the same fate. Religious freedom is deprived because religion is perceived as a threat or rival according to the ideology of the Communist Party. Therefore, this paper will investigate how the People's Republic of China shows inconsistency in its constitution and its actual practices toward religious freedom in mainland China under Xi Jinping's leadership. First, the religious demography and the history related to politics and religion in mainland China will be provided to give a better understanding of the state's restrictions on freedom of religion and belief. Next, the constitution of China and other legal provisions that promise freedom of religion and belief will be explained. Then, the main challenges to freedom of religion and belief in reality will be elucidated and illustrated with incidents of violations. The empirical analysis will be supported by legal texts, scholarly resources, international reports, and reporting from religious freedom advocacy groups. This paper will end with a conclusion.

Background Information

Religious Demography

The population of China in 2023 is 1.4 billion. Despite being an atheist state, different religious groups exist in China. According to the 2020 World Religion Database, the non-religious (Atheists and Agnostics) comprise forty percent of China's population, Chinese folk-religionists (followers of indigenous religions of China) thirty percent, Buddhists sixteen percent, Christians seven percent,

Ethnic religionists four percent (followers of local religions connected particularly to ethnic groups), Muslims one point seven percent, and Daoists and Confucianists less than one percent (ARDA, n.d.). According to the International Religious Freedom Report 2023, seven to twenty million Falun Gong practitioners were estimated by the Freedom House in 2017, whereas two thousand five hundred Jews by the World Jewish Congress in 2015 (US State Department, 2024, pp. 7–8).

Wenzhou city in Zhejiang province represents one of the largest Christian communities in China. According to the official data, approximately ten percent of the city's population is Protestant, following the efforts of foreign missionaries George and Grace Stott since the 1860s (Chan, 2014). Concerning the Muslim population in China in 2020, the majority were Uyghurs (Turkic-speaking), followed by Hui (Mandarin-speaking) (Textor, 2022). Uyghur Muslims concentrate in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Yunnan Province is one of the places where Hui Muslims primarily live.

History of Politics and Religion

Before the Communist Party was founded, Chinese sovereignty was introduced in East Turkestan in 1911, but Uyghurs fought for their independence. They won twice but were defeated in 1949 (Islam, 2023). In the same year, Mao Zedong founded the People's Republic of China (PRC) and led as the chairperson of both the PRC until 1959 and the Chinese Communist Party (CCP) until 1976 (Scharm, n.d.). Under the influence of Marxism-Leninism, for Mao, all religions should be ultimately eliminated and he tried to achieve this goal by first placing them under CCP rule ('Chairman Mao', n.d.).

The CCP regards atheism as part of its basic doctrines and reinforces its ideology. After the establishment of the PRC, Mao expelled foreign Christian missionaries and created five state-sanctioned religious bodies in the appointment of their religious leaders. Nevertheless, not all religious individuals and groups surrendered. The Vatican denied state-appointed bishops as Catholic and caused the Catholic loyalists to Rome to go underground (Introvigne, 2018).

Protestant church leader Wang Mingdao, who was a fundamentalist, believed that a pure church ought to be led by truly born-again and indigenous Chinese Christians (Cook, 2021, p. 139). He disagreed with the ideology of the CCP and refused to join the state-sanctioned Protestant church organization, the Three-Self Patriotic Movement (TSPM). Wang regarded its leaders as theologically liberal and considered that the true church must remain separated from the state. He openly criticized the TSPM and called Christians in China to be independent of the CCP's oversight (Nation & Tseng, 2022, pp. 6–7). He was sentenced to fifteen years' imprisonment in 1955 (Cook, 2021, pp. 163–164). His refusal to join the TSPM is perceived as the beginning of the house church movement.

According to Ronald Boyd-MacMillan, refusal of being a Communist brought persecution, non-compliant Christians were re-educated through labor in the re-education camps (Boyd-MacMillan, 2006, p. 52). Massimo Introvigne elucidated that the Cultural Revolution in 1966 led to the persecution of both authorized and unauthorized religions. Many pastors, priests, monks and imams were killed, whereas religious books and places of worship were destroyed (Introvigne, 2018).

After Mao died, Deng Xiaoping rose to power. According to G. Wright Doyle and Eleanor Albert, Deng's 1979 "Open Door" policy of opening up the outside world and the release of imprisoned religious leaders brought gigantic growth of Christianity in the 1980s, with Christianity first spreading in house churches created in rural areas (Doyle, 2012, p. 53; Albert, 2018). On 31 March 1982, the Central Committee of the CCP promulgated "Document 19: The Basic Viewpoint and Policy on the Religious Question during Our Country's Socialist Period." It rebuked the error of the Party's leaders made during the Cultural Revolution to some extent. However, this Party's policy repudiated the "leftist" errors by restricting and suppressing religious activities and managing religious affairs (Madsen, 2020, pp. 18–19).

After the Tiananmen Square massacre (1989), Boyd-MacMillan and Marie-Eve Reny explain that pro-democracy intellectuals in urban communities pivoted to religious practices: Daoism, Buddhism, and Christianity (Boyd-MacMillan, 2006, p. 54; Albert, 2018). Reny adds that leaders of unregistered churches considered the separation of religion and state, that religious activities should be without state interference. Although the Public Security Bureau (police at the prefecture level) was responsible for prosecuting and preventing illegal activities, these activities were tolerated under conditions of containment bargain such as no engagement in political activism (Reny, 2018, pp. 2–7; 'Public Security Bureau', n.d.). Furthermore, according to Introvigne, when Deng promoted Qi Gong as a traditional Chinese culture rather than religion, Falun Gong rose and was perceived as a threat by the CCP. Hence, the largest segment of religion in China consisted of unregistered religious organizations, considered illegal by the government (Introvigne, 2018).

In 2013, Xi Jinping was elected as president of China. He also holds the positions of general secretary of the CCP and chairman of the Central Military Commission (Graceffo, 2023). In 2018, Xi abolished the term limit for serving as president. He intensified antireligious campaigns, more fiercely than the previous decades. In 2022, he extended his presidency to a third term as CCP general secretary, becoming one of the three most powerful leaders in PRC's history (along with Mao and Deng). The state dominates church affairs with tighter restrictions such as the inclusion of Communist ideology in religious doctrines and restriction of the church's operation. These restrictions advanced rapidly during the COVID-19 pandemic (Open Doors International, 2022, pp. 9–10).

Legal Provisions of China

The Chinese government officially recognizes five religions: Buddhism, Daoism, Islam, Protestantism, and Catholicism. Only Daoism is genuinely Chinese, the others were imported from overseas. China signed five international treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), to respect and protect fundamental human rights (Open Doors International, 2022, p. 6). Nevertheless, it has not ratified the ICCPR.

Besides, the revised Constitution of the PRC declares its protection of the freedom of religion to its citizens. Article 36 states that

citizens of the People's Republic of China shall enjoy freedom of religious belief.

No state organ, social organization or individual shall coerce citizens to believe in or not to believe in any religion, nor shall they discriminate against citizens who believe in or do not believe in any religion.

The state shall protect normal religious activities. No one shall use religion to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the state's education system.

Religious groups and religious affairs shall not be subject to control by foreign forces (Constitution of the People's Republic of China, 2019).

Despite the promise of protection, other possible interpretations and certain implications are found. In the third paragraph, Richard Madsen interprets "normal religious activities" as activities within the church building, implying no mission activities (Madsen, 2020, p. 23). Reny defines "normal" as those registered with and approved by the State Administration for Religious Affairs (Reny, 2018, p. 1). However, it will be argued that "normal religious activities" include only adult religious activities approved by the state. The emphasis of the term "normal" lies not on the status as "registered," but on their obedience and loyalty to the Party-state. Such protection thus comes with conditions and is not always guaranteed. The last paragraph shows possible signs of "Sinicization". Besides, foreign religious personnel require an invitation and approval from the state before they may preach at the registered sites (Ping, 2012, pp. 3-4). Moreover, no foreign printed materials can be distributed to any local religious organizations (Harvey, 2023).

Apart from the Constitution, the protection of freedom of religion can be found in other laws. For example, the Law of the PRC on Regional National Autonomy, the General Rules of Civil Law, the Law of Education, and the Labor Law. These laws protect the property of religious organizations,

equal education, and employment opportunities to every citizen with diverse religious backgrounds, and respect for religious beliefs and customs of each ethnic group (Ping, 2012, p. 2).

Actual Practices and Religious Persecutions in the Mainland

According to Open Doors, China's ranking moved up from the top thirty in the World Watch List 2019 to the top twenty in 2023 (China: 2023 Full Country Dossier, 2022, pp. 5–6). The placement slightly drops in 2024, its score is still slowly increasing. The Communist and the post-Communist oppression, and the dictatorial paranoia are the main persecution engines, driven mainly by the Government officials and the Political parties (Open Doors International, 2023, p. 6). The Party-state delegates departments such as the Religious Affairs Bureau, Ministry of State Security, and Public Security Bureau for regular anti-religion work. It perceives Protestant house church Christians, Roman Catholics, Muslim Uyghurs, and Tibetan Buddhists as having foreign connections, whereas spiritual groups, notably Falun Gong, as “evil cults” or xiejiao (Crabtree, 2023). The unregistered groups are severely persecuted. However, registered organizations are also repressed. Therefore, the Party-state practices in infringement of religious freedom will be explained with illustrations as follows.

State Departments for Anti-Religion Work

The State Administration for Religious Affairs (SARA), carries out the direction of the United Front Work Department (UFWD) to implement religious policy. The SARA oversees the operations of China's five officially sanctioned religious organizations: Buddhist Association of China, Chinese Daoist Association, Islamic Association of China, Patriotic Catholic Association and Three-Self Patriotic Movement (Protestant). It aims at supervising the appointments of clergy and the interpretation of religious doctrine, and ensuring all registered religious bodies support and implement the CCP policy. Among all directors of SARA, Ye Xiaowen persecuted aggressively unregistered Christian groups, Tibetans, and Falun Gong from 1995 onward. He launched the first regulations of religious activity, distinguishing all worship and other religious activities of the registered communities as legal and those of underground communities as illegal. It led to the arrests of bishops and priests, the vandalism and destruction of places of worship, and physical violence against the believers. Besides, the eleventh Panchen Lama was elected in 1995 under his direction, unrecognized by the Dalai Lama. He obliged the approval of the Party on all Buddhist reincarnation. Additionally, he led a campaign against Falun Gong resulting in arrests of members, being accused of following an “evil cult” (Cervellera, 2009; Kunchok, 2023a). In 2018, the SARA was incorporated into the UFWD. The UFWD reports directly to the Central Committee of the CCP. It manages opposition within the nation, making sure that prominent Chinese individuals and groups align with the Party and its agenda (Nation & Tseng, 2022, p. 252).

The Ministry of State Security manages the Early-Warning Intelligence Team, which is primarily

responsible for gathering intelligence on foreign-related religions, analyzing the patterns of their religious activities, developing trends of foreign-related religions and providing early-warning information for crackdown campaigns.

The Public Security Bureau is responsible for the surveillance and control of “evil cults.” It administers the Investigation and Crackdown Team. It is responsible for conducting surveillance work, establishing a database of members in foreign-related religious groups, and following and suppressing their activities (Wu, 2019).

Government Issues Regulations and Measures

On the surface, the Party-state issues regulations and measures to maintain public security. However, in reality, it requires the political loyalty of state-controlled religious organizations to the CCP and to serve its political purposes and interests (M. Chen, 2022, p. 2). Indeed, Document 19 promulgated in 1982 already states that

the basic task of these patriotic religious organizations is to assist the Party and the government to implement the policy of freedom of religious belief, to help the broad mass of religious believers and persons in religious circles to continually raise their patriotic and Socialist consciousness, to represent the lawful rights and interest of religious circles, to organize normal religious activities, and to manage religious affairs well (Religion and Law Consortium, n.d.).

Since then, the state regulations on religion have been based on the principles pronounced in this document and Article 36 of the revised Constitution of the PRC, forming the “1982 framework” (Madsen, 2020, p. 17). The most significant policies on religion under Xi’s leadership are the revised Regulations on Religious Affairs, which took effect in February 2018. The objective of this policy is to constrain activities in registered religious organizations, eliminate the unregistered ones and cause further crackdown on the cult (‘New Regulation on Religious Affairs’, n.d.). Article 8 mandates that state-regulated religious groups cooperate with the government by implementing state laws, regulations and policies (Religious Affairs Regulations 2017, 2017). Moreover, four Articles state that unregistered staff performing any religious activity in unregistered sites will receive heavy fines and face closure of sites. Additionally, neither religious activities (considered as proselytism) for minors nor at school campuses is allowed, including those offered by Three-Self Churches after school (Cervellera, 2017; Zhou, 2019).

Furthermore, in 2020, Article 5 of the Measures on the Administration of Religious Groups further obliges religious organizations to follow the Party’s leadership and notably persist in the “Sinicization” of religion. Article 17 mandates them to publicize and educate religious communities on state laws and policies to support socialist values. Articles 19-36 require them to be subject to the CCP’s ongoing monitoring of diverse religious matters such as the management of religious

schools, place of worship and clerical selection. Articles 37 and 38 warn about punishment for noncompliant groups and individuals (Measures for the Administration of Religious Groups, 2020).

The Measures for Administration of Internet Religious Information Services were enforced in March 2022. Religious groups must obtain government-issued licenses to disseminate religious content online. However, registration requirements and process records are complicated. In article 15, sermons and lectures performed by licensed groups and schools will be verified for their “Sinicized” content to ensure they promote socialist values and have no intention of proselytization. Article 17 states that religious activities such as worship of Buddha, ordination, mass, and baptisms cannot be broadcast live or recorded in images, audio and video or texts (Hu, 2021). After the law became effective, the reputed website “Jonah Home” providing rich Christian resources was suddenly closed. The accounts of individual Christian users of WeChat, a messaging application, were deleted (Gao, 2022).

Last but not least, Beijing launched the “Buddhist and Daoist Clerical Personnel Information Query System” in 2023. Later in May, the same system was launched for Islamic, Catholic and Protestant clergy. The database was to identify the illegitimate clergies and persecute them (He, 2023). Additionally, in the same year, Measures for the Financial Management of Venues for Religious Activities came into effect on 1 September. Monasteries, temples, mosques, churches and other religious activity venues including sermons are required to support the leadership of the CCP and Xi’s plans for the “Sinicization” of religious activity, or they will face liquidation. Article 50 states that these venues should integrate Chinese culture and embody Chinese style in their architecture, sculpture, painting and decoration. In Articles 52 and 53, religious groups are not allowed to build large religious statues outside their religious buildings, this prohibition also applies to private citizens or donors (Hu, 2023).

Finally, spiritual groups such as Falun Gong and the Church of Almighty God are regarded as illegal or “superstitious cults.” They are attacked by the “anti-cult” provisions, specifically Article 300 of the PRC Criminal Law, which forbids the use of a cult to undermine the implementation of laws and regulations (Criminal Law of the People’s Republic of China, 1979). The Falun Gong source reported over 7,000 practitioners were arrested or harassed, more than 600 were imprisoned and about 170 were martyred in 2022 (Minghui, n.d.).

“Sinicization” of Religion

In 2015, Xi Jinping announced the theory of “Sinicization” and applied it to all carriers of culture, including academia and religion. The SARA and state-sanctioned religious organizations implement the “Sinicization” of Religion, a major strategic measure to remove foreign forces and influences. It guides all religions to conform to the CCP’s doctrines and cultivate the core values of socialism, and assimilates ethnic minorities into Chinese culture so that their cultural and religious identities

can be erased. This is because the state avoids foreign and extremist forces using religion as a threat to infiltrate China and disseminate separatism (Xia, 2022).

Indeed, the concept of “Sinicization” was used in the past, it signifies the effort to replace foreigners who managed businesses, religions and civil society organizations with Chinese leaders. These leaders are notably selected by the Party and “operate within a framework of strategies and objectives indicated by the CCP” (Sinicization, n.d.). In 2016, Xi gave a keynote speech at the Communist Party National Conference on Religious Work. He emphasizes the continual work of “Sinicization” of all religions and the management of religions based on the rule of law for management effectiveness. In 2018, each of the state-controlled religious bodies released their five-year plan for 2018-22 on how to “Sinicize” their own religions (Gan, 2019). Consequently, unregistered and non-compliant religious groups face harassment, arrest, detention, imprisonment and other abuses. In 2022, all five state-sanctioned religious groups, together with the Chinese Catholic Bishops’ Conference and the China Christian Council, issued a joint statement called “National Religious Organizations Common Initiative on Cultivating Frugality and Abstaining from Extravagance.” It is to pledge that they would adhere to CCP guidelines for the management of religions, including supervision of religious institutes, finances, and properties. It aims to implement the spirit of the CCP’s second National Conference of Religious Affairs held in December 2021 (Union of Catholic Asian News, 2022). Under the effect of this policy, the religious freedom of the following four religious groups is particularly violated.

Protestants

The Chinese Christian Council (CCC) is responsible for theological education and the publication of Bibles, hymnals and religious literature with socialist values. It is illegal to possess any Bible not purchased in the bookstores operated by the TSPM (A Bible for Every Believer, n.d.). Since the “Administrative Measures for Religious Schools” was implemented in 2021, CCC’s president led a team from China Christian Theological Education Committee to inspect Zhejiang Theological Seminary. It is to verify the progress of the “Sinicization” of seminaries and full compliance with the Measures, so that seminaries promote Xi’s socialist ideology (Zhang, 2023).

At church, sermons are scrutinized to ensure the incorporation of the Communist ideology. Besides, over two hundred house churches including Wenzhou Sanjiang Church have been demolished and two thousand crosses removed in Zhejiang, particularly in Wenzhou, since 2014. Pastors were arrested and detained (Yu, 2016). According to the authorities, the Sanjiang Church was illegally built, breaching the land-use regulations (Li, 2014).

Additionally, in August 2017, numerous local churches in Wenzhou received notices from the state that minors were rigorously forbidden to enter churches.” After the state’s Regulations on Religious Affairs were enforced and the five-year plan on “Sinicization” for the official religions

was implemented in 2018, further actions were taken place in March 2023, parents of kindergarten children in Longwan district of Wenzhou city were mandated for the first time to sign a “pledge form of commitment for family not to hold religious beliefs.” The pledge states that parents affirm not to hold any religious belief including cult, not to participate in any religious activities, and not to propagate religion in any location. The pledge also demands affirmation of being exemplary observance of the CCP discipline and the country's laws and regulations (ChinaAid, 2023).

Finally, the “Outline of the Five-Year Work Plan for Further Advancing the Sinicization of Christianity (2023-2027)” was launched in December 2023 and interpreted by the CCC and TSPM. When compared to the last outline (2018-22), it shifts its focus from emphasis on the significance of the “Sinicization” of Christianity to the more concrete actions. It plans to reflect and discuss major theological themes such as the “theology of God” in the context of Chinese culture. It aims at building a theological framework with Chinese characteristics to manage the Chinese church (Zhang, 2024).

Catholics

The SARA issued Administrative Measures for Religious Clergy in 2021. Article 16 states that bishops are elected through the Chinese Patriotic Catholic Association (CPCA), approved and consecrated by the Chinese Catholic Bishops' Conference (Introigne, 2021). It violated the Provisional Agreement made secretly by the Holy See and the PRC on the appointment of bishops in China in 2018. It was renewed in 2020 and 2022 with the extension of two years. In November 2022, the Vatican released a statement saying that Peng Weizhao's installation as the Auxiliary Bishop of Jiangxi was surprising, the diocese of Jiangxi was not recognized by the Holy See (Vatican, 2022). Despite becoming official, Bishop Peng from the underground church still had little autonomy. The CCP pressured both official and underground bishops, and shaped diocesan boundaries to fit their political objectives (‘Underground Bishop Peng Weizhao Becomes Official in Jiangxi’, 2022). Nevertheless, the Holy See hopes for appropriate communications on the matter from the Chinese authorities and is willing to conduct respectful dialogue for the common interest (Allen, 2022).

Bishop Peter Shao Zhumin of Wenzhou, recognized by the Pope but not the CCP, was arrested multiple times and subjected to regular “brainwashing” sessions to join the CPCA. The kidnappings occurred on the eve of important Catholic events. In 2021, he was kidnapped and detained. In 2022 and 2023, he was arrested (AsiaNews, 2021; ChinaAid, 2023).

In addition, clergy are mandated to attend political indoctrination sessions. Also, the liturgy is altered to underscore loyalty to the CCP and the state. At the twentieth of the National Congress of the CCP in 2022, Xi stated that religion must be compatible with socialist values (US State Department, 2023, pp. 29–30).

Muslims

Uyghurs, as the majority of the Muslims fought for their independence in the past, threatening the state. In 2014, the Chinese government based on the riots in Xinjiang to characterize Muslims in Xinjiang as extremists. The re-education efforts started in 2014 and expanded in 2017 for anti-extremism. Xi's "Sinicization" aims at assimilating Uyghurs to CCP's rule and ideology, and erasing their ethnic/religious identity (Abdureshid, 2022). Since 2017, over one million people have been imprisoned and arbitrarily detained in re-education camps, most of them are Uyghurs. According to the white paper, the Chinese government calls it as "vocational education and training centers" to prevent any terrorist ideas (The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang, n.d.). Detainees were tortured and involuntarily sterilized. They were forced to pledge loyalty to the CCP, and to renounce Islam and other cultural practices (Uyghur Human Rights Project: Questions and Answers, n.d.). Those outside the camp were subjected to intense surveillance and forced inter-marriages (Maizland, 2022). Since 2019, these camps have been transformed into detention centers or prisons. One in twenty-five people were sentenced to prison on terrorism-related charges, despite age and gender. They are all Uyghurs (Wu & Kang, 2022).

Besides, the Hui Muslims in Yunnan face ongoing persecution ('China Plans to "Sinicize" Islam as Muslims Warn of Eradication Campaign', 2019). The Najiaying mosque resumed construction in June 2023, with scaffolding around the minaret and dome. Many people in Najiaying received calls from the local police that they are neither allowed to use VPNs to browse social media platforms outside of China, nor take pictures/videos related to the mosques' "Sinicization" nor post them (Chen, 2023).

Tibetan Buddhists

Apart from SARA director Ye's persecution, the CCP tries to unceasingly destroy Tibetan religion and culture. Tibetan youth are "Sinicized" through education. In 2019, government officials ordered the rectification of the Huiquan temple. A Tibetan Buddhist shrine was converted into a Chinese pavilion and the traditional Tibetan bronze pillars were annihilated (F. Zhang, 2020). This year, monks were forced to sign documents renouncing their ties to Dalai Lama (Kunchok, 2023b). Many were forced into mass labor camps and training centers for political indoctrination ('China "coercing" Thousands of Tibetans into Mass Labour Camps - Report', 2020).

Conclusion

According to Dennis Petri and Jonathan Fox, several elements contribute to the discrepancy between the constitutions for religious freedom and their actual practices. First, constitutional clauses that guarantee religious freedom are “symbolic in nature and lack any practical implication.” Second, restrictions on religious freedom are found in lower-level legislation and bureaucratic practices. Third, the national sovereignty overrules the effectiveness of the international human rights system. The state can choose not to commit to the system in practice (Petri & Fox, 2023, pp. 13–14). Open Doors criticizes that China does not fulfill international obligations by breaching international treaties and failing to protect the rights of Christians (China: 2024 Full Country Dossier, 2023, p. 6). Concerning the violation of ICCPR Article 18, the unregistered Guangzhou Bible Reformed Church was raided by police officers twice. They accused the church of meeting illegally (‘Officials Established Task Force for Guangzhou Bible Reformed Church,’ 2023). Concerning the infringement of CRC Art. 14, the government officials raided a church school in Fujian Province and reported the school as a “cult.” Students were interrogated overnight and deported to their hometowns (ChinaAid, 2021).

The PRC Constitution declares the protection of religious freedom of every citizen, yet certain wordings are ambiguous and seem to imply specific prerequisites. The atheist and autocratic state regards religious freedom as granted by the government under conditions that its dominion is not threatened. Religious organizations and individuals must obey fully and remain loyal to the Party-state in exchange for their religious freedom, despite without guarantee at times. Under the leadership of Xi, the Party further suppresses their religious freedom. The Party-state continually delegates the Religious Affairs Bureau to monitor religious organizations and individuals through the five state-sanctioned associations. Together with the Ministry of State Security and the Public Security Bureau, they implement anti-religion work by enforcing legal regulations and superficially justifying them to preserve public security. The ultimate goal of its political agenda advancement was revealed in the “1982 framework” and the Regulations on Religious Affairs in 2018. However, the 2018 policy and other measures attempt to go beyond Document 19: every non-compliant, regardless of registered and unregistered organizations of all official religions, is coerced by the state to cultivate the Party’s socialist ideology. Restrictions extended to religious personnel, religious venues, and private online usage. Spiritual groups, regarded as “evil cults,” face criminal punishment and inhuman treatments such as organ harvesting. These laws and policies violate people’s right to manifest their religion or belief in worship and practice, and prohibit children from adopting a religion or belief of their choice.

When taking historical factors into account, the CCP is suspicious of Catholicism and Protestantism due to their foreign ties and of religions practiced by ethnic groups in sensitive border regions, Buddhism in Tibet and Islam in Xinjiang (Vala, 2017). These religious and ethnic groups were involved in ruling and subverting the nation in the past. To put them under the Party’s control, the “Sinicization” of religion policy obliges the Party’s ideology to incorporate into religious doctrines and erase foreign cultures or thinking. As illustrated, religious symbols are removed from religious

architecture; religious leaders are appointed directly under the Party's authority; and children are forbidden to study religions and worship with their parents. Three ethnic groups – the Tibetan Buddhists, Hui Muslims and Uyghur Muslims – even face the crisis of losing both their cultural and religious identities. Therefore, the laws, regulations, and policies in China conceal the Party-state's ambitious conspiracy: these religions are undergoing a “face-lift.” In other words, their unique doctrinal beliefs will gradually be eliminated and ultimately replaced by socialist patriotic doctrines. The more resistant the religious groups are to the government, the fiercer the state represses their religious freedom.

References

- Abdureshid, N. (2022, May 22). China pushes the ‘Sinicization of religion’ in Xinjiang, targeting Uyghurs. *Radio Free Asia*. <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/sinicization-religion-05202022133914.html>
- Albert, E. (2018, October 11). *Christianity in China*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounders/christianity-china>
- Allen, E. A. (2022, November 26). In rare public protest, Vatican calls out China over bishop's appointment. *Crux*. <https://cruxnow.com/vatican/2022/11/in-rare-public-protest-vatican-calls-out-china-over-bishops-appointment>
- American Historical Association. (n.d.). *China and the West*. Retrieved 9 July 2023, from [https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-42-our-chinese-ally-\(1944\)/china-and-the-west](https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-42-our-chinese-ally-(1944)/china-and-the-west)
- Asia News. (2021, October 26). Wenzhou authorities detain Bishop Shao Zhumin again. <https://www.asianews.it/news-en/Wenzhou-authorities-detain-Bishop-Shao-Zhumin-again-54365.html>
- Bitter Winter. (n.d.). *Sinicization*. Retrieved 12 July 2023, from <https://bitterwinter.org/Vocabulary/sinicization/>
- Boyd-MacMillan, R. (2006). *Faith that Endures: The Essential Guide to the Persecuted Church*. Fleming H. Revell.
- Cervellera, B. (2009, September 17). Ye Xiaowen, party hound on Vatican and religions, is promoted. *Asia News*. <https://www.asianews.it/index.php?l=en&art=16351&size=A>
- Cervellera, B. (2017, November 9). New regulations on religions: Annihilate underground communities, suffocate official communities. *Asia News*. <https://www.asianews.it/news-en/New-regulations-on-religions:-Annihilate-underground-communities,-suffocate-official-communities-41747.html>
- Chairman Mao. (n.d.). *Bitter Winter*. Retrieved 8 July 2023, from <https://bitterwinter.org/Vocabulary/chairman-mao/>
- Chan, M. (2014, July 23). Christianity in Wenzhou rose from humble beginnings to one million adherents. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/news/china/article/1557358/christianity-wenzhou-rose-humble-beginnings-one-million-adherents>

- Chen, M. (2022, December). *Factsheet Religious Freedom in China: State-Controlled Religion and Religious Freedom Violations in China*. United States Commission on International Religious Freedom. <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022-12/2022%20Factsheet%20-%20China%20State-Controlled%20Religion.pdf>
- Chen, T. (2023, June 28). Yunnan, “Sinicization” of Mosques, Temporarily Suspended After Protests, Started Again. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/yunnan-sinicization-of-mosques-temporarily-suspended-after-protests-started-again/>
- China ‘coercing’ thousands of Tibetans into mass labour camps—Report. (2020, September 23). *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54260732>
- China Adopts Patriotic Education Law. (2023, October 25). *Xinhua*. http://en.moj.gov.cn/2023-10/25/c_933528.htm#:~:text=BEIJING%20%2D%2D%20Chinese%20lawmakers%20on,1%2C%202024.
- China Law Translate. (2017, September 7). Religious Affairs Regulations 2017. <https://www.chinalawtranslate.com/en/religious-affairs-regulations-2017/>
- China Law Translate. (2020, January 1). *Measures for the Administration of Religious Groups*. <https://www.chinalawtranslate.com/en/measures-for-the-administration-of-religious-groups/>
- ChinaAid. (2021, December 21). Two Anonymous Church Schools Raided One Night after Another. <https://chinaaid.org/persecution-by-province/guangdong/two-anonymous-church-schools-raided-one/>
- ChinaAid. (2023, February 20). Bishop Peter Shao Zhumin Taken by Authorities. <https://chinaaid.org/persecution-by-province/zhejiang/bishop-peter-shao-zhumin-taken-by-authorities/>
- ChinaAid. (2023, March 20). Kindergarten Parents Must Pledge Not to Hold Religious Beliefs. <https://chinaaid.org/uncensored-news/featured/voices-from-china/kindergarten-parents-must-pledge-not-to-hold-religious-beliefs/>
- Congressional-Executive Commission on China. (1979, July 1). *Criminal Law of the People's Republic of China*. <https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china>
- Cook, R. R. (2021). *Darkest before the dawn: A brief history of the rise of Christianity in China*. Pickwick Publications.
- Crabtree, S. (2023, May 2). Religious Freedom Commission Calls Out Violations in Iran, China, Elsewhere. *Real Clear Politics*. https://www.realclearpolitics.com/articles/2023/05/02/religious_freedom_commission_calls_out_violations_in_iran_china_elsewhere.html
- Doyle, G. W. (2012). China: A Case Study. In W. Taylor, A. Van der Meer, & R. Reimer (Eds.), *Sorrow & Blood: Christian Mission in Contexts of Suffering, Persecution, and Martyrdom* (pp. 51–58). William Carey Library.
- Gan, N. (2019, March 6). Beijing plans to continue tightening grip on Christianity and Islam as China pushes ahead with the ‘Sinicisation of religion’. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2188752/no-let-chinas-push-sinicise-religion-despite-global-outcry-over>
- Gao, Z. (2022, May 18). Censorship Surged for Online Religious Forums as CCP Shuts down 21-year-old Christian Website. *ChinaAid*. <https://chinaaid.org/uncensored-news/stories->

- by-issue/rule-of-law/censorship-surged-for-online-religious/
- Graceffo, A. (2023, July 21). The Chinese Communist Party's War on Catholicism. *Providence*. <https://providencemag.com/2023/07/the-chinese-communist-partys-war-on-catholicism/>
- Harvey, T. (Director). (2023, June 20). *The Chinese Christian Diaspora in Britain and its Impact on Chinese Missions* [Video recording]. Oxford Centre for Mission Studies. <https://www.ocms.ac.uk/lecture/the-chinese-christian-diaspora-in-britain-and-its-impact-on-chinese-missions/>
- He, Y. (2023, June 8). China's "Query System for Islamic, Catholic, and Christian Clergy," Another Tool for Repression. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/chinas-query-system-for-islamic-catholic-and-christian-clergy-another-tool-for-repression/>
- Hu, Z. (2021, December 28). Crackdown on Religious Content on the Internet Coming March 1, 2022. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/crackdown-on-religious-content-coming-march-2022/>
- Hu, Z. (2023, August 7). The New Chinese Measures for Religious Activity Venues Come into Force on September 1: The Full Text. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/the-new-chinese-measures-for-religious-activity-venues-come-into-force-on-september-1-the-full-text/>
- Human Rights Without Frontiers. (2023). *Freedom of Religion or Belief News: China*. <https://hrwf.eu/wp-content/uploads/2023/03/China-2023.pdf>
- International Center for Law and Religion Studies. (n.d.). *Document 19—Religion and Law Consortium*. Retrieved 12 August 2024, from <https://original.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm>
- Introvigne, M. (2018, August 16). The Red Market: The "Official" Religions in China. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/official-religions-in-china/>
- Introvigne, M. (2021, February 11). Enter the "Administrative Measures for Religious Clergy": Be Afraid, Be Very Afraid. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/enter-the-administrative-measures-for-religious-clergy/>
- Islam, I. (2023, July 9). *The World Can't Remain Silent On China's Uyghur Muslim's Torture Issue – OpEd*. Eurasia Review. <https://www.eurasiareview.com/09072023-the-world-cant-remain-silent-on-chinas-uyghur-muslims-torture-issue-oped/>
- Kilpatrick, R. H. (2023, June 30). *Legislating Love for the Ruling Party*. China Media Project. <https://chinamediaproject.org/2023/06/30/legislating-love-for-the-ruling-party/>
- Kunchok, S. (2023a, June 7). China pays Tibetans to receive blessings from Beijing-backed Panchen Lama. *Radio Free Asia*. <https://www.rfa.org/english/news/tibet/panchen-lama-06072023084927.html>
- Kunchok, S. (2023b, June 26). Searching Tibetan monasteries, China requires monks to renounce ties to Dalai Lama. *Radio Free Asia*. <https://www.rfa.org/english/news/tibet/monks-06262023173433.html>
- Li, Z. (2014, May 2). China denies church demolition is persecution of Christians. CNN. <https://edition.cnn.com/2014/05/01/world/asia/china-church-demolished/index.html>
- Madsen, R. (2020). Religious Policy in China. In S. Feuchtwang (Ed.), *Handbook on Religion in*

- China* (pp. 17–33). Edward Elgar Publishing.
- Maizland, L. (2022, September 22). *China's Repression of Uyghurs in Xinjiang*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounders/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights>
- Mares, C. (2020, October 22). Vatican and China renew provisional agreement on appointment of bishops. *Catholic News Agency*. <https://www.catholicnewsagency.com/news/46307/vatican-and-china-renew-provisional-agreement-on-appointment-of-bishops>
- Minghui [Falun Dafa]. (n.d.). *Overview of persecution*. Retrieved 8 July 2023, from <https://en.minghui.org/cc/2/>
- Nation, H., & Tseng, J. D. (Eds.). (2022). *Faithful Disobedience: Writings on Church and State from a Chinese House Church Movement*. IVP Academic.
- New Regulation on Religious Affairs. (n.d.). *Bitter Winter*. Retrieved 8 July 2023, from <https://bitterwinter.org/Vocabulary/new-regulation-on-religious-affairs/>
- Office of International Religious Freedom. *China 2022 International Religious Freedom Report*. (2023). https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/04/547499_CHINA-2022-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
- Office of International Religious Freedom. *China 2023 International Religious Freedom Report*. (2024). https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/04/547499_CHINA-2023-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
- Officials Established Task Force for Guangzhou Bible Reformed Church. (2023, June 27). *ChinaAid*. <https://chinaaid.org/uncensored-news/featured/breaking-news/officials-establish-task-force-for-guangzhou-bible-reformed-church/>
- Open Doors International / World Watch Research. (2023). *China: 2023 Full Country Dossier* (WWL 2023 Full Country Dossier). <https://www.opendoors.org/en-US/research-reports/country-dossiers/>
- Open Doors International / World Watch Research. (2023). *China: 2024 Full Country Dossier* (WWL 2024 Full Country Dossier). <https://www.opendoors.org/en-US/research-reports/country-dossiers/>
- Petri, D. P., & Fox, J. (2023). *What Do Constitutions Say about Religious Freedom? More than You Would Think, and Less than You Would Like!* (p. 33). International Institute for Religious Freedom, IIRF Report 2023/11. <https://iirf.global/publications/reports/what-do-constitutions-say-about-religious-freedom/>
- Ping, X. (2012). Freedom of Religion in China under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies. *Religion, Democracy, and Civil Religion*, 5. <https://cdn-legacy.iclrs.org/content/events/26/521.pdf>
- Provisional Agreement between Holy See and China. (2018, September 22). *Vatican News*. <https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2018-09/china-holy-see-agreement-appointment-bishops.html>
- Radio Free Asia. (2019, January 7). China Plans to 'Sinicize' Islam as Muslims Warn of Eradication Campaign. <https://www.rfa.org/english/news/china/islam-01072019124436.html>

- Reny, M.-E. (2018). *Authoritarian Containment: Public Security Bureaus and Protestant House Churches in Urban China*. Oxford University Press.
- Rhodes, A., & Yu, C. (2023, March 9). COMMENTARY: China weakens itself by suppressing civil society and independent voices. *Radio Free Asia*. <https://www.rfa.org/english/commentaries/china-civil-03092023104811.html>
- Scharm, S. R. (n.d.). *Mao Zedong*. Britannica. Retrieved 12 July 2023, from <https://www.britannica.com/biography/Mao-Zedong/Formation-of-the-Peoples-Republic-of-China>
- Textor, C. (2022, September 19). *Muslim population in China 2010 and 2020, by ethnicity*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/619931/china-number-of-muslims-by-ethnicity/>
- The Association of Religion Data Archives. (n.d.). World Religion: China. Retrieved 12 August 2024, from <https://www.thearda.com/world-religion/national-profiles?u=52c>
- The Government of the People's Republic of China. (n.d.). *The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang*. Retrieved 7 July 2023, from http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_8011005.htm
- The National People's Congress of the People's Republic of China. (2019, November 20). *Constitution of the People's Republic of China*. https://english.www.gov.cn/archive/lawsregulations/201911/20/content_WS5ed8856c6d0b3f0e9499913.html
- The Voice of Martyrs. (n.d.). A Bible for Every Believer. Retrieved 14 July 2023, from https://www.persecution.com/bibles/?_source_code=WBPGGPG20B
- Underground Bishop Peng Weizhao becomes official in Jiangxi. (2022, November 24). *Asia News*. <https://www.asianews.it/news-en/Underground-Bishop-Peng-Weizhao-becomes-official-in-Jiangxi-57177.html>
- Union of Catholic Asian News. (2022, June 13). Chinese religious groups pledge to follow communist regulations. <https://www.ucanews.com/news/chinese-religious-groups-pledge-to-follow-communist-regulations/97633>
- Uyghur Human Rights Project. (n.d.). *Uyghur Human Rights Project: Questions and Answers*. Retrieved 7 July 2023, from <https://uhrp.org/questions-answers/>
- Vala, C. T. (2017). *The Politics of Protestant Churches and the Party-State in China: God Above Party?* Routledge.
- Vatican (2022, November 26). Holy See: Regret for installation ceremony of Bishop in China. <https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2022-11/vatican-surprise-and-regret-installation-chinese-bishop.html>
- World Meter. (n.d.). *China Population*. Retrieved 12 August 2024, from <https://www.worldometers.info/world-population/china-population/>
- Wu, H. (2019, August 24). Jilin Province Launches a Comprehensive Program to Suppress "Religious Infiltration" from Abroad. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/jilin-province-launches-program-to-suppress-religious-infiltration-from-abroad/>
- Wu, H., & Kang, D. (2022, May 17). Uyghur county in China has highest prison rate in the world. *Associated Press*. <https://apnews.com/article/china-prisons-uyghurs-religion-0dd1a31f9be29d32c584543af4698955>

- Xia, Q. (2022, March 24). *New Directives on Sinicization of Religion: "Love the Party, Love Socialism"*. <https://bitterwinter.org/new-directives-on-sinicization-of-religion-love-the-party-love-socialism/>
- Yu, J. (2016, August). *China's Christian Future* [The Institute on Religion and Public Life]. First Things. <https://www.firstthings.com/article/2016/08/chinas-christian-future>
- Zhang, C. (2023, May 25). China: Theological Seminaries Inspected to Check How "Sinicized" They Are. Bitter Winter. <https://bitterwinter.org/china-theological-seminaries-inspected-to-check-how-sinicized-they-are/>
- Zhang, F. (2020, September 23). Tibetan Buddhism 'Sinicized' Across Inland China. *Bitter Winter*. <https://bitterwinter.org/tibetan-buddhism-sinicized-across-inland-china/>
- Zhang, J. (2024, June 9). Official Interpretation of New 5-Year Plan of Advancing the Sinicization of Christianity Released by CCC&TSPM. Anglican Ink. <https://anglican.ink/2024/06/09/official-interpretation-of-new-5-year-plan-of-advancing-the-sinicization-of-christianity-released-by-ccctspm/>
- Zhou, X. (2019, October 25). Bans on Minors' Religious Activities Enforced Throughout China.

ARTICLE

“Fatally Flawed”: How the one-sided UNGA Resolution 77/247 has led to the one-sided Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Occupied Palestinian Territory

“Fatalmente defectuoso”: Cómo la unilateral Resolución 77/247 de la AGNU ha conducido a la unilateral Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre los Territorios Palestinos Ocupados

Paulina Guerrero¹, Alessandro Spinillo² & Andrew Tucker^{3 4}

How to cite:

Guerrero, P., Spinillo, A. & Tucker, A. (2025). “Fatally Flawed”: How the one-sided UNGA Resolution 77/247 has led to the one-sided Advisory Opinion of the International Court of Justice on the *Occupied Palestinian Territory*. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 20-48. Doi: 10.63058/des.v19i1.308

Submission received: 3 October 2024. **Accepted:** 20 December 2024.

¹ Paulina Guerrero holds a Master in Public International Law (LLM) from Leiden University (Netherlands) and a Bachelor of Laws degree from Universidad Panamericana in Mexico City; having previously worked in foreign affairs for the Mexican government and for the private financial sector, she currently is conducting international legal research for The Hague Initiative for International Co-operation in the Netherlands and carrying out a new specialisation in cybersecurity and finance. ORCID: 0009-0001-3893-8489. Email: paulina.guerreronunez.m@gmail.com.

² Alessandro Spinillo is a lawyer admitted in Spain and Argentine; he currently serves as legal counsel for the Netherlands-based think tank, The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.); prior to this position, he practiced as a lawyer in Buenos Aires, London (at a large American law firm), and Madrid; his practice focuses on public international law, international arbitration and litigation, business and human rights due diligence under the United Nations Guiding Principles (UNGP); he has also worked on issues related to religious freedom and hate speech crimes; he advised state and non-state actors on proceedings before the International Court of Justice (ICJ) and has prepared amicus submissions on jurisdiction and complementarity for criminal proceedings before the International Criminal Court (ICC). ORCID: 0009-0009-0072-773X. Email: a.spinillo@thinc.info.

³ Andrew Tucker is a graduate of the Universities of Melbourne (BA/LLB (Hons)) and Oxford (BCL); he has worked as an academic and consultant in Australia, UK and Netherlands; he was a Fellow of the Law School of the University of Melbourne 1995-2004, and Researcher at the TMC Asser Institute in The Hague 1995-1998; he is Editor-in-Chief of *Israel & Christians Today*; he is co-founder and Director General of The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.) – a think tank providing research, education and advice concerning the application of international law to Israel and the Middle East; he is co-author of *Israel on Trial* (thinc. 2018) and *Two States for Two Peoples?* (Sallux 2023). ORCID: 0009-0002-0410-8644. Email: a.tucker@thinc.info.

⁴ This article originally published here: <https://bit.ly/424KBmZ> Dr. Matthijs de Blois, Prof. Dr. Wolfgang Bock, Prof. Allan Parker, Prof. Steven Zipperstein served as consultants for this article.

Abstract

On July 19, 2024, the International Court of Justice (ICJ) issued an Advisory Opinion to the UN General Assembly, concluding that Israel’s military presence in the “Occupied Palestinian Territory” is unlawful and urging the evacuation of settlers. This Opinion stems from a one-sided UNGA resolution and proceedings driven by states hostile to Israel. The ICJ’s findings adopt a biased historical and legal narrative that undermines Israel’s sovereignty and disregards key principles of international law, including *uti possidetis juris*. The Court’s conclusions on sovereignty, self-determination, and security lack sufficient evidence and ignore Israel’s legitimate claims to East Jerusalem and the West Bank, as well as its security concerns. Additionally, the Opinion undermines UNSC Resolution 242 and the Oslo Accords, which advocate for negotiated resolutions. The non-binding Opinion should not be implemented, as it risks prejudicing peace negotiations and escalating tensions in the Middle East.

Keywords: ICJ Advisory Opinion, Israeli sovereignty, Palestinian territories, Oslo Accords, international law.

Resumen

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Opinión Consultiva para la Asamblea General de la ONU, concluyendo que la presencia militar de Israel en el “Territorio Palestino Ocupado” es ilegal y exhortando a la evacuación de los colonos. Esta Opinión se deriva de una resolución unilateral de la Asamblea General y de procedimientos sesgados impulsados por estados hostiles hacia Israel. Las conclusiones de la CIJ adoptan una narrativa histórica y legal parcial que socava la soberanía de Israel e ignora principios clave del derecho internacional, incluido el *uti possidetis juris*. Las conclusiones sobre soberanía, autodeterminación y seguridad carecen de pruebas suficientes y desestiman las legítimas reivindicaciones de Israel sobre Jerusalén Este y Cisjordania, así como sus preocupaciones de seguridad. Además, la Opinión debilita la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU y los Acuerdos de Oslo, que promueven resoluciones negociadas. Dado que la Opinión no es vinculante, no debe implementarse, ya que podría perjudicar las negociaciones de paz y aumentar las tensiones en Oriente Medio.

Palabras clave: Opinión Consultiva CIJ, soberanía israelí, territorios palestinos, Acuerdos de Oslo, derecho internacional.

Introduction: a one-sided Advisory Opinion resulting from a one-sided UNGA Resolution

The ICJ Advisory Opinion

In its July 19, 2024 Advisory Opinion⁵, the ICJ has opined that Israel’s “continued presence” in Judea, Samaria, East Jerusalem, and Gaza (referred to as the “Occupied Palestinian Territory” [OPT]) is unlawful and that Israel must unconditionally end its presence in said territory. In addition, the UN and all states must cooperate to implement measures to ensure that Israel brings its presence in these territories to an end “as rapidly as possible”.

This opinion was supported by eleven of the Court’s fifteen judges. Their reasoning is that Israel’s presence in the territories is unlawful because Israel’s policies and practices in the OPT violate two fundamental principles of international law: the prohibition of the acquisition of territory by force, and the Palestinian people’s right to self-determination:

“The Court considers that the violations⁶ by Israel of the prohibition of the acquisition of territory by force and of the Palestinian people’s right to self-determination have a direct impact on the legality of the continued presence of Israel, as an occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory. The sustained abuse by Israel of its position as an occupying Power, through annexation and an assertion of permanent control over the Occupied Palestinian Territory and continued frustration of the right of the Palestinian people to self-determination, violates fundamental principles of international law and renders Israel’s presence in the Occupied Palestinian Territory unlawful.”⁷

“This illegality relates to the entirety of the Palestinian territory occupied by Israel in 1967. This is the territorial unit across which Israel has imposed policies and practices to fragment and frustrate the ability of the Palestinian people to exercise its right to self-determination, and over large swathes of which it has extended Israeli sovereignty in violation of international law. The entirety of the Occupied Palestinian Territory is also the territory in relation to which the Palestinian people should be able to exercise its right to self-determination, the integrity of which must be respected.”⁸

⁵ ICJ Advisory Opinion “Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Palestinian Occupied Territories, Including East Jerusalem,” July 19, 2014 (hereafter “ICJ Advisory Opinion”).

⁶ In assessing the conformity of Israel’s policies and practices in the territories, as outlined in question (a), with its obligations under international law, the Court’s analysis focused on prolonged occupation, Israel’s settlement policy, the annexation of Palestinian territories since 1967, the exploitation of natural resources to the detriment of Palestinian residents, and the adoption of related legislation and measures that are alleged to be discriminatory. With the exception of prolonged occupation – which, according to the Court, alone does change the status of occupation– the Court found that Israel violated international law with respect to the other policies, practices, and measures.

Dissenting and separate opinions

This opinion faced significant criticism by other members of the Court. Four judges offered a fundamentally different perspective, arguing that Israel’s presence in the territories is not unlawful, and that Israel is therefore not obliged to bring its presence in these territories to an end. Their criticism is so fundamental that the Opinion’s legitimacy is in question.

The Court’s Vice President, Julia Sebutinde, rendered a powerful dissenting opinion, exposing what she saw as numerous factual and legal flaws in the majority’s reasoning, stating:

“The Advisory Opinion does not reflect a balanced and impartial examination of the pertinent legal and factual questions. It is imperative to grasp the historical nuances of the Israeli-Palestinian conflict, including the competing territorial claims of the parties in former British Mandatory Palestine.”⁷

Judges Tomka, Abraham and Aurescu stated that this opinion is based on “a legally wrong path”. In their view, there is no basis for concluding that Israel’s violations of international law lead to the illegality of the occupation itself; in doing so, the majority has misapplied the law of occupation, and failed to take proper account of the Oslo Accords and relevant Security Council resolutions since 1967.

Furthermore, in his separate opinion, Judge Nolte expressed regret with the Court’s lack of engagement with Israel’s security concerns, which further illustrates the one-sided nature of the Opinion. Judge Nolte conceded that the Court could have “better demonstrated that it has considered Israel’s arguments to the extent that they are publicly available, including by drawing on decisions of the Supreme Court of Israel and the arguments put forward by the Israeli authorities in the respective proceedings, as well as Israel’s submissions in other international fora”. Given security guarantees have been a key aspect of Israel’s negotiating position throughout the conflict, it is striking that the Court did not address Israel’s legitimate concerns. This would also have provided critical context for the “prolonged occupation” which the Court takes issue with.

⁷ ICJ Advisory Opinion, para. 261.

⁸ ICJ Advisory Opinion, para. 262.

⁹ Advisory Opinion, Dissenting Opinion Judge Sebutinde, para. 6.

Judge Cleveland was also highly critical of the Court’s sole focus on the actions of Israel, and not the policies and practices of all actors involved in the conflict. This further reinforces the biased nature of the proceedings.¹¹

Six of the Court’s fifteen judges are therefore united in their view that, as a result of the one-sided UNGA Resolution 77/247 and the biased proceedings, the Opinion has failed to consider the whole legal and historical context of the dispute, thus undermining the credibility of the Opinion’s conclusion that Israel must bring its presence in the territories to an end. In the view of four judges, the Court’s conclusions have “no proper basis in international law”.

While the Court should be treated with the utmost respect, and its Opinions should not be lightly criticised, the biased and one-sided character of the process leading to this Opinion calls into question the legitimacy of the Advisory Opinion itself.

The Court’s approach undermines the fundamental legal principle of equality before the law, and further serves to illustrate that it did not have sufficient reliable evidence to reach a sound conclusion. It would be a grave injustice if the international community were to accept on face value an Opinion which is so fundamentally biased. This should be particularly concerning for democratic states which value and seek to promote the rule of law.

Given the extreme urgency of the criticisms expressed by 40% of the Court’s judges, and the far-reaching implications of the majority Opinion’s conclusion that Israel must vacate the OPT as rapidly as possible, the purpose of this legal Briefing is to highlight the main concerns expressed by these judges. These concerns focus on four main themes:

- (1) Occupation, annexation and sovereignty: The Court’s failure to properly analyse the territorial sovereignty of this territory has led to an incorrect legal analysis;
- (2) Self-determination and security: The Court’s failure to properly consider the security aspects of the occupied territories, including the correct interdependence between the Palestinian and Jewish rights to self-determination and their respective rights to security;
- (3) UNSC Res 242, Oslo Accords and negotiations: The Court’s failure to take account of the Oslo Accords and the peace process sanctioned by the Security Council based on negotiated settlement of the conflict;
- (4) Illegality of Israel’s practices and policies vs. illegality of Israel’s presence: the Court makes a mistake by concluding that Israel’s presence in the territories is illegal.

¹⁰ Separate Opinion, Judge Nolte, para. 7.

¹¹ Separate Opinion, Judge Cleveland,

We conclude with some recommendations on how, in light of the foregoing, UN member states should treat the Advisory Opinion.

One-sided questions and proceedings have led to a one-sided Opinion

Resolution 77/247 of December 30, 2022, was adopted by a vote of 87 to 26, with 53 abstentions and 27 absent. This means that less than half of the UN’s 193 member states supported this resolution. Moreover, it received significantly less support than Resolution 75/98 adopted in 2020, by a vote of 147 to 10, with 16 abstentions and 20 non-voting.¹² Significantly, a number of countries changed their votes from Yes or Abstain in 2020 to No in 2022, including Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Italy, Romania, and the United Kingdom. Several EU countries also changed their votes from Yes (in 2020) to Abstain (in 2022).¹³ Most of the states that supported Resolution 77/247 were Arab/Muslim countries.

In operative paragraph 18 of Resolution 77/247 of December 30, 2022, the UNGA posed the following questions to the Court:

“... considering the rules and principles of international law, including the Charter of the United Nations, international humanitarian law, international human rights law, relevant resolutions of the Security Council, the General Assembly and the Human Rights Council, and the advisory opinion of the Court of 9 July 2004:

(a) What are the legal consequences arising from the ongoing violation by Israel of the right of the Palestinian people to self-determination, from its prolonged occupation, settlement and annexation of the Palestinian territory occupied since 1967, including measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Holy City of Jerusalem, and from its adoption of related discriminatory legislation and measures?

(b) How do the policies and practices of Israel referred to in paragraph 18 (a) above affect the legal status of the occupation, and what are the legal consequences that arise for all States and the United Nations from this status?”

From the outset, it was clear that the process would be one-sided, given the one-sided voting and

¹² General Assembly Resolution 75/98 of December 10, 2022. Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.

¹³ Details of the vote on Res 77/247:

Yes: 87, including China, Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Vietnam, Yemen, and Zimbabwe. Belgium, Ireland, and Luxembourg also voted yes.

No: 26, including the United States, United Kingdom, Germany, Italy, Australia, Canada, Austria, Czech Republic, Costa Rica, Croatia, Estonia, Guatemala, Kenya, Liberia, Lithuania, and Romania.

Abstain: 53, including 11 EU countries.

the inherently biased nature of the questions posed in UNGA Resolution 77/247. Only fifty-three UN member states accepted the Court’s invitation to make written and oral submissions. Most of those states had voted in favour of Resolution 77/247, and most are also members of the only three international organisations to which the Court gave permission to participate in the Advisory proceedings: the League of Arab States (LAS), the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and the African Union — each of which is well-known for its outspoken policies challenging the legitimacy of the existence of the Jewish State of Israel.

Judge Sebutinde articulated this concern in her dissenting opinion, stating:

“Due to the one-sided formulation of the questions posed in resolution 77/247, coupled with the one-sided narrative in the statements of many participants in these proceedings, some of whom do not even recognize the existence or legitimacy of the State of Israel, the Court does not have before it the accurate and reliable information that it needs to render a balanced opinion on those questions. Most of the participants in these advisory proceedings have, regrettably, presented the Court with a one-sided narrative that fails to take account of the complexity of the conflict and that misrepresents its legal, cultural, historical, and political context. By asking the Court to look only at the “policies and practices of Israel”, the General Assembly shields from the purview of the Court, the policies and practices of the Palestinian Arabs and their representatives (including non-state actors), as well as those of other Arab States in the Middle East whose interests are intertwined with those of the Palestinian Arabs. As pointed out in Part II of this dissenting opinion (Historical Context to the Israeli-Palestinian Conflict), these other States have historically played a significant role in the success or failure of efforts at finding a lasting solution to peace in the Middle East, including by either fostering peace agreements between Israel and representatives of the Arab Palestinians (such as the Palestinian Liberation Organization [PLO]); or by sponsoring or engaging in several wars against Israel, including by simply calling for its annihilation. Without information regarding the policies and practices of Israel’s adversaries, the Court is limited in its opinion regarding the various complex issues behind the Israeli-Palestinian conflict and has, as feared, resorted to imposing obligations on Israel, whilst disregarding her legitimate security concerns and the obligations of Israel’s Arab neighbours. In my respectful view, this approach is likely to exacerbate rather than de-escalate tensions in the Middle East.”¹⁴

The joint opinion of judges Tomka, Abrahams, and Aurescu spoke of a “biased and one-sided” approach by the Court to the process and outcome:

¹⁴ Judge Sebutinde, para. 42.

¹⁵ Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 6.

“The Court chose to portray the Israeli-Palestinian conflict in a biased and one-sided manner, which disregards its legal and historical complexity. It gives little weight to the successive resolutions by which, from 1967 to present, the Security Council established and endorsed the legal framework for resolving the conflict based on the coexistence of two States and on the right of each of the two peoples to live in peace and security. When it does not ignore these resolutions, it makes a selective reading of them.”¹⁵

The Court’s failure to properly exercise its judicial responsibilities

Judge Sebutinde maintained that this was not a judicially manageable case and that the Court should have refrained from rendering the advisory opinion to preserve “the integrity of its judicial role” [bold added].¹⁶

a) Lack of information before the Court: Judge Sebutinde stated: “The Court does not have before it accurate, balanced, and reliable information to enable it to judiciously arrive at a fair conclusion upon disputed questions of fact, in a manner compatible with its judicial character.”¹⁷ As shown in the quotation above, this was a result of the fact that the General Assembly posed “one-sided” questions to the Court, as well as the one-sided narrative in the statements of many participants in the Advisory Opinion proceedings¹⁸

b) The opinion circumvents the Oslo Accords and international negotiation-based process: According to several judges, the Advisory Opinion circumvented the existing international legal framework, including the Oslo Accords and Road Map, both of which implement the principles expressed in UNSC 242/1967, and exclude recourse to judicial courts.¹⁹ “The thrust of the Oslo Accords and Roadmap is mutual performance and good faith negotiations, leading to a consensual outcome.”²⁰

c) The opinion circumvents state consent: The Advisory Opinion also circumvents the principle of state consent. Unlike in contentious cases where state consent is required, advisory opinions do not necessitate such consent. This lack of requirement could potentially lead to the misuse of the ICJ, as appears to be the case here. She cited a case where the Permanent Court of International Justice (PCIJ), predecessor of the ICJ, held “[a]nswering the question would be substantially equivalent to deciding the dispute between the parties”, and thus, declined to give an opinion.²¹

d) Conclusion about the impropriety to render the Advisory Opinion: Judge Sebutinde concluded: “For all the above reasons, I am strongly of the view that the Court should have declined to give its

¹⁶ Judge Sebutinde, Introduction – Summary.

¹⁷ Judge Sebutinde, para. 42.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Judge Sebutinde, para. 43.

²⁰ Judge Sebutinde, para. 44.

²¹ Judge Sebutinde, para. 46.

²² Judge Sebutinde, para. 48.

Advisory Opinion in the present case. Instead, Israel and Palestine, the two parties to the conflict, should be encouraged to return to the negotiating table and to find a lasting solution jointly and consensually. The United Nations and international community at large, should do all in their power to support such negotiations. Regrettably, the advisory opinion has downplayed the importance of the negotiation framework, including the role of the United Nations and international community in that regard.”²²

e) Misapplication of general principles of international law: Judge Sebutinde also criticised the majority for misapplying general principles of international law and adopting presumptions implicit in the questions posed by the General Assembly without a due critical analysis:

“The Court has misapplied the law of belligerent occupation and has adopted presumptions implicit in the question of the General Assembly without a prior critical analysis of relevant issues, including **the application of the principle of uti possidetis juris to the territory of the former British Mandate, the question of Israel’s borders and its competing sovereignty claims, the nature of the Palestinian right of self-determination and its relationship to Israel’s own rights and security concerns**” [bold added].²³

Occupation, Annexation and Territorial Sovereignty

The Court noted that question (a) refers to “the Palestinian territory occupied since 1967”, which includes the West Bank, East Jerusalem, and the Gaza Strip (the Occupied Palestinian Territory). The Court observed that various United Nations organs and bodies often refer specifically to these different parts of the Occupied Palestinian Territory.²⁴ The Court adopted a similar approach, referencing these areas as appropriate.²⁵ It emphasised that, from a legal standpoint, the Occupied Palestinian Territory constitutes a single territorial unit, the unity, contiguity, and integrity of which must be preserved and respected.

Israel’s territorial integrity and borders

Judge Sebutinde did not accept the territorial criteria adopted by the Court; the Court had no basis in law or fact for concluding that: (1) all the territories held during the Jordanian and Egyptian occupation within the 1949 Armistice Lines are automatically the sovereign territories of Palestine, and thus not of Israel; (2) Israel’s presence in the West Bank, Gaza Strip, and Jerusalem is without any legal justification; (3) Israel’s presence in these areas violates Palestinian rights; and (4) Israel is annexing territory that is “Palestinian”.²⁶

²³ Judge Sebutine, Introduction-Summary.

²⁴ Advisory Opinion, para. 78.

²⁵ Ibid.

²⁶ Judge Sebutinde, para. 68.

When considering the law of occupation, the Court neglected Israel’s legitimate sovereign claims over the West Bank. In fact, it is impossible to determine the issues of occupation, annexation and self-determination — on which the Palestinian claims are based — without first determining the territorial scope of the State of Israel:

“In the context of the questions put to the Court, determination of territorial sovereignty is critical because without clarifying the respective claims of both parties to the conflict, it would be impossible to answer the question of territorial scope of the Palestinian self-determination claim or of Israel’s withdrawal from territory considered occupied. Furthermore, the Court would need to determine the territory over which Palestinians claim sovereignty and whether Palestine has historically made different assertions before different fora. Regrettably, the Court, which evidently adopted the above presumptions without question, does not address any of the above issues and frankly does not have before it sufficient information to even make an educated guess.”²⁷

Judge Sebutinde continued:

“... the approach taken by the majority in rendering the Advisory Opinion is fundamentally flawed as it fails to consider important legal principles and propositions in international law, governing the Israeli-Palestinian question”. She underscored that the Court failed to “grasp the historical nuances of the Israeli-Palestinian conflict, including the competing territorial claims of the parties in former British Mandatory Palestine” [bold added].

Even if one were to concede that Israel’s military administration of these territories after the 1967 war constitute occupation under the law of belligerent occupation, this occupation does not negate Israel’s pre-existing sovereign claims. Additionally, the 1949 Armistice Lines were never intended as definitive international borders.

She further noted:

“To determine the competing sovereignty claims, the Court would need to shift its focus from a review of “Israel’s policies and practices in the OPTs” to a review of Israel and Palestine’s competing sovereignty claims over different parts of the OPTs.”

It is essential to observe that the majority opinion fleetingly mentioned British Mandatory Palestine

²⁷ Idem.

²⁸ Judge Sebutinde, Introduction-Summary.

²⁹ Judge Sebutinde, para. 76.

but notably omitted to specify that this mandate sanctioned “the historical connection of the Jewish people with Palestine,” and that its primary objective was “the reconstitution of their national home in that country”. As Judge Sebutinde notes, the fact is that, as the League of Nations acknowledged, the Jewish people are not settlers or colonisers on their ancestral land; they are, in fact, indigenous people in that land.

Judge Sebutinde noted that the Jewish people have a connection to the land predating Roman, Arab, and Ottoman conquests amongst others. Their claim to this territory dates back to the ancient Kingdom of Israel 3,000 years ago. This context was an important factor to consider, as Judge Sebutinde points out in her dissenting opinion:

“Contrary to popular opinion, available evidence shows that as early as 1200 BCE, the Jewish people existed in the territory known as present-day Israel (also known during the British Mandate of 1922-1947 as “British Mandatory Palestine”) as a cohesive national group with a well-established and formed culture, religion, and national identity as well as a physical presence which has been maintained through the centuries despite the devastating impacts of conquests and their dispersion into exile. Ancient Israel existed between 1000-586 BCE with current archaeological evidence.”³⁰

The Mandate clearly stated in its preamble that –

“[...] recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home for the Jewish people.”

The Mandate acknowledged the existence of the non-Jewish communities in the land. Judge Sebutinde points out that “The Balfour Declaration stated that the British Government “favoured the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people” and agreed to use Britain’s “best endeavours” to facilitate this, without prejudicing the “civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine”.³¹

Judge Sebutinde explained the effect “By incorporating the Balfour Declaration in the Preamble to the Mandate... the Mandate clearly confirmed the right of the Jewish people to settle, self-determine and live peacefully in the Mandate territory (or at least in the part that remained after Britain transferred 70 per cent of the Mandate Territory to Jordan). The Mandate of Palestine did not provide for any other partition, other than the separation of Transjordan. It has been argued that the Palestinian Arab population living within the Mandate also had and continue to have a

³⁰ Judge Sebutinde, para. 8.

³¹ Judge Sebutinde, para.10.

³² Judge Sebutinde, para.79.

right to self-determination. However, the founding documents of the Mandate (including General Assembly resolution 181 (1947)) are silent on the issue of the self-determination of Palestinian Arabs living within the Mandatory territory, implying that the question of their self-determination was perceived as one of “internal self-determination” that would require negotiation and mutual agreement. Be that as it may, the rights of multiple nations in self-determination on a given territory should not disturb the application of the principle of *uti possidetis juris*.”³²

The Court is mistaken to categorise, without further analysis, the territories of the West Bank (and Gaza) as “Occupied Palestinian Territories” since 1967, and to insist that Israel should unilaterally and unconditionally withdraw from those territories and return to the 1949 Armistice Lines.

On the contrary, under the principle of *uti possidetis juris*, the entire territory of the former British Mandatory Palestine should form Israel’s borders, unless and until the parties to the conflict agree otherwise. She stated:

“While considerable efforts have been made to create and advance proposals for altering the borders of the Jewish State of Israel and a contemplated companion Arab State (the two-state solution), no such efforts have, so far, succeeded in being implemented. Thus, *uti possidetis juris* dictates recognition of the borders of Israel as coinciding with the borders of the Mandate as of 1948, rather than the ‘1967 borders,’ unless and until the parties to the conflict agree otherwise.”³³

This statement may be striking to many, but this would be the result of years of distorted anti-Israel narratives and a correct interpretation of the general principle of international law, *uti possidetis juris*.

We note that the so-called “1967 borders” are, in fact, the armistice line that the military commanders of the warring parties, Israel and Jordan, drew on the map with a green marker, and that it is expressly stated in the Armistice Agreement that this “green line” was not intended to define a future national border of the land of either party.

The consequence of this approach is that (a) Israel did not acquire the territories by force in June 1967 (as, pursuant to the Mandate, the territory already belonged to Israel), and (b) Israel’s assertions of sovereignty and permanent control over territory after June 1967 does not constitute “annexation” (because the territories did not belong to another).

Without prejudice to our earlier discussions, we reiterate our firm rejection of the Advisory Opinion’s assertion that Israel acquired the territories by force after the 1967 war. It is indisputable that the League of Nations, the precursor to the United Nations, granted sovereign title over these territories to Israel through the mandate system in 1921. This implies that Israel had pre-existing

sovereign rights over the territories prior to their seizure in 1967.

Regarding the Court’s dismissal of Israel’s rights in relation to the territory of Mandate Palestine, Judges Tomka, Abraham and Aurescu expressed this as follows:

“The Court chose to portray the Israeli-Palestinian conflict in a biased and one-sided manner, which disregards its legal and historical complexity. It gives little weight to the successive resolutions by which, from 1967 to present, the Security Council established and endorsed the legal framework for resolving the conflict based on the coexistence of two States and on the right of each of the two peoples to live in peace and security. When it does not ignore these resolutions, it makes a selective reading of them.”

“The Israeli-Palestinian conflict... must be approached in a balanced, nuanced and comprehensive manner that is entirely absent from the Opinion rendered. For many decades, the Israeli and the Palestinian peoples have been in conflict — a conflict with many complex legal, political and historical aspects — related to the territory of Palestine, entrusted by mandate of the League of Nations to the United Kingdom in 1922. The rights of one cannot be exercised to the detriment of the rights of the other. The “two-State solution”, required by successive Security Council resolutions, which we will analyse below, is the only one that can respond to the legitimate need for security of both Israel and Palestine.”³⁴

“The “two-State solution”, required by successive Security Council resolutions... is the only one that can respond to the legitimate need for security of both Israel and Palestine. This solution can only arise from a comprehensive understanding reached through negotiations, which must take into account all rights and interests involved: the right of the Palestinian people to self-determination is not incompatible with that of Israel to exist in security, while Palestine’s right to security must also be taken into account. The right to self-determination and the right to security must be implemented simultaneously in order to achieve the coexistence of the two States, which will also mark the end of Israel’s presence as an occupying Power in the Palestinian territory.”³⁵

“It is regrettable that the Opinion, instead of taking into account the legitimate rights and interests of all parties involved, chose to portray the facts in an incomplete and one-sided manner, drawing an implicit parallel between the Israeli-Palestinian conflict and the two situations on which the Court has previously been asked to provide an opinion (Namibia and Chagos), from which it, however, radically differs.”³⁶

³⁵ Idem.

³⁶ Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 38.

The Gaza Strip

As Judges Tomka, Abraham, Aurescu and Cleveland have noted, the Court’s conclusion that Israel’s presence in the Gaza Strip is unlawful is illogical and inconsistent. The Court includes the Gaza Strip in its conclusion that Israel’s presence in “the Occupied Palestinian Territory” is illegal. However, reflecting the fact that Israel has withdrawn its military and civilians since 2007 and made no claims to annex the Gaza Strip, the Court makes no finding that Israel has acquired the territory of Gaza unlawfully. Moreover the Court also does not explain how a violation of the right to self-determination – in the absence of a violation of the prohibition of acquiring territory by force – renders an occupying Power’s force unlawful, nor does it explain how such a violation could override any legitimate exercise of the right to self-defence that Israel may have with respect to the Gaza Strip. There is, therefore, no basis for the Court’s inclusion of Gaza in its conclusion that Israel’s presence in the Occupied Palestinian Territory is unlawful.

The interdependence between self-determination and security

The ICJ majority decided that the Palestinian people have almost an unlimited and absolute right to self-determination, elevating it to the status of a peremptory norm (or *ius cogens*), conferring on the Palestinians a right to territorial sovereignty over all of the territories captured from Jordan and Egypt in June 1967. In the view of the majority, Israel’s security concerns cannot be a justification for limiting the Palestinians’ right to self-determination.

While the Palestinian people’s right to self-determination is undisputed, this broad interpretation is far from being accepted as a rule of customary international law or state practice.

The Palestinian people’s right to self-determination is undisputed. However, like any other right, it is not absolute or unlimited. Given the chronic situation of protracted violence in the area, which poses an existential threat to Israel, that right must be balanced with Israel’s right to security and secure borders. This existential threat has been exacerbated following Hamas’s horrific attack on October 7, 2023. Judge Sebutinde stated:

“Whilst there is no doubt that the right to self-determination is a right *erga omnes*, to which the Palestinian people are entitled, in the present context, that question raises issues of the territorial borders and the safety and security of both the prospective independent Palestinian State and the Israeli State coexisting side by side. These issues, including the proposed frontiers of the two States, territorial inviolability, and legitimate security concerns of both peoples, have not been addressed by the Advisory Opinion.”

The joint opinion of Tomka, Abrahams, and Aurescu also underscores the limitation to self-determination in the present context. They spoke of a “package” consisting of [Palestine’s] right to self-determination and [Israel’s] right to security, both being intrinsically interconnected.³⁷

A most crucial issue of the advisory opinion is that it exacerbates Israel’s existential risks. Even if Israel were to relinquish the territories, evacuating them without proper security arrangements as proposed by the Court, it would be left so vulnerable that its very existence could be jeopardised. Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ), both supported by Iran, would quickly fill the vacuum left by Israel in the West Bank, undermine the crumbling Palestinian Authority (PA), and immediately begin to launch missile and drone attacks from the Samarian Heights on Tel Aviv and critical infrastructure, such as Ben Gurion Airport, rendering them indefensible, even against short-range weapons. This would lead to the collapse of Israel, a scenario long desired by its enemies.

The advisory opinion, however, failed to assess Israel’s security risks and the meaning of “secure boundaries” under UNSC Res. 242/1967. Judge Sebutinde criticised the majority for this failure:

“The questions ask the Court to presuppose that all the territories held during the Jordanian and Egyptian occupation within the 1949 Armistice Lines are automatically the sovereign territories of Palestine, and thus not of Israel. I am not sure that this issue is as simple as it appears. At the very least, the Court would need to examine and evaluate evidence concerning **whether the 1949 Armistice Lines are “secure boundaries” within the meaning of Security Council resolutions 242 and 338. This, in turn, would require examination of the threats facing Israel emanating from the OPTs and the broader region**” [bold added].³⁸

Judge Sebutinde also warned about state and non-state actors “who have openly expressed a desire to see the State of Israel not just withdraw from the OPTs but also wiped off the face of the earth, including from its own territory”. These assertions must also be factored into any assessment of Israel’s security risks, particularly in light of Hamas’s attack on October 7, 2023.

Judges Aurescu, Tomka and Abraham acknowledge that a withdrawal from the territories would expose Israel to substantial threats, especially given Hamas denies Israel’s right to exist:

“The Hamas movement, which has gained control and subsequent administration of the Gaza Strip shortly after the withdrawal of the occupying forces on the ground, and which positions itself as a competitor to the Palestinian Authority for the political leadership of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory as a whole, denies the very legitimacy of the existence of the State of Israel; it thus opposes the “two-State solution”. From this perspective, the fact that “the existence of the Palestinian people’s right to self-determination cannot be subject to conditions on the part of the occupying Power, in view of its character as an inalienable right” (para. 257) cannot limit Israel’s right to security.”

³⁷ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham, and Aurescu, para. 42.

³⁸ Judge Sebutinde, para. 78.

The judges also admit “it is simply fair to also acknowledge that this State faces serious security threats, and that the persistence of these threats could justify maintaining a certain degree of control on the occupied territory until sufficient security guarantees, which are currently lacking, are provided. It is difficult to see how such guarantees could be provided outside the conclusion of a comprehensive settlement, which Israelis and Palestinians have indeed approached at times in their conflicted history.”⁴¹

The judges are correct to highlight that Hamas is a legitimate competitor for Palestinian leadership, as shown in their ability to gain control of the Gaza Strip so rapidly after Israel’s withdrawal in 2005. The radical Islamist groups that are gaining the upper hand in the West Bank do not seek the establishment of a democratic, peace-loving state adjacent to Israel; their goal is the eradication of Israel and its replacement with an Arab/Islamic state “from the River to the sea”.

The Hamas Charter, developed in 1988, explicitly rejects peaceful settlement to the question of Israel-Palestine and calls for Islamic jihad to prevail over Palestine. This character is based on Islamic principles, seeks to establish Sharia law, and centres on the fundamental idea that the endowment of Islam is to be established across the region, not only limited to the Occupied Palestinian Territory.⁴² This ideology prioritises confrontation over coexistence “from the river to the sea”. According to the Charter: “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it”.⁴³ The advisory opinion thus, ultimately, allows the international community to exert pressure on Israel which advocates for Hamas’ capacity to utilise Gaza and the West Bank as hubs of terror with the interest of using this space to continue on its path of obliterating Israel.

Hamas’ aims regarding Israel threaten global peace and order. As Hamas ‘success’ in Gaza on October 7 fuelled violent attacks in the West Bank, so too did it spark violence and propel recruitment across the world in other regions including the United States and Europe.^{44 45} This destabilising effect would be set to grow in the case that Hamas grows in the occupied territories, explaining to a great extent Israel’s cautious approach to its security oversight. Furthermore, the advisory opinion implies that Hamas’ political struggle speaks on behalf of the Palestinians and that is in the best interest of Palestinians to reward acts of terror which bring conflict not only to Israel’s door but to the doors of Palestinians who have experienced victimhood at the hands of Hamas’ actions and their outcomes. Rewarding these techniques, which utilise terror, will establish a new and dangerous precedent in which terrorism becomes increasingly viewed as a viable and legitimised tool for state crafting.

³⁹ Judge Sebutinde, para. 56

⁴⁰ Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 36.

⁴¹ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 37.

⁴² Wilson Center, “The Doctrine of Hamas”, 20 October 2023, available at <https://www.wilsoncenter.org/article/doctrine-hamas>

A similar situation would likely arise from a withdrawal from the West Bank, given the notorious weakness of the Palestinian Authority and the already increasing Iranian encroachment. A withdrawal based on pre-1967 borders, without security guarantees, would thus risk Israel living with an Iranian proxy on its borders. If hostile forces were to gain control of this strategic territory, notably the Samarian Highlands, they could easily launch rockets and artillery into Israel’s densely populated areas and critical infrastructure, making Israel extremely vulnerable to devastating attacks. Such a situation would only lead to more violence and loss of life on both sides. At a minimum, any lasting resolution to the conflict would require security guarantees and carefully negotiated territorial swaps that would allow Israel to maintain its strategic depth.

Under UNSC Res. 242, the Palestinian right to self-determination is contingent upon Israel’s right to secure borders. The joint opinion of Tomka, Abrahams and Aurescu speaks of a “package” consisting of [Palestine’s] right to self-determination and [Israel’s] right to security, both being intrinsically interconnected.⁴⁶

The practical implementation of the advisory opinion would exacerbate Israel’s existential threats and vulnerability to annihilation by its enemies, creating a situation that undermines the Jewish people’s right to live within secure borders. This situation also undermines the Jewish people’s right to self-determination. While the advisory opinion grants Palestinians an absolute and unfettered right to self-determination, the Jewish people’s right is effectively conditional and limited, constrained by the ongoing threats and attacks aimed at their annihilation.⁴⁷ Consequently, they are prevented from fully exercising their right to self-determination on land to which they have a valid territorial claim, while, according to the Court, the Palestinians have an absolute (inalienable) right to self-determination on the whole of the land to which they claim sovereign rights.

The enemies of Israel will view the advisory opinion as another step forward toward the realisation of an Arab-Palestinian state “from the river to the sea”, which inherently calls for the annihilation of the Jewish State of Israel.

Iran’s influence on terrorist groups in the West Bank

Judge Sebutinde rightly underscored that Israel faces security threats “emanating from the OTPs

⁴³ Jewish Virtual Library, Hamas Covenant (Full Text), available at <https://www.jewishvirtuallibrary.org/hamas-covenant-full-text>.

⁴⁴ Jerusalem Center for Public Affairs, “From the West Bank to U.S. Campuses: Iran’s Psychological Influence Is Spreading”, 28 July 2024, available at <https://jcpa.org/from-the-west-bank-to-u-s-campuses-irans-psychological-influence-is-spreading/>.

⁴⁵ International Centre for Counter-Terrorism, “The Israel-Hamas War Is Spilling Over into Europe”, 19 December 2023, available at <https://www.icct.nl/publication/israel-hamas-war-spilling-over-europe>.

⁴⁶ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 42.

and the broader region”.⁴⁸ Beyond Hamas, the more visible security threat comes from the Iranian Islamic regime. Iran has traditionally supported Hamas’s terrorist activities in the Gaza Strip, but has recently extended its support to Hamas and other terrorist groups in the West Bank, especially since October 7, 2023.

It is well known that Iran, through the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), supports terrorism in the Middle East and worldwide. In 2019, the United States designated the IRGC as a foreign terrorist organisation (FTO).⁴⁹ Canada recently followed suit.⁵⁰ Authorities in both countries found that the IRGC provided material support and finance to Hamas and the Palestinian Islamic Jihad (PIJ).

The IRGC’s support of Palestinian terror groups Hamas and PIJ dates back to the early days of the Islamic revolutionary regime in Tehran. Their strategic links strengthened with the emergence of the “Axes of Resistance” in the 1990s and the tumultuous events of the 2000 Intifada. Despite the Iranians being predominantly Shia and the Palestinians Sunni, pragmatism prevailed, and they recognised the need to unite to fight their two common archenemies — Zionism and the United States.

In 2017, Iran facilitated a reconciliation between Syria’s Bashar al-Assad and Hamas. Since then, the IRGC’s cooperation with Hamas and the PIJ in Gaza has been reinvigorated. The consistent flow of funding, material assistance, and training from the IRGC to Hamas has been well documented. Intercepted documents, corroborated and shown by reliable media sources, revealed that Tehran’s regime has provided Hamas with over USD 220 million between 2014 and 2020.⁵¹

The IRGC provides funds and assistance to Hamas with knowledge that these resources would fuel terror and violence against Israel. Given the circumstances, while the IRGC might not have directly ordered and planned Hamas’s horrific attack on Israel on October 7, 2023, its conduct, by providing those resources to Hamas, enabled, abetted, and facilitated the attack.

More concerning, open sources have reported that the IRGC is significantly increasing its support to Palestinian terrorist groups in the West Bank, including the PIJ, Al Aqsa Martyrs’ Brigades and Hamas. There are clear indications that the terrorist capabilities of these groups in the area,

⁴⁷ https://www.fdd.org/analysis/op_ed/2024/06/14/the-west-bank-a-3-year-crisis-led-by-palestinian-terrorist-groups/

⁴⁸ Dissenting Opinion, Judge Sebutinde, para. 68.

⁴⁹ United States designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Department of State, April 8, 2019.

⁵⁰ Canada designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), June 2024.

⁵¹ “Revealed: secret letters that show Iran’s £200m payments to Hamas - Israel has recovered correspondence that shows the extent of Iran’s support for the militant group behind the October 7 attacks,” The Times, London, April 11, 2024.

including access to automatic weapons and explosives, have been improving since October 7.⁵³ The growing integration between Hamas and Fatah in the West Bank, as signalled by the recent unity deal signed in Beijing on 23rd July 2024, represents a shift in the territory’s political and security dynamics.⁵⁴ This convergence, which naturally follows from shared nationalist aspirations and from a strategic realisation that the unification of forces could advance Palestine’s broader aspirations of achieving fully independent statehood, challenges the Oslo Accords foundations. Given its concerns about the impacts of Hamas’s influence in the region, which should be of equal concern to the international community from a counterterrorist perspective, Israel has rejected the possibility of a Palestine in which Fatah holds governing authority due to its previous implications in armed resistance.^{55 56} The merging of these two factions and the presence of multiple terror groups in the West Bank, including PIJ and Lions’ Den, contribute to a detrimental impact on peace negotiations between Israelis and Palestinians regarding the West Bank areas A, B and C.⁵⁷ With these dynamics, as a result of radical propaganda imbued with hatred, the motivations of Hamas and any affiliates should be heavily examined for their harm toward the achievability of peace.⁵⁸

Armed cells in the area are on the rise, in comparison to previous years when only a very few militant groups were known to be active. It is estimated that at least 15 terrorist groups and factions are currently active in the West Bank. Iran has advocated for arming Palestinian terrorist groups in the area since 2014. In August 2022, IRGC-Quds Force Chief Hossein Salami stated that the West Bank was “being armed” against Israel.⁵⁸ He repeated the claim less than a year later, hinting that the Iranian regime was involved in the surge of West Bank violence. The crumbling PA proved itself unable to counteract this escalation of terrorism in the area.

Other open sources report that Iran has been pouring money into the Islamic Jihad organisation, which began to establish new armed groups under the name of “Battalions,” which also include terrorists from other organisations such as Fatah, Hamas and the Popular Front for the Liberation

⁵² “The West Bank: A 3-Year Crisis led by Palestinian Terrorist Groups,” Foundation for Defense of Democracies, June 14, 2024.

⁵³ *Idem*.

⁵⁴ United Nations News, “UN chief welcomes agreement between Palestinian factions Fatah and Hamas”, 17 July 2024, available at <https://news.un.org/en/story/2024/07/1152431>.

⁵⁵ al-Awar, A., & Tzoreff, Y. (2022). The Rift in Fatah, which Threatens Security Stability, is a Challenge – and Not Only for Israel, INSS Insight No. 1631, August 15, 2022.

⁵⁶ Council on Foreign Relations, “What Is Hamas?”, 19 August 2024, available at <https://www.cfr.org/background/what-hamas>.

⁵⁷ FDD, “Mapping the West Bank Insurgency”, 14 December 2022, available at <https://www.fdd.org/analysis/2022/12/14/mapping-west-bank-insurgency/>.

⁵⁸ Center for Strategic and International Studies, “Understanding Hamas’s and Hezbollah’s Uses of Information Technology”, 31 July 2023, available at <https://www.csis.org/analysis/understanding-hamas-and-hezbollahs-uses-information-technology>.

⁵⁹ *Idem*.

of Palestine. The first “Jenin Battalion” was established in the city of Jenin, followed by the “Nablus Battalion.”⁶¹

On August 28, 2024, in an antiterrorist operation, Israeli troops killed a local commander of the Iranian-backed Islamic Jihad movement in the city of Tulkarm.⁶² The UN Secretary General, Antonio Guterres, called for the “immediate cessation” of IDF anti-terrorist operations in the West Bank.⁶³ According to the UN, Israel should remain idle and wait for its annihilation by the terrorists.

If Israeli surveillance comes to an end in the West Bank, these terrorist groups, backed by Iran, would quickly topple the PA and begin attacking Israel from the Samaria Heights, with the consequences we have discussed above.

Implications of a Complete Israeli Withdrawal from Gaza

The October 7 attack, which ignited the war between Israel and Hamas, was a direct result of Hamas exploiting the absence of Israeli military forces to plan and execute a large-scale offensive. Similar incidents, including rocket barrages and tunnel incursions, further illustrate the security vacuum left by the withdrawal and the challenges Israel faces in defending its borders from external threats without an on-the-ground presence. For the foreseeable future, full withdrawal by Israel from Gaza, as the Advisory Opinion promotes, would present an unacceptable risk to Israel, and a high risk of further destabilisation in the region. In all likelihood, rapid escalation of violence from Hamas and allied Islamist jihad groups intent on the killing of Jews and destruction of Israel would be highly expected, leading to further Israeli military response, therefore not furthering peace but obstructing Israel’s legitimate self-defence and the international community’s collective counterterrorism objectives in Gaza.

Justices Aurescu, Tomka and Abraham contend in their separate Joint Opinion that the Court should have limited its Opinion to the West Bank, including East Jerusalem, and should not have included Gaza in its findings, given the distinct set of circumstances in that territory:⁶⁴

“[...] Since 2005 the Gaza Strip has been in a fundamentally different situation than that of the West Bank. In 2005, Israel withdrew from the territory of the Gaza Strip and dismantled the settlements which it had established while maintaining control over the airspace and maritime

⁶⁰ *Idem.*

⁶¹ *Idem.*

⁶² “Israel Launches Deadly West Bank Operation as Gaza War Rages On,” CAN, August 28, 2024.

⁶³ “West Bank Crisis: UN Chief Calls for Immediate halt to Israeli Strikes,” UN News-Global Perspective Human Histories, August 29, 2024.

⁶⁴ Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (Advisory Opinion), 2024, ICJ Reports.

zones, and land borders. Shortly after the Israeli army’s withdrawal, the Hamas movement gained control of the administration of Gaza’s territory.⁶⁵

“[...] The Court did not have evidence before it which would allow it to assert whether and to which extent the control Israel continued exercising over the Gaza Strip after the 2005 withdrawal was justified by security motives, considering, in particular, the military actions conducted by Hamas directed at Israeli territory, even before 7 October 2023. Moreover, nearly all of Israel’s “policies and practices” mentioned in the Opinion refer to the situation in the West Bank.⁶⁶

“[...] Due to insufficient information presented to it, the Court should have concluded that it was unable to properly pronounce itself on the situation in Gaza prior to 7 October 2023.”⁶⁷

In these circumstances, the judges note, we can only regret that, in its conclusions, according to which “Israel’s continued presence in the Occupied Palestinian Territory”, which includes Gaza, “is illegal” (para. 267) and that “Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory as rapidly as possible” (para. 285), the Opinion makes no distinction whatsoever between the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza, referring to the “Occupied Palestinian Territory” as a whole.

Palestinian violations of international law

The Court held that Israel must wipe out, as rapidly as possible, all the consequences of the international wrongs committed, as identified in the Advisory Opinion, and re-establish the situation which would, in all probability, have existed if those wrongs had not been committed.⁶⁸ Judge Sebutinde disagreed with the Court, as it only condemned Israel to reparation, ignoring the international wrongdoings committed by Arab Palestinians. She stated:

“This is clearly a situation where there is enough blame to go round, not just of Israel but also of Arab Palestinians (for the failure of prior peace negotiations and for resorting to war) and, to some extent, the international community, for taking so long to find a lasting solution to the Israeli-Palestine conflict.”

⁶⁵ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para.15. The Opinion’s application of its conclusion to Gaza was also criticized by Judge Cleveland in her Separate Opinion: the Court makes no finding that Israel violated the prohibition on acquisition of territory by force with respect to the Gaza Strip, nor does it explain how a violation of the right to self-determination – in the absence of a violation of the prohibition of acquiring territory by force – renders an occupying Power’s force unlawful (see paras 7-21).

⁶⁶ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para.16.

⁶⁷ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para.17.

⁶⁸ Advisory Opinion, para. 296.

⁶⁹ Dissenting Opinion, Judge Sebutinde, para. 61.

As Judge Cleveland stated, “[t]he people of Israel, too, have the right to self-determination, including the right to political independence, to territorial integrity, and to live in peace and security within recognized borders. Violent attacks against the State of Israel and its people, and the refusal of other States to recognize the legitimate existence of Israel – including a number of States participating in these advisory proceedings – also violate this right... Regrettably, the Court makes no meaningful effort to grapple with the assaults on the right to self-determination that have confronted the people of Israel since the State’s inception.”⁷⁰

The broader geopolitical context

As Judge Sebutinde noted, the Israeli-Hamas war in Gaza involves multiple state and non-state actors. It is crucial to position the ICJ Advisory Opinion within a broader geopolitical context. As discussed above, if Israel were to withdraw from Samaria and Judea, Iran and the IRGC would inevitably expand their influence over Hamas and the PIJ in this area, further eroding the PA’s legitimacy among Palestinians. Meanwhile, the Iran-Russia partnership continues to grow stronger, with Iran now serving as a key supplier of suicide drones essential to Russia’s war effort in Ukraine.

Russia’s close relations with Hamas were underscored by Russian Deputy Foreign Minister, Mikhail Bogdanov’s meeting with Hamas leaders on October 22, 2023, in Moscow, only two weeks after October 7, signalling deepening ties between Russia, Iran and Hamas.⁷¹

This partnership illustrates the complex geopolitical landscape, where Russia and Iran are collaborating to challenge Western influence, and support groups like Hamas. The repercussions of this cooperation are evident in both the Gaza war and the Ukraine-Russia War.

The risk of the Israeli-Palestinian conflict escalating into a full-scale regional war is higher than ever, with the potential to destabilise the entire Middle East and, consequently, the world.

UNSC Res 242, Oslo and negotiations

Building on the Madrid Conference (1991) the Oslo Accords represented a dramatic breakthrough in relations between Israel and the Palestine Liberation Organization. Following months of intensive,

⁷⁰ Separate Opinion, Judge Cleveland, paras 2-3.

⁷¹ “Moscow Hosts Hamas Delegation and Iran’s Deputy FM, Prompting Israel Outrage,” The Times of Israel, October 26, 2023.

⁷² M. Abbas, *Through Secret Channels* (Garnet 1995) at 161-62 (the Palestinian delegation gave “attention to every word, sentence and expression. It was even necessary to scrutinize every comma and full stop so that we could eliminate the likelihood of fatal pitfalls occurring in the future . . . the DOP documents were reviewed by our legal consultant, Taher Shash, whom we had sent to Oslo for this purpose

arms-length negotiations, in which the Palestinian delegation literally argued over every word and every punctuation mark,⁷² Israel and the PLO solemnly agreed in writing, witnessed by the United States and the Russian Federation, “to put an end to decades of confrontation and conflict, recognize their mutual legitimate and political rights, and strive to live in peaceful coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the agreed political process.”⁷³

Israel agreed to recognize the PLO as the representative of the Palestinian people, to withdraw its military forces from Gaza and the main Palestinian towns in the West Bank, beginning with Jericho, and to accord the Palestinians a large measure of autonomy in the Palestinian populated areas of the West Bank and Gaza Strip through the establishment of the Palestinian Authority as a transitional self-governing entity. The PLO agreed to recognize Israel’s existence and its right to live in peace and security, to renounce terrorism, and to amend its Charter to remove the language calling for Israel’s destruction.

Despite these robustly negotiated, arms-length agreements between the parties, the Advisory Opinion devotes barely half a page to the Oslo Accords, and shrugs off the Accords as having no binding legal impact. In one paragraph, for example, the court construed the Oslo Accords to deny Israel the very rights for which it negotiated and to which the Palestinians agreed:

“The parties to the Oslo Accords agreed to ‘exercise their powers and responsibilities pursuant to the Accords ‘with due regard to internationally-accepted norms and principles of human rights and the rule of law’ . . . The Court observes that, in interpreting the Oslo Accords, it is necessary to take into account Article 47 of the Fourth Geneva Convention, which provides that the protected population ‘shall not be deprived’ of the benefits of the Convention ‘by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power.’ For all these reasons, the Court considers that the Oslo Accords cannot be understood to detract from Israel’s obligations under the pertinent rules of international law applicable in the Occupied Palestinian Territory.”⁷⁴ Judges Sebutinde, Tomka, Abraham and Aurescu are highly critical of this approach. Sebutinde points out:

“The Advisory Opinion ignores the *lex lata* international legal framework and has the effect of undermining the international “land for peace” formula set out in UN Security Council resolutions 242 and 338, and of invalidating the bilateral Oslo Accords. I am thus unable to join the majority in that Opinion. The historic peace processes between Israel and its

purpose just before they were initiated on 20 August 1993.”).

⁷³ Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, Israel-Palestine Liberation Organization, 13 September 1993, 32 I.L.M. 1525 (1993).

⁷⁴ Legal Consequences Arising From The Policies And Practices Of Israel In The Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, ICJ 19 July 2024, para. 102 (hereafter “ICJ 19 July 2024 Advisory Opinion”)

neighbours show that, in this context, one-time enemies can set aside their differences and resolve their disputes without resorting to force and compulsion. As I have stated before in a previous opinion, “a permanent solution to the Israeli-Palestinian conflict can only result from good faith negotiations between Israeli and Palestinian representatives working towards the achievement of a just and sustainable two-State solution. A solution cannot be imposed from outside, much less through judicial settlement.”⁷⁵

“The Oslo Accords being agreements between subjects of international law (namely Israel and the PLO), bind any successor to the PLO. The Security Council, the General Assembly, the Quartet, the Secretary-General’s special envoy, and the subsequent agreements between the parties have all referred to the Oslo Accords and their consistency with applicable UN resolutions. The international and bilateral framework for the resolution of the conflict, establishes a legal basis for Israel’s continuing exercise of certain powers and responsibilities in the West Bank which the majority has characterised as ‘illegal.’”⁷⁶

Tomka, Abraham and Aurescu:

“Actually, a correct combined interpretation of the Oslo Accords and of the relevant Security Council resolutions clearly illustrates their legal effects, which continue to be valid at present. These legal effects relate to the close relationship between, on one hand, the package “right to self-determination — right to security” (these two rights being intrinsically interconnected) and, on the other hand, (1) the issue of the legality of occupation, as well as (2) the way this package needs to be implemented within the negotiation framework agreed between Israel and Palestine and supported by the relevant Security Council resolutions. Naturally, these legal effects impact the obligations of both Israel and Palestine related to the issue of the legality of occupation and to the implementation of the parameters established within the negotiation framework.”⁷⁷

“Thus, it is regrettable that the Opinion dismissed the Oslo Accords as being quasi-irrelevant. This approach is wrong for several reasons. First, the Oslo Accords, the relevance of which was emphasised by many participants to these proceedings, are the main instruments of the Israeli-Palestinian relationship. They have not ceased to be in force. Second, from a legal standpoint, the two Oslo Accords, in particular Oslo II, continue to be applicable to almost all aspects of daily life in Palestine, and are intended to govern the multidimensional relationship between Israel and Palestine. Despite their initial temporary purpose, they created a certain sense of stability. This stability based on having a clear set of rules in place may explain why neither of the parties has denounced the Accords.”⁷⁸

⁷⁵ Dissenting Opinion, Judge Sebutinde, para. 28.

⁷⁶ Dissenting Opinion, Judge Sebutinde, para. 27.

⁷⁷ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham, and Aurescu, para. 42.

⁷⁸ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 43.

Illegality of Israel’s practices and policies vs. illegality of Israel’s presence

Judges Tomka, Abraham and Aurescu disagreed with the Court’s conclusion that “Israel’s presence in the Occupied Palestinian Territory is unlawful,” although on very different grounds. These judges agree that Israeli settlements are illegal, and that Israel unlawfully intends to proceed to a gradual annexation of the territories that form Area C under the Oslo Accords.⁷⁹ They also agreed that Israel violates the Palestinian people’s right to self-determination, has illegally transferred population, and adopted discriminatory measures against Palestinians, all of which constitute violations of international humanitarian law.⁸⁰

However, they asserted, it cannot be concluded from the above that the occupation itself is illegal, which is a question of a fundamentally different nature.⁸¹ For them, the occupation itself must be examined under a different set of rules — those that govern the use of force.⁸² The legality of the occupation *ab initio* is a matter of *ius ad bellum*. The Court does not have elements and information to pass judgement on whether the military action that gave to the occupation in 1967 was justified, and whether it remains justified by Israel’s legitimate security needs. While an occupation that is legal *ab initio* may become illegal over time, the mere passage of time does render the occupation illegal.⁸³ They then affirmed:

“In fact, the relevant question is whether the occupying Power — Israel — could today completely withdraw from the occupied territories “as rapidly as possible”, in the absence of any guarantee, without exposing its security to substantial threats. In the current context, we find it quite difficult to answer this question in the affirmative. Israel’s full withdrawal from the occupied territories and the implementation of the right to self-determination by the Palestinian people is intrinsically linked to Israel’s (and Palestine’s) right to security. The Hamas movement, which has gained control and subsequent administration of the Gaza Strip shortly after the withdrawal of the occupying forces on the ground, and which positions itself as a competitor to the Palestinian Authority for the political leadership of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory as a whole, denies the very legitimacy of the existence of the State of Israel; it thus opposes the ‘two-State solution.’ ”⁸⁴

This statement unreservedly acknowledges the substantial security threats facing Israel under present circumstances.

⁷⁹ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 25.

⁸⁰ *Idem*.

⁸¹ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 15.

⁸² Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu, para. 23.

⁸³ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu para. 33.

⁸⁴ Joint Opinion, Judges Tomka, Abraham and Aurescu para. 36.

Conclusions and Recommendations

Legal effect of the Advisory Opinion

Advisory opinions issued by the International Court of Justice (ICJ) are not legally binding like the Court’s judgments in contentious cases. However, they still carry substantial legal weight and can have significant legal effects.

Unfortunately, the distinction between advisory opinions and contentious cases has become blurred due to the misuse of advisory proceedings as a means to bypass states’ lack of consent to the Court’s contentious proceedings. That is clearly the case here, where the observer State of Palestine has overtly used the Advisory Opinion proceedings to achieve a judicial determination of its legal claims, avoiding the negotiations and other dispute resolution mechanisms intended to result in a consensual resolution of issues in dispute.

Advisory opinions are not binding on states directly connected to the subject matter of the dispute; therefore, they are even less likely to bind third states, even in cases involving *erga omnes* obligations.

Consequently, non-compliance with an advisory opinion by third states does not result in international liability under Article 41 of the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Pro-Palestinian legal groups often attempt to intertwine the concepts of *erga omnes* and *jus cogens* to compel third states and their nationals (whether natural or juridical persons) to distance themselves from Israel. Judge Tladi, in his declaration, stressed that “[t]he *erga omnes* character of the obligations does not itself create obligations on third States.”⁸⁵

The most significant practical effect sought by pro-Palestinian activists is to deter international corporations from engaging in business related to settlement activities in the disputed territories. Such attempts at restrictions are not new and have been part of UNHRC resolutions aimed at blacklisting these businesses. While these resolutions cannot typically be enforced by national courts, they can cause potential reputational damage to the blacklisted corporations. Although private corporations cannot be sued in the ICJ, their home states, in theory, can be (whether in contentious or advisory proceedings).

Factual and legal deficiencies of the one-sided Advisory Opinion

As a result of a one-sided set of questions posed by the General Assembly, and one-sided Advisory Opinion proceedings dominated by States hostile towards the Jewish State of Israel, the Court has

⁸⁵ Declaration, Judge Tladi, para. 31.

⁸⁶ Judge Sebutinde, para. 42.

focused exclusively on Israel’s alleged misconduct, and been asked to assume matters of both law and fact that are in contention between the parties. It has thereby ignored crucial issues such as the legal and political history of the territory of Mandate Palestine prior to 1967, and the policies and practices of the Palestinian Arabs and their representatives (including non-state actors), as well as those of other Arab States in the Middle East whose interests are intertwined with those of the Palestinian Arabs.

The result is a fundamental breach of the Court’s responsibility to ensure that it has before it “accurate, balanced, and reliable information to enable it to judiciously arrive at a fair conclusion upon disputed questions of fact, in a manner compatible with its judicial character.”⁸⁶ The one-sided questions and proceedings led the Court to make a number of fundamental errors in factual and legal analysis. In particular -

- (1) Occupation, annexation and sovereignty. The Court has failed to properly analyse the sovereign status of this territory. This has led to an incorrect legal analysis. The Court has ignored Israel’s legitimate sovereign claims to East Jerusalem and the West Bank (Judea and Samaria) grounded in the principle of *uti possidetis juris*, based on the territorial borders of the former British Mandate of Palestine in 1922, rather than on the seizure of the territory by force during and after the 1967 war.⁸⁷ Consequently, the Court did not have sufficient evidence or arguments before it to conclude that all of the territory captured in June 1967 is “Palestinian”, or that Israel has acquired foreign territory, or attempted to acquire such territory, by force during or after the June 1967 war.
- (2) Self-determination and security. The Court has failed to properly consider the security aspects of the occupied territories, including the correct interdependence between the Palestinian and Jewish rights to self-determination and their respective rights to security.
- (3) UNSC Res 242, Oslo Accords and negotiations. The Court’s approach undermines the Oslo Accords and the peace process sanctioned by the Security Council based on negotiated resolution of all outstanding issues in the conflict, including: security, borders, Jerusalem, and settlements.
- (4) Illegality of Israel’s practices and policies vs. illegality of Israel’s presence. The Court provides insufficient reasons for concluding that Israel’s presence in the territories is illegal.

Recommendations

The ICJ President, Nawaf Salam, wrote a separate declaration calling on the Security Council and General Assembly to set a “well defined timeframe” for adopting concrete measures to implement the Advisory Opinion. We believe that this call is inappropriate coming from the president of the ICJ.

⁸⁷ Judge Sebutinde, para. 77.

Under the circumstances, we recommend peace-loving nations worldwide work to prevent the adoption of any resolution which declares Israel’s presence in the territories to be illegal or that calls for its withdrawal in the absence of a comprehensive peace agreement guaranteeing Israel’s security. Israel’s enemies have already stretched tensions too far and strained the cord too much. Any such resolution would contradict one of the UN’s primary objectives of maintaining world peace and security.

The task of the General Assembly is not to make pronouncements about the legal compliance of only one of the parties in the conflict with international law. Rather, reflecting the complex interdependence of the many unresolved issues on the table, the Assembly should undertake a “balanced and impartial examination of the pertinent legal and factual questions” that “grasps the historical nuances of the Israeli-Palestinian conflict, including the competing territorial claims of the parties in former British Mandatory Palestine.”

Furthermore, the General Assembly should encourage and facilitate the parties to enter into good faith negotiations, as reflected in the Oslo Accords and the performance-based, goal-driven Roadmap for Peace, to which the United Nations is a party.

Accordingly, we recommend that states consider the Advisory Opinion as non-binding for both the states involved and third states. This is because, in advisory proceedings, the International Court of Justice (ICJ) does not have the authority to adjudicate disputes with the status of *res judicata*, an authority it holds only in contentious proceedings with the consent of the parties involved. As the name suggests, an advisory opinion is merely an opinion.

On this basis, third states should not take any steps that may impede or prejudice the existing competing claims between the parties being resolved through negotiations between them, as mandated by UNSC Resolution 242 (1967) and the Oslo Accords. These are binding instruments of international law that remain valid and enforceable to date. The same solution is provided for in the Roadmap for Peace, which was endorsed and embodied in UNSC Resolution 1515 (2003) and is also a binding instrument under international law.

ARTICLE

Barriers for Peace Mediators when shifting to an online environment: A Case Study of The UN in Yemen

Obstáculos para los mediadores de paz en el cambio a un entorno en línea: Un estudio de caso de la ONU en Yemen

Brian Oliver Bruggeman¹

How to cite:

Bruggeman, B.O. (2025). Barriers for Peace Mediators when shifting to an online environment: A Case Study of The UN in Yemen. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 49-77. Doi: 10.63058/des.v19i1.30

Submission received: 22 May 2024. **Accepted:** 17 January 2025.

¹ Brian Oliver Bruggeman is an Assessment Officer at <https://www.impact-initiatives.org/>. ORCID: 0009-0005-6600-6215. Email: brian.bruggeman@impact-initiatives.org / bruggemanbrian@gmail.com.

Abstract

This research focuses on the opportunities and barriers of virtual peace diplomacy, examining the different aspects of this approach and analyzing its potential impact on the peace process. In an era where conflicts have evolved into new forms of warfare, the complexities of mediation have intensified. Furthermore, the advent of the COVID-19 pandemic, together with the widespread availability of digital tools, has transformed peace diplomacy and, therefore, the role of mediators. The research aims to discover what influence the changing environment surrounding peace processes has on peace negotiation and how mediators can adapt most effectively to that environment. This will be done by looking at all the tracks introduced by the Multi-Track Diplomacy Framework, where the differences in approaches between the tracks will be highlighted. The research will provide an in-depth analysis of the complications regarding virtual trust-building in peace negotiations in the context of Yemen. This will be facilitated by examining previous peace attempts by the UN in Yemen and by analyzing the current landscape in Yemen.

Keywords: online peace mediation, virtual trust-building, UN peace efforts, Yemen peace process

Resumen

Esta investigación se centra en las oportunidades y barreras de la diplomacia de paz virtual, examinando los diferentes aspectos de este enfoque y analizando su posible impacto en el proceso de paz. En una época en la que los conflictos han evolucionado hacia nuevas formas de guerra, las complejidades de la mediación se han intensificado. Además, la llegada de la pandemia de COVID-19, junto con la amplia disponibilidad de herramientas digitales, ha transformado la diplomacia de paz y, por tanto, el papel de los mediadores. La investigación pretende descubrir qué influencia tiene el entorno cambiante que rodea a los procesos de paz en la negociación de la paz y cómo pueden adaptarse los mediadores a ese entorno de la manera más eficaz. Para ello, se estudiarán todas las vías introducidas por el Marco de la Diplomacia Multidireccional y se pondrán de relieve las diferencias de enfoque entre ellas. La investigación proporcionará un análisis en profundidad de las complicaciones relativas a la creación de confianza virtual en las negociaciones de paz en el contexto de Yemen. Para ello, se tendrán en cuenta los anteriores intentos de paz de la ONU en Yemen y se examinará el panorama actual del país.

Palabras clave: mediación de paz en línea, fomento de la confianza virtual, esfuerzos de paz de la ONU, proceso de paz en Yemen.

Introduction

Background and Context

International peace mediation has changed significantly over the last few years, with a decrease in state actors and an increase in a wide variety of non-state actors. Technological advancements have also impacted conflicts and peace processes, creating new possibilities while also making them more complex. While technological advancements have an immense scope and impact on how we communicate, it does not mean that the principles of peace mediation need to be drastically renewed. This is because peace mediation always centers on individuals or human entities, and human skills are still imperative throughout the process, whether virtually or face-to-face. Nevertheless, digital technology can optimize the efficiency of peace mediation and allow for new opportunities to mediate, which helps the mediator better understand the parties and bring them together (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, p. 7).

The digitalization of peace processes has offered many benefits, but most importantly, it has increased shareability, allowing many actors to be included and actively involved in the peace process. Subsequently, this also enhances the transparency of the process, both of which contribute towards a sustainable peace agreement (Hornsey et al., 2008, p. 751).

The negative side is that building trust is harder in a virtual setting because, while having a low threshold for accessing information, and a high speed of information flow, it can be subjected to data breaches and the spread of misinformation (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, p. 7). This is problematic as some parts of the principles amplify secrecy, which cannot always be offered or guaranteed in an online setting (Stai, 2022). Additionally, while shareability is an advantage of virtual negotiations, it is also a disadvantage, as it further marginalizes and excludes the illiterate, the poor, and those with insufficient technological knowledge (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, p. 534). As the UN's Multi-Track Diplomacy Framework emphasizes trust, inclusivity, and confidentiality, these challenges posed by virtual settings make its application more difficult.

When considering the psychological aspects of shifting to virtual negotiations, non-verbal communication is the most significant element that cannot be substituted. Conversations follow a different flow, causing the meetings to be less natural and more formal. Furthermore, people are less engaged in virtual peace negotiations and find it harder to empathize with the opposing party, and therefore building trust is more challenging (Bramsen & Hagemann, 2021, p. 549). The Construal Level Theory adds to this by saying that the more psychological distance there is between the parties, the more people tend to fill up gaps with their own abstract perceptions, making it harder for parties to be on the same page and work towards a common goal (Trope & Liberman, 2010, p. 441).

Virtual negotiations have been a part of the business world for a considerable time and have been viewed as a beneficial component in that sector. Crucial benefits for them are the enhanced availability and the cost-effective component. While the business negotiation literature also identifies obstacles when negotiating virtually, clear rules are set to overcome these barriers. This includes researching the other party, setting ground rules, receiving training, extensive communication, and consistent follow-ups (Schlair & Hammer, 2022, p. 308). Nevertheless, virtual peace negotiations have not yet been fully embraced as the future of peace mediation.

Research problem

This research will focus on the differences between face-to-face and virtual peace negotiations, supported by business negotiations. The research will further be supported through psychological theories, considering the context of peace negotiations. The research will use the current Yemen conflict as a case study, as this conflict has been ongoing before, during, and after the global pandemic, and technological advancements allow for more possibilities for an inclusive peace process in that context. The case study will focus on the UN, as they have attempted several peace efforts since the start of the conflict in Yemen, and their Multi-Track Diplomacy approach allows for a virtual or hybrid peace process.

Research objective

The objective of this research is to analyze and explain the potential of virtual peace negotiations, focusing on their advantages and challenges. Different topics will be explored, such as face-to-face negotiations, virtual business negotiations, and the use of digital tools in the peace process. These topics aim to highlight the differences between virtual peace negotiations and traditional methods, and to describe the environment in which they take place. This will be applied in a case study of Yemen, examining the UN's peace efforts. The case study will connect the psychological aspects of virtual mediation with its implementation in a specific context through the use of the UN's Multi-Track Diplomacy method. The research also aims to explore how the increasing digitalization of peace processes affects their outcomes.

Research questions

Main question: What barriers have emerged for peace negotiators when shifting to an online environment? A case study of the UN in Yemen.

Sub questions:

- How do online negotiations compare to face-to-face negotiations in terms of effectiveness?
- How can online peace negotiations be compared to virtual business negotiations?
- What psychological implication does the shift to an online environment for peace negotiations have in Yemen?

- How can digital tools be beneficial to peace negotiations?

Reading Guide

The research is divided into seven primary sections:

- 1- Introduction: Providing contexts, outlining the research and objectives.
- 2- Literature review: Covers relevant theories, previous studies and concepts that are related to peace negotiations, virtual trust-building, and digital tools.
- 3- Methodology: Outlines the data collection methods, and relevant conceptual frameworks that are used throughout the research
- 4- Case study: Yemen: Explains the historical and current conflict dynamics, highlighting the role of the UN in leading peace efforts.
- 5- Findings: Further analysis on theoretical frameworks to enhance understanding of opportunities in virtual peace negotiations, specifically in the Yemen context.
- 6- Discussion: Examines the impact and challenges of digitalized peace negotiations in Yemen.
- 7- Conclusion: Summarizes key findings, addresses the research questions, exploring opportunities for a peace process in Yemen.

Literature review

Digital tools that assist peace negotiations and stimulate the peace process have been available for years. Nevertheless, there has not been much academic research done on the specific topic of virtual peace negotiations and their effectiveness. Most researchers conclude that there are benefits and downsides to the use of digital technology in peace negotiations. However, it is imperative to know how, when, and in what context to apply specific tools.

Adler-Nissen & Eggeling researched the possibilities of digital technology in the world of diplomacy. Their paper argues that the world of diplomacy has already strongly embarked on a digital era, which has been framed as 'blended diplomacy'. The lack of training and the number of technological tools available result in a lack of clarity on how to use them. Diplomats are expected to be online all the time while remaining confidentiality experts. As this digitalization can create empowerment as well as loss of control, it is imperative to study what implications this has on diplomats' professional and personal lives. Additionally, while the available digital tools offer many opportunities, they also carry risks such as security breaches, privacy infringements, and the spread of misinformation (Adler-Nissen & Eggeling, 2022).

Technology can also impact the peace process, both positively and negatively. Adler-Nissen and Drieschova explain how ICT causes a track-change diplomacy, and the effects this has on international negotiations. Through 'shareability, visualization, and immediacy of information', ICT has the ability to change temporary power dynamics during international negotiations. The

author further explains how ICT can trigger a loss of control through track-change diplomacy, rather than providing oversight on negotiation, which is what it was initially intended for (Adler-Nissen & Drieschova, 2019).

The influence of technology extends beyond specific aspects of the peace process; it profoundly affects society in its entirety. People have become increasingly more dependent on their computers and the internet. Additionally, while people might feel like being in control of the information they want to receive, the internet carefully tailors and filters the information you receive, leaving very little space for independent thinking. Therefore, while technology allows us to work fast and have significant access, it is argued that this is traded for calm, focused, undistracted thinking. Additionally, as the computer gains control through filtering and selecting your preferences, the mind loses its creativity. It is in the messy process of intellectual exploration and social attachments that the individual develops their personal initiative, creativity, and whim (Carr, 2010, p. 132-133).

Moreover, neuroscientists have discovered that this technological increase is also impacting people's ability to read minds. The three highly active regions of the brain that can help us coordinate a large group of people are the prefrontal cortex, the parietal cortex, and the intersection of the parietal and temporal cortices. This helps us understand people's minds and is highly important in peace negotiations and during a peace process. The enhanced digitalization of society has caused us to overload those regions of the brain, affecting our ability to connect to other human minds. It has caused us to perceive minds that don't exist, even in spiritless objects. Additionally, the brain naturally mimics the states of other minds it interacts with, even if they are not real. While this may advance our ability to perform cognitive tasks, it threatens the integrity of human beings (Carr, 2010, p. 130).

Further, microsociologists have analyzed the rhythmic flow of conversations and how this is altered in a virtual setting. Face-to-face conversations follow a typical rhythm, where a comment is responded to with, for example, a nod, a giggle, or a smile. These joined rhythmic patterns, with only minor pauses, are crucial to relating to one another and breaking down mistrust. Virtual negotiation creates its own pauses, changing the natural flow of conversation. It does not allow for many interruptions and discussions and therefore tends to be more formal. Additionally, virtual negotiation complicates 'intense conflictual engagement', with fewer moments to escalate. This might be good to keep the dialogue civilized and respectful; however, sometimes escalation is required to arrive at the root of the problem (Bramsen & Hagemann, 2021, p. 549).

Bramsen and Hagemann further argue in their research that there is a sixth sense regarding physical peace negotiations. This is the instinctive feeling of potential spoilers in a conflict or the potential course of other events that cannot be observed in virtual negotiations. The sensibilities of creating a confidential setting cannot be created online, which, as the authors describe, results in a 'missing sense of peace.' The research does, however, see the possibilities of virtual peace negotiations as they enhance accessibility and frequency of meetings. Therefore, the author concludes that a hybrid

version of negotiations would be ideal, where the physical aspect is not fully dismissed (Bramsen & Hagemann, 2021).

The emphasis on context-specific mediation approaches also must be emphasized, specifically regarding the conflict in Yemen, a multi-party conflict with deep-rooted cultural and political dimensions. The article “Assessing Context-Specific Peacebuilding Approaches in Contemporary Armed Conflicts” by Ako Muto and Rui Saraiva mentions the importance of context-specific approaches, and the need for locally grounded methods and maintaining local ownership throughout any peacebuilding process. Additionally, the importance of a middle-out approach was emphasized, specifically in the context of peacebuilding efforts in Syria. This entails connecting with and including middle-level leadership, for establishing infrastructures and involving communities for long-lasting sustainable peace (Muto & Saraiva, 2020, p. 247-250).

Applying this to the case study of this thesis, the conflict in Yemen, the article ‘Pathways for Peace and stability in Yemen (2017), by Maktary and Smith illustrates the fragmented political landscape, and the importance of inclusive peace talks amongst all stakeholders involved. This includes marginalized groups, localized peacebuilding efforts and the role of external actors in mediating the conflict. Furthermore, they mention “successful peace efforts in Yemen hinge on sustained engagement and adaptability to shifting conflict dynamics” (p. 10).

This literature review highlights the growing impact of ICT on politics and the increasing use of digital tools in peace negotiations. It further covers how virtual mediation offers accessibility and frequency; however, it also presents challenges such as security risks, loss of informal communication cues, and difficulties in building trust. Additionally, context-specific peacebuilding remains crucial, particularly in Yemen, where inclusive negotiations and sustained engagement are necessary for stability. Throughout this paper, the author further explores the implications of shifting peace negotiations to an online environment, considering the political and cultural landscape in Yemen. Additionally, the paper provides a deeper analysis of how to engage in virtual dialogue for a sustainable peace process.

Methodology

This research paper follows a single case study design, focusing on the UN’s efforts in Yemen. It utilizes a desk research approach, aiming to gather extensive information on the topic and connect the facts with the theoretical frameworks previously explained.

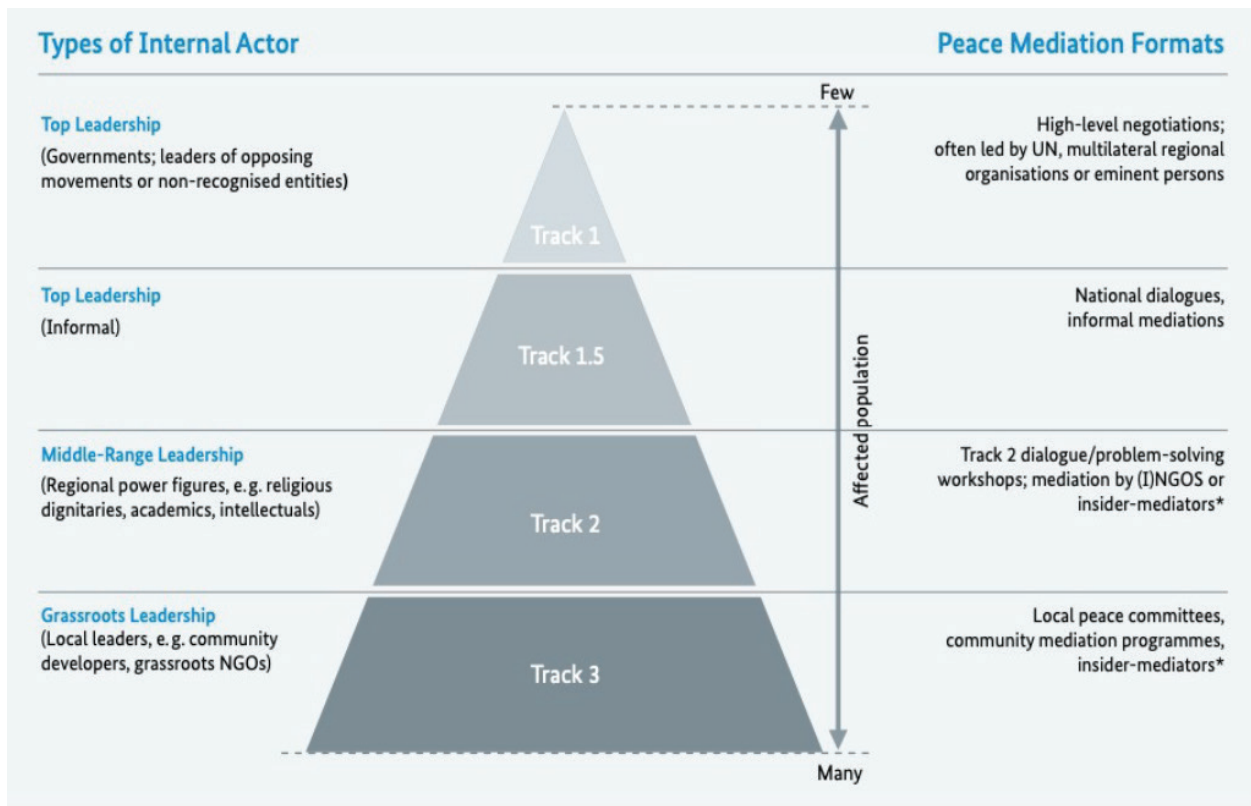
Conceptual frameworks

The author used conceptual frameworks in this paper to examine the psychological implications behind virtual negotiations, the increase in digitalization, and the effect this has on the peace process. From this perspective, the opportunities and barriers of virtual negotiations can be better

analyzed. This was done through the use of the Multi-Track Diplomacy Framework, the Construal Level Theory, and the Social Presence Theory.

Multi-Track Diplomacy

Figure 1: Multi-Track Diplomacy Framework



Based on Lederach, John Paul (1997). *Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington D.C.: USIP, p. 39, adapted by IMSD.

Modern conflicts have far evolved beyond state-versus-state conflicts, with a majority of non-state actors and external parties involved. This requires a more developed peace process involving all layers of society. The UN approaches contemporary peace processes in a multi-level method, attempting to reach every layer of society. The UN uses John Paul's multi-track approach, as visible in Figure 1, where they aim to advance towards a collective, inclusive peace process through a bottom-up approach. (Albani & Ade, 2021). Track 1 is the most visible and transparent, between official actors. These actors usually have leverage that they can bring to the negotiations. This, however, is hard to use since the other tracks are mostly working under the radar. These other negotiations are framed as 'quiet diplomacy', mostly conducted between communities, NGOs,

private organizations, and other non-state actors. The advantages of quiet diplomacy are that it is a smaller step to start the dialogue, and repercussions are lessened when negotiations don't result in progress. Thus, these tracks must be under the radar and only report progress (Upeace, 2021).

Track 1.5 is imperative in this research, as it is the connector between Track 1 (government officials) and Track 2 (civil society). Track 1.5 is not necessarily resolution-oriented, it can also be more of an informal platform for stakeholders to gain new insights and perspectives (Wolleh, 2007, P. 2). The UN adjusts its method in the context to see what fits best, but every approach aims to bring parties closer together with cumulative potential towards a peace agreement (Wolleh, 2007, P. 13). The importance of this track for the research objective comes from the virtual perspective. A point of critique for the implementation of Track 1.5 thus far has been the lack of civil society inclusion, which is more attainable in an online setting when access is increased. On the other hand, the informal nature of this track might be compromised in an online setting, when everything can be logged and there is limited space for 'inter moments,' which will be further explored later in the research paper (Naylor, 2020, P. 590).

Track 2 involves more unofficial actors involved in the conflict, such as regional powers, religious groups, and academics. This Track is more public compared to Track 1, and focuses more on dialogue and peacebuilding. The Track emphasizes bringing parties together through relationship building while working towards sustainable peace. In this stage, the roots of the issues are addressed and mediated to allow for long-lasting partnerships (Wehrenfennig, 2008, P. 85). Track 2 also involves many private organizations and NGOs, participating in multi- sectoral dialogue, disseminating knowledge, and supporting off-the record meetings. Their participation is essential as they bring certain legitimacy, resources, and neutrality to the table that official actors cannot offer in certain instances (Tripathi & Gündüz, 2008, p. 17).

Track 3 diplomacy follows a community-based approach. It involves local leaders, community developers, and grass-roots NGOs. This Track involves the most affected people by the conflict, and the emphasis is on community engagement. Grassroots mediation is applied, which includes reconciliation exercises, co-existence between communities, and workshops focusing on the healing process (Turk, 2006, P. 222). The mediation approach is aimed at creating a calm environment where trust can be built. However, the multitude of actors involved in Track 3 and the calmness of the mediation approach cause the process towards peace to take a long time (Albani & Ade, 2021). In all tracks, there must be an ongoing peace process, as this is the only way to obtain progress and real dialogue. This enables all parties to work towards peace, through the tools of dialogue and negotiations. Peace is of the people and by the people, and it is most sustainable through an inclusive holistic approach where the needs and interests of all groups are integrated (Albani & Ade, 2021).

The author aims to operationalize the Multi-Track diplomacy peace mediation format to showcase the typical mediation structure. From this baseline, the author will showcase the differences between

physical and online mediation. This format will also be important to showcase how digitalization has influenced track diplomacy and how it introduced a track change.

Construal-Level Theory

Another relevant theory is the Construal-Level Theory (CLT) of psychological distance. This relates to how people perceive and represent information that is distant in psychological space. It helps understand behavior, decision-making, and thought by linking the construal level with the psychological distance between an observer and a target. The further this target is from the observer, the more abstract it is perceived (Trope & Liberman, 2010, P. 440).

This level of psychological distance is broken down into four dimensions: temporal, spatial, social, and hypothetical. Temporal distance refers to the time between the present and an event or object in the past or future. Spatial distance is the physical distance between a person and an object or event. Social distance refers to the closeness between a person and another person or group. Hypothetical distance relates to the amount of improbability or hypothetical nature of an event or object (Trope & Liberman, 2010, P. 441).

The CLT argues that information with much psychological space between the observer and target is perceived abstractly with high-level construals, and vice versa. This relates to the research, as virtual negotiations create psychological distance between parties, specifically social distance. Building trust will be increasingly difficult as parties will have a more abstract image of each other, as the virtual environment creates a higher level of psychological distance between the parties. On the grassroots level, the people's psychological distance will be influenced by the extent to which the local population is affected by the conflict. The further people are removed from the conflict, the more psychological distance this creates and the more abstract their image of the conflict becomes (Trope & Liberman, 2010, P. 441-442).

The author aims to apply the Construal-Level Theory to the environment of virtual peace negotiations and explore what psychological implications this shift to a virtual setting has. Specifically, the theory will be applied in the context of Yemen to see how the psychological distance has affected the behavior and attitude of the main parties and civil society.

Social Presence Theory

In the context of this research, CLT can be complemented by the Social Presence Theory of Short, Williams, and Christie (1976). This theory argues that the number of cues available impacts the amount of salience a person can convey to another. In a virtual context with fewer cues available compared to a face-to-face interaction, the other person will pay less attention to the person's presence. The theory further elaborates that the distance between the interactions causes us to perceive each other as 'semi-mechanical objects,' that can be ignored, insulted, and exploited

with minimal consequences. Thus, the research found that virtual mediation more often led to disrespectful behavior when communicating compared to face-to-face mediation (Stuhlmacher & Citra, 2005, P. 72-73).

The Social Presence Theory will be applied to support the findings of differences between face-to-face and virtual peace negotiations. In addition to the analysis of virtual negotiations in the business world, this theory aims to amplify and detect behavioral differences within negotiations, and supports the data in answering the main research question of the emerged barriers in peace negotiations when switching to an online environment.

Data collection methods

This information has been gathered through material from books, news articles, and published research. Search engines used to find research materials include official organizational websites, JSTOR, ResearchGate, and mainly Google Scholar for academic papers. Only English sources of information were considered for this research paper. The Author mainly used key words such as 'virtual peace mediation', 'barriers for peace mediators' 'trust-building in virtual environments', 'online peace mediation in the private sector', and 'digitalization in the peace process'. To understand the context of the conflict in Yemen the author used the keywords 'Conflict resolution in Yemen' 'Huthi-Saudi negotiations', 'Yemen Stockholm agreement', and 'UN peace negotiations in Yemen'.

Data Analysis

In this research paper, the author used abductive reasoning, looking at different theories and frameworks and forming the most sensible conclusion. This considers the language, culture, and worldview of the context in which the study is focused, as opposed to looking at the data and articles from my perspective. The author operationalizes this through a discourse analysis of the data and articles that are examined, which aims to look beyond the text and examine the context behind it. This is specifically imperative for this research since it emphasizes the 'why' behind the information. This type of reasoning is aimed at bringing the author closer to answering the research questions (Bryman, 2016, p. 401).

Research justification

Humanitarian Action often responds rapidly to an emergency situation, emphasizing the limited time humanitarian workers spend on their missions. Specifically, in a conflict setting, a lack of information on any side can create confusion that can prevent workers from saving lives. This can indicate not reaching the group in need of assistance, being received as perpetrators by locals, and many more misunderstandings. This shift to virtual peace negotiations will therefore not only impact peacemakers and peacebuilders but also allow actors to be better informed, which can increase access for humanitarian organizations. Thus, the increase in transparency and inclusivity

that this digitalization of the peace process offers creates many new opportunities for humanitarian organizations. As virtual peace mediation has only been widely practiced since the past couple of years, there is a significant shortage of research that covers long-lasting effects of virtual peace mediation on sustainable peace. Thus, this research will add to the research on the aforementioned topics, while acknowledging the limitations in the following chapter.

Research limitations

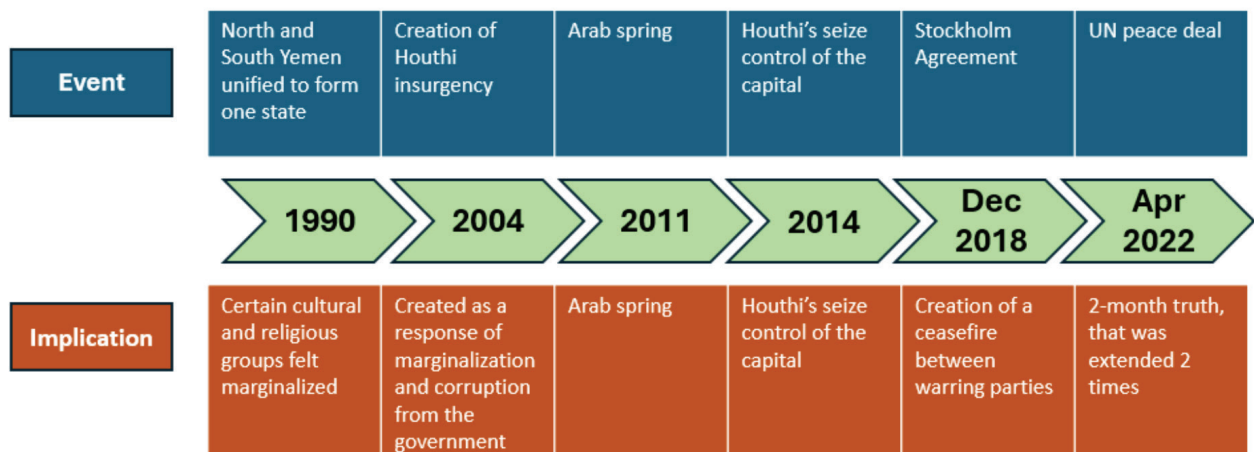
The main limitation of this research is its specificity. Specifying the research on a particular case and organization allows for a better understanding of the possibilities and downsides of virtual peace negotiations. However, it also limits access to information and interviews. Information on the actual results of virtual peace negotiations is limited since they have only been applied recently, and often in hybrid form, which makes it harder to find results. Additionally, in finding the interviewees, the author limited himself to UN peace negotiators that were active in Yemen, which is a small group. The author reached out to many, however, the few that responded were extremely busy, and further contact could not be established.

This made the author decide to conduct a desk study, with the addition of focusing on virtual business negotiations and the psychological aspects of virtual peace negotiations. Thus, the research paper has its limitations; however, with the increasing trend of digital peace processes, it might offer a new perspective on opportunities and pitfalls in virtual peace negotiations.

Case Study: Yemen

To analyze the strategy of the UN in Yemen accurately, it is important to first cover the history of the conflict, the main actors, and the current status.

Figure 2: Yemen conflict timeline



The Yemen conflict started in 2014, when Houthi rebels overthrew the government and took over the capital, Sanaa. Yemen was divided into two states until 1990, and after the unification of the two states, certain cultural and religious groups felt marginalized (Robinson, 2022). During the Arab Spring in 2011, long-serving President Saleh was ousted and replaced by Vice President Hadi. Economic instability, marginalization, and unequal distribution of resources increased, and in 2014 the Houthis decided to take over and respect the interests of the Shia Muslim minority in the North (Friends Committee on National Legislation, 2022). The government was comprised of Sunni Muslims, the majority in Yemen. Saudi Arabia also consists of a Sunni majority and has been significantly involved in the conflict. Together with the UAE, Saudi Arabia is fighting the Houthis to bring the original government back into power (Al-Muslimi, 2015).

Additionally, through colonization, Yemen has been built on a colonial legacy ruled by a European understanding of statehood. This entails that societies comprised of a 'multitude of communal groups' are being controlled and governed by one or a few dominant groups. This will eventually disrupt the social order, leading to a fragmented society, and potentially a protracted social conflict, as has become visible in Yemen (Ramsbotham et al., 2016, P. 90). Additional reasons for the start of the conflict were momentum and capacity. During the Arab Spring, religious and cultural differences were amplified, and the feeling of marginalization grew. This sectarianism only grew during the conflict, with the accusations of Saudi Arabia that Iran was supporting the Houthis, fueling the religious aspect of the conflict. In 2004, the Houthi insurgency was created as a response to corruption and marginalization by the government. During the Arab Spring, the government had significant governance struggles and was incapacitated, leaving the opportunity for the Houthis to take control (Ahmed, 2019).

Since the start of the conflict, the UN has made several attempts to mediate a peace agreement. While it did not result in a sustainable peace process, the UN did manage to negotiate multiple ceasefires, minimizing casualties. The most notable progress made was under UNSC Resolution 2451 in December 2018, when both parties signed the Stockholm Agreement. This agreement would cease fire and start the disarmament process (Global Centre for the Responsibility to Protect, 2023). However, accusations between the actors of non-compliance on top of the already existing lack of trust endangered the peace agreement. Eventually, in May 2019, the Houthi troops continued their violent attacks, starting another period of full-blown conflict (Dijkstal, 2019).

In April 2022, the UN managed to negotiate a two-month truce in Yemen, which was extended two more times. The mistrust issue was addressed and accommodated through shuttle diplomacy. While the government was willing to compromise, the Houthis wanted more and demanded a large majority of resource revenue. When these conditions were not met, the Houthis targeted the government's oil tankers, and the truce period ended. After several failed peace resolution attempts, the conflict has become intractable, meaning that it is unclear at what stage the conflict is currently at (Crisis Group, 2022).

Additionally, the UN DPPA notes that in these critical times of ceasefires and peace attempts, the spread of unverified information and misinformation is also a significant contributor to the intractability of the conflict. Many accusations were made throughout the truce period from both sides regarding the violation of the truce conditions. This raises conflict expectations and can eventually lead to conflict escalation (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 8).

It has become evident that parties have entered a Mutually Hurting Stalemate, but have not yet been willing to compromise. This is imperative for a peace process, the actualization of both parties being in an MHS, which is slowly happening in Yemen (Mitchell, 1997, p. 6). Both parties have refrained from using extensive violence recently and have shown a willingness to negotiate a truce. The combination of factors shows that the conflict has entered a point of ripeness, which is an opportunity for peace that must be seized. (Zartman, 2000, P. 227-228).

A main factor in the failure of a peace process has been the lack of trust between the main warring parties, something that the UN also recognized. In a last-resort attempt to extend the truce, the UN attempted shuttle diplomacy; however, this was not as successful as desired (Crisis Group, 2022). Currently, both parties have shown a willingness to compromise on their military objectives and enter into negotiations, showing the ripeness of the conflict. It is important that a mediating party such as the UN support this process. Given that borders are still blocked, areas are contested, and lack of trust is still a big issue, virtual diplomacy seems like a viable solution (Lederer, 2023). However, how do you build trust in a virtual setting? What psychological implications are there with the shift to virtual negotiations? And how can digital tools assist the peace process?

Findings

In this chapter, the dynamics of virtual versus face-to-face peace negotiations are explored, considering the strengths and limitations of both approaches. The discussion extends to virtual business negotiations, which have been practiced for decades, addressing intercultural and non-verbal communication challenges. The psychological aspects of virtual negotiations, especially regarding trust-building and empathy, are also examined. Lastly, the chapter analyzes the impact of digital tools on peace processes, focusing on how technology can either facilitate or hinder collaboration, transparency, and inclusivity in complex conflicts.

Face-to-face and virtual peace negotiation comparison

In this section, the author focuses on the differences between face-to-face and virtual peace negotiations in terms of effectiveness. First, the discussion examines what mediation entails in the current virtual context and what is expected from it. Following that, the author explores both the opportunities, and the barriers associated with virtual peace negotiations.

Mediation is described as “a process whereby a third party assists two or more parties, with their consent, to prevent, manage, or resolve a conflict by helping them to develop mutually acceptable agreements.” The UN adds that mediation is intended to provide the right environment, to allow parties to improve their relationship and work towards cooperation. Mediation is voluntary and relies solely on the consent of the parties. The role of the mediator varies based on the substantive input they can suggest and is therefore flexible but structured. Mediators need to understand the causes of the conflict, the dynamics, positions, and interests of parties and civil society. Mediators should promote listening, dialogue, and collaboration through problem-solving (United Nations, 2012, P. 4).

The Increase in virtual diplomacy and the digitalization of peace processes require the mediators to also have digital literacy, meaning a basic understanding of communication technology skills. These skills need to be able to be transferred in the context of the national environment in which they are situated and be flexible with the preferred digital tools suggested by conflict parties. Additionally, mediators need to be able to analyze bulks of data regarding internet access, and analyze age, gender, language, and literacy (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 8).

The environment for effective mediation requires an encouraging external environment, as other states can positively promote or undermine mediation. As mediators also have the interests of international legal obligations in mind, they always need to be prepared to step back when solutions that would break these obligations are developing. Maintaining impartiality is crucial for mediators throughout the process to prevent undermining the effectiveness of their role due to perceived bias. This also means that mediators need to talk to all actors involved. Impartiality cannot be mistaken for neutrality, as mediators are still required to uphold certain universal principles and communicate this to the parties (United Nations, 2012, P. 5-10).

Although some argue that it is simply too early to arrive at any finite conclusions on the comparison between virtual and in-person diplomacy. Instead, attention should be directed toward the aspects that are lost in virtual diplomacy. Tristan Naylor, in his article *All That's Lost* (2020), unfolds two prime elements that cannot be satisfied without a summit (Naylor, 2020, P. 584).

The first relates to the performative element of summitry called sublime governance. This relates to the galas, performances, and dinners, which essentially hold no value and are distanced from the real meetings. Nevertheless, it emphasizes the meaning of the meeting, it allows the high-profile politicians to be more than just that and see each other in that capacity, and it provides an imperative break from the heavy meetings (Naylor, 2020, P. 585-P.589).

Secondly, the aspect that gets lost in virtual negotiations is inter-moments. These are moments in between meetings where political leaders can discuss terms and agreements. This can be used to follow up and dig deeper into the agreement, which can be more difficult in a momentary formal

meeting. These inter-moments are often breaking points to reach agreements and therefore hold much value. As mentioned by a UN diplomat, most people see what happens in the conference rooms, but that's not the UN at all. It's the corridors that determine what happens at the UN' (Naylor, 2020, P. 590).

Both these elements also contribute to relation-building and fostering interpersonal connections, which are essentially key to building trust in a peace negotiation setting. This connection is also crucial for the third party, as they need to be trusted by both sides in order to mediate successfully. The lack of informal space makes it more challenging to create this level of trust. This absence of a certain level of trust does not only affect the dialogue between the two conflicting parties, it also reduces the efficiency of the negotiations in producing results. Therefore, it can be argued that these trust relationships cannot be formed in an online setting, and initial face-to-face meetings are essential in establishing a certain level of trust (Bramsen & Hagemann, P. 556-557).

Furthermore, Backchanneling is also more challenging, as private messaging cannot fully substitute the power of face-to-face approaches. The flip side to this is that virtual negotiations have increased potential preparatory time as they avoid travel time. It has also helped reduce stress and tension, which would be higher in a face-to-face setting. So while relation-building can be more challenging virtually, there are more possibilities to do so (Bjola & Coplen, 2022, P. 82-83).

The UN DPPA also recognizes the benefits of virtual negotiations, looking at flexibility and trust-building. Video conferencing services allow for a significant decrease in costs, specifically in a complex such as Yemen with numerous actors involved in the conflict. It also increases efficiency; in that it allows for direct follow-ups with actors and decision-makers without communicating through a third party. The setting of virtual negotiation tends to be more informal, specifically when done through social media. This informality allows for trust-building between conflicting parties. Furthermore, it gives a variety of opportunities to start a dialogue in different settings. Private rooms for people to work on documents on specific issues, and rooms to speak to other actors and voice their needs and concerns (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 20-21).

When examining the effectiveness of virtual compared to face-to-face negotiations, there are some clear advantages to conducting online negotiations. Virtual negotiations increase flexibility, are cost-effective, and allow for more follow-up meetings (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 20-21). The downside is that relationship-building is more difficult in a virtual setting. Specifically, when focusing on informal meetings and ceremonies, face-to-face meetings allow the opportunity to take a break from the heavy meetings and see beyond just each other's capacity (Naylor, 2020, P. 590).

Virtual Business Negotiations

In the business world, virtual negotiations have been conducted for decades. However, companies

still struggle in the virtual business world, especially in an intercultural setting. Social norms such as body language, emotional intelligence, and cultural backgrounds have a considerable impact on the way people interact and therefore influence the result of the negotiation. These social norms, however, are more difficult to identify in an online setting, making virtual negotiations more complicated (Schlair & Hammer, 2022, P. 308).

Business negotiation literature talks about the importance of non-verbal communication, a feature that is very important in face-to-face negotiations. This includes eye gazing, blinking, facial expressions, gestures, and postures. This part of communication is complicated to read in a virtual setting and is less often used (Kazemitabar et al., 2022, P. 4). Additionally, relational communication is most effectively communicated through non-verbal channels, whereas verbal channels merely provide a more uncomfortable and unnatural alternative (Naquin & Paulson, 2003, P.114). Nevertheless, the complete removal of visual access limits the ability to assert dominance between parties, increasing their willingness to collaborate and reach a solution. This phenomenon is called the barrier effect and reduces attacking behavior (Stuhlmacher & Citera, 2005, P. 71).

Business negotiators have realized the advantages of virtual negotiations, specifically the flexibility, cost-effectiveness, and possibilities for follow-up meetings. Nonetheless, the drawbacks have also been clearly outlined, mainly regarding the increased probability of miscommunication and the extra barriers to building trust. This is why business negotiators emphasize the importance of setting clear ground rules before the start of negotiations. Other imperative factors include extensive preparations, follow-ups, consistency, and virtual negotiation training. The aforementioned criteria are additional guidelines that help towards successful online negotiations (Schlair & Hammer, 2022, P. 308).

Psychological implications

In the next section, the author will focus on the psychological implications of switching from face-to-face to virtual peace negotiations. In earlier sections, the author analyzed the noticeable differences when shifting toward virtual peace negotiations. The author also looked at the business world to find more quantitative results and rules for substitution. This section will be focused on the non-visible factors that can pose barriers to building trust in an online environment.

There has not been a detectable quality decrease for virtual negotiating compared to face-to-face negotiations. Nonetheless, it affects people's ability to trust other parties. Trust has been described as "a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behaviors of another." The decision whether to trust the other party is often made based on a contextual risk assessment, analyzing the harm that the other party can do when the trust is violated. This is specifically important in peace negotiations, where the other party can violate trust and damage your reputation, making people less likely to confide in that party (Naquin & Paulson, 2003, P. 114).

This assessment of whether to trust other parties has also been affected by the increase in digitalization. Parties are more cautious, realizing the enhanced risk of security breaches and privacy infringements in this modern era (Adler-Nissen & Eggeling, 2022, P. 656). This has been particularly evident in Yemen, where mediators had very limited virtual access to the Houthis, who were reluctant due to a fear of revealing their location and security grounds (Bramsen & Hagemann, 2021, P. 548) Additionally, there is another factor in which parties decide to trust one another, which is 'identification-based' trust. This relates to social identity theory, where the person relates their belongingness to the other person. People often identify themselves as part of a group, which can be religious, cultural, and more. Shared identity can help create empathy and concern for the outcome for the other party, which often results in a more trusting relationship. This social identity theory however is often one of the bottlenecks towards building trust in a peace negotiating setting, where actors perceive to have incompatible identities which creates mistrust. (Naquin & Paulson, 2003, P. 114).

Similar to virtual business negotiations, building trust appears to be the biggest challenge in virtual peace negotiations. Nevertheless, peace negotiations are slightly different from business negotiations, which are detected through certain behavioral patterns, and the consequences of those patterns. Face-to-face communication follows a certain rhythmic flow, with little pauses in between responses. Virtual negotiations have delays that alter the flow of conversation. In addition, some non-verbal responses are not being noticed at all. This causes the negotiations to be more formal, which has several implications for the outcome of the negotiations. Firstly, it creates more distance between the parties, which makes it harder for them to empathize with one another and build trust. Furthermore, the formal setting also does not allow sufficient 'intense conflictual engagement'. While this may be desired in business negotiations, as it decreases the risk of escalation, it can be required in a peace mediation setting to arrive at the core of the problem (Bramsen & Hagemann, 2021, P. 549).

Digital Tools in the peace process

The rise of virtual negotiations and ICT has essentially improved the ability of states to oversee peace processes. Nevertheless, it has also made it more complicated. The concept of affordance explains the ICT development in the peace process, meaning that technology enables and constrains the tasks that the users aim to complete. Both sides of the concepts are unfolded through different influences in peace negotiations (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 534).

Shareability is the first influence on affordance, which means the way technological advances allow many actors to be included in the process. Shareability goes beyond actors being updated, they have access to add anything to any documents in the peace process. This increased virtual collaboration enhances the sense of teamwork and transparency and is specifically important in a context such as Yemen. Yemen has experienced multiple uprisings by groups that felt marginalized and chose to defend the needs of their people. An inclusive peace process seems to be the only way to move

forward and create an environment of inclusivity and transparency (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 534).

Nevertheless, in peace processes with many actors such as in Yemen, shareability can also be a negative aspect and slow the process down, as all actors are free to include their input. When examining the current situation in Yemen, the conflict appears to have reached a point of ripeness, and too many delays in the peace process can potentially ruin the chance of peace altogether (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 535).

The rise of mass communication and mass media is also an aspect of this shareability, which has a direct impact on the peace process. It gives people the idea that they have the full picture since they have access to all this information, however, this picture might not be accurate. Stereotypes are strongly transmitted through language; therefore, communication is imperative, as it can lead to social pain or social disadvantage. This is amplified by the harmful influence of mass media in two ways (Hornsey et al., 2008, P. 751).

Media bias is one harmful influence of this shareability, giving people a one-sided view of the situation. However, social psychologists believe this mostly exists in the mind of the reader, giving them the perception that the media is on their side. This still has a negative impact, as it aggregates and intensifies the situation (Hornsey et al., 2008, P. 752). This has been strongly visible in Yemen, where the Houthis have become anti-American and anti-West, and journalists are not allowed in their controlled territory (Mavaro-Stroller, 2017).

Secondly, People who feel they have a minority opinion are less likely to speak up, creating a spiral of silence. It is framed as a spiral because when people do not express their minority opinions, the collective sense of not speaking out strengthens, further marginalizing these groups (Hornsey et al., 2008, P. 753). Not only did the Houthis start the conflict based on a feeling of marginalization, but the war also caused the people in the South to feel further marginalized. This has caused them to push for a separation between North and South (Heibach, 2021).

Affordance also contains a visualization element, which refers to the ability to oversee the whole process, that affects the way we address them. Therefore, how the actors visualize a conflict significantly impacts their position, and willingness to compromise (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 535).

The third influence on affordance is immediacy, referring to immediate access to materials and world events during the occurrence. This speed and scale of information accessible nowadays are seen as richness; however, they raise issues of quality and a lack of critical analysis (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 535).

The rise of digitalization can be seen as a great opportunity to oversee peace processes and enhance

participation. It increases the speed and amount of information that is accessible to the public and enhances the transparency of the peace process. Nevertheless, digitalization can also negatively impact peace processes, as mass media can be used for spreading misinformation and controlling the population through a one-sided narrative (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 534-535). Additionally, it also further excludes the population that has no access to the internet or digital tools, which play a big role in the Yemen conflict (Hornsey et al., 2008, P. 751). Digital tools, therefore, come with responsibility and a certain usage consensus to avoid misuse.

Discussion

The Discussion will be divided into two topics: virtual peace negotiations and the digitalization of the peace process, after which there will be a part that combines the two topics in the exploration of potential digital peace in Yemen. In this chapter, the research questions will be addressed and answered. How do online negotiations compare to face-to-face negotiations in terms of effectiveness? How can online peace negotiations be compared to virtual business negotiations? What psychological implication does the shift to an online environment for peace negotiations have in Yemen? How can digital tools be beneficial to peace negotiations? The aim is to discover why the peace attempts have not yet been successful, what virtual peace negotiations can offer, and whether virtual negotiations can assist the UN in building towards peace in Yemen. This will further the author's ability to answer the main question: What barriers have emerged for peace negotiators when shifting to an online environment?

Virtual Peace Negotiations

In this part, the author aims to include different aspects of virtual peace negotiations and analyze them through the theories in the conceptual framework section. The author will discuss the findings in the context of Yemen and analyze how every Track is affected by the shift towards virtual peace negotiations. The Social Presence Theory and CLT will support the differences between virtual and face-to-face peace negotiations and how that applies to the context in Yemen. The case study aims to bring clarity on how virtual tools can be applied, whether they can be successful, and what extra barriers this creates.

Virtual peace negotiations have made progress in Yemen and allowed for regular follow-up meetings during COVID-19, when meeting face-to-face was not an option due to the lockdown. The lockdown in Yemen, a country already undergoing a dire humanitarian crisis, intensified the priorities for women's groups. Meetings were held more frequently, and accelerated collaboration was reported, specifically on tracks 2 and 3 (Bramsen & Hagemann, 2021, P. 548). This corresponds with the literature, that mentions that virtual peace negotiations enhance participation, access, flexibility, and decrease expenses (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 20-21). Examples of the positives of virtual negotiations are Yemeni women, refugees, and IDPs who were suddenly able to participate in UNSC

meetings. Additionally, political elites are offered a more time-efficient substitution compared to face-to-face meetings, creating more time to meet with people they would normally not have time for. This means that the rise of digitalization and COVID-19 has offered groups virtual access where normally this would not be possible. (Bramsen & Hagemann, 2021, P. 547). Thus, virtual peace negotiations have proven to be more efficient than face-to-face peace negotiations, as they have increased access and frequency of meetings and enhanced the possibility of meeting with political elites.

COVID-19 also posed challenges regarding Track 2 and 3 participation in the Yemen peace negotiations. In 2017, only 25% of Yemenis had access to the Internet, which mainly consisted of the elite (Nasser, 2017). Focusing on the shareability aspect of affordance, it appears that in the context of Yemen, while it does allow more people to include their voice, the voice of the marginalized groups is further excluded, as they do not have the technological equipment to participate (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 534). This spiral of silence is very evident in Yemen, fueled by controlled media. In this context, the reasons for speaking out are more due to external pressure. The feeling of not being heard or not even being allowed to talk are strong considerations for not speaking out as a marginalized group in North Yemen. This while simultaneously being fed a Houthi-controlled narrative as the only reality (Hornsey et al., 2008, P. 753). Therefore, while COVID-19 increased possibilities for Tracks 2 and 3 participation in the peace process, it further excluded the marginalized population of Yemen, who did not have access to the internet and were not able to speak out due to external pressure.

Moreover, considering the Multi-Track Diplomacy Approach, it is very challenging for the UN to start this peace process bottom-up, as the grassroots are separated. The controlled media in certain regions has increased the social distance between civil society in different areas of Yemen. Additionally, when assessing this separation of civil society through the CLT, people in the Houthi-controlled area are directly affected by the conflict, while other actors might be further removed from the issue. This spatial issue creates more room for speculative and abstract thinking, particularly considering the pervasive use of media for propaganda purposes. These different perceptions of the conflict make it very challenging to bring the grassroots closer together to start a dialogue (Trope & Liberman, 2010, P. 441).

Negotiations between official actors in Track 1 face other challenges in the virtual setting, specifically in the context of Yemen. In Track 1, negotiations are conducted between official parties, who often possess conflicting interests. This puts the success of the negotiation in direct correlation with the ability to build trust. Virtual peace negotiations tend to be more formal than face-to-face negotiations, which creates more psychological distance, as supported by the CLT. This psychological distance enfolds itself mostly in the social distance in Yemen (Trope & Liberman, 2010, P. 441). Additionally, the Social Presence Theory adds that this social distance is also harmful in peace negotiations between parties. When less cues are available, parties are less engaged and tend to perceive the other as 'semi-mechanical' objects. This increases the likelihood of disrespectful

behavior, which is harmful to building trust and, therefore, less effective and successful negotiations (Stuhlmacher & Citera, 2005, P. 72-73; Bramsen & Hagemann, 2021, P. 549).

The social distance also impacts the other tracks, as the more distance between the official parties and civil society, the less they will be able to adequately represent their interests and create an inclusive peace process. This is specifically problematic in the context of Yemen, considering the protracted nature of the conflict and the different interests within certain groups. This creates uncertainty about what the main interests are and requires much dialogue between tracks (Trope & Liberman, 2010, P. 441).

Regarding building trust, Yemen attaches much value to the ceremonial elements and relationship-building around the heavy negotiations. These rituals are important, as Arabic culture has an added layer of symbolism. In Yemen, settling disputes is mainly achieved through the exchange of gestures. This can be food and tea, but also the avoidance of conflict inside the cultural system (Bramsen & Hagemann, 2021, P. 553). When these rituals are taken away, it is harder to build trust. This shows the significant psychological implications of shifting to virtual peace negotiations, specifically in the context of Yemen. While it might be more efficient, aspects such as building trust and creating a transparent and peaceful environment to negotiate cannot be neglected.

In the specific context of Yemen, where the conflict is driven by propaganda and sectarianism, overlooking the fundamental problem of mistrust between the main parties will never lead to a lasting and viable peace process. This mistrust falls under identification-based trust, as the perceived difference in identity prevents parties from entering into dialogue and prevents a trusting relationship (Naquin & Paulson, 2003, P. 114). According to the theory of improbable dialogue, peace negotiations should always include the main warring parties together, specifically when mistrust between the parties is a big issue. The theory describes that when parties with fundamentally different perspectives start a dialogue, it can help parties understand each other, which is the first step in working towards a peace agreement. In addition to the different perspectives, the parties have also been influenced by the intractability of the conflict in Yemen, blurring the original goals that motivated the parties to start the conflict. This dialogue can help to understand what both parties want and start a collaboration based on trust (Arias, 2021).

Since March 2023, Saudi Arabia has made considerable efforts to work towards a peace process, and the Houthis have been willing to negotiate. This has been described as international and regional momentum, amplifying the ripeness of the conflict. As propaganda has been such a big factor in the conflict through sectarianism, controlled media, and limited access to information, bringing the main actors together could be the essential step towards starting a dialogue at the lower levels (Lederer, 2023).

Digitalization of the Peace Process

This section aims to explore the digital tools available in the context of the peace process and how

they can be used or misused to affect the peace process. A closer analysis of the context of Yemen will be provided to better understand the effects of digital tools on different layers of society. The context of Yemen will also be used to explore the possibilities of digital tools and discover their benefits.

A virtual peace process could be essential in Yemen to start a dialogue and connect the different layers of society. As earlier discussed, the advantages of a virtual peace process through affordance could be the breakthrough for the UN to set this Multi-Track diplomacy in motion while including all parties. Technological advancements have greatly facilitated progress in peace processes, increasing access, inclusivity, and opportunities for negotiation (Adler-Nissen & Drieschova, 2019, P. 534-535).

An example of a technological tool that can support the peace process is the Geographic Information Systems (GIS). This tool informs mediators about the exact security situation on the ground and gives them a better understanding of the actual situation. Additionally, it can also help monitor security agreements during a ceasefire, which is a useful asset that contributes to building trust between conflicting parties. The monitoring tool can be very useful in Yemen to create trust, as parties have more oversight over what is happening on the ground. Additionally, it gives parties more incentive to stick to the peace agreement, as parties know they are being monitored and breaches will be noticed and reported (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 12).

Social media can also play a pivotal role in assisting the peace process, as per the Abraham Accord between Israel and the UAE. This peace agreement emphasized the importance of secrecy in Track 1, where much emphasis was laid on preparing the public's opinion. When sufficient progress was made, they introduced seven working groups. Social media played an important role, as it was imperative that the people in both countries perceive that they were gaining something. After that, extensive economic and political collaboration fostered the ties between the two countries, and the tension between the countries turned into a friendly relationship (Al-Otaiba & Saphira, 2021).

The aforementioned example shows the potential benefits of the use of social media during the peace process. When used correctly, social media can be used by mediators to support analysis and improve connections for dialogue between warring parties. Social media also increases the inclusivity of parties in the peace process, and strengthens public communication strategies. (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 10).

Nevertheless, there are notable drawbacks associated with the widespread dissemination of information and the influence of mass media, which can undermine the Multi-Track Diplomacy approach employed by the United Nations. This disruption has had a significant impact on the Yemen conflict, where the media has played a role in propagating sectarianism, exacerbated by

deep-seated mistrust among the parties involved. Since the Houthis took over power in 2014, they have been completely in control of the media in their controlled region, allowing them to form the narrative. They have been accused of murdering journalists who accused them of corruption, and behind ISIS, the Houthis are the worst press freedom abusers in the world (Nasser, 2017).

Thus, while digital technologies allow great opportunities regarding peace processes and virtual negotiations, the international community needs to recognize their responsibility. As was analyzed, controlling the media and spreading misinformation can have a significant impact on the peace process and directly affect peace negotiations and the ability for parties to trust each other (Kavanagh, 2021, P. 7).

Digital Peace in Yemen

This section will bring the discussion topics into a practical solution on how peace might be achieved in Yemen through the assistance of digital tools. Through the assistance of the different theoretical frameworks, the analyzed negotiation literature, and the discussions, the author will argue for the most realistic peace process in Yemen. In this part, the main research question will be answered: What barriers have emerged for peace negotiators when shifting to an online environment?

The UN favors a bottom-up approach with the application of the Multi-Track diplomacy framework for an inclusive and holistic peace process. However, it is also mentioned that there is no superior approach. Nevertheless, according to the UN methodology, for all tracks, the only time to make progress is during an ongoing peace process (Albani & Ade, 2021). This explains the previous attempts by the UN, which extensively tried to extend the truce and start a dialogue. As the dialogue was impossible to start and the truce period was ending, the UN tried shuttle diplomacy, where they went back and forth to the different parties to communicate the demands of the parties in an attempt to sign the peace agreement. This was a resourceful attempt to remove the tension from the situation and try to bring them together. This barrier effect takes out the ego aspect during the negotiations, making parties more willing to collaborate and work towards a common goal, peace. While this worked for the government of Yemen, which made considerable concessions, the Houthis saw it as an opportunity to ask for more, deeming their interests more important than an extension of the truce. Eventually, this truce broke for the same reason that the Stockholm Agreement did not last: there was a lack of transparency and a lack of trust (Crisis Group, 2022; Stuhlmacher & Citera, 2005, P. 71).

The lockdown following the COVID-19 pandemic has increased the necessity of virtual peace negotiations and the inclusion of digital tools. This has enhanced possibilities for Track 2 and Track 3 participants in peace negotiations in Yemen, allowing them to attend more meetings and talk to political elites more easily (Bramsen & Hagemann, 2021, P.547-P. 548). These digital tools include the use of social media to enhance and support dialogue between different tracks and tools that increase transparency to assist in building trust between the warring parties.

Nevertheless, limited access to the internet and external pressure prevent the marginalized population in Yemen from speaking out and participating in the peace process. Considering that the conflict area is mainly in Northern Yemen and the media is controlled, different groups in civil society have an alternative perspective on the situation in Yemen. Considering the CLT, psychological distance increases abstract thinking, making perceived reality more evident than reality, which creates a rift between the different societal groups. Continuing this peace process virtually will therefore maintain the social and spatial distance between the different groups in Tracks 2 and 3, making it hard to bring these parties together for a sustainable peace process (Trobe & Liberman, 2010, P. 441).

Because of this different perceived reality, it will be challenging to bring the grassroots together to start a dialogue. Therefore, a top-down approach to the Multi-Track diplomacy framework might be more favorable. This means starting in Track 1 in relative secrecy and focusing on building trust and relations between the warring parties, similar to the approach of the Abraham Accord between Israel and the UAE. Hereby, the focus will be on preparing the other tracks and only informing the public of real progress. (Albani & Ade, 2021).

Starting the improbable dialogue in Track 1 between warring parties will be difficult in an online setting, even with both parties showing willingness to work towards a peace agreement. This is because as was emphasized through the Social Presence theory, behavior is harder to detect in an online setting, as less cues are available. The virtual setting increases distance, which causes parties to have more difficulty to create a connection with each other, and are more likely to see the other as 'semi-mechanical objects' (Stuhlmacher & Citera, 2005, P. 72- 73).

Rituals outside of official negotiations are also an imperative part of Arabic culture, and cannot be simulated virtually. Additionally, the mediating party also has to be trusted in order to create a safe and transparent environment. This is why the shuttle diplomacy of the UN produced significant progress, as both parties trusted the mediating party to adequately voice their interests to the other party (Bramsen & Hagemann, P. 553-557). This shows that virtual mediations in Track 1 have a higher probability when trust is established through face-to-face meetings between warring parties and the mediating party. After that base level of trust and transparency is established, parties can continue their negotiations virtually.

And while approaches might be slightly different with virtual peace negotiations and the use of digital technology compared to face-to-face peace negotiations, the mediation principles remain the same. The risks and opportunities become different from traditional face-to-face mediation due to a change in environment and dynamics between the parties (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs and Centre for Humanitarian Dialogue, 2019, P. 20). Drawing from business negotiation theory, mediators need to set clear rules and boundaries to allow parties to negotiate virtually in the most suitable environment. Additionally, mediators need to prepare accordingly to minimize the risks and optimize the opportunities (Schlair & Hammer, 2022, P. 308).

This is highly relevant in peace negotiations since parties can be hesitant because of psychological distance and privacy concerns. Particularly in Track 1, mediators need to allow for full transparency from both sides while guaranteeing confidentiality about the private matters discussed (Albani & Ade, 2021).

Conclusion

To conclude, this research has analyzed the opportunities and barriers of virtual peace negotiations. The current environment, with its complexity of conflicts, multiplicity of actors, and availability of digital tools, has transformed the role of mediators. Virtual negotiations have allowed actors to meet more frequently and efficiently. It also reduces travel expenses and increases access and participation. Specifically in Yemen, this has increased Tracks 2 and 3 engagement, as they have been able to attend more peace meetings and communicate with political elites. Digital tools such as GSP, social media, and other online platforms enhance participation and transparency, which improve dialogue and build trust.

Nevertheless, the Social Presence Theory amplifies the difficulties of building trust in an online setting due to the limited cues available and the fact that people pay less attention to each other. It can eventually cause parties to perceive each other as semi-mechanical objects, making it harder to relate to the other party. The CLT adds that the psychological distance increases with virtual negotiations, which increases the level of abstract thinking needed to fill in the gaps. This is specifically problematic in Yemen, where mistrust between the main parties has been one of the main issues.

The marginalized groups in Yemen also struggle with technological barriers and the inability to speak out and participate in the peace process. Additionally, security breaches and privacy infringements are more likely in a virtual setting, causing individuals to be more cautious and less trustworthy, specifically in Track 1 diplomacy, which strongly relies on secrecy. The deep-rooted mistrust between warring parties and the emphasis on ceremonial rituals make building trust in a virtual setting particularly challenging in the context of Yemen.

Virtual business negotiations have shown the importance of mediators setting ground rules and clear boundaries to avoid miscommunication and allow for a successful negotiation process. The context also showed the power and efficiency of virtual negotiations and meetings in Tracks 2 and 3. However, as far as the dialogue in Track 1 is concerned, the first meetings should be conducted face-to-face, as the trust-building aspect cannot be dismissed. This is why a hybrid method would be ideal to fully utilize the positives of both negotiation methods.

Bibliography

- Adler-Nissen, R., & Drieschova, A. (2019). Track-change diplomacy: Technology, affordances, and the practice of international negotiations. *International Studies Quarterly* 63(3), 563-576.
- Adler-Nissen, R., & Eggeling, K. A. (2022). Blended diplomacy: The entanglement and contestation of digital technologies in everyday diplomatic practice. *European Journal of International Relations*, 28(3), 640–666.
- Ahmed, N. (2019). *Yemeni civil war: Causes, consequences and prospects* (Vol. 2, No. 2). Centre for West Asian Studies.
- Albani, M., & Ade, V. (2021). *Negotiating and mediating successfully in international and grassroots conflict resolution*. Oxford: OxPeace.
- Al-Muslimi, F. (2015). How Sunni-Shia sectarianism is poisoning Yemen. *Carnegie Middle East Center*. <https://carnegie-mec.org>
- Al-Otaiba, H., & Saphira, D. (2021). *Paris sustainability and negotiation conference: World negotiation day*.
- Arias, D. (2021). John Paul Lederach: We must engage in ‘improbable dialogue’. *Humanity United Blog, Interview*.
- Bjola, C., & Coplen, M. (2022). *Virtual venues and international negotiations: Lessons from the COVID-19 pandemic*. Brill.
- Bramsen, I., & Hagemann, A. (2021). The missing sense of peace: Diplomatic rapprochement and virtualization during the COVID-19 lockdown. *International Affairs*, 97(2), 539–560.
- Carr, N. (2010). *The shallows: How the internet is changing the way we think, read and remember*. Atlantic Books Ltd.
- Crisis Group. (2022). How Huthi-Saudi negotiations will make or break Yemen. *International Crisis Group*. <https://www.crisisgroup.org>
- Dijkstal, H. (2019). Yemen and the Stockholm Agreement: Background, context, and the significance of the agreement. *American Society of International Law*. <https://www.asil.org>
- Friends Committee on National Legislation. (2022). The Saudi-led war in Yemen: Frequently asked questions. *Friends Committee on National Legislation*. <https://www.fcnl.org>
- Heibach, J. (2021). The future of South Yemen and the Southern Transitional Council. *German Institute for Global and Area Studies*. <https://www.giga-hamburg.de>
- Hornsey, M. J., Gallois, C., & Duck, J. M. (2008). The intersection of communication and social psychology: Points of contact and points of difference. *Journal of Communication*, 58(4), 749–766.
- Kavanagh, C. (2021). *Digital technologies and civil conflicts: Insights for peacemakers*. ISS. <https://europa.eu>
- Kazemitabar, M., Mirzapour, H., Akhshi, M., Vatankhah, M., Hatami, J., & Doleck, T. (2022). Power of nonverbal behavior in online business negotiations: Understanding trust, honesty, satisfaction, and beyond. *Interactive Learning Environments*, 1–18.
- Lederer, E. M. (2023). UN says intense diplomacy under way to end 8-year Yemen war. *AP News*.

- <https://apnews.com/article/yemen-diplomacy-war-un-grundberg-00e15c483c4c2ec54b968e49eef09403>
- Maktary, S., & Smith, K. (2017). *Pathways for peace and stability in Yemen*. Search for Common Ground.
- Mavaro-Stroller, J. (2017). Who are the Houthis and why do they shout “Death to America”? *The Tower*. <https://www.thetower.org>
- Mitchell, C. R. (1997). *Intractable conflicts: Keys to treatment*. Centro de Investigación por la Paz “Gernika Gogoratuz”.
- Muto, A., & Saraiva, R. (2020). Assessing context-specific peacebuilding approaches in contemporary armed conflicts: From high-level mediation to middle-out linkage in Syria and from adaptive mediation to nationally-owned peacebuilding in Mozambique. *Asian Journal of Peacebuilding*, 8(2), 241–264.
- Nasser, A. (2017). The Yemen war, media, and propaganda. *Atlantic Council*. <https://www.atlanticcouncil.org>
- Naquin, C. E., & Paulson, G. D. (2003). Online bargaining and interpersonal trust. *Journal of Applied Psychology*, 88(1), 113.
- Naylor, T. (2020). All that’s lost: The hollowing of summit diplomacy in a socially distanced world. *The Hague Journal of Diplomacy*, 15(4), 583–598.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2016). *Contemporary conflict resolution*. Cambridge: Polity Press.
- Robinson, K. (2022). Yemen’s tragedy: War, stalemate, and suffering. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org>
- Schlair, L., & Hammer, H. (2022). Virtual negotiations—The new way to seal the deal? A comparison of virtual B2B negotiation developments between Europe and China. *CCBC 2022*, 308.
- Short, J. A., Williams, E., & Christie, B. (1976). *The social psychology of telecommunication*. London: Wiley.
- Stuhlmacher, A. F., & Citera, M. (2005). Hostile behavior and profit in virtual negotiation: A meta-analysis. *Journal of Business and Psychology*, 20, 69–93.
- Stai, N. (2022). Is digital peace mediation here to stay? *PRIO Blogs*. <https://www.prio.org>
- Tripathi, S., & Gündüz, C. (2008). A role for the private sector in peace processes? Examples and implications for third-party mediation. Centre for Humanitarian Dialogue.
- Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. *Psychological Review*, 117(2), 440.
- Turk, A. M. (2006). Cyprus reunification is long overdue: The time is right for Track III diplomacy as the best approach for successful negotiation of this ethnic conflict. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 28, 205.
- United Nations. (2012). *The United Nations guidance for effective mediation*. United Nations.
- United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs & Centre for Humanitarian Dialogue. (2019). *Digital technologies and mediation in armed conflict*. Centre for Humanitarian Dialogue.

Upeace. (2021). *Quiet diplomacy*. Costa Rica: Upeace.

Wehrenfennig, D. (2008). Multi-track diplomacy and human security. *Human Security Journal*, 7, 80–88.

Wolleh, O. (2007). *Track 1.5 approaches to conflict management: Assessing good practice and areas for improvement*. Berghof Foundation for Peace Support.

Zartman, I. W. (2000). *International conflict resolution after the Cold War*. Washington, DC: The National Academies Press.

ARTÍCULO

Derecho al Olvido digital en materia judicial en Colombia: ¿Defensa de la Intimidad o Riesgo de Censura?

The Right to Digital Oblivion in judicial matters in Colombia: Defense of Privacy or Risk of Censorship?

Laura Alejandra Alzate Mayorga ¹

Como citar:

Alzate Mayorga, L.A. (2025). Derecho al Olvido digital en materia judicial en Colombia: ¿Defensa de la Intimidad o Riesgo de Censura? *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 78-100. Doi: 10.63058/des.v19i1.310

Fecha de ingreso: 20 de enero de 2025. **Fecha de aprobación:** 15 de febrero de 2025.

¹ Laura Alejandra Alzate Mayorga es Licenciada en Inglés por la Universidad Santo Tomás de Aquino; Abogada por la Universidad La Gran Colombia; Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Militar Nueva Granada; Magíster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja; reconocida por su participación en competencias académicas internacionales, incluyendo el Certamen Víctor Carlos García Moreno de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional (México), donde obtuvo una mención honorífica por cualidades en oratoria y formó parte del grupo ganador del tercer lugar en la edición XV del concurso, así como en el Certamen de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional, organizado por el Instituto Iberoamericano de La Haya (Países Bajos), donde ha participado como concursante y jurado. ORCID: 0009-0005-7522-8565. Correo electrónico: laura.alzateinternacional@gmail.com.

Resumen

Esta investigación profundiza en la relación entre los derechos humanos y la tecnología, enfocándose en la dinámica entre la libertad de expresión y la protección de datos personales en Colombia. Examina la evolución de estos derechos y destaca su interacción con la tecnología y la información. El estudio principal se centra en si el derecho al olvido digital limita la libertad de información en Colombia y explora su conceptualización, evolución y aplicación tanto a nivel nacional como internacional, así como su impacto en la democracia y el acceso a la información pública. Mediante un enfoque multidisciplinario, este estudio analiza las consecuencias legales, éticas y sociales del derecho al olvido digital y evalúa su efecto en el periodismo y la transparencia gubernamental. La investigación también contempla la implementación de este derecho en el sistema judicial colombiano, buscando equilibrar la protección de datos personales con la libertad de información y ofreciendo recomendaciones para legisladores y medios de comunicación.

Palabras clave: derechos humanos, libertad de expresión, protección de datos, olvido digital, límites de los derechos humanos.

Abstract

This research delves into the relationship between human rights and technology, focusing on the dynamics between freedom of expression and data protection in Colombia. It examines the evolution of these rights, highlighting their interaction with technology and information. The main study centers on whether the right to digital oblivion limits the freedom of information in Colombia, exploring its conceptualization, evolution, and application both nationally and internationally, and its impact on democracy and public access to information. Through a multidisciplinary approach, it analyzes the legal, ethical, and social consequences of the right to digital oblivion, assessing its effect on journalism and government transparency. The research also considers the implementation of this right in the Colombian judicial system, seeking to balance the protection of personal data with freedom of information and offering recommendations for legislators and media outlets.

Keywords: human rights, freedom of expression, data protection, digital oblivion, human rights limits.

Introducción

Esta investigación explora la intersección entre los derechos humanos y la tecnología, enfocándose en la tensión entre la libertad de expresión y la protección de datos personales, con especial atención en el marco jurídico colombiano. A través de un análisis detallado de la evolución histórica y jurídica de estos derechos, se resalta su relevancia en el contexto de los derechos humanos y su interacción con las regulaciones en el ámbito tecnológico y de la información.

El estudio tiene como objetivo principal analizar si el derecho al olvido digital representa una restricción al derecho a la libertad de información en Colombia. Para ello, se examinará su conceptualización, evolución e implementación a nivel nacional e internacional. Además, se describirá cómo este derecho emergente impacta el ejercicio de la libertad de información, un pilar esencial de la democracia y el acceso a la información pública.

Este análisis busca contextualizar el derecho al olvido digital dentro del espectro más amplio de los derechos humanos, evaluando cómo su aplicación puede conciliarse o entrar en conflicto con la libertad de expresión. A través de un enfoque multidisciplinario, la tesis examina las implicaciones legales, éticas y sociales del derecho al olvido digital, prestando atención a su impacto en el periodismo, la transparencia gubernamental y la sociedad civil.

La investigación también propone un enfoque innovador hacia la implementación del derecho al olvido digital en el ámbito judicial en Colombia. Se propondrá una definición clara de esta categoría y se establecerá un marco teórico para su posterior análisis y se evaluará la viabilidad de esta propuesta en el contexto jurídico colombiano, analizando sus dimensiones legales, constitucionales y prácticas, con el objetivo de determinar si su adopción puede equilibrar la protección de datos personales y la libertad de información.

El derecho al olvido digital es un tema novedoso dentro del análisis jurídico, impulsado por el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la era digital. Su reconocimiento por tribunales internacionales y la discusión en otras jurisdicciones ha convertido la gestión de los datos personales en línea en un asunto de gran relevancia para la sociedad contemporánea. Este derecho es esencial ya que la mala gestión de los datos personales puede tener consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas, como dificultades para acceder a empleos, impactos en la reputación y en las interacciones en redes sociales. Esto resalta la necesidad de comprender y analizar los derechos relacionados con el derecho al olvido digital y su relación con la libertad de información.

La perpetuidad y accesibilidad de los datos personales en el ámbito digital han llevado a que el derecho al olvido digital se convierta en un mecanismo fundamental para proteger la privacidad y los datos personales. Sin embargo, esta protección puede entrar en conflicto con otro derecho esencial de las sociedades democráticas: el derecho a la libertad de información. Este dilema

jurídico plantea un desafío importante: ¿cómo lograr un equilibrio justo entre el derecho de los individuos a controlar su información personal y el derecho del público a acceder a información relevante y de interés general? Este estudio profundiza en la dinámica y los límites del derecho al olvido digital, analizando los retos potenciales que presenta en el contexto jurídico y social actual. A través de este análisis, se busca formular propuestas para equilibrar los derechos individuales y el interés público, preservando la integridad de la información y el principio de libertad de expresión.

Límites a la libertad de expresión cuando colisiona con la integridad personal y la dignidad humana

La interacción entre la libertad de información, la protección de la integridad y dignidad humana plantea un reto central en la jurisprudencia actual. Aunque la libertad de información es fundamental en las democracias, su ejercicio no es absoluto y debe equilibrarse con la protección de otros derechos esenciales. Este balance, guiado por el principio de proporcionalidad, garantiza que la libertad de información no se use para difamar o invadir la privacidad.

La jurisprudencia y legislación, al abordar este equilibrio, no solo protegen la integridad y dignidad humanas, sino que refuerzan la estructura de una sociedad democrática donde coexisten múltiples derechos y libertades. La protección contra la difamación y el respeto al honor y reputación son aspectos claves de las restricciones a la libertad de información, promoviendo una sociedad justa y respetuosa de los derechos individuales.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General N° 34, establece que las restricciones a la libertad de expresión son válidas cuando son necesarias para respetar los derechos o la reputación de los demás (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011).

El principio de proporcionalidad es crucial en la evaluación de estas restricciones. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier restricción debe ser proporcional y necesaria en una sociedad democrática. En el caso de *Axel Springer AG contra Alemania*, el Tribunal equilibró el interés público de la información con los derechos a la privacidad y la reputación, estableciendo criterios para evaluar la proporcionalidad (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2012).

Las legislaciones nacionales también abordan este conflicto. Las leyes de protección de datos personales limitan la recopilación y divulgación de datos, restringiendo indirectamente el derecho a la libertad de información para proteger la privacidad individual.

Además, los tribunales han confirmado que la protección contra la difamación y la salvaguarda del honor son razones legítimas para restringir la libertad de información. En *Hachette Filipacchi Associés vs. Francia*, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó que la protección del honor y la reputación justifica restricciones en la publicación de información (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2009).

Encontramos entonces que, aunque la libertad de información es crucial en las sociedades democráticas, debe equilibrarse con la protección de la integridad personal y la dignidad humana. Las restricciones legales, fundamentadas en los principios de proporcionalidad y necesidad, son esenciales para evitar que la libertad de información infrinja otros derechos humanos.

Derecho al olvido digital como expresión de restricciones a la libertad de información en Colombia

El derecho al olvido, en la sociedad de la información actual, es un tema crucial tanto en el ámbito jurídico como tecnológico y social que surgió para proteger la privacidad en un mundo donde la información digital puede ser fácilmente almacenada y divulgada sin el consentimiento de las personas. Este apartado explora sus raíces conceptuales y evolución histórica, destacando cómo ha surgido y transformado frente a los desafíos de la era digital. El derecho al olvido no es un concepto estático, sino que ha evolucionado con los avances tecnológicos, las percepciones sobre privacidad, la información, y las prácticas legales globales.

Concepto, orígenes y desarrollo jurídico del derecho al olvido digital

El derecho al olvido se refiere a la capacidad de las personas para solicitar la eliminación o cese de la divulgación de información negativa y obsoleta sobre ellas en Internet, especialmente en los resultados de los buscadores. Según José Ramón Soler y Vicente Guasch (2015), este derecho permite gestionar la supresión o bloqueo de datos personales que han perdido relevancia o infringen derechos esenciales.

La Agencia Española de Protección de Datos lo describe como una evolución de los derechos de cancelación y oposición aplicados al ámbito de los buscadores en línea. Este derecho permite restringir la propagación de información personal que ya no cumple con los criterios de adecuación y pertinencia establecidos por la ley, incluso si su publicación original fue legal (Agencia Española de Protección de Datos, 2019).

La Comisión Europea también define el derecho al olvido como el derecho de las personas a que sus datos personales sean eliminados o no gestionados cuando ya no sean necesarios para fines legítimos, como cuando una persona revoca su consentimiento o ha pasado el período de almacenamiento establecido (Comisión Europea, 2010).

El término “derecho al olvido digital” fue acuñado en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque países como Alemania y Francia ya destacaban el derecho de las personas a controlar su información personal. La cultura de privacidad en Europa ha influido significativamente en el enfoque hacia este derecho, respaldado por la Directiva de Protección de Datos de la UE de 1995, que obliga a los Estados a permitir a los individuos solicitar la corrección, eliminación o bloqueo de datos incorrectos o irrelevantes (Numeral 2, artículo 32).

Este tema ha generado un intenso debate académico, involucrando disciplinas como el derecho, la ética, la tecnología y los medios. En este apartado, se analiza cómo los aportes de diversos autores han sido esenciales en el desarrollo del concepto del derecho al olvido, explorando sus diversas dimensiones y perspectivas.

Viktor Mayer-Schönberger, en *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age* (2009), destaca cómo la tecnología ha alterado el equilibrio entre el recuerdo y el olvido, creando riesgos para la autonomía personal y la privacidad. Propone soluciones innovadoras, como la implementación de fechas de caducidad para los datos personales para mitigar los problemas de la persistencia digital.

Luciano Floridi, en su trabajo de 2014, aborda los dilemas éticos del derecho al olvido en la era digital, proponiendo marcos teóricos para resolver los conflictos entre tecnología y valores humanos, así como subrayando la importancia de un enfoque ético en la formulación de políticas.

Paul Bernal, en *Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy* (2014), resalta la importancia del derecho al olvido para la autonomía personal y la libertad en el entorno digital, sugiriendo que este derecho es esencial para permitir a los individuos controlar su presencia en línea. Meg Leta Jones, en *Ctrl + Z: The Right to be Forgotten* (2016), explora las diferencias culturales y legales en la aplicación del derecho al olvido entre Europa y Estados Unidos, analizando su evolución y las complejidades de su implementación. Daniel J. Solove, en su publicación de 2013, aborda cómo las leyes de privacidad deben adaptarse a los retos tecnológicos y propone enfoques legales flexibles y dinámicos para proteger los datos personales en la era de la información.

Aplicación y Casos Emblemáticos

El “derecho al olvido” ha ganado relevancia en la Unión Europea, planteando un balance entre la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información en la era digital. Este derecho ha sido clave en varias sentencias judiciales que han definido su alcance y aplicación.

En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), estableció un precedente importante al reconocer el derecho de un ciudadano español a solicitar la eliminación de su nombre de ciertos resultados de búsqueda. Este fallo marcó el inicio de la aplicación del derecho al olvido como extensión de la protección de datos personales (Access Now, n.d.), brindando a los ciudadanos de la UE el derecho a solicitar la eliminación de enlaces antiguos con información sensible (Klein, 2020).

En 2016, el derecho al olvido se consolidó con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) (Reglamento 2016/679). Desde entonces, los tribunales deben equilibrar el derecho a la privacidad con la libertad empresarial de los buscadores. La eliminación de información no es automática y depende de si hay un interés público en mantener ciertos datos o si la información tiene relevancia social a pesar del tiempo transcurrido (Klein, 2020).

En términos de aplicación geográfica, la Justicia europea dictaminó que los buscadores, como Google, deben aplicar este derecho solo dentro de la UE. Por lo tanto, si un ciudadano de la UE solicita la eliminación de un dato, solo se eliminará en las versiones europeas de los buscadores, no en las versiones fuera de la UE (Xataka, 2016). Además, deben tomarse medidas para dificultar el acceso a estos datos fuera de Europa (Xataka, 2016).

En Alemania, el Tribunal Alemán de Justicia adoptó un enfoque equilibrado entre la libertad de prensa y la autodeterminación informativa. En un fallo de julio de 2020, se concluyó que no hay una restricción automática a la libertad de información; la decisión depende de evaluar el caso específico, ponderando el derecho a la información del público frente a la protección de datos personales (Klein, 2020).

Propuesta concreta: hacia un nuevo paradigma de privacidad: el derecho al olvido digital en materia judicial en Colombia

La gestión de la información personal en Internet representa un desafío significativo, especialmente en lo que respecta a casos judiciales. La disponibilidad constante de información sobre escándalos, acusaciones y procesos judiciales puede afectar permanentemente la reputación de las personas. Este apartado propone la creación de una nueva categoría en la legislación colombiana: el “derecho al olvido digital en materia judicial”. Esta categoría buscaría equilibrar la protección de la privacidad individual con el derecho a la información, permitiendo la desindexación de información relacionada con casos judiciales una vez emitida una sentencia absolutoria o archivada la investigación.

La propuesta responde a la preocupación por los efectos a largo plazo de la información judicial en la vida de las personas. Aquellos que han sido absueltos o cuyas investigaciones han sido archivadas a menudo siguen enfrentando estigmatización debido a la persistencia de información obsoleta en plataformas digitales. Establecer un derecho al olvido digital en materia judicial en Colombia sería un paso fundamental hacia la protección de los derechos a la privacidad, el honor y el buen nombre, en equilibrio con el derecho a la información y la libertad de expresión.

Definición de la categoría

El “derecho al olvido digital en materia judicial” se presenta como una extensión lógica y necesaria de los derechos a la privacidad y a la reintegración social en la era digital. En la práctica, este derecho permitiría a los individuos solicitar a los motores de búsqueda, plataformas digitales y medios de comunicación que eliminen o desindexen información personal relacionada con procesos judiciales antiguos o resueltos. Este derecho resulta especialmente relevante en casos en los cuales la persona ha sido absuelta, el caso ha sido archivado, o ha cumplido con todas las obligaciones legales impuestas. Su objetivo es contrarrestar los efectos perjudiciales de la permanencia indefinida de información obsoleta en el entorno digital, que sigue afectando negativamente la reputación y las oportunidades de una persona mucho después de haber resuelto su situación judicial.

La importancia de este derecho radica en su potencial para equilibrar los intereses de la justicia y la privacidad con los desafíos tecnológicos. En un mundo donde la información es fácilmente accesible y puede ser perpetuada indefinidamente en el ámbito digital, los antecedentes judiciales pueden seguir afectando a las personas incluso después de haber sido exoneradas. Esta situación puede resultar en un castigo no oficial y continuo, que se manifiesta en dificultades para encontrar empleo, discriminación social y otras adversidades. Esta categoría del derecho al olvido busca proporcionar un mecanismo para que estas personas recuperen su derecho a la privacidad y continúen con su vida, liberándose del estigma de un pasado ya judicialmente resuelto.

No obstante, la implementación de este derecho presenta desafíos significativos, especialmente el balance entre el derecho al olvido y el derecho a la información pública. Es crucial garantizar que la eliminación de información no implique censura indebida o la ocultación de datos de interés público, en particular en casos que involucren figuras públicas o delitos graves. Establecer criterios claros y justos para determinar cuándo y cómo se debe aplicar el derecho al olvido es esencial para evitar su uso indebido o la arbitrariedad en su implementación. Esto requiere un análisis detallado de cada caso, considerando factores como la antigüedad de la información, su relevancia actual y su impacto en la vida de la persona.

Criterios para la desindexación

La efectiva implementación del derecho al olvido digital en el contexto judicial requiere no solo la definición de criterios para la desindexación, sino también un marco operativo robusto que garantice transparencia y equidad en su aplicación. Estos criterios deben ser aplicados de manera coherente y justa en todos los casos, lo que implica un proceso de revisión cuidadoso y bien estructurado adaptado a las particularidades de cada caso, manteniendo principios claros y universales.

La confirmación de la sentencia judicial es un pilar fundamental en este proceso. La desindexación basada en documentos judiciales oficiales garantiza que la solicitud tenga un fundamento legítimo, basado en hechos verificables y no en meras alegaciones. Esta documentación debe ser cuidadosamente examinada para verificar su autenticidad y relevancia. En este sentido, es esencial establecer mecanismos de colaboración entre plataformas digitales y autoridades judiciales para facilitar la verificación e intercambio de información.

Además, la documentación judicial debe evaluarse en el contexto del impacto continuado de la información en la vida de la persona. En casos donde la información ya no es relevante o ha perdido su pertinencia, la desindexación puede aliviar las consecuencias negativas prolongadas en la reputación y las oportunidades del afectado. Sin embargo, es crucial que este proceso no se utilice para ocultar información de interés público o para permitir que individuos eludan las consecuencias de sus acciones legales.

Otro criterio esencial es la evaluación de la relevancia y actualidad de la información. Este análisis

requiere un estudio detallado sobre cómo la información afecta la vida de la persona en el presente. Se debe considerar si la información está obsoleta o sigue teniendo un impacto significativo en la vida del solicitante. Por ejemplo, información sobre un proceso judicial antiguo y ya no relevante para la persona implicada podría ser apta para la desindexación. Además, es necesario analizar la relevancia pública de dicha información. Si ya no la tiene, como en el caso de un proceso resuelto sin implicaciones actuales, puede ser un candidato para la desindexación.

El equilibrio con el interés público es, quizás, el aspecto más desafiante de la implementación del derecho al olvido. Es vital encontrar un equilibrio entre el derecho a la privacidad de la persona y el derecho del público a estar informado. Este equilibrio es delicado en casos que involucran figuras públicas o delitos graves. En tales casos, la información podría tener un interés público legítimo que justifique su permanencia en plataformas digitales. Determinar este equilibrio requiere una consideración cuidadosa de factores como la naturaleza del delito, el tiempo transcurrido desde la conclusión del caso y el rol actual de la persona en la sociedad.

Factibilidad de la propuesta en el contexto colombiano: La justicia restaurativa como fundamento del derecho al olvido digital en materia judicial

La implementación del derecho al olvido digital en materia judicial, en el marco jurídico colombiano, analizada desde la perspectiva de la justicia restaurativa, ofrece, en nuestro criterio, una visión innovadora y altamente relevante en la era de la información. La justicia restaurativa, un enfoque de justicia que se aleja del paradigma punitivo tradicional, enfatiza la reparación del daño, la reconciliación y la reintegración del individuo en la sociedad. Este enfoque es pertinente en el contexto del derecho al olvido, donde el objetivo principal es permitir a las personas superar el estigma de su pasado judicial y reintegrarse en la sociedad de manera efectiva y digna. John Braithwaite, en su obra *Restorative Justice and Responsive Regulation* (2002), destaca que la justicia restaurativa busca reparar las relaciones rotas, tanto a nivel individual como comunitario, resultantes de la comisión de una infracción. Este principio es crucial en el contexto del derecho al olvido, ya que se centra en la posibilidad de que las personas afectadas por procesos judiciales puedan reconstruir su vida sin los aspectos negativos de su pasado.

En el ámbito de la reintegración social, la justicia restaurativa, tal como lo describe Howard Zehr en *The Little Book of Restorative Justice* (2002), se enfoca en el bienestar del individuo y la comunidad más que en el castigo. Esta filosofía se alinea con el derecho al olvido digital, que apoya la reintegración de individuos que han sido absueltos o cuyos casos han sido archivados, permitiéndoles reintegrarse sin las consecuencias duraderas de un registro judicial. La desindexación de información obsoleta o irrelevante de los registros digitales es un paso fundamental para lograr este objetivo, ya que facilita a los individuos un nuevo comienzo libre del estigma asociado a registros judiciales anteriores.

El derecho al olvido en materia judicial también se relaciona con la reparación del daño, un concepto central en la justicia restaurativa. Este enfoque considera el “daño” como el impacto negativo

continuo que tienen los registros sobre procesos judiciales en la reputación y las oportunidades de vida de una persona. La desindexación de esta información, en casos donde es apropiado, constituiría una forma efectiva de reparar dicho daño, aliviando el impacto adverso en la vida de las personas involucradas. Esta perspectiva se alinea con las consideraciones de Daniel Solove en *Understanding Privacy* (2008), donde se destaca la importancia de proteger la privacidad y la reputación de las personas en el ámbito digital.

Asimismo, la justicia restaurativa aborda la prevención de la discriminación y la marginalización. La existencia de registros judiciales accesibles en plataformas digitales puede derivar en discriminación y marginalización, incluso después de que una persona ha sido absuelta o ha cumplido su condena. El derecho al olvido ayuda a evitar estas consecuencias negativas al proporcionar un mecanismo para combatir la revictimización. Esto es relevante en sociedades como la colombiana, donde el acceso a información personal puede afectar de manera significativa las oportunidades de empleo, educación y otros aspectos de la vida social.

Por último, es fundamental considerar el balance entre los derechos individuales y el interés público en la implementación del derecho al olvido. Esta tensión se refleja en la jurisprudencia colombiana, como en la Sentencia T-277 de 2015 de la Corte Constitucional de Colombia, que pondera el derecho al olvido frente a la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos casos subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que respete tanto los derechos individuales como el interés público y la transparencia. La justicia restaurativa subraya la importancia de procesos participativos y consensuados, como lo sugiere Braithwaite, lo que es fundamental para la implementación efectiva del derecho al olvido en Colombia. Involucrar a diversas partes interesadas en el diseño de políticas y marcos legales asegura que las soluciones sean equitativas y reflejen una variedad de perspectivas y necesidades.

De esta manera, el derecho al olvido digital, enmarcado dentro de los principios de la justicia restaurativa, ofrece un camino prometedor hacia la reintegración social, la reparación del daño y la prevención de discriminación y marginalización. Sin embargo, es crucial que su implementación en Colombia mantenga un equilibrio adecuado, y honre tanto los derechos individuales como el interés público y la transparencia.

Rol del periodismo y organizaciones de fact-checking en el contexto del derecho al olvido digital en materia judicial

En la era de la información y la comunicación digital, el ejercicio del periodismo enfrenta nuevos desafíos, los cuales no solo trascienden las esferas legales y tecnológicas, sino también éticas y profesionales. Este capítulo se propone examinar cómo el periodismo, un elemento fundamental de las democracias modernas, debe propender por un equilibrio entre el derecho humano a la libertad de expresión y la creciente demanda del derecho al olvido, teniendo en cuenta la perdurabilidad de la información en línea.

En ese sentido, se abordará cómo el periodismo moderno, en ejercicio de su deber de informar al público con veracidad y factibilidad, puede actuar respetando este nuevo paradigma, respetando simultáneamente la intimidad individual y el derecho al buen nombre, manteniendo su compromiso con la transparencia y la responsabilidad informativa.

Intersección entre periodismo, libertad de expresión y derecho al olvido

En el ámbito periodístico, defensor principal de la libertad de expresión y pilar fundamental de la democracia, surge un desafío significativo con el auge del derecho al olvido digital. Este derecho, como se ha visto, actúa como un contrapeso en la gestión de la información personal, y crea un campo de tensión para los profesionales en comunicación social y quienes se dedican al periodismo, entre su deber de informar y la responsabilidad frente a la privacidad individual.

Mayer-Schönberger (2009) argumenta que la naturaleza permanente de la información en la era digital tiene un impacto profundo en varios aspectos de la sociedad, incluyendo la responsabilidad y las prácticas del periodismo, al considerar que la información puede almacenarse de forma indefinida y ser accesible globalmente. Esto desafía la noción tradicional de olvido, ya que la información, una vez publicada en línea, rara vez desaparece por completo. Este fenómeno afecta la manera en que los periodistas abordan su trabajo, dado que las historias y los datos que reportan pueden tener una vida útil mucho más larga y un alcance más amplio que en el pasado.

Este cambio incrementa la responsabilidad de los periodistas, ya que deben ser más cautelosos respecto a la exactitud y el impacto a largo plazo de su trabajo. La posibilidad de que la información errónea o desactualizada permanezca accesible indefinidamente plantea riesgos significativos para la reputación y la privacidad de las personas. Además, el acceso fácil y duradero a la información pasada puede influir en cómo se forma la opinión pública y cómo se recuerda la historia.

En su artículo *The Right to Be Forgotten* en el *Stanford Law Review*, Rosen (2012) examina cómo este cambio en la naturaleza de la información afecta la manera en que se manejan las noticias y reportajes, en especial en casos que involucran a individuos privados o temas sensibles. Rosen destaca que, mientras en la era pre-digital podían eventualmente desvanecerse en el olvido, en el mundo digital actual, los datos y las historias permanecen perpetuamente accesibles, lo que podría afectar de manera indefinida a las personas involucradas.

Este entorno plantea preguntas sobre la privacidad y la reputación a largo plazo. Por ejemplo, una noticia negativa o una mención desfavorable en internet puede seguir afectando a una persona años después del evento, incluso si las circunstancias han cambiado o la información ya no es relevante.

Rosen también discute las implicaciones legales y éticas de este fenómeno. Por un lado, existe la preocupación sobre la censura y la restricción a la libertad de expresión si se permite la eliminación de información del espacio digital. Por otro, se debate la necesidad de proteger la privacidad y la

dignidad de las personas en una era donde la información puede ser fácilmente malinterpretada o sacada de contexto.

La era digital ha transformado el periodismo, llevando a los comunicadores a enfrentar nuevos desafíos en su práctica profesional. Como Mayer-Schönberger argumenta, los periodistas tienen la responsabilidad de equilibrar el valor inmediato de sus reportajes con sus posibles repercusiones a largo plazo. Esta consideración meticulosa abarca no solo el interés periodístico inmediato y el sensacionalismo, sino también las consecuencias prolongadas que su trabajo puede tener en las personas implicadas.

Consideramos que una manera en la cual se equilibran estas tensiones tiene que ver con el fortalecimiento e incorporación de protocolos de “periodismo responsable en la era digital”. Esto podría incluir prácticas como la revisión periódica de contenidos y archivos, así como la evaluación de su relevancia o perjuicio, de manera especial en los casos donde los sujetos de las noticias han obtenido sentencias judiciales absolutorias o decisiones de archivo de sus investigaciones en materia penal.

La intersección del derecho a la libertad de expresión con el derecho al olvido, se convierte en un elemento crucial en la ética periodística. Los comunicadores y las organizaciones de medios de comunicación podrían desarrollar pautas éticas más detalladas que aborden específicamente cómo manejar información sobre las personas en temas sensibles en el entorno digital. Esto podría incluir, por ejemplo, la consideración de eliminar o actualizar historias en línea que ya no son relevantes o que podrían causar un daño particular.

Sería conveniente explorar también las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, como ayuda en la gestión de contenido en línea. Los algoritmos usados en esta clase de tecnología podrían diseñarse para identificar y revisar contenido potencialmente dañino o desactualizado, lo que ayudaría a los medios a mantener un archivo digital más responsable.

Así las cosas, tenemos que el periodismo en la era digital requiere una reevaluación de las prácticas de los comunicadores, con un enfoque particular en el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al olvido. La incorporación de nuevas tecnologías, prácticas éticas y formación especializada, pueden ayudar a los periodistas a enfrentar estos desafíos, asegurando que su trabajo sea no solo informativo, sino también ético y responsable.

Desafíos Éticos y Profesionales en el Periodismo

Como hemos visto, la aplicación del derecho al olvido es un tema complejo y variado, dependiendo de aspectos como la jurisdicción. En Europa, según los ejemplos abordados, este derecho es más prominente que en otras regiones del mundo. Esta diversidad en la aplicación del derecho al olvido crea desafíos significativos para los periodistas, quienes deben adaptarse a un terreno legal y ético

que varía según su ubicación geográfica y la audiencia a la que se dirigen.

La creciente influencia de las redes sociales añade una nueva dimensión a estos dilemas éticos. Las plataformas de redes sociales no solo sirven como medios para la difusión de noticias, sino que también funcionan como foros donde el público contribuye a la viralización y persistencia de la información. En este contexto, la responsabilidad ética se amplía, abarcando no solo a los periodistas, sino también a los usuarios de redes sociales y a las propias plataformas. Este escenario implica reconsiderar las normas éticas y legales que rigen la difusión de información, en particular en lo que respecta a la privacidad y el derecho al olvido.

Para las anteriores situaciones descritas, se expondrán, brevemente, dos propuestas, las cuales podrán ser abordadas en futuras investigaciones, pues no es el propósito de este trabajo responder a todas y cada una de las cuestiones que implique la regulación del derecho al olvido digital, en especial cuando se hace referencia al mismo con ocasión a asuntos de carácter judicial; sin embargo, sí podrán ser el esbozo de nuevas iniciativas a profundizar en el futuro.

La primera propuesta radica en el posible desarrollo de algoritmos de olvido automatizado, los cuales podrían diseñarse para identificar, y en ciertos casos, eliminar automáticamente información personal, antigua o irrelevante de las plataformas en línea.

El desafío principal está en desarrollar algoritmos que puedan discernir con precisión qué información debe ser olvidada y cuál debe permanecer accesible, equilibrando de manera efectiva el derecho a la privacidad con el interés público. La implementación de estos algoritmos, indiscutiblemente, requerirá de una colaboración estrecha entre expertos en tecnología y privacidad, legisladores y periodistas, con el fin de garantizar que se respeten las normativas vigentes sin comprometer la libertad de expresión y el acceso a la información.

Teniendo en cuenta el factor humano, resultaría conveniente elevar el estándar profesional del comunicador social, a través de, por ejemplo, certificaciones en Ética de la información para periodistas; y esta es, justamente, nuestra segunda propuesta. Estos programas de certificación o acreditación estarían diseñados, como su nombre lo indica, para periodistas y medios de comunicación, enfocándose en la formación en ética de la información y el respeto a la privacidad.

Esta certificación no solo eleva el estándar profesional de los periodistas, sino que también sirve como una garantía para el público de que la información que reciben se maneja con integridad y responsabilidad. Los programas podrían abarcar temas como la verificación de datos, el manejo responsable de información sensible, la diferencia entre el interés público y lo que es de interés para el público, y las implicaciones éticas del reportaje en la era digital. La adopción de esta certificación por parte de los medios de comunicación podría convertirse en un distintivo de confianza y calidad en un entorno informativo cada vez más saturado.

Consideramos, entonces, que estos dos enfoques - algoritmos de olvido automatizados y certificación en ética de la información para periodistas y comunicadores sociales- representan estrategias que podrían contribuir hacia un ejercicio del periodismo más ético y respetuoso con la privacidad y el respeto por el buen nombre de las personas. Cada una de estas propuestas aborda un aspecto crucial de la interacción entre la tecnología, la información y la sociedad, plantea soluciones y prácticas para los retos actuales en la era de la información, los cuales, esperamos, puedan ser abordados con mayor énfasis en futuras investigaciones relacionadas con el derecho al olvido, la privacidad y las nuevas prácticas periodísticas.

Contribución de las organizaciones de fact-checking al derecho al olvido

En el contexto contemporáneo del periodismo digital, la función de las organizaciones de fact-checking cobra relevancia, no solo en la lucha contra la desinformación, sino también en lo relacionado con la salvaguarda del equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al olvido. Al respecto, Guallar, J., Codina, L., Freixa, P., & Pérez-Montoro, M. (2020) han señalado que el fenómeno de la desinformación desafía fundamentalmente la integridad personal y plantea preguntas esenciales sobre el papel de los medios de comunicación en la era digital. La difusión de las noticias falsas no solo implica la circulación de información engañosa, sino que también socava la confianza del público en las fuentes de información legítimas.

La responsabilidad de los medios en este contexto se vuelve compleja. Por un lado, los medios tradicionales se enfrentan al desafío de mantener su credibilidad y autoridad en un entorno cada vez más saturado de información. Por otro lado, las plataformas digitales y las redes sociales, donde gran parte de la desinformación se difunde, presentan un nuevo conjunto de desafíos éticos y prácticos para la gestión de la información.

En el contexto académico, la creciente relevancia de las organizaciones dedicadas a la verificación de hechos refleja el desafío complejo que representa la desinformación en la era digital. Estas entidades son esenciales para mantener la integridad de lo que se informa, equilibrando la tarea de discernir la veracidad de la información con el respeto a los derechos individuales, como el derecho al olvido. Su contribución al desmentir información errónea es vital para forjar un entorno informativo más fiable, lo cual es crucial para la toma de decisiones informadas del público.

Sin embargo, estas organizaciones enfrentan la paradoja de que, al desmentir información falsa, pueden inadvertidamente incrementar su visibilidad y, por ende, perpetuar su presencia en el espacio público. Este fenómeno, denominado el “Efecto Streisand” puede llevar a reforzar los daños causados por la desinformación inicial en lugar de mitigarlos.

El “Efecto Streisand” se produce cuando el intento de censurar o encubrir cierta información resulta contraproducente, llevando a que dicha información sea ampliamente divulgada y reconocida, obteniendo mayor visibilidad de la que hubiera tenido si no se hubiera intentado suprimirla. Este

efecto se manifiesta cuando una persona u organización trata de mantener oculta una información, lo que, paradójicamente, comienza a hacerla conocida, ya sea a través de la atención de los medios de comunicación o su viralización en internet (National Geographic, 2023).

El efecto Streisand se denomina así debido a un incidente ocurrido en 2003, cuando se publicó una foto aérea de la casa de una actriz y cantante con este apellido en la costa de California. El intento de esta reconocida estrella de suprimir la foto llevó a una mayor difusión de la misma. Este fenómeno ahora es relevante en el contexto de internet, donde los intentos de censurar información pueden causar un efecto contrario, llevando a que esta información acabe siendo ampliamente divulgada y convirtiéndose en algo viral (National Geographic, 2023), contradiciendo los principios del derecho al olvido digital.

Por otro lado, estas organizaciones de fact-checking enfrentan el reto de decidir qué información debe permanecer en el dominio público y cuál debe ser sujeta al derecho al olvido. Esta tarea no solo se basa en la veracidad de los datos, sino también en consideraciones éticas y legales que pueden tener implicaciones duraderas para los individuos involucrados. Por lo tanto, su labor va más allá de la verificación de hechos en el presente, extendiéndose al análisis del contexto más amplio en el que se divulga la información y las posibles repercusiones a largo plazo en la sociedad.

Las redes y plataformas de fact-checking han tenido relevancia recientemente, y para ello traeremos a colación dos ejemplos particulares en los cuales estas organizaciones contribuyeron al esclarecimiento de la verdad en dos momentos muy particulares de nuestra sociedad reciente: i) las elecciones en Estados Unidos y; ii) la pandemia generada por el Covid-19.

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, diversas organizaciones de fact-checking como FactCheck.org, PolitiFact y The Washington Post's Fact Checker desempeñaron un papel crucial en desmentir afirmaciones falsas sobre el fraude electoral. Un ejemplo concreto es el caso reportado por FactCheck.org (2020), donde se refutó la afirmación sobre la desaparición de 50.000 votos en el condado de Delaware, Pensilvania, retenidos en 47 tarjetas USB. Esta acusación, que carecía de pruebas, fue desmentida detalladamente, demostrando que el proceso de carga de datos desde las tarjetas USB es parte del procedimiento regular para contar votos y no había nada sospechoso en ello. Además, se aclaró que la afirmación de las tarjetas USB “perdidas” era falsa y se explicó la existencia de mecanismos de seguridad en caso de pérdida de una tarjeta.

Durante la pandemia de COVID-19, la International Fact-Checking Network (IFCN) en el Poynter Institute lideró la #CoronaVirusFacts Alliance, que reunió a más de 100 organizaciones de fact-checking de todo el mundo. Esta alianza se centró en publicar, compartir y traducir hechos relacionados con la pandemia de COVID-19, en un esfuerzo por combatir la desinformación. La iniciativa se lanzó en enero de 2020, cuando la propagación del virus estaba limitada a China, pero ya estaba causando una desinformación desenfrenada a nivel mundial. Durante la pandemia, la base de datos CoronavirusFacts se actualizó diariamente, y los miembros utilizaron herramientas

simples como hojas de cálculo compartidas y aplicaciones de mensajería instantánea para colaborar en este masivo proyecto de crowdsourcing. Esta colaboración internacional permitió a los miembros responder más rápido y llegar a audiencias más amplias.

Con los anteriores ejemplos, destacamos que resulta necesario también que las organizaciones de fact-checking y los medios de comunicación adopten estrategias más sofisticadas y matizadas. Una táctica que puede ser efectiva es la promoción de la alfabetización mediática entre el público, enseñándoles a identificar y cuestionar la información dudosa por sí mismos. Así, en lugar de centrarse solo en la refutación de cada pieza de información falsa, el esfuerzo se dirige a empoderar a los ciudadanos para que sean críticos y conscientes de los contenidos que consumen. Además, es esencial que estas organizaciones colaboren con plataformas de redes sociales, motores de búsqueda y entidades gubernamentales para garantizar que la información verificada tenga una mayor visibilidad que las noticias falsas, tal como lo ha propuesto el Ministerio de las TIC en Colombia (MinTic, 2019).

Recomendaciones legales y políticas

Sugerencias para legisladores y profesionales del derecho

En esta sección de la investigación, se presentarán propuestas dirigidas a legisladores y profesionales del derecho sobre el derecho al olvido digital en Colombia, en casos que involucren la dignidad de una persona y actuaciones judiciales superadas con sentencias absolutorias o de archivo en el ámbito penal. Se presentan cuatro propuestas clave: la primera sobre el establecimiento de un marco legal claro; la segunda sobre el equilibrio entre privacidad y libertad de expresión para evitar la censura; la tercera sobre los procedimientos de apelación; y la cuarta, sobre la educación y capacitación en derechos digitales.

Establecimiento de un marco legal claro en materia del derecho al olvido digital en materia judicial

Definición precisa

Para establecer un marco legal sobre el derecho al olvido digital en el ámbito judicial es necesario que el Congreso de la República de Colombia debata una iniciativa legislativa que incluya una definición precisa tanto del concepto general del derecho al olvido digital como del derecho al olvido en casos judiciales. La iniciativa debe contemplar una descripción detallada de los tipos de datos que estarán cubiertos, definiendo qué información será objeto de derecho al olvido digital. Esto incluiría, pero no se limitaría a, datos personales como direcciones, números telefónicos, datos financieros, imágenes y, específicamente, menciones periodísticas sobre registros de actuaciones penales que ya no sean relevantes y cuenten con sentencias absolutorias o de archivo.

El capítulo de definiciones del proyecto de ley debe incluir una descripción de la información

que se considera obsoleta o irrelevante, como aquella que ya no refleja la situación actual de una persona o que, con el paso del tiempo, ha perdido relevancia. Esta descripción será crucial, pues limitará la información que puede ser objeto de análisis y establecerá un parámetro claro para los operarios judiciales en la aplicación de la norma.

Se debe incluir también un apartado que determine cómo ciertas informaciones, aunque fácticas, pueden perjudicar a los individuos, como la difusión de rumores infundados o detalles de la vida privada que no tienen relevancia pública o que no generen interés general.

Para que esta iniciativa legislativa avance será necesario crear mesas técnicas con los ponentes del proyecto de ley, expertos en privacidad, representantes de la Rama Judicial, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, representantes de los motores de búsqueda en el país, y miembros del gremio de periodistas y medios de comunicación. Esto garantizará que se escuchen las voces de diferentes sectores, asegurando un equilibrio justo y bien informado en la aplicación de la norma.

Criterios de aplicación

Una vez establecidos los conceptos y definiciones en el marco de la ley, es importante resaltar los criterios de aplicación del derecho al olvido digital, en especial en el ámbito judicial. Estos criterios estarán relacionados con diferentes aspectos, tales como la antigüedad de la información, lo cual podría establecer límites temporales después de los cuales la información personal sea considerada obsoleta.

Otro criterio sería la relevancia y precisión de la información. Se deberán definir parámetros para evaluar la exactitud de la información y así señalar que, cuando esta sea inexacta o engañosa, podrá ser removida de los motores de búsqueda bajo el derecho al olvido digital. Este criterio puede ser limitado en situaciones de interés público y en casos excepcionales, en los cuales la norma debe especificar en qué circunstancias ese interés general prevalecería sobre el derecho al olvido, como en el caso de figuras públicas, temas relacionados con seguridad pública, salud, o conductas criminales que no tengan sentencia judicial absolutoria o decisión de archivo.

Asimismo, se recomienda incorporar una evaluación de impacto en los criterios de aplicación, para analizar las consecuencias potenciales de eliminar información de los motores de búsqueda y su efecto en otros derechos fundamentales y en la sociedad colombiana. Esta evaluación permitirá un análisis racional de las solicitudes, lo que facilitará un enfoque caso por caso y la toma de decisiones basadas en las particularidades de cada situación.

Finalmente, el establecimiento de un marco legal claro no debe confundirse con censura ni con una limitación al derecho a la libertad de expresión e información. Más bien, debe ser la vía jurídica para lograr un equilibrio entre el derecho al olvido y estos derechos fundamentales. Es esencial plantear

procesos transparentes y accesibles para que las personas afectadas puedan solicitar la eliminación de su información personal cuando se cumplan los requisitos, además de crear mecanismos de supervisión y revisión para garantizar decisiones justas conforme a los parámetros legales. Solo de esta manera se asegurará el equilibrio entre la privacidad individual, las necesidades de la era digital y el derecho de la sociedad a mantenerse informada.

Equilibrio entre la privacidad y la libertad de expresión para evitar la censura

En este apartado se subraya la necesidad de lograr un equilibrio entre la privacidad y la libertad de expresión, evitando la censura y limitaciones desproporcionadas al derecho a la información por parte de la sociedad. Se propone que tanto los profesionales del derecho que asesoren a futuros clientes, como los motores de búsqueda y los funcionarios judiciales que gestionen situaciones relacionadas con el derecho al olvido digital, tengan en cuenta las consideraciones únicas de cada petición de desindexación de información, realizando un análisis caso por caso para evitar generalidades arbitrarias.

Este análisis deberá considerar la sensibilidad de los datos personales involucrados, la notoriedad de la persona que solicita la eliminación de la información, el contexto en el que fue publicada dicha información y, en el caso de la aplicación del derecho al olvido digital en el ámbito judicial, si existe una sentencia judicial que archive la investigación o absuelva a la persona de las acusaciones realizadas por las autoridades competentes.

Como se mencionó anteriormente, cuando el derecho a la privacidad esté en conflicto con el interés público, el equilibrio podría inclinarse hacia el interés público, lo que permitiría que la información permanezca accesible a través de los motores de búsqueda. Esto no solo pondera los derechos a la libertad de expresión y privacidad, sino que también se convierte en un argumento legal contra la censura y la desinformación.

Es necesario, por tanto, establecer mecanismos legales para evitar la eliminación indebida de información, especialmente aquella relevante para el discurso público, como la relacionada con la política o la ciencia. Estos mecanismos deberían priorizar el derecho a informar y a ser informado, garantizando transparencia y el ejercicio libre del derecho a la libertad de expresión.

Por último, debe haber regulación sobre la transparencia de las decisiones tomadas por los motores de búsqueda, entidades o jueces involucrados en la eliminación de información basada en el derecho al olvido digital, especialmente en el ámbito judicial. Cada caso debe ser evaluado con los criterios establecidos y la decisión de conceder o denegar la solicitud debe estar debidamente justificada.

Protección del Periodismo y la Verificación de Hechos

Es fundamental que las propuestas legislativas consideren la protección del periodismo y la

verificación de hechos, con el fin de reducir el riesgo de censura y, al mismo tiempo, fomentar la implementación de acciones para asegurar la veracidad de los hechos comunicados en los medios de comunicación.

La regulación sobre el derecho al olvido digital, especialmente en el ámbito judicial, debe establecer las excepciones para el periodismo. Esto implica identificar los tipos de información y circunstancias en los cuales el derecho al olvido no se aplica, así como definir los criterios de interés público que proporcionen una guía legal para periodistas y editores. De esta manera, se garantiza que los reportajes de interés público no sean censurados y que la libertad de prensa no se vea comprometida.

Tal como se ha expuesto en capítulos anteriores, es necesario promover el uso de herramientas de verificación de hechos. Esto incluye, como se ha hecho en otros campos del derecho y en otros sectores, la creación de incentivos para el desarrollo y la adopción de estas herramientas por parte de los medios de comunicación y las organizaciones de periodistas. Además, sería beneficioso fomentar la colaboración entre medios de comunicación, organizaciones dedicadas a la verificación de hechos y el sector tecnológico, con el fin de mejorar la precisión y veracidad de la información en los medios.

Como complemento, se sugiere la creación de espacios de diálogo entre legisladores y representantes de los medios de comunicación para evaluar cómo las nuevas iniciativas impactan tanto la libertad de prensa como la privacidad. Asimismo, es importante consultar al gremio periodístico sobre nuevas leyes o enmiendas relacionadas con el derecho al olvido y la libertad de prensa, asegurando la participación activa de los profesionales del periodismo en el proceso legislativo.

Finalmente, proponemos la formalización de un convenio con alguna de las Universidades Públicas de Colombia, para la creación de guías y manuales dirigidos a los periodistas sobre las implicaciones legales del derecho al olvido digital, especialmente en el contexto judicial, cuando se ponga en riesgo la dignidad y el buen nombre de una persona. Además, se sugiere el establecimiento de un sistema de monitoreo y revisión continua para evaluar cómo las normativas afectan la práctica periodística y la verificación de hechos, permitiendo ajustes y modificaciones proactivas en función de la evolución de las circunstancias.

Fomento de la Cooperación Internacional

Dado que el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el periodismo y los medios de comunicación, tienen un alcance global, es necesario que Colombia establezca acuerdos de cooperación internacional para avanzar en una regulación más amplia del derecho al olvido digital, de manera especial en lo relativo al derecho al olvido digital en el ámbito judicial, tal como se plantea en este escrito. Estos acuerdos deberían basarse en principios comunes que respeten las diferencias culturales y jurídicas, permitiendo el reconocimiento mutuo entre las jurisdicciones.

Aunque el establecimiento de acuerdos internacionales pueda implicar desafíos logísticos y la intervención de organizaciones supranacionales, a nivel regional, Colombia tiene la oportunidad de facilitar el debate y el intercambio de mejores prácticas. En este espacio, representantes de diferentes países podrían compartir experiencias y lecciones aprendidas en la implementación del derecho al olvido digital en sus respectivas jurisdicciones.

Colombia podría dar un paso significativo hacia una regulación integral del derecho al olvido digital al explorar, no solo acuerdos internacionales, sino también la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con organismos especializados en tecnologías de la información. Esto incluiría la colaboración con entidades líderes en seguridad digital y privacidad, con el objetivo de adoptar estándares avanzados y estrategias innovadoras para abordar los desafíos emergentes en la protección de datos. Esta cooperación con actores especializados fortalecería la capacidad del país para enfrentar las dinámicas cambiantes del entorno digital y asegurar la efectividad de las medidas adoptadas a nivel nacional.

Por último, considerando la naturaleza global de los desafíos relacionados con el derecho al olvido digital, se vislumbra la necesidad de establecer instancias regionales que faciliten la discusión y regulación de escenarios de resolución de controversias. Estas instancias podrían actuar como foros colaborativos donde diferentes jurisdicciones puedan abordar los dilemas vinculados con la privacidad digital y trabajar hacia soluciones consensuadas. La creación de tales espacios a nivel regional se presenta como una estrategia prospectiva para gestionar de manera más eficaz los conflictos que surgen cuando los intereses de individuos de distintas partes del mundo convergen en el ámbito digital.

Consideraciones finales y futuras direcciones

En el debate sobre el derecho al olvido, uno de los aspectos clave que ha emergido es su impacto en la memoria colectiva y el registro histórico. Este concepto, que busca equilibrar la privacidad individual con el acceso público a la información, presenta desafíos significativos en lo que respecta a la memoria histórica. La eliminación o supresión de información en línea, amparada por el derecho al olvido, podría llevar a una fractura inadvertida de la memoria colectiva, dificultando la comprensión de eventos históricos o tendencias sociales por parte de las futuras generaciones. En este contexto, surge un debate fundamental entre el derecho individual a la privacidad y el derecho colectivo a la memoria y la información.

Para abordar estos desafíos, destaca la importancia de la coordinación de entidades y organizaciones dedicadas a la memoria histórica, que desempeñarían un papel crucial en la facilitación y supervisión de la implementación de acuerdos internacionales relacionados con el derecho al olvido, buscando un equilibrio entre los derechos individuales y el interés público. De este modo, se garantizaría que la aplicación del derecho al olvido no interfiera con el acceso a información histórica y culturalmente relevante. Además, estas organizaciones podrían contribuir a la definición de directrices sobre qué

tipo de información podría ser sujeta al derecho al olvido y cuál debería mantenerse accesible debido a su relevancia histórica o social.

Adicionalmente, la creación de mecanismos eficaces de resolución de conflictos internacionales se presenta como una solución clave para abordar las disputas relacionadas con el derecho al olvido. Estos mecanismos serían fundamentales cuando las leyes de privacidad de un país entren en conflicto con las leyes de libertad de expresión o acceso a la información de otro. La existencia de tales sistemas ayudaría a evitar conflictos jurídicos y a promover una coexistencia armónica de las normativas, garantizando el respeto tanto por los derechos individuales como por el interés público.

El derecho al olvido no debe verse solo como una herramienta para proteger la privacidad, sino como un concepto que debe ser evaluado en términos de sus implicaciones más amplias para la memoria colectiva y el acceso a la información histórica.

Conclusiones

- El derecho al olvido digital en Colombia, al establecer la dignidad humana como su límite primordial, no constituye una restricción indebida al derecho a la libertad de información. Este hallazgo es fundamental en el contexto jurídico moderno, ya que resalta la compatibilidad y el equilibrio necesarios entre la protección de datos personales y la libertad de expresión. Este enfoque permite una coexistencia armoniosa de ambos derechos, subrayando que la libertad de expresión no debe ser interpretada como un permiso incondicional para la divulgación de información, sino como un derecho que debe ejercerse con responsabilidad y consideración hacia los derechos de privacidad y dignidad de terceros.
- El estudio demuestra que el derecho al olvido digital no limita la libertad de expresión, sino que actúa como un medio para lograr un equilibrio entre los derechos individuales y el interés público. Este derecho surge como una herramienta eficaz para rectificar o eliminar información que, con el tiempo, pierde relevancia o se convierte en perjudicial para la dignidad humana. De este modo, el derecho al olvido digital se presenta como una medida equitativa que protege los datos personales sin obstruir el flujo de información esencial para la sociedad.
- La implementación del derecho al olvido digital en Colombia debe basarse en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y dignidad humana. Cada medida tomada bajo este derecho debe ser evaluada para asegurar que sea adecuada y justa, en consonancia con el contexto y las circunstancias específicas de cada caso. Este enfoque es crucial para evitar la censura arbitraria y garantizar que no se impongan restricciones desmesuradas sobre la libertad de expresión.

- Es imperativo establecer un marco normativo claro y detallado que oriente la aplicación del derecho al olvido digital, evitando interpretaciones ambiguas o aplicaciones inconsistentes que puedan socavar los derechos fundamentales. Este marco debe considerar métodos para equilibrar los derechos en conflicto, en especial la tensión entre la protección de datos personales y la libertad de expresión.
- La capacidad del sistema judicial colombiano para aplicar el derecho al olvido digital depende de la formación adecuada de jueces y personal jurídico en aspectos relacionados con la privacidad digital y los derechos humanos en el contexto tecnológico contemporáneo. Una comprensión profunda de estas cuestiones es esencial para garantizar decisiones judiciales justas y equilibradas que reflejen los valores democráticos y los principios de derechos humanos.
- La viabilidad del derecho al olvido digital en Colombia depende de la colaboración y el diálogo entre el sistema judicial, los legisladores, la sociedad civil y los actores del sector tecnológico. Un enfoque colaborativo y multidisciplinario es fundamental para asegurar que todas las perspectivas y preocupaciones sean consideradas en el desarrollo y la aplicación de políticas relacionadas con este derecho. Este enfoque colaborativo favorece una mayor comprensión y respeto por los derechos fundamentales en el ámbito digital.
- Finalmente, el derecho al olvido digital en materia judicial, cuando se aplica de manera equitativa y en línea con los principios de dignidad humana, proporcionalidad y razonabilidad, puede servir como un modelo para otros sistemas jurídicos que buscan equilibrar los derechos individuales con las libertades de información y expresión.

Referencias

- Alexy, R. (2003). *Teoría de los derechos fundamentales*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia, Artículo 15.
- Barocas, S., & Nissenbaum, H. (2014). Big data's end run around anonymity and consent. En *Privacy, big data, and the public good: Frameworks for engagement* (pp. 47-75). Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2000). *Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión*.
- Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley Estatutaria 1266.
- Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1273 de 2009*.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012*.
- Corte Constitucional de Colombia. (2011). Sentencia C-748.
- Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995.
- European Court of Justice. (2014). *Google Spain and Google* (C-131/12).
- General Data Protection Regulation. (2016). 2016/679.
- Guallar, J., Codina, L., Freixa, P., & Pérez-Montoro, M. (2020). Desinformación, bulos, curación y verificación: Revisión de estudios en Iberoamérica 2017-2020. *Telos: Revista de estudios interdisciplinarios en ciencias sociales*, 22(3), 595-613.
- Mayer-Schönberger, V. (2009). *Delete: The virtue of forgetting in the digital age*. Princeton University Press.
- Rosen, J. (2012). The right to be forgotten. *Stanford Law Review*.

ARTÍCULO

El diálogo entre Cortes: el vínculo entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

The dialogue between Cortes: the link between the Constitutional Chamber and the Inter-American Court of Human Rights

Alex Rojas Ortega ¹

Como citar:

Rojas Ortega, A. (2025). El diálogo entre Cortes: el vínculo entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 101-123. Doi: 10.63058/des.v19i1.311

Fecha de ingreso: 17 de julio de 2024. **Fecha de aprobación:** 23 de enero de 2025.

¹ Alex Rojas Ortega es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica; Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia; Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Escuela Libre de Derecho; Especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla - La Mancha; Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Academia de la Magistratura de Perú; Juez en el Tribunal Contencioso Administrativo, Poder Judicial; Coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo, así como miembro de la Comisión de Derecho Constitucional; ambos del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. ORCID: 0000-0002-5834-1858. Correo electrónico: arojaso951@ulacit.ed.cr.

Resumen

Los Tribunales constitucionales alrededor del mundo suelen mantener algún grado de relación con sus homólogos o con tribunales internacionales o supranacionales, de modo tal que, bajo una interacción recíproca, conocida como diálogo entre cortes, lo resuelto por uno de ellos es referenciado o citado por el otro y ese criterio, en esencia externo, surte eficacia en el ordenamiento jurídico interno. En el presente estudio se abordará el instituto del diálogo entre cortes y, particularmente, bajo análisis de casos, se efectuará un recorrido en torno a la relación existente entre la Sala Constitucional costarricense y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de un repaso de los principales fallos en que se ha aplicado y tutelado en Costa Rica el corpus iuris interamericano.

Palabras clave: diálogo, Sala Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, control de convencionalidad, derechos humanos.

Abstract

Constitutional Courts around the world usually maintain some degree of relationship with their counterparts or with international or supranational courts, in such a way that, under a reciprocal interaction, known as dialogue between courts, what is resolved by one of them is referenced or cited by the other and that criterion, essentially external, is effective in the internal legal system. In this study, the institute of dialogue between courts will be addressed and, particularly, under case analysis, a review will be made of the existing relationship between the Costa Rican Constitutional Chamber and the Inter-American Court of Human Rights, as well as a review of the main failures in which the inter-American corpus iuris has been applied and protected in Costa Rica.

Keywords: dialogue, Constitutional Chamber, Inter-American Court, conventionality control, human rights.

Introducción

El instituto del control de convencionalidad surgido pretorianamente en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), particularmente en la sentencia del caso *Almonacid Arellano y otros vs Chile*, del 26 de setiembre del 2006, replicado en el caso *Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú*, del 24 de noviembre del 2006, así como los perfiles que dicho instituto tomó con el caso *Gelman vs Uruguay*, del 24 de febrero del 2011, implica que todos los órganos del Estado y no solamente el Poder Judicial, están obligados a velar por la efectiva adecuación del derecho interno de los Estados latinoamericanos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en relación con los demás instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y los criterios vertidos por la Corte IDH, sea en su función contenciosa como consultiva.

Ahora bien, con el objeto de delimitar el presente ensayo, se expondrá en qué consiste la figura del diálogo entre Cortes y, muy particularmente, a partir del estudio de casos y de jurisprudencia, se efectuará un recorrido acerca de la relación existente entre el Tribunal Constitucional de Costa Rica y la Corte IDH, en una doble vertiente:

Primero, al analizar algunos supuestos concretos en los que la Sala Constitucional de Costa Rica, en aplicación de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, dio efectividad a tales derechos y, al propio tiempo, ratificó la vinculatoriedad interna de los instrumentos internacionales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, conocido como el *corpus iuris* interamericano.

Y, en segundo término, al repasar los principales antecedentes que han significado un diálogo vertical entre cortes, en lo que respecta a decisiones o criterios adoptados por la Sala Constitucional costarricense, en franco ligamen a resoluciones dictadas por la Corte IDH, siendo o no Costa Rica parte del respectivo proceso -consultivo o contencioso- en el que aquellas fueron emitidas. Ello, sin lugar a dudas, aparejará el exponer el criterio del autor, en lo concerniente a la vinculatoriedad o no, de las opiniones consultivas de la Corte IDH.

A partir de ese contexto, se realizará un acercamiento a la tutela multinivel o multi-dimensional de los derechos humanos con el objeto de circunscribir esta investigación a una de sus aristas, cual es la protección de tales derechos a lo interno de los Estados; posteriormente, se efectuará un recorrido, bajo estudio de casos, sobre el vínculo entre la Sala Constitucional y la Corte IDH.

Finalmente, se efectuará una evaluación ponderativa respecto del grado de relación que existe entre el Tribunal Constitucional de Costa Rica y la Corte IDH, así como de la efectividad de la jurisdicción constitucional en la labor de armonización, ajuste y adecuación del derecho interno -y su interpretación y aplicación- en torno al bloque de convencionalidad.

La tutela multi-dimensional de los derechos humanos

La protección de los derechos humanos alcanza a un grado de tutela multi-dimensional de los mismos, en donde es posible apreciar diversos ámbitos o sectores en los cuales se resguardan los derechos humanos; el comprender los diferentes ámbitos donde se lleva a cabo la tutela de los derechos humanos permitirá tener una noción más certera sobre el enfoque de este ensayo, centrado en la relevante labor de protección convencional que efectúa la Sala Constitucional en el derecho interno y, además, vislumbrar, bajo un diálogo vertical entre Cortes, cómo se relaciona dicho Tribunal Constitucional con la Corte IDH, como intérprete máximo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos del sistema interamericano.

De esa forma, primero, se debe hacer referencia a la protección a lo interno de cada Estado, en donde tanto la jurisdicción ordinaria, como el Tribunal Constitucional, ejecutan una fiscalización en lo relativo a la observancia de los derechos humanos; es decir, tanto el juez ordinario, como el juez constitucional, tienen una cuota relevante en la protección de los derechos humanos, siendo que la diferencia estriba en los efectos jurídicos de la labor de cada uno de ellos.

Inclusive, es dable afirmar que los jueces ordinarios protegen en tiempo real los derechos fundamentales y humanos, puesto que lo usual es que las situaciones o eventos donde se produce alguna lesión o amenaza a tales derechos, se presente en los casos sometidos a conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en una etapa u oportunidad previa a que sean eventualmente conocidos por el Tribunal Constitucional; por ello, indudablemente, el juez ordinario debe poseer una adecuada capacitación en materia de derechos fundamentales y humanos, con el fin de proteger oportunamente, de la mejor forma, a la persona y a sus libertades y garantías fundamentales (principios *pro homine* y *pro libertate*).

Además, la competencia de los jueces y juezas ordinarios es distinta de la correspondiente a los jueces y juezas constitucionales, sobre todo en un Estado como el costarricense que posee un modelo de control concentrado de constitucionalidad, tal como lo establece el artículo 10 de la Constitución Política.²

Lo anterior, sumado a la posibilidad de interponer recurso de amparo o de hábeas corpus (art. 48 constitucional), como una vía rápida, sencilla y efectiva, en los términos del numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante supuestos de vulneración de los derechos fundamentales y humanos, lo cual, a nivel de derecho interno, es también competencia del Tribunal Constitucional. De modo tal que, la Sala Constitucional protege el Derecho de la Constitución a lo interno del Estado, sin demérito de la relevante labor tutela que pueden también efectuar los jueces

² En lo que resulta de interés, esa norma dispone: “Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. (...)”

y juezas ordinarios en aras de garantizar el principio de supremacía constitucional.

Luego, otro nivel tutela de los derechos humanos se encuentra en el ámbito del derecho comunitario, enfocado en las relaciones de índole multilateral-regional económico, tal como sucede con la Unión Europea, donde se cuenta con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, encargado de aplicar el derecho de la Unión Europea para los 27 países que la integran, o del Sistema de Integración Centroamericana para el supuesto de Costa Rica, en cuyo marco se encuentra la Corte Centroamericana de Justicia, respecto de la cual el Estado costarricense no ratificó su jurisdicción.

Otro ámbito de protección de los derechos humanos está en el contexto internacional de los derechos humanos, en el cual, tales derechos son protegidos en dos sub niveles. Por un lado, mediante el sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como algunas de sus principales normas, como el Pacto Internacional en materia de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos del niño, entre otros. Este sistema de protección internacional cuya jurisdicción ejerce la Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya, Países Bajos.

Por otro lado, están los sistemas regionales de protección de los derechos humanos:

El sistema africano, sustentado en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, integrado por dos órganos esenciales, cuales son la Comisión Africana de Derechos Humanos, con funciones de promoción y protección de los derechos humanos en el continente africano y, por otro lado, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con funciones de naturaleza jurisdiccional, creada a través del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Arusha, Tanzania, que empezó a regir desde el 2004.

El sistema europeo, integrado por los 46 países miembros del Consejo de Europa, que han suscrito el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales (Convenio de Roma) de 1950, cuya jurisdicción está a cargo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sede está en Estrasburgo, Francia. En este sistema no existe un órgano con funciones cuasi-judiciales, de manera tal que, luego de agotadas las vías internas de cada Estado, las personas que se sientan agraviadas en sus derechos, pueden acudir en forma directa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El sistema interamericano, cuyo origen se encuentra en la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuenta con órganos de protección de los derechos humanos, nacidos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, Estados Unidos de América. Su función es cuasi-judicial y de promoción de los derechos humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, la cual tiene cuatro funciones: Consultiva,

contenciosa, medidas cautelares y supervisión de cumplimiento de sentencia.

El diálogo entre Cortes

La creciente relevancia de los criterios jurisprudenciales de los tribunales constitucionales en el mundo, así como de los tribunales internacionales y supra nacionales, ha expandido el llamado “diálogo judicial” o “diálogo entre cortes”; lo anterior, acentuado en el caso costarricense, donde los precedentes y jurisprudencia de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por diálogo entre cortes debe entenderse el fenómeno que se presenta cuando una sentencia adoptada por un determinado órgano judicial, sea nacional, internacional o supranacional, incluye y hace referencia, por voluntad propia, a sentencias adoptadas por otro tribunal de justicia, constituido en un ordenamiento jurídico distinto al propio del ámbito de competencia de dicho órgano judicial, de modo tal que, bajo una especie de interacción recíproca entre ambos, lo resuelto por uno de ellos es referenciado o citado por el otro y ese criterio, en esencia externo, surte eficacia en el ordenamiento jurídico interno, al ser precisamente acogido en el seno del órgano judicial que efectúa la cita y lo asume como su propio criterio.

Para Marcela Ortiz (2015), el diálogo entre cortes apareja, sin duda, una comunicación e interacción entre los órganos judiciales que mutuamente comparten posturas en un determinado sentido:

“En la actividad jurisdiccional de esos órganos de protección estatal e internacional, se va produciendo una comunicación e interrelación a través de las interpretaciones de los derechos que en sus determinaciones van efectuando, construyéndose así una importante jurisprudencia (en todos los niveles) que evidencia una mutua influencia entre ellas, reflejándose la existencia de una comunicación y diálogo, entendido como: “un proceso de influencias y relaciones recíprocas.” (p. 14-15).

En efecto, el diálogo entre cortes requiere de una interacción mutua, de reciprocidad, en la jurisprudencia de una determinada corte o tribunal de justicia, en relación con otra jurisdicción local o supranacional y viceversa. Para Alfonso Martínez (2023):

“La metáfora de diálogo jurisprudencial para describir al fenómeno de utilizar los criterios jurídicos emitidos por un tribunal distinto a aquel que los usa para fundar un fallo, en otras palabras, importar la jurisprudencia creada por un ente distinto, con la finalidad de apoyar las razones de una decisión judicial.” (p. 70).

Para Bonilla (2023), ese diálogo entre cortes refleja la cooperación entre órganos judiciales, indiferentemente de su nivel y de las regiones donde se encuentren. En ese contexto, haciendo la salvedad de las decisiones contenciosas o consultivas de los tribunales internacionales o supranacionales, la referencia o utilización argumentativa respecto de una decisión judicial adoptada

por otro tribunal o corte, es meramente facultativa, discrecional u opcional, ya que las sentencias extranjeras no son vinculantes para los Estados, sino únicamente las adoptadas a lo interno por los órganos judiciales competentes. Incluso, en este último supuesto, para el caso costarricense, existe la garantía de la independencia judicial, pues salvo en el caso de las sentencias y precedentes de la Sala Constitucional, cuya vinculatoriedad es erga omnes (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), siempre existe la posibilidad para las personas juzgadas de separarse del criterio adoptado por otros órganos judiciales a lo interno, sobre todo de aquellos que ejecutan funciones de casación.

Al respecto, De Vergottini³ ha comentado que, en la interacción entre cortes, existe una gama amplia de posibilidades, desde tribunales que categóricamente rechazan las fuentes extranjeras o su referencia, otros que las usan como método de estudio, pero no las citan o usan como fundamento, hasta llegar a otros que, en efecto, las citan e incorporan como parte de la fundamentación propia que, a su vez, elabora principios e institutos propios del derecho constitucional.

El diálogo entre cortes puede sub-dividirse en dos tipos. Por una parte, el diálogo horizontal, que se presenta en el contexto de órganos del mismo nivel, ya sea entre Salas, Cortes o Tribunales Constitucionales, o bien, en el caso de tribunales internacionales entre sí, es decir, entre la Corte IDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Este tipo de diálogo es facultativo, de modo tal que no existe una norma que obligue o exija a un determinado tribunal constitucional o a uno internacional referenciar, citar o adoptar como suyo el criterio adoptado por uno de sus homólogos; es lo que sucede, por ejemplo, cuando la Sala Constitucional incluye en sus resoluciones alguna referencia a sentencias del Tribunal Federal Constitucional Alemán, la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Español y la Corte Constitucional colombiana, por mencionar algunos de los más comúnmente citados. Verbigracia, en la sentencia n° 252-1991 del 1° de febrero de 1991, cuando la Sala Constitucional se refirió a los efectos declarativos de sus sentencias de inconstitucionalidad y a las garantías del debido proceso - due process of law-, en la sentencia n° 1739-1992 del 1° de julio de 1992, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica.

También puede tomarse en consideración la referencia que ha hecho la Sala Constitucional, en sentencia n° 3933-1998 del 12 de junio de 1998, en torno al principio de razonabilidad, con base en la doctrina construida al respecto por el Tribunal Constitucional Federal Alemán o la sentencia n° 12496-2016 del 31 de agosto del 2016, cuando la Sala Constitucional declaró la inconstitucional del entonces numeral 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, siendo que, al

³ Al respecto, puede verse a De Vergottini, Giuseppe. (2010). *Oltre il dialogo tra le corti*. Editorial Il Mulino, Bologna, Italia.

respecto, mencionó la influencia de la resolución n° 21 de 1961 de la Corte Costituzionale italiana, que declaró inconstitucional el instituto del “solve et repete”, entonces vigente en ese país por la *“evidente diferencia de trato que se establece entre el contribuyente que esté en condiciones de pagar inmediatamente el entero tributo y el contribuyente que no tenga medios suficientes para hacer el pago ni pueda procurárselos fácilmente recurriendo al crédito.”*⁴

Asimismo, puede mencionarse la sentencia n° 4512-1993 del 10 de setiembre de 1993, cuando la Sala Constitucional se pronunció sobre la influencia que posee la visión del Tribunal Constitucional español en materia de derecho a la tutela judicial efectiva o bien, el reconocimiento del derecho humano al Internet, a partir de la sentencia n° 12790-2010 del 31 de julio del 2010 y, respecto del cual puede afirmarse que hubo influencia de lo resuelto por el Consejo de Constitucional francés en la sentencia n° 580-DC del 10 de junio del 2009. Además, puede mencionarse la referencia que hizo la Sala Constitucional en la sentencia n° 6805-2011 del 27 de mayo del 2011, en materia de derechos prestacionales en lo concerniente al mínimo vital que debe asegurarse a toda persona, en tanto Costa Rica es un Estado social derecho, para lo cual citó la sentencia n° SU-1023/2001 de la Corte Constitucional de Colombia.⁵

En idéntico escenario del diálogo horizontal, se encuentra el que se verifica entre la Corte IDH y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en tal sentido, con alguna frecuencia y desde sus primeros años de funcionamiento, la Corte IDH ha citado los criterios del Tribunal Europeo DH y, en forma recíproca, este ha citado a la Corte IDH en temas de alto impacto en la jurisprudencia interamericana, como es el caso de las desapariciones forzadas.⁶

El diálogo vertical es el que se verifica entre tribunales constitucionales o nacionales, con tribunales internacionales o supra nacionales; este tipo de relación vertical puede acaecer tanto de abajo hacia arriba, como es lo usual, y a la inversa. Es el caso, entonces, del vínculo entre la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte IDH, o bien, de la relación de la Corte IDH con tribunales constitucionales, en el sistema interamericano e, inclusive, de la influencia que tiene sobre esos tribunales constitucionales lo expuesto por tribunales internacionales de otra región.

El segmento del diálogo vertical entre cortes, que se presenta en el contexto de un tribunal interno, cuando referencia o fundamenta sus fallos en relación con lo juzgado o interpretado por un tribunal internacional, como la Corte IDH, es parte de la obligación que poseen todos los órganos estatales, de oficio, de realizar un control de convencionalidad; precisamente, en tal sentido, la Sala

⁴ Para un estudio más acabado sobre el tema, en una investigación elaborada incluso de previo a la sentencia referenciada de la Sala Constitucional, puede verse a Rojas Ortega, Alex. (2015). Inconvencionalidad de la regla tributaria “solve et repete”. Revista Judicial, n° 115, Poder Judicial, Costa Rica.

⁵ Particularmente, la Corte Constitucional de Colombia, en sus decisiones, también ha citado a la Sala Constitucional de Costa Rica, por ejemplo, en la sentencia n° T-740-2011, en cuanto al reconocimiento del agua potable como derecho fundamental e hizo particular alusión a votos de la Sala Constitucional, como el n° 11045-2011 y n° 9629-2012.

⁶ Por ejemplo, el caso Kurt vs Turquía, sentencia del 25 de mayo de 1998.

Constitucional, ha expuesto lo siguiente:

*“En el caso de los tribunales nacionales, el control de convencionalidad les permite mantener un “diálogo” constante entre los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos y los sistemas internacionales.”*⁷

En el contexto de la interacción necesaria del diálogo vertical al que se hace alusión, la Corte IDH ha hecho referencia a decisiones de la Sala Constitucional de Costa Rica, por ejemplo, cuando en el caso López Mendoza y Chocrón vs Venezuela, del 1º de setiembre del 2011 y el caso Atala Riffo y Niñas vs Chile, del 24 de febrero del 2012, se utilizó la sentencia n° 2313-1995 de la Sala Constitucional, para fundamentar la aplicación del control de convencionalidad a lo interno de los Estados del sistema interamericano.

En el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, del 27 de junio del 2012, la Corte IDH utilizó en su fundamentación la sentencia n° 1768-2011 de la Sala Constitucional de Costa Rica en lo concerniente a la necesidad de respetar las normas de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en aspectos que puedan afectarles y el Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales.

Ciertamente, ha habido interacción recíproca entre la Sala Constitucional costarricense y la Corte IDH, de modo tal que, la primera, referencia y utiliza en su fundamentación las decisiones adoptadas por la Corte IDH – lo cual, además, es un reflejo del obligado control de convencionalidad al que están sujetos todos los órganos del Estado- y, por su parte, la Corte IDH, en forma recurrente, cita o menciona votos de la Sala Constitucional para sustentar sus decisiones.

El vínculo cercano entre el Tribunal Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el diálogo vertical entre Cortes

Desde su puesta en funcionamiento en 1989, la Sala Constitucional ha tenido una relación muy estrecha con la Corte IDH, siendo que, incluso, a través de sus diversos precedentes, ha confirmado la constitucionalización de los derechos humanos en el contexto costarricense y ha afirmado la existencia de un rango supra constitucional en aquellos supuestos en que el instrumento del derecho internacional de los derechos humanos proteja en mejor medida o de forma más favorable a la persona. Con la finalidad de tener un contexto más claro en lo concerniente a esa estrecha relación entre ambos órganos judiciales es preciso comentar los siguientes aspectos.

⁷ Sentencia n° 6120-2013 del 08 de mayo del 2013.

La constitucionalización de los derechos humanos

El otorgamiento de un rango constitucional a los derechos humanos es parte del reconocimiento de su valor superlativo y, en el caso del ordenamiento jurídico costarricense, es emblemático, pues incluso de previo a que surgieran algunos fallos relevantes en dicha materia en el ámbito latinoamericano, la reforma operada al numeral 48 de la Constitución Política⁸, mediante ley n° 7128 del 18 de agosto de 1989, así lo previó e incorporó como tal. De tal modo, Costa Rica dotó de rango constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Ese fenómeno de la constitucionalización de los derechos humanos ha cobrado lugar con ocasión de resoluciones adoptadas por Tribunales constitucionales en la región, como por ejemplo: (i) La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina del 07 de junio de 1992, relativa a la obligatoriedad de las normas internacionales sobre derechos humanos; (ii) La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana del 24 de febrero de 1999, donde se puso en funcionamiento el recurso de amparo en dicho país, debido a una inconvencionalidad por omisión por parte de dicho Estado; y, (iii) La sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia del 05 de mayo del 2004, relativa a la aplicación de las normas y jurisprudencia interamericana en Bolivia. De tal modo, tanto a nivel de Costa Rica, a través de su regulación constitucional expresa (art. 48 de la Constitución), como en otros ordenamientos de América, incluso por mandato jurisdiccional de los respectivos Tribunales Constitucionales, se ha efectuado una constitucionalización de los derechos humanos.

Resoluciones del Tribunal Constitucional de Costa Rica donde se aplicó -y tuteló- en forma directa el derecho internacional de los derechos humanos

En el contexto de la relación recíproca o de diálogo entre cortes antes expuesta se puede hacer referencia a algunos casos en los que la Sala Constitucional de Costa Rica ha tenido una franca aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, de los fallos de la Corte IDH y ha sido consciente de su eficacia directa e inmediata, garantizando una efectiva tutela a lo interno del Estado costarricense; veamos:

a.- Caso de las pensiones de funcionarios judiciales (1990). En la sentencia n° 1147-1990 del 21 de setiembre de 1990, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitía a la Corte Suprema de Justicia declarar como

⁸ Dicha norma, indica: “Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.”

indigno de las jubilaciones y pensiones a los funcionarios judiciales que, a criterio de dicho órgano, hubieren incurrido en vicios, faltas de moralidad o responsabilidad penal y, con ello, permitió que una persona funcionaria sentenciada penalmente, pudiera acogerse a la jubilación. En este fallo, el Tribunal Constitucional afirmó:

“Esa conclusión se confirma en una serie de principios y normas internacionales de derechos humanos, que tienen, no sólo el rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de la Constitución, sino también un amparo constitucional directo que prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta Fundamental, al tenor del artículo 48 de la misma, (reformado por la Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989); entre esos derechos, concretamente, los reconocidos en los artículos 25, 28, 29 y 30- así corregidos los que se invocan en la acción- del Convenio sobre la Seguridad Social, No. 102 de la OIT...” En la medida en que, conforme a lo expuesto, se encuentran implicados derechos fundamentales del actor, sus circunstancias, su conducta o sus méritos, cualesquiera que éstos sean, nada tienen ni pueden tener que ver para su reconocimiento y garantía, porque tales derechos fundamentales lo son, por definición, de todo ser humano, por el solo hecho de serlo, en condiciones de igualdad y “(sin) discriminación alguna contraria a la dignidad humana” El Derecho de los Derechos Humanos, tanto interno como internacional, prohíbe, entre otras pero con un énfasis muy especial, toda discriminación en el reconocimiento y garantía de los mismos a los delincuentes presuntos, imputados o condenados, no importa cuales sean su grado de responsabilidad, su posición económica, política o social, o incluso la gravedad o repugnancia de sus crímenes.”

b.- El caso “hombre/mujer” (1992-1993). En la sentencia n° 3435-1992 del 11 de noviembre de 1992 y su aclaración en sentencia n° 5759-1993 del 10 de noviembre de 1993, la Sala Constitucional reconoció el derecho del hombre extranjero casado con mujer costarricense a obtener la nacionalidad costarricense luego de interpretar el artículo 14 inciso 5 de la Constitución Política de acuerdo con los artículos 21.3 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1.1, 2, 17, 24, 51 y 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 23.1.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En tales sentencias, la Sala Constitucional estimó que el beneficio concedido por la norma únicamente a la mujer extranjera casada con costarricense, constituía una discriminación en perjuicio del hombre extranjero casado con una ciudadana costarricense, contra quien creaba una desventaja pues le sustraía beneficios por razones de género, contraviniendo con ello el espíritu constitucional y universal de igualdad y no discriminación.

A través de esta sentencia, al interpretarse la norma constitucional o derecho interno de acuerdo con los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos, la Sala Constitucional no solo constató la inconvencionalidad por omisión existente en el derecho interno costarricense, al haber

dejado sin cobertura de protección convencional al hombre extranjero casado con costarricense, dando al traste con una discriminación por razones de género, sino que, además, efectuó un control de convencionalidad, a pesar de que para esa fecha (1992), aún no había surgido en estricto sentido ese concepto jurídico.

c.- La obligación de efectuar el control de convencionalidad (2014). Sumado a ello, en la sentencia del Tribunal Constitucional de Costa Rica n° 12703-2014 del 1° de agosto del 2014, dicho órgano judicial afirmó la vinculatoriedad del corpus iuris interamericano y, con ello, despejó cualquier duda acerca de la obligatoriedad del criterio vertido por la Corte IDH, ya sea emitido en su función contenciosa, como en la consultiva. Así, la Sala Constitucional expresó:

“CARÁCTER VINCULANTE DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. El control de convencionalidad diseñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (básicamente, a través de las sentencias en los casos Almonacid Arellano y otros c/. Chile de 26 de septiembre de 2006, Trabajadores Cesados del Congreso c/. Perú de 24 de noviembre de 2006, Cabrera García y Montiel Flores c/. México de 26 de noviembre de 2010 y Gelman c/. Uruguay de 24 de febrero de 2011) es de acatamiento obligatorio para las Salas y Tribunales Constitucionales, debiendo contrastar cualquier conducta (activa u omisiva) con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de Derechos Humanos, la jurisprudencia de esa Corte y sus opiniones consultivas.”

Sobre el particular, es oportuno mencionar que, en dicha labor de control de convencionalidad, los jueces y juezas del Poder Judicial deben tener en cuenta no solamente los instrumentos normativos del derecho internacional de los derechos humanos, sino también la interpretación que de ellos ha hecho la Corte IDH, dado que es ella la intérprete máxima y última del corpus iuris interamericano. Así, desde la perspectiva del autor de estas líneas, la observancia estricta de lo que la Corte IDH – o tribunales regionales de tutela internacional de los derechos humanos- haya dispuesto en sus sentencias y opiniones consultivas, forma parte de la tutela efectiva de los derechos humanos en el ámbito interno de los Estados.

d.- Los derechos de las personas LGTBIQ+ (2021). Con posterioridad a la sentencia constitucional n° 12782-2018, que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo que, a su vez, cobró sentido a partir de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH, relativa a los derechos patrimoniales, identidad de género e instituciones propias del derecho en favor de las parejas del mismo sexo, también en la sentencia n° 16542-2021 del 30 de julio del 2021, se conoció un recurso de amparo interpuesto por una persona transgénero, quien solicitaba la rectificación de su género en el pasaporte para que constara como femenino, lo cual le fue negado por la autoridad competente. Al respecto, en la indicada sentencia, el Tribunal Constitucional de Costa Rica, señaló:

“En materia de derechos humanos de la población sexualmente diversa, la Sala estima que el reconocimiento de su identidad de género autopercibida reviste especial importancia, puesto que constituye un requisito para tener acceso pleno a otros derechos. En efecto, una discordancia, verbigracia, entre el género desplegado por una persona en su diario vivir y aquel señalado en su cédula de identidad, pasaporte u otro documento de identificación puede conllevar que sujetos privados o públicos discriminen a esa persona por tal discordancia y le dificulten o impidan el ejercicio de otros derechos (salud, asociación, expresión, libre desarrollo de la personalidad, entre otros). (...) La Sala no puede ignorar que la falta de correspondencia entre el documento de identidad -en el sub examine, el pasaporte- y la identidad de género autopercibida por la persona puede derivar en discriminación y violencia en contra de un costarricense en el extranjero..”

e.- Caso Fipronil. Tutela ambiental y protección a las abejas (2021). En la sentencia n° 24807-2021 del 05 de noviembre del 2021, se conoció la acusada lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a partir de la utilización de productos que contuvieran el ingrediente activo Fipronil, respecto del cual, se atribuyó como causa de muerte masiva de abejas. Al respecto, en dicha sentencia, la Sala Constitucional de Costa Rica afirmó:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. (...) Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos.”

Con base en ello, el Tribunal Constitucional aplicó en forma directa el bloque de convencionalidad y otorgó un plazo de tres meses a la Administración para que realizara los estudios técnicos necesarios con el fin de emitir un informe que determinara si el uso del plaguicida Fipronil constituía la causa del daño a seres vivos, siendo que, en caso de constatarse esa causa del daño, la Administración debía resolver la situación. Cabe indicar que, en la sentencia de comentario, el Tribunal Constitucional enfatizó en que la protección al medio ambiente no solo se debe hacer efectiva por su relación con otros derechos de las personas, tales como la vida, la salud o su integridad, sino, además, por su importancia para los demás organismos vivos con quienes la persona comparte el planeta, los cuales, también merecen protección en sí mismos.

El diálogo vertical entre la Sala Constitucional y la Corte IDH

La tutela de los derechos humanos también se constata a partir de la relación entre el Tribunal Constitucional de Costa Rica, como órgano judicial que forma parte de un Estado signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo que, en torno a esos derechos ha indicado la Corte IDH, dentro del contexto de la relación vertical existente entre ambas cortes, en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

En adelante, se mencionan algunos casos puntuales en los que se logra apreciar una clara relación interactiva de garantía de los derechos humanos, entre la justicia interna costarricense y la internacional, a saber:

a.- El caso de la colegiatura obligatoria de los periodistas (1995): El supuesto fáctico refería a un periodista a quien le exigían el estar colegiado en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, como requisito para poder ejercer su profesión. En ese sentido, en la sentencia n° 2313-1995 del 09 de mayo de 1995, el Tribunal Constitucional de Costa Rica, adoptando el criterio de la Corte IDH vertido desde 1985, expresó lo siguiente:

“La Corte emitió la Opinión Consultiva, bajo el N° OC-5-85, del 13 de noviembre de 1985 y unánimemente declaró: 1.- “que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”... debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada.”

Es de alta relevancia indicar que, en la sentencia de comentario, hubo expresa manifestación del Tribunal Constitucional costarricense en el sentido de acoger la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte IDH.

b.- El caso que originó la reforma penal costarricense y la doble instancia en dicha materia (2004): Otro supuesto de interés está referido al caso Mauricio Herrera vs Costa Rica, sentencia del 02 de julio del 2004, referido a la responsabilidad internacional del Estado por la imposición de una condena por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar dicha medida en los términos del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, la Corte Interamericana expresó:

“158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una

sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. (...)165. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida.”

Inclusive, el fallo de la Corte IDH antes mencionado, propició toda una reforma legal a lo interno del Estado costarricense, para introducir la doble instancia en materia condenatoria penal.

c.- La fecundación in vitro (FIV) y la orden de la Corte IDH (2012): De una forma breve, el recuento inicia cuando en 1995 se emitió un decreto ejecutivo (n° 24029-S) que regulaba la técnica de la FIV, el cual fue declarado como inconstitucional por la Sala Constitucional a través de la sentencia n° 2306-2000, bajo la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lo cual, se estimó que la vida humana se tutela a partir de la concepción.

El tema fue llevado ante la Corte IDH y, en el 2012, mediante el caso *Artavia Murillo y otros vs Costa Rica*, dicha Corte declaró la inconveniencia de lo resuelto por la Sala Constitucional de Costa Rica y, al respecto, señaló que la vida humana se protege a partir de la implantación del ovulo fecundado en el vientre materno y ordenó al Estado costarricense a aplicar la técnica FIV. Al respecto, la Corte Interamericana afirmó:

“189. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entiende el término “concepción” desde el momento en que ocurre la implantación, razón por la cual considera que antes de este evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. (...) 16. (...) La Corte concluye que la Sala Constitucional partió de una protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia. Asimismo, la interferencia tuvo efectos discriminatorios. Además, teniendo en cuenta estas conclusiones sobre la ponderación y lo ya señalado respecto al artículo 4.1 de la Convención (...), la Corte no considera pertinente pronunciarse sobre los alegatos del Estado respecto a que contaría con un margen de apreciación para establecer prohibiciones como la efectuada por la Sala Constitucional.”

De esa forma, con sustento en lo resuelto por la Corte IDH, algunas personas acudieron ante la Sala Constitucional mediante la vía del recurso de amparo, con el objeto de solicitar que se les aplicara la técnica FIV, sin embargo, nuevamente, bajo una lamentable decisión del Tribunal Constitucional costarricense, se declaró sin lugar el recurso bajo la perspectiva de que, al respecto, existía reserva de ley, de modo tal que, mientras no existiera una ley que regulara la técnica FIV, la misma no sería aplicable en Costa Rica.

Con posterioridad, en el 2015, es emitido otro decreto ejecutivo (n° 39210-MP-S) por parte del Poder Ejecutivo costarricense para regular la técnica FIV, pero, desafortunadamente, la Sala

Constitucional volvió a declarar la inconstitucionalidad de esta nueva norma, bajo el sustento de la reserva de ley que estimó era imperante en esa materia.

Así, el tema escaló de nuevo ante la Corte IDH, que ejerciendo su competencia de supervisión de cumplimiento de sentencias, en resolución del 26 de febrero del 2016, señaló que las resoluciones de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre la FIV, constituían un obstáculo para la efectividad de lo resuelto por la Corte IDH en el caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, de modo que, por decisión de la Corte Interamericana, se puso en vigencia la norma reglamentaria estimada como inconstitucional y a, partir de ello, se aplicó la técnica FIV en Costa Rica.

4.- El matrimonio igualitario y los derechos patrimoniales derivados de parejas del mismo sexo (2018): Otro supuesto que refleja un diálogo vertical entre cortes, aconteció con el reconocimiento de uniones entre parejas del mismo sexo.

El primer caso que sobre este asunto llegó a la Sala Constitucional sucedió cuando una pareja del mismo sexo solicitó a dicha Sala que se reconociera su relación como unión de hecho para acceder al seguro social y, dentro del fundamento de su solicitud, se encontraba que se equiparara su situación con lo resuelto por la Corte IDH en el caso Atala Riffo vs Chile. Al respecto, bajo una votación dividida, en sentencia n° 5590-2012 del 02 de mayo del 2012, la Sala Constitucional estimó lo siguiente:

“Por otra parte, en cuanto a la solicitud de aplicar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe señalarse que lo planteado por el accionante resulta improcedente en el tanto el voto de mayoría de la Corte, no desarrolla ni realiza referencia alguna al tema de la conyugalidad homosexual; la seguridad social homosexual; la democratización de instituciones social y jurídicamente reconocidas a las personas heterosexuales, ni los derechos reproductivos de las personas homosexuales. En dicha resolución se desarrolló el tema del derecho a la vida familiar como derecho humano, señalándose que no es posible decidir sobre la custodia y cuidado de los hijos con base en la orientación sexual de los progenitores. Es claro que el “juicio base” de la resolución de la CYDH, en nada resulta aplicable al caso concreto. En aquel caso tenemos como supuesto fáctico dos menores de edad que no pueden relacionarse con su progenitor con inclinación homosexual. Menores producto de un matrimonio disuelto. En el caso que nos ocupa, lo pretendido es el reconocimiento de la unión de hecho entre personas del mismo sexo para tener acceso a seguro social de su conviviente.”

En una segunda etapa, en lo concerniente a las uniones entre personas del mismo sexo, tal como se mencionó antes, acaeció la Opinión Consultiva n° OC-24/17 del 24 de noviembre del 2017, emitida por la Corte IDH, que precisamente se generó a partir de una consulta realizada por Costa Rica, en relación con el matrimonio igualitario y las relaciones entre personas del mismo sexo. En dicha opinión consultiva, la Corte IDH expresó lo siguiente:

“(...) la Corte considera que si bien es cierto que éste de manera literal reconoce el “derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia”, esa formulación no estaría planteando una definición restrictiva de cómo debe entenderse el matrimonio o cómo debe fundarse una familia. Para esta Corte, el artículo 17.2 únicamente estaría estableciendo de forma expresa la protección convencional de una modalidad particular del matrimonio. A juicio del Tribunal, esa formulación tampoco implica necesariamente que esa sea la única forma de familia protegida por la Convención Americana. (...) En efecto, una interpretación restrictiva del concepto de “familia” que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la Convención. La Corte recuerda que el objeto y fin de la Convención Americana es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”, sin distinción alguna. (...) El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana. (...)”

De esa forma, la Corte IDH evacuó la consulta indicada y estableció el reconocimiento de derechos de índole familiar para parejas del mismo sexo. Ello, posteriormente, en el marco de un diálogo vertical entre cortes, fue confirmado por la Sala Constitucional de Costa Rica en la sentencia n° 12782-2018 del 08 de agosto del 2018, cuando al analizar la constitucionalidad del artículo 14.6 del Código de Familia que impedía el reconocimiento de uniones entre parejas del mismo sexo, afirmó:

“(...) la norma cuestionada impide tanto la formalización de un matrimonio como el reconocimiento de una unión de hecho entre personas del mismo sexo por la sola razón de la orientación sexual, lo que contraría la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida que esta ha venido a expandir la cobertura de protección en esta materia.”

Consecuentemente, en esa sentencia, la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta en contra del artículo 14.6 del Código de Familia que establecía como “legalmente imposible” el matrimonio entre parejas del mismo sexo y le otorgó 18 meses a la Asamblea Legislativa para que estableciera mediante ley lo pertinente, con el fin de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de parejas entre personas del mismo sexo, siendo que, al finalizar dicho plazo, por la facultad de dimensionar en el tiempo y espacio los efectos de la sentencia, la norma impugnada y declarada inconstitucional, cesaría en su eficacia, como en efecto sucedió.

Cabe agregar que, en la misma sentencia n° 12782-2018 del 08 de agosto del 2018, por mayoría, la Sala Constitucional confirmó la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte IDH.

5.- La impugnación de las decisiones del TSE (2005). Por último, no en todos los supuestos el Estado costarricense ha adoptado lo que la Corte IDH ha resuelto en casos particulares, pues, por ejemplo, en el caso *Yatama vs Nicaragua* del 23 de junio del 2005, la Corte Interamericana se refirió

a la inexistencia de recurso en contra de lo que resolvía el órgano electoral de Nicaragua y, sobre el particular, afirmó lo siguiente:

“173. No existía ningún recurso judicial contra la decisión que adoptó el Consejo Supremo Electoral el 15 de agosto de 2000, por lo cual ésta no podría ser revisada, en caso de que hubiere sido adoptada sin observar las garantías del proceso electoral previsto en la Ley Electoral ni las garantías mínimas previstas en el artículo 8.1 de la Convención, aplicables a dicho proceso.”

175. Independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral, éste debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, (...)”

No obstante, en el caso del ordenamiento costarricense, el artículo 103 de la Constitución Política dispone que “Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.” Por ende, en este extremo, a pesar de que la irrecurribilidad de las decisiones del TSE se podría estimar como una garantía para la autonomía de la función electoral, lo cierto es que el Estado costarricense no ha dado aplicación a lo resuelto por la Corte Interamericana en un contexto similar, como lo fue el caso nicaragüense.

6.- La reelección presidencial y el voto n° 2771-2003 de la Sala Constitucional (2021): A partir de la sentencia constitucional n° 2771-2003 del 04 de abril del 2003, relativa a la reelección presidencial, surgieron en Costa Rica las discutibles cláusulas de intangibilidad de origen pretoriano que han establecido límites materiales al Poder Reformador de la Constitución.⁹

Ahora bien, cabe cuestionarse si, tales limitaciones creadas por la Sala Constitucional, mantienen vigencia a partir de lo expuesto por la Corte IDH, en su Opinión Consultiva n° 28/21 del 07 de junio del 2021, relativa a la reelección presidencial.

Dicha opinión consultiva fue emitida en relación con la consulta formulada por la República de Colombia de si la reelección presidencial indefinida constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como, si resultaba o no posible limitar

⁹ En tal sentido, el autor mantiene la posición relativa a que el Poder Constituyente Derivado, bajo la regulación actual prevista en los artículos 195 de la Constitución Política, en conjunto con los numerales 96 y 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, únicamente posee límites de procedimiento parlamentario y no materiales o de contenido; para un estudio más profundo, sobre la reforma constitucional y sus límites, puede verse Rojas Ortega, Alex. (2024). El control jurisdiccional de la reforma constitucional. Editorial Derecho Global. México y Perú.

¹⁰ En el contexto de la Opinión Consultiva n° 21/28, por reelección presidencial indefinida se entiende la permanencia en el cargo de una persona que ejerza la presidencia de la República por más de dos periodos consecutivos de duración razonable.

los derechos políticos del gobernante que busca ser reelegido y si el instituto de la reelección sería compatible con la democracia representativa.

Al respecto, en la opinión consultiva de comentario, la Corte IDH consideró lo siguiente:

“En el marco del sistema interamericano, la Corte advierte que, de la literalidad de disposiciones relevantes de la Convención y la Declaración Americana, la “reelección presidencial indefinida” no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo. (...) no se desprende de los tratados internacionales de derechos humanos que se haya reconocido la existencia de un derecho autónomo a ser reelecto al cargo de la Presidencia.”

Consiguientemente, cabe cuestionarse si, al amparo de la Opinión Consultiva n° 28/21 del 07 de julio del 2021, mantiene vigencia lo expuesto en el voto n° 2771-2003 del 04 de abril del 2003 de la Sala Constitucional de Costa Rica, siendo que, bajo la pauta interpretativa expuesta por la Corte IDH – que, a su vez, es parte del corpus iuris interamericano y forma parte del bloque de convencionalidad al que están sujetos los Estados -, la Asamblea Legislativa sí podría imponer limitaciones a la reelección presidencial, al condicionar lo establecido en el artículo 132.1 de la Constitución Política dentro del marco del derecho internacional, sin que, por ello, se deba entender que se ha producido una disminución, restricción o desmejoramiento de un derecho fundamental, ni que se haya adoptado una decisión que afecte un elemento nuclear de política fundamental del Estado, sino tan solo la restricción de un derecho que sí admite limitaciones en virtud del bien común y de la sociedad democrática.

Lo anterior, acentuado en que, tal como lo reconoció la Corte IDH en el caso Acevedo Buendía y otros vs Perú, sentencia del 1° de julio del 2009, no puede entenderse que los Estados pierdan su poder de imperio en la regulación y restricción de los derechos fundamentales, ni tampoco que toda medida regresiva, per se, sea incompatible con el corpus iuris interamericano.

Conclusiones

La tutela interna de los derechos humanos se complementa con la tutela internacional de los mismos, siendo que, en esencia, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son ideados precisamente para que sean aplicados directamente a lo interno de los Estados y, solo en caso de que esa tutela interna no se verifique, de manera subsidiaria, la protección internacional permita el goce efectivo de tales derechos.

En el caso costarricense, se puede apreciar una relación estrecha entre el Tribunal Constitucional de Costa Rica y el corpus iuris interamericano, tanto en lo que se refiere a la observancia de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como en la referencia con carácter vinculante que ha hecho la Sala Constitucional en lo relativo a los criterios dictados por la Corte IDH, sea en su función consultiva como contenciosa. Ello arroja una valoración positiva en lo tocante a la relación entre la tutela interna e internacional de los derechos humanos en Costa Rica.

Desde el punto de vista del autor, el diálogo vertical entre cortes, además de propiciar una estable relación de interacción recíproca entre la Sala Constitucional y la Corte IDH, también potencia el control de convencionalidad, respecto del cual, al menos para el autor, implica para Costa Rica adoptar, con carácter vinculante, todo criterio que externe la Corte IDH, como intérprete máxima y última del bloque de convencionalidad, de modo que, es indiferente si se trata de una sentencia o una opinión consultiva, pues en ambos casos el criterio de la Corte IDH debe entenderse como vinculante.

Además, el instituto del diálogo entre cortes, analizado desde un prisma teórico, pero también práctico, fomenta y consolida la definición de conceptos, la delimitación del núcleo esencial y alcances, en lo relativo a una serie de principios, valores y derechos que, bajo lo que podría considerarse como un derecho constitucional global, asumido así por diversas constituciones y tribunales constitucionales en el mundo, fijan un elenco internacional de garantía constitucional y convencional.

Aún quedan retos por asumir a lo interno del Estado costarricense, tales como la proyección complementaria de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, con base en la sentencia del caso Moya Chacón y otro vs Costa Rica del 23 de mayo del 2022, la definición de discriminación para personas con discapacidad, al amparo del caso Guevara Díaz vs Costa Rica del 22 de junio del 2022 o bien, los alcances del derecho a la información en el contexto de la asistencia consultiva, a partir del caso Scot Cochran vs Costa Rica del 10 de marzo del 2023. Consecuentemente, en el marco del diálogo entre cortes y, como parte del control de convencionalidad, la Sala Constitucional tendrá a su cargo tales cometidos.

Referencias

- Asamblea Nacional Constituyente. (1949). *Constitución Política de la República de Costa Rica*. Costa Rica. https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871
- Asamblea General. (1945). *Carta de las Naciones Unidas*. Organización de las Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text>
- Asamblea General. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Organización de las Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Asamblea General. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Organización de las Naciones Unidas. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights#:~:text=Todo%20individuo%20tiene%20derecho%20a,al%20procedimiento%20establecido%20en%20ésta.>
- Asamblea General. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Organización de las Naciones Unidas. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- Martínez Lazcano, Alfonso. (2023). *Diálogo entre Cortes Nacionales y Convencionales*. Transposición judicial, México.
- Miranda Bonilla, Haideer. (2023). Tensiones y conflictos entre las cortes, salas y tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista Judicial* 160, Costa Rica.
- Consejo de Europa. (1950). *Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales*. <https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1985). Opinión Consultiva n° OC-5-85, del 13 de noviembre de 1985. OEA
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004). Sentencia caso Herrera Ulloa vs Costa Rica del 02 de julio del 2004. OEA.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). Sentencia caso Yatama vs Nicaragua del 23 de junio del 2005. OEA.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Sentencia caso Acevedo Buendía y otros vs Perú, sentencia del 1° de julio del 2009. OEA
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Sentencia caso Atala Riffo vs Chile del 24 de febrero del 2012. OEA.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Sentencia caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica del 28 de noviembre del 2012. OEA.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva n° OC-24/17 del 24 de noviembre del 2017. OEA.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Opinión Consultiva n° 28/21 del 07 de julio del 2021. OEA.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina. (1992). Sentencia del 07 de junio de 1992.

- Argentina.
- Corte Suprema de Justicia de República Dominicana. (1999). Sentencia del 24 de febrero de 1999. República Dominicana.
- De Vergottini, Guisepe. (2010). *Oltre il dialogo tra le corti*. Bologna. Editorial Il Mulino, Bologna, Italia.
- Expansión. (2022). Unión Europea. <https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/union-europea>
- Ferrer Mac Gregor, Eduardo y Herrera García, Alfonso. (2013). *Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales*. In *Memoriam Jorge Carpizo, generador incansable de diálogos*. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, España.
- Organización de Estados Americanos. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=36150&nValor3=38111&strTipM=TC
- Organización de la Unidad Africana. (1981). Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf>
- Organización Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Sala Constitucional. (1990). Resolución n° 1147-1990 del 21 de setiembre de 1990. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (1992). Resolución n° 1739-1992 del 1° de julio de 1992. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (1992). Resolución n° 3435-92 del 11 de noviembre de 1992. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (1993). Resolución n° 5759-1993 del 10 de noviembre de 1993. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (1995). Resolución n° 2313-1995 del 09 de mayo de 1995. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2000). Resolución n° 9685-2000 del 1° de noviembre del 2000. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2003). Resolución n° 2771-2003 del 04 de abril del 2003. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2012). Resolución n° 5590-2012 del 02 de mayo del 2012. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2013). Resolución n° 6120-2013 del 08 de mayo del 2013. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2014). Resolución n° 12703-2014 del 1° de agosto del 2014. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2018). Resolución n° 12782-2018 del 08 de agosto del 2018. Corte Suprema

- de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2021). Resolución nº 16542-2021 del 30 de julio del 2021. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Sala Constitucional. (2021). Resolución nº 24807-2021 del 05 de noviembre del 2021. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica.
- Tribunal Constitucional español. (1991). Sentencia nº 64-1991 del 22 de marzo de 1991. España.
- Tribunal Constitucional de Bolivia. (2004). Sentencia del 05 de mayo del 2004. Bolivia.

ARTÍCULO

Los movimientos nacionalistas como claves para la solución del conflicto palestino – israelí

Nationalist movements as keys to the solution of the Palestinian-Israeli conflict

Bryan Acuña Obando ¹

Como citar:

Rojas Ortega, A. (2025). El diálogo entre Cortes: el vínculo entre la Sala Constitucional y la Corte Acuña Obando, B. (2025). Los movimientos Nacionalistas como claves para la solución del conflicto palestino – israelí. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 124-155. Doi: 10.63058/des.v19i1.312

Fecha de ingreso: 3 de enero de 2025. **Fecha de aprobación:** 22 de enero de 2025.

¹ Bryan Acuña Obando es Licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Maestría Académica en Relaciones Internacionales con énfasis en Diplomacia de la Universidad Nacional. San José, Costa Rica y Profesor de Geografía Política y Económica en la Universidad Internacional de las Américas. ORCID: 0000-0002-0793-5613. Correo electrónico: bryan.acuna@gmail.com.

Resumen

El conflicto entre palestinos e israelíes es uno de los enfrentamientos más prolongados y complejos heredados desde el siglo pasado, marcado por una serie de factores como enfrentamientos armados, desplazamientos poblacionales y movimientos diplomáticos para hacer prevalecer sus posiciones. Debido a esto, los nacionalismos juegan un rol fundamental en la acentuación de los enfrentamientos y es la base central para impulsar una solución justa y duradera al conflicto. Con la aparición del movimiento nacional judío (Sionismo) a fines del siglo XIX y el impulso del nacionalismo árabe palestino durante el siglo XX, ambos movimientos se han transformado en una plataforma identitaria y de reivindicación de los derechos de ambas poblaciones. El movimiento sionista promovió la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra ancestral de Israel, logrando su objetivo con la fundación del Estado de Israel en el año 1948. El nacionalismo palestino ha buscado la autodeterminación y el reconocimiento de un estado independiente en los territorios históricos de Palestina, llevando a la creación de organismos de representación, aunque inicialmente se enfocó en desarrollar este objetivo a través de una guerra de destrucción contra los israelíes. Entender cómo los movimientos nacionalistas contribuirían en la solución del conflicto analiza las raíces históricas y culturales de estas identidades, así como las dinámicas políticas y sociales contemporáneas, las aspiraciones de ambos pueblos puede ser clave para alcanzar una paz sostenible y justa.

Palabras clave: conflicto palestino-israelí, movimientos nacionalistas, identidad, autodeterminación, paz.

Abstract

The conflict between Palestinians and Israelis is one of the longest and most complex confrontations inherited from the past century, marked by a series of factors such as armed clashes, population displacements, and diplomatic movements to assert their positions. Due to this, nationalism plays a fundamental role in accentuating the confrontations and is the central basis for promoting a just and lasting solution to the conflict. With the emergence of the Jewish national movement (Zionism) in the late 19th century and the rise of Palestinian Arab nationalism during the 20th century, both movements have transformed into platforms of identity and the assertion of the rights of both populations. The Zionist movement promoted the creation of a national home for the Jewish people in the ancestral land of Israel, achieving its goal with the founding of the State of Israel in 1948. On the other hand, Palestinian nationalism has sought self-determination and the recognition of an independent state in the historical territories of Palestine, leading to the creation of representative bodies, although initially focused on achieving this objective through a war of destruction against the Israelis. Understanding how nationalist movements could contribute to solving the conflict involves analyzing the historical and cultural roots of these identities, as well as contemporary political and social dynamics. The aspirations of both peoples could be key to achieving sustainable and just peace.

Keywords: Palestinian – Israeli conflict, nationalist movements, identity, self-determination, peace.

Planteamiento del problema

El sionismo y el movimiento palestinismo² son cruciales para comprender las identidades de sus respectivos pueblos y los elementos que influyen en acuerdos definitivos en la zona, determinando factores de cohesión y de ruptura en la posibilidad de establecer un acuerdo definitivo que beneficie a ambos lados.

Por esta razón es imperativo mencionarlos como elementos que los vincula con el territorio o que tiene determinados elementos ideológicos, sino que, incluso, en la necesidad de llegar a un acuerdo para lograr beneficios para las poblaciones, las cuales son las que generan su mayor desgaste en los enfrentamientos actuales.

La identidad nacional representa un pilar fundamental para la construcción social de los dos pueblos en medio de las disputas. El sionismo, con su aspiración de crear un hogar nacional, así como el palestinismo, con su lucha por la autodeterminación y el reconocimiento de un Estado propio para esta población árabe, han dado forma a las dinámicas políticas y sociales en la región de acuerdo con Shapira (2012) y Khalid (1997)

Ambos movimientos trascienden lo ideológico o político, representando pertenencia y resistencia frente a un contexto histórico marcado por colonialismo, conflictos, desplazamientos y promesas incumplidas. Cualquier intento de resolución queda incompleto sino se toma esto en consideración, la identidad es básica para plantear respuestas idóneas a los diferentes desafíos que señalan los conflictos en Medio Oriente.

Inclusive, esto puede funcionar como base para otros conflictos regionales, con otras aspiraciones luchando por autodeterminarse, o resolver divisiones territoriales apegadas a las realidades de los diferentes grupos que los componen. Así pues, grupos como los kurdos, los baluchis, yazidíes, árabes ahwazíes, asirios, bereberes e incluso drusos, desean que sus identidades sean respetadas, en una lucha identitaria, territorial, ideológica, en fin, multidimensional (Waxman, 2019)

Ante esto, el artículo pretende responder a la interrogante ¿Cómo los movimientos nacionalistas del sionismo y el palestinismo han influenciado en el desarrollo del conflicto palestino – israelí y son claves para la construcción de una solución de paz justa y duradera?

² Palestinismo es un término del siglo XX para designar el nacionalismo palestino en el territorio, si bien no hay una fecha exacta o un autor que haya acuñado el concepto, autores como Edward Said, Ilan Pappé, Rashid Khalidi, Fayez Sayegh, Walid Khalidi, entre otros, lo caracterizan para mencionar la importancia de este como un movimiento nacional.

De ese modo, se plantea “Analizar los movimientos nacionalistas como claves para la solución del conflicto palestino israelí”, ante lo cual se establecen los siguientes tres objetivos específicos.

1. Describir la historia, evolución e impacto de las identidades nacionales en el conflicto palestino – israelí.
2. Examinar el conflicto y sus posibles soluciones por medio de las teorías realistas, liberalista y crítica de las Relaciones Internacionales.
3. Evaluar el potencial de los movimientos nacionalistas como factores que puedan contribuir a posibles soluciones o acuerdos en el conflicto palestino-israelí para la construcción de una paz justa y duradera.

Para esto, se ha hecho uso de revisión documental e histórica, así como análisis de casos y de política para poder tener una perspectiva teórica y académica, el estudio de casos comparativos con otros conflictos y la contribución en la resolución de enfrentamientos, así como la presencia de actores importantes en la evolución del conflicto y en las propuestas de paz.

Justificación

De acuerdo con Mena (2022), el conflicto palestino-israelí es considerado “imposible” por su complejidad y raíces profundas, se prolonga debido a múltiples factores, incluida la influencia de actores internacionales, dificultando su resolución. Por esto, es importante considerar la multidisciplinariedad que se ha utilizado para analizarlo, concentrado en aspectos como la religión, el territorio, los recursos estratégicos y la geopolítica. Todos son primordiales para entender las dificultades del conflicto, sin embargo, es el análisis de los movimientos nacionalistas en ambas partes del conflicto lo que podría dar una solución integral.

La premisa de que tanto el nacionalismo israelí como el palestino pueden plantear un recurso vital en la resolución de conflictos se fundamenta en que la identidad nacional, así como la ideología, están estrechamente vinculados a las identidades colectivas, al derecho de autodeterminación y el reconocimiento mutuo. Según Gelvin (2021):

El sionismo y el nacionalismo palestino fueron creados en el mismo molde. Además, si bien el advenimiento del sionismo y el advenimiento de un nacionalismo palestino distinto nunca fueron conclusiones inevitables, no puede haber duda de que en un mundo en el que los estados-nación brindan el modelo para organizar comunidades políticas, los judíos y los habitantes indígenas de Palestina (aún no podemos llamarlos palestinos porque aún no se había inventado una identidad palestina) afirmarían pertenecer a alguna nación, ya sea la suya o la de alguien más, y abrazarían algún credo nacionalista. (p.36)

El sionismo y el palestinismo son movimientos claves en las aspiraciones estatales de ambos

pueblos. Data de finales del siglo XIX, buscó una patria judía en respuesta a siglos de persecución, alcanzando la creación del Estado de Israel en el año 1948, transformando totalmente la región (Schultz, 2013).

El palestinismo lucha por un Estado independiente frente a obstáculos como tensiones históricas, pérdidas de territorios y disturbios civiles geopolíticos, incluyendo enfrentamientos internos que han erosionado las fuerzas de los grupos de poder palestinos, criticando la falta de apoyo internacional o el dominio territorial sobre zonas designadas para los palestinos por parte de Israel (Al-Khalidi, 1997).

Las identidades nacionales de ambos pueblos están profundamente ligadas a los territorios en disputa, lo que hace inviable cualquier solución que no contemple y respete sus aspiraciones nacionales. Según Edward Said (2013):

Nada de lo que he dicho en este libro debe entenderse salvo como un reconocimiento de la historia palestina y judía, en feroz conflicto mutuo durante determinados períodos de tiempo, pero fundamentalmente reconciliable si ambos pueblos hacen el intento de verse el uno al otro dentro de una perspectiva histórica común. (p.325)

La importancia de los movimientos nacionales radica en su capacidad para movilizar a la sociedad en torno a proyectos, como la creación de instituciones y el fortalecimiento de la cohesión interna. Este proceso requiere de un liderazgo preparado para negociar desde la igualdad y el respeto mutuo. Un ejemplo de esto ha sido la necesidad de impulsar una la solución de dos Estados, promovida por actores nacionalistas moderados israelíes y palestinos (Gelvin, 2014), aunque, por supuesto, esta posición se ve permeada dependiendo de las circunstancias coyunturales; a pesar de esto, muchos apuestan por la solución bipartita y por lo tanto se deben proponer alternativas de solución desde nuevos enfoques.

De este modo, estudiar el papel de los movimientos nacionalistas permite comprender las raíces profundas del problema, explorando soluciones en el reconocimiento y la coexistencia de dos entidades nacionales separadas pero interconectadas. Esto proporciona nuevos elementos para diseñar políticas de paz, ofreciendo una propuesta que combine la justicia histórica con la necesidad de un futuro compartido.

El aporte a las RRII se relaciona con la promoción de la cultura de paz y los procesos de resolución de conflictos. Se aportan argumentos para la búsqueda de respuestas e intentos de romper con el “nudo gordiano” de los enfrentamientos entre los actores primarios que se enfrentan. Además, a nivel costarricense, se puede brindar también el aporte enfocado en el carácter de la cultura de paz y basado en los ejes de la política exterior conforme a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (s.f.):

Tabla 1. Ejes de la política exterior costarricense.

EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR	IMPLICACIONES
La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional.	Prioriza la protección del sistema democrático, la integridad del territorio costarricense y la autonomía en la toma de decisiones dentro del país.
La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.	Refuerza el compromiso con la dignidad humana, asegurando el respeto y la defensa de los derechos fundamentales a nivel nacional e internacional.
La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial.	Busca contribuir a un entorno de paz y estabilidad, abogando por el desarme y la seguridad como pilares para el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.
El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo.	Sostiene la importancia de las leyes y acuerdos internacionales y promueve la colaboración entre naciones para resolver problemas globales de forma conjunta.
La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales.	Apoya prácticas y políticas que protejan el medio ambiente y promueve una participación en negociaciones globales para enfrentar retos ambientales.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Se desarrollan los componentes que justifican la propuesta con la cual se espera impulsar otros mecanismos de resolución para dar respuesta a los principales elementos de tan complejo enfrentamiento y realizar una propuesta alternativa al conflicto.

Antecedentes

Las propuestas para la resolución del conflicto entre palestinos e israelíes han tenido una serie de impulsores, incluso desde la academia. Y cuando se menciona esto se puede citar algunos antecedentes investigativos al respecto.

En primer lugar, el surgimiento del sionismo ocurre en Europa con las aspiraciones de establecer un hogar nacional en Palestina, entonces bajo dominio del Imperio Otomano. El movimiento se concentró en la creación de una identidad colectiva judía en un territorio propio, que, para Theodor Herzl, considerado “el padre del movimiento sionista” el antisemitismo en Europa solo podía resolverse mediante la creación de un Estado propio independiente (Herzl, 1896), así lo planteó en su libro *Der Judenstaat* (1896).

De acuerdo con Bregman (2016), la idea de la autodeterminación y del renacimiento nacional judío se transformó en una causa política concreta para los judíos en busca de seguridad y reconocimiento en un mundo hostil (p.12), por esta razón se justificó la búsqueda de la autodeterminación en un territorio con el cual sentían un vínculo histórico.

El nacionalismo árabe se consolidó entre los pueblos bajo el dominio otomano y en particular el

nacionalismo árabe – palestino se incentivó como un movimiento en oposición a la inmigración judía y al movimiento nacional judío. Es así como, de acuerdo con Khalidi (1997), los árabes palestinos comenzaron a identificarse con su identidad árabe y posteriormente con su identidad palestina.

Se debe mencionar que el palestinismo se identificaba dentro del contexto nacionalista árabe (panarabista) promoviendo la unión de todos los pueblos árabes contra el colonialismo europeo, inicialmente se identificaban con las ideas nacionalistas de Gamal Abdel Nasser, líder egipcio y promotor del panarabismo, pero después de la derrota en la guerra de 1967 y con el surgimiento de movimientos nacionalistas religiosos (panislamistas) en los años 70, el nacionalismo palestino empezó a evolucionar hacia una identidad más autónoma.

Según Edwards y Farrell (2010), la derrota en 1967 y el surgimiento de movimientos islamistas a nivel regional influyeron en el nacionalismo palestino, que comenzó a adquirir matices panislámicos a medida que el panarabismo perdía credibilidad (p.112).

Con el auge del islamismo en los años 80, el palestinismo adoptó estos matices, ante la aparición de grupos como la Yihad Islámica y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que combinaban la lucha nacionalista palestina con principios islámicos, buscando inspirar una identidad de resistencia basada en la religión y la solidaridad islámica más amplia, como lo plantea Gunning (2007).

También, Joaquín Kirjner (2018), de la Universidad de la Plata (Argentina), en su tesis “Conflicto y construcción de identidades nacionales en Israel y Palestina (1948-1967)”, plantea que si se entiende que la construcción de la identidad nacional, mitos, narrativas y memorias colectivas se funda en un proceso dialéctico de oposición a un “Otro”, entonces puede comprenderse al conflicto palestino-israelí como un conflicto inextricable (p.130), en este sentido las creencias sociales llevarían a deslegitimar al oponente, presentando a cada una de las partes como una víctima del otro, de manera un tanto simplista.

Martín Martinelli (2016), en su artículo “La construcción de la identidad nacional palestina” de la Universidad Nacional de Luján (Argentina), menciona los factores que dieron origen a que este proceso identitario tomara importancia. Inicialmente se podría señalar que esta fue en respuesta al sionismo, sin embargo, el propio autor señala que el fracaso del proceso estatal palestino estaría sujeto a factores externos como los nacionalismos otomanos y árabes, así como el rol de potencias extranjeras vinculadas a los procesos de partición estatal en las épocas de post guerra del siglo XX (p.26).

Así la importancia de la identidad desde los paradigmas de identificación nacional que se fueron gestando en la región con la constitución de Estados nacionales, ya que anteriormente los nacionalismos se vinculaban a una cuestión étnica y lingüística y de ahí la importancia de

mencionar el nacionalismo otomano, el arabista, etc., de igual manera, el nacionalismo judío es el que va en algún momento a identificar su colectivo por medio de una identidad en este caso asociado a la identidad judía contemplada en la ley judía (Halajá).

Yeiko Mena (2022), en su tesina para la Universidad Internacional de las Américas (Costa Rica) “Análisis del conflicto palestino – israelí en el período 2014 – 2021 desde el enfoque de la construcción de la identidad nacional de ambas poblaciones”, plantea que la solución al conflicto parte por la necesidad del reconocimiento entre ambas partes a tener su Estado, señalando la importancia del tema identitario manifestando que el conflicto implica reconocimientos en pugna, de la cual su solución exige un cambio en la mentalidad del colectivo o la imposición de un grupo sobre otro, como ha ocurrido históricamente, siendo este el elemento que más se recalca, así como advierte que la diferencia de las ideologías entre ambas poblaciones ha complicado aún más el conflicto basado en aspectos territoriales y religiosos, lo que no ha permitido que se logre una solución integral (pp. 87-88 y 90).

Acerca de las identidades de los actores involucrados, Sidra Rehan (2023) en su documento “El conflicto entre Israel y Palestina y la política de la Liga Árabe para su resolución” para la Universidad Linneo (Suecia), planteando desde una perspectiva constructivista, menciona que la identidad define la manera cómo un actor se percibe, así como sus responsabilidades y relaciones, lo que influye en sus intereses y acciones, así, conforme al constructivismo, la identidad guía las decisiones de los Estados, lo cual evoluciona frecuentemente conforme a su interacción con otros actores (pp.44-45).

Menciona la necesidad de crear una identidad que permita a un colectivo permanecer en el tiempo y, por el otro lado, la de prevalecer en esa identidad de manera que no sea cuestionado su derecho de defensa, por eso es que, a pesar de los años, el conflicto se mantiene en constante actividad por cuanto las identidades nacionales siguen evolucionando y tomando forma.

Por último, en este apartado, sobre la necesidad de buscar rutas de solución al conflicto y no solamente enfocarse en explicarlo en todo su trasfondo y múltiples elementos, Petri y Acuña (2022), en su artículo titulado “El Estado desmilitarizado costarricense: ¿un modelo de resolución de conflictos” publicado en FLACSO (Costa Rica), destaca la necesidad de buscar opciones hacia la pacificación más que perpetuar el conflicto que ya cumple varias décadas de desgaste (p.205).

De este modo, se puede plantear que es fundamental encaminar los estudios en soluciones y promoción de la paz, por encima de señalar únicamente a los responsables del conflicto quedándose en un círculo interminable de narrativas. Ejemplos de esto son los acuerdos de paz de 1979, 1994 y 2020, demostrando que cambios paradigmáticos son posibles.

Marco teórico

Se han tomado como base tres “pilares” fundamentales los cuales son la Teoría del Nacionalismo y

la Construcción de la Identidad, donde se puede señalar la idea de (Hobsbawm, 1992, como se citó en González, 2014) desde una visión marxista argumentando que las naciones son construcciones políticas surgidas de las necesidades de grupos de poder.

Así, se plantean dos elementos sustanciales. Por un lado, el nacionalismo como fuerza identitaria, de acuerdo con Brubaker (1996) es importante para la construcción de la identidad colectiva y la cohesión interna en un pueblo (pp.55–76). De este modo, se puede mencionar que el sionismo y el palestinismo funcionan como motores identitarios fundamentales, no solo en el tema de la pertenencia a una nación, sino también vinculado a una tierra histórica.

En cuanto a la teoría del Nacionalismo y la Construcción de la identidad, Segev (2001), señala que la narrativa histórica de ambos pueblos ha sido crucial para legitimarse sobre la región en disputa y las razones por las que se ve uno al otro (pp. 33–57). Así se establecen la percepción que tiene cada uno con respecto al otro y sobre los derechos que poseen en los territorios disputados.

Como segundo pilar fundamental, se encuentran las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales. En este aspecto, se refiere a tres elementos básicos para el análisis, primero la Teoría Realista de las RRII, por medio de esta, se puede realizar varias posiciones que se asocian al conflicto entre palestinos e israelíes.

De acuerdo con Hans Morgenthau (1948), uno de los padres del Realismo Clásico, los actores primarios actúan principalmente por sus intereses nacionales y la necesidad de asegurar su sobrevivencia. Por esto, en el marco del conflicto, ambos grupos pretenden maximizar su poder y seguridad a través de estrategias políticas y acciones territoriales.

Mearsheimer (2001), incorpora en la teoría realista el concepto de realismo ofensivo (2003) con el cual los actores van a procurar guardar sus distancias en cuanto al ejercicio del poder con respecto a sus competidores para poder mantener ventajas que puedan poseer estructuralmente (p.37). Es así como entre palestinos e israelíes se establece que ambos han reclamado reivindicaciones territoriales, históricas y políticas para proteger sus identidades y su eventual supervivencia.

El segundo elemento sobre las teorías clásicas de las RRII es la teoría liberal donde se enfatiza la importancia de las instituciones internacionales por medio de la multilateralidad y la negociación de acuerdos. La decisión de no renunciar a una salida diplomática destaca al observar intenciones de una respuesta no violenta, por ejemplo, los Acuerdos de Oslo o los Acuerdos de Abraham, tal y como lo plantea Priego (2020).

En su ensayo sobre la Paz Perpetua (1795), Immanuel Kant se destaca como un precursor del liberalismo moderno por medio del cual se puede proponer desde el establecimiento de democracias o repúblicas, la multilateralidad, diplomacia, derechos básicos de los ciudadanos y la asociación de Estados en un modelo federativo y pacífico.

Al mencionar estos elementos como parte de un planteamiento hacia la paz entre palestinos e israelíes requiere no solo la implementación de políticas entre ellos, sino la necesidad de transformar las relaciones como están concebidas hasta este momento, fomentando una solución donde las necesidades de ambas partes se aborden desde el marco del respeto y la fortaleza institucional.

Como tercer elemento se encuentra el marco constructivista donde según Wendt (1999), los intereses de los actores del sistema internacional no están fijos o inamovibles, sino que se van construyendo conforme a las interacciones que realicen entre sí. De esta manera, lograr resolver la idea que el otro es “enemigo” debe ser deconstruido y permitir enfocarlo hacia una percepción más constructiva a través del reconocimiento en el derecho de existencia ambos en el territorio.

Como último pilar del artículo se encuentra la Cultura y la Resolución de Conflictos, planteado también desde dos enfoques desprendidos. En primer lugar, la construcción de la cultura de paz. En este, el marco costarricense considera los principios de paz, desarme y respeto por los derechos humanos como foco las propuestas de resolución del conflicto planteado por Petri y Acuña (2022).

Por otro lado, se encuentra la reconciliación identitaria proponiendo, en un inicio como base, las propuestas realizadas por Said (1979) sobre la necesidad de reconocer la narrativa y la historia del otro, la superación de las percepciones simplistas y deshumanizantes de la contraparte, así como buscar una narrativa común (pp.55-57).

Las propuestas de los autores en el presente documento no implican descartar otros que tengan aportes para impulsar esa cultura de paz y la resolución de conflictos, pero sirven de base para tener un panorama amplio. El marco teórico propuesto en este estudio proporciona bases para la comprensión del conflicto palestino-israelí con perspectivas que incluyen el nacionalismo, las RRII y la cultura de paz.

Al examinar el nacionalismo y la construcción de identidad, observamos cómo ambos pueblos han fomentado narrativas históricas y simbólicas que refuerzan sus identidades y reclamos territoriales, y crean percepciones y tensiones complejas que dificultan la coexistencia pacífica. Este enfoque ayuda a contextualizar el conflicto en el marco de una construcción identitaria que ha afectado profundamente las posiciones políticas y regionales de los dos grupos.

De ese modo, al integrar las teorías clásicas de las RRII y el constructivismo, así como el concepto de cultura de paz y reconciliación, se enfatiza la importancia de enfoques alternativos destinados a promover el reconocimiento y el respeto mutuos.

Para esto, se deben cambiar las hostilidades a través del diálogo, la diplomacia, y el fortalecimiento de la multilateralidad. Al combinar elementos de cultura y reconciliación, inspirados en modelos de paz como el costarricense, se plantean propuestas más integrales que resuelvan las raíces profundas del conflicto hacia la coexistencia pacífica.

Metodología

El artículo utiliza un enfoque cualitativo, con conceptos tales como identidad nacional, movimientos nacionalistas y su influencia en el conflicto palestino – israelí. De acuerdo con Ortiz (2015):

Las distintas denominaciones enfatizan algunas de las características más relevantes de la investigación cualitativa: los significados que los sujetos de la investigación asignan a sus acciones, el contexto del estudio, la relación entre el investigador y los que están siendo estudiados, y el enfoque de una manera de investigar utilizada básicamente para describir las experiencias de vida (discursos y comportamientos) y darles significado a partir de observaciones sobre la realidad (p.28).

Este enfoque permite profundizar los antecedentes históricos y teóricos, así como las características de los principales actores que han surgido a lo largo del conflicto y en las propuestas de paz. En cuanto al tipo de investigación, esta es exploratoria y descriptiva, describiendo y analizando las raíces temporales y culturales de los movimientos nacionalistas en el conflicto. Además, se exploran las teorías y perspectivas, permitiendo entender cómo estos movimientos podrían contribuir a una solución pacífica y duradera.

La parte exploratoria incluye un análisis en profundidad de los movimientos nacionalistas comenzando con enfoques menos tradicionales para la resolución de conflictos. Tradicionalmente, este conflicto ha sido estudiado desde la perspectiva de la geopolítica, los recursos y los intereses estratégicos. En cambio, este artículo explora cómo las identidades nacionales de ambas partes pueden formar la base para una solución pacífica y justa.

El documento explora la influencia del nacionalismo judío y el nacionalismo palestino, examinando cómo estos movimientos dieron forma a las aspiraciones regionales, la política y cómo es la sociedad. El objetivo de este enfoque es revelar elementos que no se han tenido plenamente en cuenta en las discusiones de paz tradicionales, como la importancia del reconocimiento mutuo de la identidad y los derechos históricos, así también como soluciones alternas a los elementos de estadidad per se y abrir las posibilidades de un modelo confederal o alguna otra respuesta que quizás no ha sido tomada en cuenta en las últimas décadas.

El enfoque descriptivo permite un análisis detallado del desarrollo histórico de los movimientos nacionalistas, destacando cómo el sionismo y el palestinismo surgieron y se consolidaron como fuerzas fundamentales. Así, se incluye una descripción de los eventos, historias y actores relevantes que marcaron el desarrollo de las dos identidades. Describe cómo estos movimientos influyen en la dinámica del conflicto, desde los reclamos territoriales hasta los esfuerzos de autodeterminación. Las investigaciones muestran que cada movimiento no sólo construye identidad, sino que también afecta la conciencia y la posición política de los pueblos de los dos territorios, lo que contribuye a crear cohesión interna y confrontación con el “otro”. El enfoque descriptivo se utiliza para detallar

soluciones propuestas que tienen en cuenta el papel del nacionalismo, como el modelo de dos naciones o el enfoque de dos naciones. Al analizar estos patrones, el estudio describe cómo los movimientos nacionalistas pueden contribuir a un marco de paz que respete las aspiraciones de los dos pueblos y promueva la coexistencia.

Mientras tanto, el diseño de la investigación elegido para este trabajo es el estudio de caso comparativo, (Mateo, 2001, como se citó en Ortiz, 2015) para esto señala que:

el estudio de casos como método investigación para el análisis de la realidad, tiene una gran importancia en el ámbito de las ciencias sociales, siendo el enfoque tradicional de la investigación clínica. Consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas y se orienta a la comprensión profunda de una realidad singular (individuo, familia, grupo, institución social o comunidad) (p.75).

Por esto, debido a que la investigación analiza el conflicto palestino-israelí en el contexto de los movimientos nacionalistas, se puede comparar con otros conflictos donde el nacionalismo tiene un rol similar, y de este modo nutre el análisis y extrae aprendizajes útiles como respuesta para el tema abordado.

Para el análisis de la población se hace uso de documentos históricos, textos académicos, estudios de caso y teorías que puedan ser relevantes para el estudio de los movimientos nacionalistas y su influencia en el conflicto. Mientras que la muestra se toma en función de la relevancia y la representatividad de los objetivos de la investigación, se concentra en los siguientes cuatro criterios:

- Relevancia temporal: desde el surgimiento de los movimientos sionismo y palestinismo.
- Importancia académica y teórica: incluyendo textos y estudios con teorías como el nacionalismo, la construcción de identidad y la resolución de conflictos y cultura de paz.
- Representatividad geopolítica y cultural: por medio de documentación que explore de manera equilibrada las posiciones, aspiraciones y desafíos de ambos movimientos nacionales.
- Fuentes contemporáneas y análisis actuales: para brindar vigencia al análisis que no aborde únicamente lo coyuntural ni que tampoco se encuentre en una dinámica desfasada en el tiempo. Se hará énfasis en las interpretaciones hacia la paz.

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se concentra en el análisis de datos. De acuerdo con Ortiz (2015), en el análisis cualitativo se identifican contenidos claves, se establecen ejes temáticos relacionados con actores, situaciones y labores, evaluando su generalidad y aplicación en otros casos (pp.84–85).

El proceso de recolección de datos consistió en seleccionar y revisar fuentes bibliográficas y documentales relevantes, como artículos y textos teóricos. Posteriormente, se organizarán los datos en categorías temáticas para facilitar su análisis y comparación.

Se pretende mantener un enfoque objetivo sobre el conflicto, reconociendo que existen complejidades culturales e históricas. Se evita realizar juicios de valor para mantener la neutralidad en el análisis, aun así, se reconoce que existen limitaciones de carácter material o que algunas fuentes por sí mismas posean análisis subjetivos o sesgos sobre elementos tales como la identidad o el nacionalismo, lo que podría generar dudas ante lo planteado.

Desarrollo

Historia y evolución de las identidades nacionales en el conflicto palestino – israelí

Evolución y desarrollo del movimiento nacional judío

El movimiento nacional judío, conocido como sionismo, fue un fenómeno político, cultural y social que surgió en el siglo XIX en respuesta al antisemitismo y a la exclusión y el desarraigo de siglos de antigüedad de las comunidades judías en Europa y otros lugares.

Este movimiento busca establecer una patria nacional para el pueblo judío en la tierra de sus antepasados, la Tierra de Israel. Fue un proceso progresivo que respondió, además, a un rechazo hacia la identidad judía como un movimiento nacional. De acuerdo con Cyjon (2021), entre los siglos XVIII y XIX, las revoluciones como la industrial, la francesa y la americana marcaron la modernidad, mientras que el iluminismo judío (Haskalá), promovió el acceso al conocimiento universal y la modernización de la religión, posteriormente el sionismo surgiría como una revolución política única con impacto global influenciada por el llamado “Affaire Dreyfus” (p.8).

El sionismo no es un movimiento monolítico, sino que tiene diferentes corrientes que en ocasiones en lo único que coinciden es en el deseo de establecer una patria nacional para los judíos. Incluso, Sachar (2007) los caracteriza entre “Sionistas generales” y aquellos que son parte de algún grupo político específico o con corrientes ya sean ideológicas o religiosas (p.297).

Tras el colapso otomano después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tomó el control de Palestina bajo un mandato de la Liga de Naciones. Durante este período, el sionismo creció significativamente. Con la llegada del Imperio Británico, se buscó alguna especie de consenso para garantizar que el proyecto sionista tuviera éxito en la zona, ya que el propio David Ben Gurión (ex primer ministro de Israel) veía las dificultades existentes entre el proyecto nacional judío y los intereses del proyecto nacionalista árabe, incluyendo los movimientos en la Palestina Británica (Shlaim, 2015, p.54). Así, con la Declaración Balfour, impulsada por las alianzas sionistas con los británicos, se promovió un proyecto adoptado incluso por la Liga de las Naciones y las Naciones

Unidas posteriormente para lograr impulsar la creación de un “Hogar Nacional judío”.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la migración y compra de territorios por parte de los judíos hacia Palestina se incrementó, siendo el refugio contra el antisemitismo global, situación que tendría como clímax la declaración de independencia de Israel en 1947. Inclusive, de acuerdo con Morris (2001, p.939) en muchos casos, la compra de tierras se vio más restringida por una situación económica que por las limitaciones de los imperios o por la presión nacionalista árabe.

La implementación del plan de partición en mayo de 1948 y la independencia del Estado judío se podría catalogar como el mayor éxito del sionismo hasta la fecha actual (Barnavi, 2008, p.3). Actualmente, el sionismo se ha diversificado significativamente desde sus orígenes en el siglo XIX. Las principales corrientes del sionismo actual reflejan diferencias ideológicas, religiosas y políticas que responden a los desafíos modernos que enfrenta Israel y la diáspora judía. Las corrientes principales del sionismo moderno son:

- Sionismo religioso: cumplimiento de profecías bíblicas y parte de la redención mesiánica (Waxman, 2016) donde se argumentan posiciones de diferente nivel de radicalismo en cuanto a cuestiones claves como derecho de propiedad, asentamientos, violencia de colonos contra poblados palestinos, etc.
- Sionismo cultural: Se centra en fortalecer la identidad judía global mediante la promoción de la lengua hebrea, la educación judía y la preservación del patrimonio cultural (Kaplan y Penslar, 2011)
- Sionismo laborista: enfocado en corrientes progresistas y de los movimientos socialistas (de izquierda), promueve la construcción de un Estado conforme al trabajo y la cooperación comunitaria (Shafir y Peled, 2002)
- Sionismo revisionista: la corriente enfatiza en muchas oportunidades la posesión de la tierra de Israel para los judíos, incluyendo los territorios disputados con los palestinos (Peleg y Waxman, 2011)
- Sionismo ecologista: Corriente más apegado a la sostenibilidad ambiental por parte del Estado de Israel, en conformidad con la agenda global actual (Tal, 2008)

No es solamente una evolución lineal del movimiento, sino en cuanto a sus relaciones con los otros grupos regionales. De hecho, no hay forma simple de analizar las posiciones del pensamiento sionista, por cuanto no obedecen al péndulo tradicional de derecha y de izquierda, quienes demonizan al movimiento obedecen a cuestiones ideológicas heredadas de la Guerra Fría, como tildarlo de “racista y de movimiento discriminatorio, como el nazismo o el apartheid”, percepción impulsada en 1975 con el apoyo del eje pro – soviético, pero desestimada en los años 90 como forma de impulsar los procesos de paz en la zona.

Gestación e impulso del palestinismo

El movimiento árabe palestino emerge de la interacción de elementos históricos, culturales y

políticos moldeando su identidad desde finales del Siglo XIX hasta la actualidad. Como cualquier otra identidad ha sido progresiva ya que, en las primeras décadas del siglo XX, el territorio de Palestina fue visto como parte de la gran nación árabe y, además, muy en específico como una parte integral de la denominada “Siria histórica”. De acuerdo con Khalidi (1997):

En el pasado, el régimen baazista de Siria, entre otros, la ha utilizado en diversas ocasiones como pretexto para argumentar que los palestinos (y, por cierto, los libaneses y los jordanos) deberían aceptar la hegemonía siria. La posición baazista siria a veces sugería que Palestina es parte del sur de Siria, un pequeño segmento de la gran patria árabe cuyo representante legítimo no es otro que el partido Baaz, encabezado por Hafiz al-Asad (p.148).

De este modo, se puede mencionar que la región palestina no poseía una identidad nacional autónoma, sino que se ajustaba a la identidad árabe local basada en tradiciones religiosas y culturales. Con el arribo de los sionistas a finales del siglo XIX, se generaron roces contra las comunidades árabes locales y posteriormente forjó la identidad en un elemento más localista (Khalidi, 1997, p.169). Aunque hubo casos de árabes que por intereses tuvieron buenas relaciones con los migrantes judíos y con los líderes sionistas, tal como Amir Faysal (Bard, 2006, p.15).

Esto muestra lo complejo que era en su momento encontrar posiciones únicas al respecto y la manera en que la evolución de las relaciones podía tener una serie de altibajos, generando en ocasiones circunstancias que fueron moldeándose con el paso del tiempo y dependiendo de la situación acontecida en el terreno.

La declaración Balfour generó choques entre ambos nacionalismos y una serie de tensiones por cuestiones relacionadas al dominio de los territorios, el desplazamiento de los campesinos árabes palestinos (fellahin), así como un sentimiento de rechazo y de oposición que fue incrementándose con el aumento de migraciones judías hacia el territorio (Schneer, pp.211-220).

Aunque, es cierto que en un inicio el aspecto fundamental del nacionalismo árabe palestino fue oponerse al sionismo. Por ejemplo, bajo el liderazgo de Hajj Amin al-Husseini; denominado por algunos como “padre del movimiento nacional palestino”, este nacionalismo siguió siendo tan inflexible en su oposición al sionismo hasta fines de la década de 1940 como lo había sido durante el cuarto de siglo anterior, coqueteando incluso con el nazismo y con una retórica antijudía (Shlaim, 2015, p.65).

También, se formaron organizaciones árabes – palestinas impulsando su rechazo a la política británica y al nacionalismo judío. Grupos como el Club Literario Árabe, la Asociación Musulmana – Cristiana, el Supremo Consejo Musulmán y partidos políticos como el Partido Árabe Palestino, el Partido de Defensa Nacional y el Partido de Reforma mostraban este comportamiento.

El punto culminante de la violencia árabe contra los nacionalistas judíos fue la Gran Revuelta entre

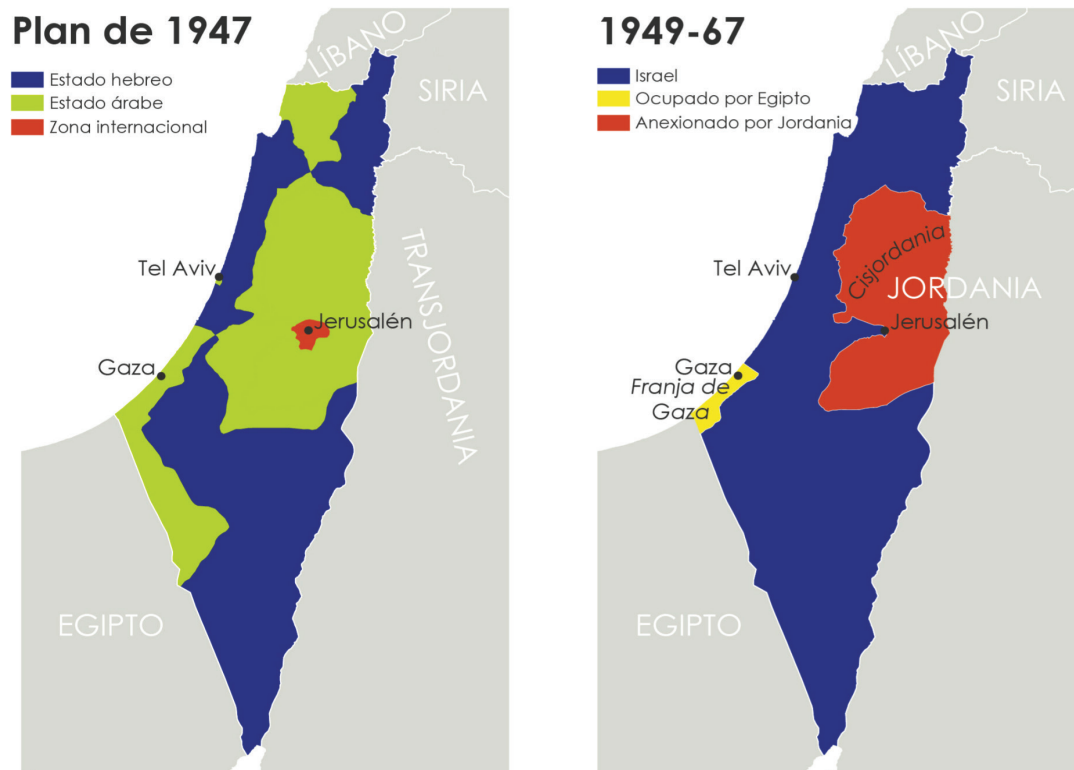
1936 y 1939, encabezada por el propio Al Husseini. Anteriormente, en 1929 se habría dado un levantamiento popular (pogromo) que cobró la vida de 133 judíos en Hebrón (Shlaim, 2015, 217 – 218). Sin embargo, aunque el nacionalismo árabe buscó unificar a los árabes contra el movimiento sionista, las tensiones existentes entre las élites urbanas y las rurales, así como las diferencias entre clanes y familias dificultaron la resistencia unificada, fortaleciendo la imagen del sionismo.

Con el plan de partición de Palestina propuesto en 1947 las tensiones entre los intereses nacionalistas aumentarían. Los judíos aceptaron el plan mientras que los líderes árabes locales y de la zona también lo rechazaron. Entre las razones por las que los líderes palestinos rechazaron la partición se encontraba la percepción de injusticia en la partición territorial, oposición al Sionismo al considerarlo un movimiento colonial, la falta de reconocimientos a los derechos nacionales palestinos y principalmente la desconfianza hacia las potencias extranjeras, así como un dividido liderazgo y debilidades internas (Khalidi, 2007, pp. 119, 128 – 130).

En mayo de 1948, se hizo efectivo el plan de partición, lanzando a la zona a una guerra, la cual para los judíos sería la “Guerra de Independencia” de su territorio y que para los árabes palestinos se transformaría en la Nakba (tragedia), elemento que se oficializaría como parte de las conmemoraciones palestinas hasta entrados los años 80 del siglo pasado. El conflicto armado de 1948 – 1949 acabó con las aspiraciones de dos Estados, tal y como se puede ver en los siguientes mapas.

En el año 1964 se creó la Organización para la Liberación Palestina (OLP), durante una cumbre de la Liga Árabe en el Cairo (Egipto), cuyo objetivo principal fue unir las voces palestinas bajo una organización formal que fuera políticamente dependiente de la Liga, así como coordinar esfuerzos árabes para la recuperación de Palestina, reflejando los intereses de los Estados miembros de la Liga más que los de los propios palestinos (Shlaim, 2015, pp. 245 – 246).

Figura 1. Mapas de la partición y posterior a la guerra de 1948 – 1949.



FUENTE: EL ORDEN MUNDIAL.

En el año 1967 se dio la denominada “Guerra de los Seis días”, enfrentamiento que profundizó la crisis territorial asociada al conflicto, principalmente para los intereses de los árabes palestinos de lograr un proceso de autodeterminación, incluso de acuerdo a Shlaim (2015), si Gamal Abdel Nasser, líder egipcio se hubiera logrado reunir con David Ben Gurion, habrían logrado alcanzar la paz en dos o tres días, sin embargo, no era posible este encuentro debido a la negativa árabe de negociar y reconocer a Israel, esto conforme a lo acordado en la reunión de Jartum de 1967 (p.194). Durante los primeros años de la OLP, estuvieron sujetas al liderazgo de Ahmad al-Shuqayri, representante principalmente de los intereses de Egipto y otros Estados árabes, menos de los palestinos, limitando su capacidad de maniobra independiente. En la carta fundamental de la organización de 1968, se plantearon elementos tales como que el único medio de liberación es a través de la lucha armada, que su intención era la destrucción del sionismo y del Estado de Israel,

Figura 2: Territorio posterior a la Guerra de los Seis Días



FUENTE: EL ORDEN MUNDIAL.

impulsando limitar la presencia judía únicamente a aquellos anterior a la llegada de los sionistas, de acuerdo con Morris (2001, pp. 167 – 168).

Después de la Guerra de los Seis Días (1967) y la llegada de Yasser Arafat en 1969, el movimiento se fue convirtiendo en una organización más representativa de la causa árabe palestina, aunque continuó bajo la influencia económica y política de la Liga Árabe. En el año 1974, se reconoció a la OLP como representante único del pueblo palestino, durante una cumbre en Rabat (Marruecos). Este respaldo impuso restricciones a otros países árabes, como Jordania, que ya no podían negociar con Israel en nombre de los palestinos sin la aprobación de la OLP. Esto consolidó el papel de la OLP como el principal interlocutor palestino en cualquier discusión sobre el futuro de Palestina (Shlaim, 2015, pp. 355 – 356).

Sin embargo, los principios de la carta de la OLP fueron reformados en los años 80 e incorporaron medidas como la aprobación de las resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas, lo que implicó un reconocimiento implícito a Israel como un elemento transformador de la forma de desarrollarse del movimiento nacional palestino (Morris, 2001, p.674).

También en los años 80 va a ocurrir otro cambio importante en la evolución del nacionalismo palestino. En 1987, se dio el primer levantamiento popular palestino (Intifada), marcó un cambio regional, impulsado en Gaza y Cisjordania, este evento desafió el liderazgo tradicional y dio paso a activistas locales y figuras asociadas con el movimiento nacional palestino. La Intifada trajo un cambio psicológico entre los palestinos, gestando efectos socioeconómicos importantes y reconfiguró las relaciones internacionales y regionales, así como también se dio un cambio hacia un mando más localizado (Morris, 2001, pp. 405 – 408).

Para esto, se conformó en su momento el Comando Unificado de Intifada (UNLU), con liderazgos locales para dirigir el levantamiento, más los comités que lideraban las protestas y los enfrentamientos. También se incluyó la reconfiguración de las relaciones entre la OLP y otros actores internacionales, así como el desgaste de la presencia israelí en los territorios disputados con los palestinos.

La Intifada también fue un catalizador para el surgimiento de Hamas, que evolucionó a partir de la Hermandad Musulmana. Hamas tomó un rol activo en las protestas y gradualmente adoptó una postura militarizada, declarando la yihad como un objetivo central. En 1988, Hamas publicó su “Covenant”, que estableció la destrucción de Israel como objetivo principal, definiendo a Palestina como un territorio musulmán sagrado e inalienable. Este documento también presentó una narrativa profundamente antisionista y antisemita, incluyendo referencias al texto conspirativo de los Protocolos de los Sabios de Sion (Morris, 2001, pp. 409 – 410).

En los años 90 se da una nueva evolución del nacionalismo palestino. En el año 1993, se firmó la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, conocido tradicionalmente como los Acuerdos de Oslo y en el año 1994 surgiría la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Los Acuerdos incluyeron el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, marcando un avance histórico en el conflicto árabe-israelí. La organización reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, mientras que Israel los reconoció como representantes legítimos del pueblo palestino (Shlaim, 2015, pp.526 – 527).

La Declaración estableció un marco de negociaciones para implementar un autogobierno palestino en Gaza y Jericó en un plazo de dos meses. También preveía la elección de un consejo palestino dentro de nueve meses y el inicio de negociaciones sobre el estatus final en dos años. Ambos aceptaron el principio de partición de Palestina, renunciando a reclamos absolutos sobre el territorio en favor de una solución práctica, aunque los acuerdos no abordaron temas fundamentales como el retorno de los refugiados, las fronteras, el futuro de los asentamientos israelíes o el estatus final de Jerusalén,

dejando estas cuestiones para negociaciones futuras. Esto generó críticas y resistencias internas en ambas partes.

En cuanto a los desafíos post Oslo, según Shlaim (2015), se incluyó la resistencia de grupos como Hamás y la Yihad Islámica, que llevaron a cabo ataques terroristas para desestabilizar el proceso. También surgieron tensiones internas palestinas y desacuerdos con Israel sobre los asentamientos, las fronteras, y el control de Jerusalén (pp. 526 -527), así también la política de crecimiento en los asentamientos poblacionales en las regiones disputadas con los palestinos incrementó la desconfianza palestina.

La división palestina profundizó la crisis en los intereses nacionales, debilitando el liderazgo unificado, la violencia entre ambas facciones llevó a la división política, con el grupo Fatah como partido político del ahora desaparecido Yasser Arafat, mientras que el grupo islamista Hamas gobernaba en la Franja de Gaza, creando dos realidades diferentes del liderazgo palestino a nivel territorial.

Coincidencias y diferencias entre ambos movimientos nacionales y la evolución de su relación.

En cuanto a las coincidencias, ambos movimientos buscan autodeterminación nacional. Tanto el sionismo como el palestinismo tienen como objetivo el reconocimiento de un Estado propio, donde puedan ejercer su soberanía nacional. De acuerdo con la Resolución 1514 “todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación” (ONU, 1960).

Ambos fundamentan sus reivindicaciones territoriales basados en una conexión histórica, cultural y religiosa con el área. Específicamente, el sentimiento por Palestina y Eretz Israel, por lo que han buscado el apoyo de actores internacionales para alcanzar sus objetivos. En este sentido, el pueblo judío ha logrado el respaldo por medio de la Declaración Balfour de 1917, mientras que los árabes palestinos a través del derecho de retorno contemplado en la Resolución 194 de las Naciones Unidas.

En cuanto a las diferencias, el movimiento nacional judío surge en el siglo XIX de manera organizada, mientras que el movimiento nacional árabe palestino en el siglo XX, principalmente después de la I Guerra Mundial en su lucha contra los británicos y contra el Sionismo. Incluso, de acuerdo con Morris (2001, p.49), el nacionalismo árabe fue tardío en comparación con el judío, debido a esto la organización de los segundos fue más efectivo que el que se realizaba en el primero, ya que para estos la identidad desde el punto de vista local y religioso tenía un peso mayor que la consolidación en medio de un territorio por sí mismo y, debido a esto, inclusive no había una idea tan aplomada sobre identidad palestina, porque inicialmente se enfocaban en un apego un poco mayor hacia la tierra de la Siria histórica.

El Sionismo logró establecer el Estado de Israel en el año 1948, consolidando su proyecto con el

reconocimiento internacional, mientras que el palestinismo lucha actualmente por lograr superar las divisiones internas de sus grupos políticos principales e impulsar un Estado independiente, así como contrarrestar el dominio israelí de territorios disputados.

De hecho, antes de la partición, de acuerdo con Morris (2001), las relaciones entre judíos y árabes tenía problemas en cuanto al reconocimiento del derecho de autodeterminación de las partes, como ocurre en la actualidad, menciona el autor lo siguiente:

Los árabes se opusieron rotundamente a que los judíos obtuvieran cualquier parte del país que consideraban suyo por derecho y como suelo sagrado para los musulmanes. Y temían precisamente lo que Ben-Gurion imaginaba: que un pequeño Estado judío sería un trampolín para una futura expansión. ‘Awni ‘Abd al-Hadi dijo: “Lucharemos. Lucharemos contra la partición del país y contra la inmigración judía. No hay compromiso posible”.

El sionismo ha logrado movilizar a la diáspora judía hacia la inmigración a Israel, así como se ha revitalizado la identidad judía y la educación en las comunidades en el exterior, así como la cooperación entre los judíos israelíes y los del resto del mundo (Sachar, 2007, pp. 297-299, 621 – 624).

El sionismo combina las características seculares y religiosas, priorizando en el retorno y el asentamiento en la tierra de Israel, pero teniendo en su composición social judía que hay grupos que no comulgan con el ideario del movimiento nacional y que también existen comunidades cristianas que se identifican con el movimiento, esto último señalado por Ariel (2006).

El movimiento nacional palestino tiene bases más diversas, contemplando facciones abiertamente religiosas como Hamas y la Yihad Islámica y movimientos seculares, donde la religión es un factor identitario, sobre esto último Khalidi (1997) hace una explicación más profunda sobre la construcción identitaria tanto religiosa y secular debido a los factores externos.

Así pues, a pesar de que el sionismo y el nacionalismo palestino comparten la meta de alcanzar la autodeterminación nacional y se basan en vínculos históricos, culturales y religiosos con el territorio, sus caminos y niveles de organización han sido muy distintos, afectando así sus metas respectivas.

A pesar de que el sionismo se convirtió en un movimiento estructurado en el siglo XIX y estableció el Estado de Israel en 1948 con apoyo global, el nacionalismo palestino tuvo una organización más tardía y luchó por la soberanía en medio de divisiones internas y una lucha territorial constante. Las disparidades, además de las tensiones históricas por el reconocimiento mutuo, muestran los desafíos complejos que siguen presentes en la relación entre ambos movimientos y en la búsqueda de una solución al conflicto.

Nacionalismo y teorías de las Relaciones Internacionales en el conflicto palestino – israelí

En el contexto de un conflicto internacional, la identidad nacional es un factor clave para determinar los intereses y las interacciones de los actores estatales y no estatales en el sistema internacional. En el caso presentado, las nociones de identidad han sido una fuerza fundamental en la configuración del conflicto y las políticas que lo rodean. Al analizarlas desde la perspectiva del clasicismo y el neorrealismo permite comprender cómo los intereses nacionales y las dinámicas de poder estructuran este prolongado conflicto.

La política, incluida la internacional, está gobernada por leyes objetivas que tienen sus raíces en la naturaleza humana. Según Goellner (s.f., p.114) citando a Morgenthau, los instintos primarios de conservación y agresividad son fundamentales en la búsqueda de poder entre los actores internacionales. También, se debe tomar en consideración que el poder es el objetivo central de todos los actores políticos, la naturaleza humana los dirige hacia la maximización del poder con la intención de proteger y promover sus intereses.

También, conforme a esto, aunque se menciona el poder en términos de justicia y de moralidad, la naturaleza humana y las condiciones del sistema internacional hacen que el ejercicio y su búsqueda sean inevitables en la política y que la moralidad quede relegado a un plano inferior.

En este sentido, las identidades estudiadas pueden comprenderse como expresiones de esfuerzos existenciales por la supervivencia y el reconocimiento. Para el movimiento sionista, que condujo a la creación del Estado de Israel, la identidad nacional judía estaba arraigada en la necesidad de refugio de siglos de persecución y antisemitismo, que culminaron en el Holocausto, aparte de su vínculo espiritual ligado a una región específica: la Tierra de Israel, considerada la patria histórica del pueblo judío. Desde el realismo clásico, esta conexión territorial – estatal puede entenderse como un intento de supervivencia y el autogobierno dentro de un orden internacional caracterizado por la anarquía (Morgenthau, 1948).

El palestinismo también es parte de la lucha por la supervivencia, la autodeterminación y un llamado a la resistencia a lo que consideran colonialismo. En términos prácticos, esta resistencia se entiende como una reacción a la pérdida territorial y a los desafíos para una consolidación nacional. Esta identidad, se fortaleció con el concepto de la Nakba, señalando ya no solamente un sentido de pertenencia a la tierra, sino también hacia esa narrativa de lucha contra lo que consideran fuerzas externas (Khalidi, 1997).

Desde la perspectiva del neorrealismo, desarrollado por Kenneth Waltz (1979), se desplaza el foco de atención desde la naturaleza humana hacia la organización del sistema internacional como el determinante principal de las acciones de los Estados. Waltz (1979, p.79), argumenta que las estructuras políticas deben definirse independientemente de los atributos y las interacciones de las unidades que las componen.

La estructura internacional es anárquica y los Estados, como unidades primarias, actuarán conforme a las distribuciones de las capacidades de ese sistema. Así pues, las identidades nacionales, como las analizadas, pueden interpretarse como herramientas de legitimación y movilización dentro de esa anarquía. Las identidades no solo reflejan narrativas históricas, sino que se moldean por las dinámicas de poder y la competencia entre actores en el sistema internacional.

De ese modo, la identidad nacional judía vinculada al sionismo se vería como una medida de sobrevivencia y seguridad para los judíos a nivel global. Mientras tanto, la identidad palestina surgiría como una respuesta de resistencia y reclamo de derechos en un sistematizado esquema de asimetrías del poder.

En cuanto a las distribuciones del poder y las expectativas de comportamiento (Waltz, 1979, pp. 18 y 60), se subraya que las estructuras del sistema internacional están definidas por la distribución de las capacidades entre actores, donde se determinan las posibles estrategias y comportamientos. En este sentido, Israel ha utilizado su identidad para fortalecer su posición estructural y su poder frente a peligros existenciales, mientras que los palestinos enfatizan su identidad nacional para movilizar apoyos a nivel internacional y principalmente alianzas a nivel regional, intentando de esa manera compensar las distribuciones del poder que existe en la actualidad.

En cuanto a la anarquía como motor de la acción estratégica (Waltz, 1979, pp. 102 y 129), implica que los actores deban buscar estrategias que maximicen sus posibilidades de supervivencia y de éxito. Las identidades judía y palestina se ven como instrumentos de la lucha de poder, de legitimidad y de influencia, donde ambos actores buscan impulsar sus intereses dentro de las restricciones que enfrentan al respecto.

Ahora bien, la teoría constructivista de las Relaciones Internacionales enfatiza de qué manera las ideas tales como identidad y normas se van construyendo conforme a la realidad nacional, por lo que influyen en el comportamiento de los Estados y los actores del Sistema Internacional. Aplicándolo al tema, esta perspectiva analiza de qué manera la identidad nacional, las narrativas históricas y los procesos de reconciliación y diálogo afectan la dinámica de conflicto y a la vez plantea posibles soluciones.

En ese aspecto, Wendt (1999) argumenta que la estructura de la política internacional no está determinada únicamente por factores de carácter material, sino que también por las ideas compartidas y la identidad colectiva. En el caso palestino – israelí, las identidades reflejan ideas constructivistas, donde por un lado se encuentra la noción israelí del retorno a la tierra prometida y la seguridad contra el antisemitismo global, desarrollando una noción de autoafirmación y seguridad.

Del lado palestino se influencia por la narrativa de la Nakba y la resistencia hacia la ocupación, representando un sentido colectivo de la pérdida, así como su lucha por la autodeterminación,

definiéndose como opositor del “otro” (Israel), generando cismas en las discusiones sobre la paz y mantienen una interacción negativa que impide llegar a acuerdos definitivos que aseguren el bienestar de ambos grupos en conflicto.

Por otra parte, Wendt (1999) argumenta desde una perspectiva constructivista que las normas, valores y percepciones compartidas no son estáticas, sino que son cultivadas y reconstruidas socialmente y a través de interacciones intencionadas. En este sentido, la perspectiva del autor es particularmente útil para examinar la identidad que se crea a través de narrativas históricas que reconstruyen la desconfianza y la hostilidad del “otro”.

El constructivismo remarca que las percepciones y las identidades se pueden modificar a través de las interacciones que promuevan el entendimiento entre las partes, se puede cuestionar las narrativas heredadas y construir basados en la confianza y el diálogo. Estos aspectos son construcciones sociales, por esto un modelo tal como la noción de “Dos Estados” que se propone para la solución al conflicto palestino – israelí redefinen la legitimidad permitiendo el derecho mutuo de existencia y desarrollo.

En su análisis de las culturas de la anarquía (Hobbesiana, Lockiana y Kantiana), Wendt (1999, pp. 297 – 307), describe cómo el reconocimiento mutuo puede transformar relaciones basadas en enemistad hacia dinámicas más cooperativas, bajo premisas similares a la paz perpetua de Kant.

Hasta este momento, la identidad nacional de ambos se ha construido en términos de oposición; en un entorno de pacificación se pueden empezar a catalogar como socios con intereses compartidos, lo que evidentemente no quiere decir que deban acordar en todo y por lo tanto tendrán que aprender también a ceder en ciertas circunstancias.

Desde el constructivismo se plantea un panorama esperanzador, enfatizando que las identidades no son inmutables o irreconciliables, con iniciativas que promuevan el diálogo, la discusión, educación y reconocimiento mutuo desde lo positivo de sus naturalezas, se puede transformar en un catalizador hacia una transformación de la estructura existente y puede sentar bases para la cooperación, de esa misma forma planteado así por Wendt (1999, pp. 344 – 366).

En cuanto a la Teoría Crítica de las Relaciones Internacionales, se centra en cuestionar las estructuras de poder y dominación que sustentan el sistema internacional. Su objetivo explica el mundo, y lo transforma a través de un enfoque normativo hacia la liberación y la justicia social. Así, es útil para analizar el conflicto ya que ayuda a abordar la desigualdad estructural y los desequilibrios de poder y plantear soluciones bajo los principios de derecho y justicia.

De acuerdo con Cox (1993), las teorías críticas trascienden el enfoque tradicional de solución de problemas examinando el origen y continuidad del orden dominante, cuestionando narrativas sobre seguridad en el caso israelí o sobre reclamos de soberanía en el caso palestino, dejando por

fuera cuestiones de desigualdades en cuanto a su rol a nivel social dentro del conflicto.

También, estas teorías buscan la comprensión y transformar el orden que prevalece; en el caso de análisis, implica alternativas más allá de la repartición de territorios con la transformación en la dinámica del poder garantizando la igualdad de derechos. En este punto (Cox, 1993, p.145) distingue entre la imposición y el consentimiento como parte de los logros en el liderazgo de la solución del conflicto.

El análisis del conflicto necesita que se superen las narrativas que dominan el contexto actual y se conecten las dinámicas locales y globales, se deben abordar las raíces estructurales y promover la justicia y la emancipación de modo consensuado. Las diferentes teorías de las RRII utilizadas en el análisis, ofrecen herramientas para comprender la complejidad, señalando la importancia del diálogo, el reconocimiento entre las partes y la justicia estructural, la solución requiere de alternativas multidimensionales que trascienda únicamente la idea de plantear responsables o resolver solamente una parte de la totalidad del enfrentamiento.

Propuestas de solución del conflicto palestino – israelí basado en la coexistencia de nacionalismos: el modelo de los dos Estados, el Estado binacional, el sistema confederal y tribalismo

En el centro de este conflicto se encuentra la coexistencia de dos identidades nacionales, cada una de las cuales tiene aspiraciones regionales, políticas y culturales legítimas. Ante la complejidad de conciliarlas, han surgido diversas propuestas que plantean soluciones duraderas.

Entre las alternativas planteadas, se encuentra el modelo de dos Estados para dos pueblos, el Estado binacional que inclusive se habría planteado antes del proyecto de partición en 1947, así como enfoques que incorporan la importancia de los grupos clánicos y tribales para la solución por medio de esquemas tales como el sistema confederal.

Cada una de estas abordan diferentes aspectos del conflicto, desde los elementos territoriales, la soberanía siguiendo por las estructuras sociales tradicionales y la cooperación entre comunidades. Todas ofrecen oportunidades y desafíos específicos, que reflejan las aspiraciones de las partes, así como las realidades sobre el terreno.

Se pretende analizar desde esta perspectiva las características generales de los planes, las ventajas, desventajas, limitaciones y viabilidad que posee cada uno. A través de esto se busca esclarecer posibles caminos hacia una solución sobre el reconocimiento mutuo y la convivencia pacífica. Primero, en cuanto al modelo de “Dos Estados para dos pueblos” que es el más “popular” de los últimos años, plantea la necesidad de forjar la creación de un Estado palestino independiente en convivencia con el ya existente Estado judío (Israel). El enfoque se basa en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 1967 que se concentra en el retorno hasta fronteras seguras y defendibles previas al conflicto armado. Así también, utiliza como base los

Acuerdos de Oslo de 1993 que delinearon el marco para la pacificación de ambas partes.

Los principales problemas que plantea la solución son, de acuerdo con Khalidi (2020), la fragmentación territorial que imposibilita la continuidad de un territorio para un Estado palestino, así como la expansión de las colonias de asentamientos israelíes, la desconfianza mutua entre Israel y Palestina debido a diferentes circunstancias (incluyendo los factores externos), así como problemas irresueltos en las medidas tales como el estatus final de Jerusalén y el derecho de retorno de los refugiados palestinos; complejos debido al enfoque de estos objetivos. Sobre esto, menciona el propio Khalidi (2020) que:

La resolución 242 no incluye ninguna mención de la cuestión palestina, ni del estado árabe especificado en la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947, ni del retorno de los refugiados ordenado por la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948. Con su redacción cuidadosamente redactada sobre la retirada de los “territorios ocupados” en 1967 (en lugar de “todos los territorios ocupados”), la 242 dio efectivamente a Israel la oportunidad de expandir aún más sus fronteras anteriores a 1967. Ya sea que se dieran cuenta o no, al aceptar la Resolución 242 como base para cualquier negociación, Arafat y sus colegas se habían impuesto una tarea imposible (p.157).

La interpretación de normas jurídicas dentro del conflicto genera una serie de problemas estructurales para su solución por cuanto la forma de solucionar es inviable si no se llegan a resolver, no solamente los problemas territoriales, sino los existenciales, incluyendo aquellos que se caracterizan por generar desconfianza mutua, reconocimiento, apoyo internacional y estabilidad. Lo que automáticamente podría resolver cuestiones como la reconciliación entre las partes, así como mejoras en temas sociales y la estabilidad regional, que depende en gran medida de las acciones e intereses geopolíticos de actores externos al conflicto, incluyendo Estados hegemónicos, así como los intereses de líderes regionales.

Pese a esto, el modelo de los Dos Estados sigue siendo el más aceptado internacionalmente; sin embargo, se va haciendo cada vez más inviable debido a las dinámicas en el terreno, la implementación de dicho modelo requiere esfuerzos renovados para garantizar que los compromisos a nivel internacional sean efectivos y, además, devolver a la mesa a ambos actores principales construyendo un marco de confianza alrededor de esto.

El modelo de Estado binacional propone la creación de un Estado único en el cual israelíes y palestinos coexistan bajo un sistema de gobierno común, compartan la soberanía y los derechos de todos los ciudadanos. Conforme a esto, ambos pueblos comparten vínculos históricos y geográficos que les hace estar entrelazados.

En este sentido, uno de los grandes defensores de dicha solución es Said (2013), quien plantearía

que se debe enfocar en impulsar la creación de un solo Estado palestino que incluyera a ambos pueblos, desde un enfoque democrático y laico, en este sentido, el único destino posible y aceptable para el pluricomunitario Oriente Próximo, la noción de un Estado basado en derechos humanos laicos, no en una exclusividad religiosa o minoritaria, ni tampoco, como había ocurrido con los nacionalistas sirios, en una unidad geopolítica idealizada (p.311).

Esto podría eliminar las diferencias por control de tierras específicas, también se fomentaría una identidad cívica común, diluyendo las rivalidades de tipo étnico y religioso, utilizando como ejemplos históricos a Sudáfrica. Sin embargo, existe una serie de obstáculos que experimenta la idea de un Estado binacional y los conflictos sobre la soberanía compartida. De acuerdo con Kimmerling (2001), podría verse como una amenaza existencial en ambos movimientos nacionales, destacando que los intentos de imponer una identidad unificada encuentran resistencias significativas, llevándolos a una fragmentación social y la aparición de múltiples subculturas.

Así, ambos grupos pretenden preservar sus identidades considerando que ambas se han construido como respuesta a procesos históricos y políticos que se excluyen mutuamente. También, hay desafíos de hegemonía cultural y política que favorecerían solo a ciertos sectores y se convierte en una amenaza para otro, ante esto hay riesgos de una colectividad fracturada y eventualmente conflictos faccionarios mayores a los actuales.

Se debe añadir que, a lo largo de los años, líderes de ambos lados han rechazado sistemáticamente el modelo, ya que para los israelíes esto podría ser visto como una amenaza para la pérdida de la identidad judía del Estado; único en su condición, mientras que para el caso palestino una renuncia a todos sus reclamos sobre autodeterminación, dominio de lugares claves y derechos de retorno, planteado por Ben Ami (2003).

También, es imperativo añadir uno de los temas más delicados al respecto del Estado Binacional, la coexistencia en Jerusalén, debido a las sensibilidades religiosas y políticas de la zona. Pullan et al (2013), mencionan, por ejemplo, que los lugares sagrados en los territorios son un obstáculo debido a su percepción como espacios indivisibles, principalmente la zona de Haram al Sharif / Monte del templo considerado como imposible de compartir su hegemonía (p.14).

De esa manera, se toman en consideración los impedimentos para que haya una funcionalidad en el modelo binacional, planteando que, por el contrario, existe una serie de elementos que descartarían por completo las posibilidades de que sea efectivo en el largo plazo, por lo que, al igual que como lo mencionaría la Comisión Peel en 1937 sobre la situación en Palestina, lo ideal era brindar condiciones para una separación de las poblaciones conforme a sus intereses nacionales.

La última medida planteada es el modelo de confederalismo y el tribalismo como propuesta asociada al esquema de identidades nacionales de los grupos que se desarrollan en la zona, el cual podría ofrecer una perspectiva diferente hacia las aspiraciones de ambas poblaciones.

De acuerdo con Soto (2006), una confederación formada por Estados soberanos, reconocidos por el derecho internacional suele surgir de un tratado que no puede modificarse sin consenso, y los Estados miembros tienen derecho a poner fin a su membresía. Otra característica importante de la alianza es que los sujetos no son individuos sino Estados soberanos; por tanto, las decisiones se aplican a los ciudadanos por acuerdo de Estados soberanos. Este es el caso de las decisiones de la Unión Europea y su Parlamento (que siguen vigentes a pesar de algunas consultas con los ciudadanos para tomar algunas decisiones confirmadas, incluidas las del Parlamento Europeo).

En el caso del conflicto palestino – israelí, de acuerdo con Lustig (2019), el modelo confederal permitiría que cada comunidad mantenga su autonomía política mientras impulsa elementos de cooperación en temas claves tales como seguridad, economía y recursos compartidos, evitando una integración total forzada.

De acuerdo con Lustig (2019), ayudaría en las complejidades demográficas y territoriales reconociendo la presencia de asentamientos israelíes y la necesidad de una representación política palestina sobre la materia, abordando así los desafíos políticos y territoriales que esto implica (pp. 117 – 118).

De poder impulsarse esta propuesta, podría eventualmente facilitar una transición paulatina hacia la coexistencia desde una perspectiva más equitativa. Entendiendo la necesidad de reconocimiento del derecho de existencia mutuamente, asegurándose de la autodeterminación de ambos colectivos.

También, se puede añadir el componente de la estructura tribal y las lealtades comunitarias. De acuerdo con Taleb (2017), conocer el funcionamiento de este sistema implementaría medidas que brinden soluciones sostenibles en el tiempo fortaleciendo los respaldos dentro de un sistema político, por ejemplo, las comunidades tribales palestinas podrían desempeñar un rol importante en las administraciones locales, reforzando las instituciones a nivel comunitario.

De acuerdo con Bar-Tal (2011), el modelo confederal basado en identidades nacionales y tribalismo podría ayudar con el proceso de autonomía regional y la gobernanza compartida donde cada Estado tendría autonomía plena sobre sus asuntos internos, pero a nivel confederal tratarían temas delicados como la situación de Jerusalén, recursos estratégicos y seguridad fronteriza, así se podría impulsar una coexistencia sin necesidad de integración forzada (pp.79 – 80).

También, permitiría a las instituciones confederales una participación con líderes comunitarios y tribales impulsando la legitimidad local y además una conexión con las estructuras políticas de manera más amplia. Aunque, resulta imperioso la transformación de las narrativas nacionales existentes para poder resolver conflictos más profundos en un plazo mayor, principalmente aquellos que toquen fibras sensibles de las poblaciones.

Entre las ventajas del modelo confederal apegado a este esquema de respeto a las identidades nacionales, de acuerdo con Kaufman et al (2006), en primer lugar, se requiere una flexibilidad

contextualizada, donde se puede permitir cierta cooperación entre comunidades sin la necesidad de integrarse plenamente.

Además, con la inclusión de estructuras tribales y comunitarias fortalece las bases sociales de la legitimidad política, reconociendo las dinámicas sociales existentes como las redes tribales palestinas que, históricamente, han jugado un papel esencial en la mediación de conflictos y la organización social, y las utiliza para construir un puente hacia una gobernanza efectiva y legítima, repartiendo responsabilidades claves, tales como el manejo de los recursos naturales de manera equitativa, las administraciones locales y mitigar tensiones en zonas de alta disputa.

También, se pueden vincular elementos del confederalismo democrático kurdo, promoviendo la autogestión comunitaria y la toma de decisiones descentralizada, bajo los principios de diversidad cultural, participación local y equidad. Por demás está mencionar que el enfoque kurdo ha demostrado ser eficaz en contextos caracterizados por tensiones étnicas y territoriales.

Asimismo, las propuestas sobre federalizar la estructura política y social palestina de Mordechai Keidar sugiriendo dividir el territorio en unidades autónomas basadas en ciudades o regiones clave, respetando las dinámicas locales y fortaleciendo la autonomía política (Avraham, 2014). Ante esto, se argumenta que la sociedad palestina está profundamente influenciada por lealtades tribales y familiares. Por esto, sugiere que la gobernanza se alinee con estas realidades sociológicas, evitando imponer modelos estatales occidentales que no serían funcionales (párr. 6)

La propuesta contempla la formación de ocho emiratos independientes en ciudades clave: Gaza, Jenín, Nablus, Ramala, Jericó, Tulkarem, Qalqilya y la parte árabe de Hebrón. Cada uno gobernado por líderes locales con autonomía en asuntos internos, permitiendo una administración más cercana y representativa de sus habitantes (Avraham, 2014, párr. 3), inspirado en el modelo de los Emiratos Árabes Unidos, con la idea principal de reducir conflictos y centralizar una coexistencia entre comunidades que lo haga más viable.

Esto depende de la voluntad política y el compromiso internacional para permitir que este sea efectivo, así también una gestión adecuada en las asimetrías del poder para garantizar que ambas partes tengan consideraciones equitativas en la toma de decisiones y, por supuesto, las resistencias internas y el extremismo que exista entre diversos actores a ambos lados del espectro.

Las diversas propuestas analizadas, reflejan esfuerzos para satisfacer las aspiraciones y preocupaciones de ambas partes. Cada solución enfrenta obstáculos importantes, que van desde la falta de confianza mutua y las tensiones geopolíticas hasta la dinámica interna de las sociedades involucradas. Las rutas hacia una solución duradera requieren compromisos reales de todas las partes, un apoyo continuo de la comunidad internacional. Es fundamental realizar estrategias que aborden preocupaciones inmediatas como la seguridad, pero también problemas de mayor plazo como la reconciliación, la convivencia y la reconstrucción de confianza.

Conclusiones

El sionismo y el palestinismo son dos fuerzas principales en el conflicto palestino-israelí, basadas en derechos históricos, culturales y religiosos. Estas narrativas han influido en la política y la sociedad, perpetuando la polarización. El sionismo logró la creación del Estado de Israel en 1948, mientras que el palestinismo hasta hoy lucha por consolidar su liderazgo e impulsar su Estado.

Según las teorías de las RRII, las identidades nacionales son construcciones sociales que pueden transformarse mediante el diálogo y el reconocimiento mutuo, incluso cuando las estructuras de poder existentes dificultan el progreso. Para avanzar hacia una solución sostenible se debe evolucionar hacia narrativas de reconocimiento a las aspiraciones del otro.

En cuanto a la pregunta de la investigación sobre ¿Cómo los movimientos nacionalistas del sionismo y el palestinismo han influenciado en el desarrollo del conflicto palestino – israelí y son claves para la construcción de una solución de paz justa y duradera?, se puede mencionar que ambos movimientos moldearon el desarrollo del conflicto al establecer puntos de vista opuestos sobre la legitimidad territorial, la autodeterminación y los derechos históricos, a los judíos la gestión de un Estado bajo una premisa de supervivencia y retorno a la tierra ancestral, para los palestinos una identidad en contraposición al sionismo pero que ha evolucionado hacia el discurso de la autodeterminación.

Cabe señalar que, si bien se puede criticar las políticas del Estado de Israel, sin caer en una discriminación, la negación absoluta hacia su derecho de autodeterminación, o el llamado a la destrucción de dicho Estado es una forma de discriminación utilizando parámetros asimétricos en las críticas. Si bien no todos los judíos son sionistas y que hay corrientes judías que rechazan el movimiento, hay una importante mayoría del pueblo judío alrededor del mundo que se siente representado por los valores que plantea el sionismo, viendo en Israel además un refugio contra persecuciones antisemitas.

La convivencia pacífica sólo será posible si se logra un reconocimiento mutuo de sus identidades que permita realizar estas aspiraciones sin excluir a otras. Promoviendo un discurso inclusivo, generando confianza y estableciendo marcos de cooperación, igualdad, el respeto a la identidad nacional y la capacidad de las partes para superar las dinámicas hostiles y polémicas que han prolongado el conflicto hasta la fecha.

Referencias

- Ariel, Y. (2006). *On behalf of Israel: American fundamentalist attitudes toward Jews, Judaism, and Zionism*. Hebrew Union College Press.
- Bar-Tal, D. (2013). *Intractable conflicts: Socio-psychological foundations and dynamics*. Cambridge University Press.
- Bard, M. G. (2006). *Arab-Israeli conflict*.
- Barnavi, É. (2008). Cinco proposiciones sobre la historia del sionismo político. *Araucaria*, 10(19).
- Beinin, J., & Hajar, L. (2014). *Palestine, Israel and the Arab Israeli conflict*. Middle East Research and Information Project.
- Bregman, A. (2016). *Israel's wars: A history since 1947*. Routledge.
- Brubaker, R. (1996). *Nationalism reframed: Nationhood and the national question in the new Europe (Vol. 8)*. Cambridge University Press.
- Cyjon, R. (2021). Perspectivas y reflexiones sobre el conflicto árabe-palestino, judío-israelí. *Cuadernos Judaicos*, (38), 3–37.
- Cox, R. W. (1993). Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales. En A. Morales.
- Gelvin, J. L. (2021). *The Israel-Palestine conflict: A history*. Cambridge University Press.
- Goellner, A. Poder y política internacional (II).
- Kaplan, E., & Penslar, D. J. (Eds.). (2011). *The origins of Israel, 1882–1948: A documentary history*. University of Wisconsin Press.
- Kattan, V. (2009). *From coexistence to conquest: International law and the origins of the Arab-Israeli conflict, 1891–1949*. Pluto Press.
- Kaufman, E., Salem, W., & Verhoeven, J. (Eds.). (2006). *Bridging the divide: Peacebuilding in the Israeli-Palestinian conflict*. Lynne Rienner Publishers.
- Keidar, M. (2021). A practical plan for peace? [Podcast]. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/30mKvbtX5eQ2dbb94UEIGg?go=1>
- Khalidi, R. (1997). *Palestinian identity: The construction of modern national consciousness*. Columbia University Press.
- Khalidi, R. (2007). *The iron cage: The story of the Palestinian struggle for statehood*. Beacon Press.
- Kimmerling, B. (2001). *The invention and decline of Israeliness: State, society, and the military*. University of California Press.
- Kirjner, J. (2018). Conflicto y construcción de identidades nacionales en Israel y Palestina (1948–1967) [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de La Plata.
- Mearsheimer, J. (2003). *The tragedy of great power politics*. Norton.
- Mena, Y. (2022). Análisis del conflicto palestino-israelí en el período 2014–2021 desde el enfoque de la construcción de la identidad nacional de ambas poblaciones [Tesina de bachillerato]. Universidad Internacional de las Américas. <http://repositorio.uia.ac.cr:8080/server/api/core/bitstreams/b696db7d-70e8-4366-999b-d9dd375882e7/content>
- Morris, B. (2001). *Righteous victims: A history of the Zionist-Arab conflict, 1881–2001*. Vintage.
- Milton-Edwards, B., & Farrell, S. (2010). *Hamas: The Islamic resistance movement*. Polity.

- Naciones Unidas. (1960). *Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination*. <https://acortar.link/1jNKR8>
- Peleg, I., & Waxman, D. (2011). *Israel's Palestinians: The conflict within*. Cambridge University Press.
- Petri, D. P., & Acuña, B. (2022). El Estado desmilitarizado costarricense: ¿un modelo de resolución de conflictos? En D. P. Petri (Ed.), *Negociación internacional en América Latina* (pp. 183–216). FLACSO.
- Priego, A. (2020). El Acuerdo de Abraham sí es el 'acuerdo del siglo'. *Política Exterior*. <https://www.politicaexterior.com/el-acuerdo-de-abraham-si-es-el-acuerdo-del-siglo/>
- Pullan, W., Sternberg, M., Kyriacou, L., Larkin, C., & Dumper, M. (2013). *The struggle for Jerusalem's holy places*. Routledge.
- Rehan, S. (2023). Israel-Palestine conflict and Arab League policy towards conflict resolution: A case study of neorealism, constructivism, and Arab League analysis.
- Sachar, H. M. (2007). *A history of Israel: From the rise of Zionism to our time*. Knopf.
- Said, E. W. (2013). *La cuestión palestina*. Debate.
- Shlaim, A. (2015). *The iron wall: Israel and the Arab world*. Penguin UK.
- Schulze, K. E. (2013). *The Arab-Israeli conflict*. Routledge.
- Soto Reyes Garmendia, E. (2006). Federalismo, sociedad y globalidad: los retos del porvenir. *Política y cultura*, (25), 27–45.
- Tal, A. (2008). Enduring technological optimism: Zionism's environmental ethic and its influence on Israel's environmental history. *Environmental History*, 13(2), 275–305.
- Taleb, N. N. (2018). *Skin in the game: Hidden asymmetries in daily life*. Random House.
- Waxman, D. (2019). *The Israeli-Palestinian conflict: What everyone needs to know*. Oxford University Press.

ARTÍCULO

Eficiencia Legislativa en Costa Rica: Estrategias Modernas para la Optimización de Despachos Legislativos

Legislative Efficiency in Costa Rica: Modern Strategies for the Optimization of Legislative Offices

Camila Valerín-Montero ¹

Como citar:

Valerín-Montero, C. (2025). Eficiencia Legislativa en Costa Rica: Estrategias Modernas para la Optimización de Despachos Legislativos. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 156-179. Doi: 10.63058/des.v19i1.313

Fecha de ingreso: 26 de enero de 2025. **Fecha de aprobación:** 4 de febrero de 2025.

¹ Camila Valerín-Montero es estudiante de Derecho en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Posee un Bachillerato Bilingüe en Relaciones Internacionales otorgado por la misma institución. Además, ha adquirido experiencia profesional como practicante en el rol de asesora asistente en redacción e investigación de la Asamblea Legislativa. ORCID: 0009-0004-7271-6718. Correo electrónico: cvalerinm677@ulacit.ed.cr.

Resumen

Este artículo examina los retos estructurales que enfrenta la Asamblea Legislativa de Costa Rica en la tramitación de proyectos de ley, abordando las causas subyacentes de la ineficiencia y proponiendo un modelo de gestión del tiempo adaptado al contexto legislativo costarricense. Además, se analiza cómo estas propuestas podrían integrarse de manera sostenible en el marco institucional actual para mejorar la transparencia y la eficacia legislativa. Para desarrollar este estudio, se combinaron encuestas detalladas, entrevistas estructuradas y un análisis comparativo de prácticas internacionales. Se incluyeron casos de éxito de legislaturas en América Latina y Europa, lo que permitió identificar problemas específicos y soluciones comprobadas, enriqueciendo el marco de análisis con una perspectiva global. Los hallazgos destacan tres áreas críticas: insuficiencia tecnológica, redundancias en procesos burocráticos y deficiencias en la comunicación interna. Además, la falta de capacitación continua se identificó como un factor clave que perpetúa estas ineficiencias. Las estrategias propuestas incluyen la implementación de herramientas digitales, la simplificación de procedimientos y el desarrollo de competencias específicas, esenciales para mitigar estos problemas. La adaptación de estas soluciones requiere más que cambios estructurales; es fundamental impulsar una transformación cultural dentro de las instituciones. Esto implica fortalecer liderazgos comprometidos, fomentar una mentalidad orientada a la innovación y establecer incentivos que promuevan la mejora continua. En conclusión, la modernización de los despachos legislativos a través de tecnología, capacitación y modelos de gestión eficientes es esencial para garantizar la eficiencia, la transparencia democrática y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.

Palabras clave: optimización legislativa, gestión del tiempo, innovación tecnológica, proceso legislativo, Asamblea Legislativa de Costa Rica, transparencia institucional, prácticas internacionales, evaluación de desempeño, procrastinación, coordinación interna, indicadores clave de rendimiento, análisis comparativo, capacitación continua, liderazgo transformacional, gestión del cambio.

Abstract

This article examines the structural challenges within Costa Rica's Legislative Assembly regarding inefficiencies in bill processing, addressing the root causes and proposing a time management model tailored to the legislative context. Additionally, it explores how these proposals could be sustainably integrated into the current institutional framework to enhance transparency and legislative effectiveness. The study employed comprehensive surveys, structured interviews, and a comparative analysis of international best practices. Cases from Latin America and Europe enriched the analysis by identifying specific problems and proven solutions, providing a global perspective. Findings highlight three critical areas: technological insufficiencies, redundancies in bureaucratic processes, and deficiencies in internal communication. Additionally, the lack of continuous training emerged as a key factor perpetuating inefficiencies. Proposed strategies include implementing digital tools, streamlining procedures, and developing specific competencies as essential measures to address these issues. However, adapting these solutions requires more than structural changes; a cultural transformation within institutions is crucial. This involves strengthening committed leadership,

fostering an innovation-oriented mindset, and establishing incentives to promote continuous improvement. In conclusion, modernizing legislative offices through technology, training, and efficient management models is vital to ensure efficiency, democratic transparency, and enhanced public trust in institutions.

Keywords: legislative optimization, time management, technological innovation, legislative process, Costa Rica's Legislative Assembly, institutional transparency, international practices, performance evaluation, procrastination, internal coordination, key performance indicators, comparative analysis, continuous training, transformational leadership, change management.

Introducción

La eficiencia en los procesos legislativos es un pilar esencial de cualquier sistema democrático. En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, los desafíos operativos no solo ralentizan la implementación de políticas clave, sino que también debilitan la confianza ciudadana en las instituciones. Esta investigación surge como resultado de un proyecto académico de experiencia profesional universitaria, la cual es un requisito para graduación. Se enfocó en diagnosticar las limitaciones y proponer soluciones prácticas para mejorar el desempeño legislativo.

Los despachos legislativos, como núcleos de trabajo estratégico, enfrentan problemas recurrentes relacionados con la gestión del tiempo, la coordinación interna y la adopción de herramientas tecnológicas. Estos retos impactan negativamente la capacidad del órgano legislativo para responder con agilidad a las demandas sociales, económicas y políticas. La investigación realizada incluyó un análisis detallado de estas problemáticas y la evaluación de casos internacionales exitosos, como los modelos implementados en Portugal y Uruguay², donde el uso de tecnologías emergentes y la simplificación de procesos han transformado positivamente las dinámicas legislativas.

A partir de estos hallazgos, se elaboró una guía práctica que combina recomendaciones específicas, como la implementación de sistemas tecnológicos integrados, la adopción de métodos de priorización eficientes y la creación de protocolos claros para la comunicación interna. Estas medidas no solo buscan optimizar recursos, sino también fomentar una cultura de innovación y mejora continua dentro de la Asamblea Legislativa.

El cambio necesario no es solo técnico, sino también cultural. La transición hacia una gestión más dinámica requiere incorporar prácticas de liderazgo transformacional y promover una mentalidad orientada al aprendizaje constante. Este enfoque integral garantiza que los despachos legislativos

² Ejemplo de referencia: Los modelos de Portugal y Uruguay se basaron en la implementación de sistemas digitales y procesos simplificados en sus asambleas legislativas.

puedan adaptarse a las demandas cambiantes y fortalecer su papel como pilares fundamentales de la democracia costarricense.

A lo largo de este artículo, se explorarán los principales retos identificados, así como las estrategias necesarias para superarlos. La meta es clara: transformar los despachos legislativos en espacios eficientes, transparentes y capaces de responder con efectividad a las necesidades del país.

Metodología

La metodología de esta investigación combinó herramientas cualitativas y cuantitativas para garantizar un análisis integral y robusto. En este proceso, se utilizaron tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para complementar la revisión y análisis de datos, destacando el apoyo de herramientas como ChatGPT (OpenAI, 2025).

Encuestas al público general

El primer paso consistió en la realización de encuestas estructuradas dirigidas al público general. Estas encuestas se llevaron a cabo con el objetivo de analizar cómo se sienten los ciudadanos respecto a la Asamblea Legislativa y medir su conocimiento sobre el funcionamiento de esta institución. La muestra incluyó a aproximadamente 80 personas seleccionadas de manera aleatoria, lo que permitió obtener una perspectiva diversa y representativa. Entre los principales hallazgos, se identificaron las áreas que la población percibe como más problemáticas, como la lentitud en la toma de decisiones y la falta de transparencia en los procesos legislativos. Estos resultados fueron fundamentales para establecer las prioridades en el diseño de las estrategias propuestas.

Acompañamiento de un asesor político

En lugar de realizar entrevistas con expertos, se contó con el acompañamiento continuo de un asesor político durante el desarrollo del proyecto. Este asesor proporcionó información clave y aclaró dudas relacionadas con los procesos legislativos, lo que permitió enriquecer el análisis. Este enfoque práctico garantizó que las soluciones propuestas estuvieran alineadas con las dinámicas reales de la Asamblea Legislativa, aportando un valor significativo a la investigación.

Análisis comparativo

El análisis comparativo de legislaturas en América Latina y Europa fue otro componente central del estudio. Para este análisis, se consultaron fuentes especializadas, incluyendo bases de datos como ProQuest (2021), que proporcionaron información sobre avances en la modernización legislativa. Casos exitosos en Uruguay, Chile y Portugal fueron seleccionados por sus prácticas innovadoras en planificación semanal de tareas, sistemas de priorización de actividades y métodos de supervisión

de progresos, respectivamente. Estas estrategias fueron adaptadas al contexto costarricense para integrar elementos internacionales al modelo final.

Revisión de literatura

El proceso de creación de la guía también involucró una revisión exhaustiva de literatura académica y técnica. Utilizando bases de datos como EBSCO, Agora-Parl y el Tesoro Mundial de la Educación (UNESCO), se exploraron temas como modernización administrativa, gestión del tiempo y comunicación institucional. Esta revisión proporcionó un marco teórico sólido para fundamentar las recomendaciones incluidas en la guía. Investigaciones recientes sobre la implementación de indicadores clave de rendimiento (KPI) en entornos legislativos destacaron su efectividad para mejorar la productividad y la transparencia.

La combinación de encuestas al público, el acompañamiento de un asesor político, el análisis comparativo y la revisión de literatura permitió desarrollar una guía integral y bien fundamentada. Este enfoque mixto no solo aseguró la relevancia y aplicabilidad de las estrategias recomendadas, sino que también sentó las bases para futuras investigaciones en el ámbito de la modernización legislativa. El proyecto constituye un aporte significativo a la mejora de la eficiencia en la Asamblea Legislativa, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia costarricense.

Desafíos en los despachos legislativos

La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha experimentado una evolución significativa desde su creación, adaptándose a las demandas democráticas y sociales del país. Desde su fundación como un órgano limitado en sus competencias, se ha transformado en un pilar central del sistema político costarricense, ampliando su estructura y fortaleciendo sus procesos internos para responder a los cambios en el contexto nacional e internacional. Reformas como la profesionalización del personal técnico y la incorporación de procedimientos más participativos han buscado modernizar su funcionamiento. Sin embargo, este crecimiento también ha evidenciado problemas persistentes, como la sobrecarga de trabajo y la dificultad para alcanzar consensos en un escenario político marcado por la pluralidad partidaria.

En la actualidad, la Asamblea Legislativa enfrenta una serie de problemáticas estructurales y funcionales que afectan su desempeño y repercuten directamente en la operatividad de los despachos legislativos. Estas problemáticas, lejos de ser aisladas, se entrelazan y generan un ciclo de ineficiencia que dificulta la aprobación oportuna de leyes fundamentales para el desarrollo del país. Este apartado analiza las principales limitaciones que enfrentan los despachos, los desafíos que plantean y las razones que justifican la necesidad de una guía para optimizar su funcionamiento.

Uno de los desafíos más apremiantes es la insuficiencia tecnológica. Los despachos legislativos

aún dependen de sistemas manuales o herramientas digitales obsoletas, lo que dificulta la integración de datos y el acceso rápido a información crucial. Esta carencia ralentiza los procesos internos y limita la capacidad de respuesta ante urgencias legislativas. Los sistemas manuales dificultan el seguimiento efectivo de los proyectos legislativos, generando retrasos acumulativos en su tramitación. Además, la falta de capacitación en el uso de herramientas modernas crea una desconexión entre las capacidades tecnológicas disponibles y el personal encargado de utilizarlas, afectando tanto la agilidad como la calidad del trabajo.

Los procedimientos burocráticos redundantes representan un obstáculo significativo. La repetición innecesaria de tareas, la falta de protocolos claros y la ausencia de un sistema eficiente de priorización generan cuellos de botella en las actividades diarias. Este escenario retrasa el desarrollo de proyectos legislativos y afecta la motivación de los equipos al enfrentarse a procesos engorrosos. En un contexto comparativo, estudios realizados por el Parlamento Europeo destacan que la simplificación de procesos y la estandarización de protocolos permitieron reducir tiempos de respuesta en proyectos legislativos complejos (Parlamento Europeo, 2021). De manera similar, el Congreso de Chile ha implementado acuerdos legislativos priorizados, optimizando las comisiones y reduciendo la duplicación de esfuerzos (Congreso de Chile, 2024).

Además, las deficiencias en la comunicación interna representan un obstáculo crítico. La falta de protocolos claros para el intercambio de información genera malentendidos, duplicación de esfuerzos y desalineación entre equipos. Por ejemplo, situaciones donde múltiples equipos trabajan en proyectos similares sin coordinación resultan en la pérdida de tiempo y recursos. Establecer canales de comunicación más eficientes, que permitan un flujo de información transparente y oportuno, es esencial para superar estas barreras y garantizar una toma de decisiones más informada y precisa.

Consecuencias acumulativas

El impacto acumulativo de estas problemáticas es profundo y multidimensional, generando un efecto dominó que afecta tanto a la Asamblea Legislativa como al país en general. Uno de los principales efectos visibles es el retraso en la aprobación de leyes esenciales para el desarrollo económico, social y político de Costa Rica. Esto limita la capacidad del gobierno para responder a problemas urgentes y genera frustración en los ciudadanos, quienes perciben una desconexión entre las instituciones y sus necesidades.

En el ámbito laboral, la sobrecarga de trabajo combinada con procedimientos engorrosos y una infraestructura inadecuada crea un entorno poco motivador para los actores legislativos. Esto afecta la calidad del análisis legislativo y, en muchos casos, las leyes aprobadas carecen de una base sólida debido al tiempo insuficiente para su discusión y evaluación. Este ciclo de ineficiencia mina la moral de los equipos y afecta la productividad general de los despachos.

A nivel institucional, la duplicación de esfuerzos y la falta de coordinación interna generan incoherencias en el trabajo legislativo. Situaciones documentadas muestran cómo varios equipos trabajan en propuestas similares sin una comunicación efectiva, lo que genera pérdida de recursos y esfuerzos duplicados. Esto no solo afecta la productividad, sino que también refuerza la percepción de ineficiencia dentro y fuera de la institución.

En comparación con otros parlamentos, se observa que problemas similares han sido superados mediante reformas organizacionales y tecnológicas. El Parlamento Europeo implementó plataformas digitales avanzadas que optimizan el manejo de documentos legislativos, mejorando la transparencia y reduciendo tiempos de tramitación (Parlamento Europeo, 2021). Igualmente Uruguay ha demostrado liderazgo en la transformación digital, como lo destaca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Uruguay, 2023), posicionándose como un referente en la región. Asimismo, el Congreso de Chile ha adoptado metodologías de priorización legislativa, como las propuestas analizadas por Manzi et al. (2011), que han demostrado ser efectivas para agilizar proyectos críticos.

Las problemáticas estructurales y funcionales en los despachos legislativos tienen consecuencias acumulativas que afectan tanto a la Asamblea Legislativa como a la ciudadanía. Sin una intervención adecuada, estas limitaciones seguirán perpetuándose, limitando la capacidad legislativa para responder a las necesidades del país. Sin embargo, las experiencias internacionales ofrecen un camino claro hacia la mejora. Reformas tecnológicas, organizacionales y comunicativas permitirían superar estas barreras. Es momento de que Costa Rica implemente estas estrategias para fortalecer su sistema democrático y garantizar un funcionamiento legislativo más eficiente.

Justificación para la creación de la guía

La necesidad de optimizar los despachos legislativos llevó a la creación de una guía, cuyo propósito principal es ofrecer un marco de acción que permita superar las barreras estructurales y operativas que enfrentan estos espacios. Basada en un análisis exhaustivo de la situación actual, la guía no solo aborda los problemas identificados, también propone un conjunto de soluciones prácticas y viables para facilitar la mejora de la gestión del tiempo, la coordinación entre actores y la comunicación dentro de los despachos legislativos.

El enfoque central de la guía radica en transformar los despachos en entornos más ágiles, eficaces y modernos, alineados con las exigencias del siglo XXI. Este proceso de transformación tiene como objetivo no solo optimizar los recursos humanos y materiales, sino también contribuir al fortalecimiento de las bases democráticas del país, al generar un ambiente de trabajo más transparente, colaborativo y eficiente.

A lo largo de la investigación, se lograron identificar las principales problemáticas que afectan

el desempeño de los despachos legislativos. En respuesta a estos desafíos, se diseñó un modelo que integra estrategias y recomendaciones específicas para mitigar los problemas más críticos, fundamentadas en investigaciones internacionales sobre reformas legislativas disponibles en bibliotecas digitales como EBSCO (2021). Estas propuestas no solo son aplicables en el corto plazo, están pensadas para generar un impacto sostenido, adaptándose a las características particulares del contexto costarricense (Valerín, 2024).

En las siguientes secciones del artículo, se detallan las principales estrategias de optimización propuestas en la guía, explicando las áreas clave de acción que deben tomarse en cuenta para lograr una mejora significativa en la eficiencia y efectividad de los despachos legislativos. Estas estrategias no solo están orientadas a mejorar los procesos internos, sino también a promover una cultura de trabajo más eficiente, colaborativa y adaptada a los desafíos del futuro.

Estrategias para la optimización

Este es un resumen de la guía “Optimización de Despachos Legislativos”. La optimización de los despachos legislativos es esencial para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer las instituciones democráticas. Estos despachos gestionan el flujo de trabajo legislativo y representan el punto de contacto entre las decisiones políticas y las necesidades ciudadanas, alineándose con las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (CEPAL, 2023).

La importancia de los despachos legislativos

Los despachos legislativos son el núcleo estratégico donde se procesan iniciativas de ley, se desarrollan propuestas y se coordina la interacción entre diversos actores políticos y sociales. Su correcto funcionamiento impulsa la eficiencia legislativa y fortalece la relación entre las instituciones democráticas y la ciudadanía. En contextos de alta pluralidad política, como el costarricense, los despachos juegan un rol esencial al articular intereses diversos y garantizar que las decisiones se tomen con base en datos bien fundamentados.

Uno de los principales desafíos es la sobrecarga de responsabilidades. Los equipos, a menudo, enfrentan una acumulación de tareas sin un sistema claro para priorizarlas o gestionarlas eficientemente, lo que genera un ambiente de presión constante donde las actividades urgentes desplazan a las estratégicas, afectando la calidad del trabajo legislativo. Un estudio del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México destaca que contar con manuales administrativos y estructuras organizacionales claras facilita el cumplimiento de funciones y promueve una adecuada participación del personal (Legislación EDOMEX).

Los despachos legislativos son puntos clave para la implementación de políticas públicas. Sin un sistema eficiente, los proyectos de ley pueden enfrentar retrasos significativos, afectando la capacidad

del gobierno para responder a las necesidades sociales, económicas y políticas del país. Esto resalta la importancia de contar con despachos bien organizados que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.

El impacto de los despachos legislativos trasciende las paredes del Parlamento, influyendo directamente en la percepción ciudadana sobre la calidad de la democracia. Un despacho bien gestionado es capaz de responder a las inquietudes de los ciudadanos y coordinarse eficazmente con otros actores políticos y sociales, fortaleciendo la confianza pública en las instituciones y fomentando una participación ciudadana más activa.

Lecciones internacionales aplicables al contexto costarricense

En el ámbito internacional, legislaturas como las de Canadá y el Reino Unido han priorizado la modernización de sus despachos legislativos. Por ejemplo, el Parlamento del Reino Unido implementó programas de transformación digital que mejoraron la eficiencia operativa y la transparencia, según informes de Asamblea Legislativa de Costa Rica (Asamblea.go.cr). En Portugal, los avances tecnológicos han sido reconocidos por su impacto en la productividad legislativa, destacando los esfuerzos por superar la transformación digital (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, 2019).

En Portugal, la Asamblea de la República ha destacado por sus esfuerzos en la adopción de tecnologías digitales y herramientas de planificación, como lo señala el informe global sobre parlamentos electrónicos (Agora-Parl.org). Estas iniciativas han incluido avances en la digitalización de procesos y la mejora de la accesibilidad a documentación, lo que contribuye a fortalecer la transparencia institucional. Estas experiencias subrayan la importancia de adaptar herramientas tecnológicas y organizativas a las necesidades específicas de cada contexto legislativo, garantizando así su eficacia.

Promoción de la colaboración y sostenibilidad

Otro aspecto fundamental es la necesidad de fomentar una cultura de colaboración dentro de los despachos legislativos. Esto incluye el establecimiento de canales de comunicación efectivos y la promoción de un ambiente de trabajo que valore la innovación y el aprendizaje continuo. Los despachos legislativos que priorizan la colaboración son más efectivos en la resolución de problemas complejos y en la toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, garantizar la sostenibilidad de las mejoras implementadas requiere un enfoque integral que combine tecnología, formación y transformación cultural. Actualizar de manera periódica las herramientas digitales, ofrecer programas continuos de capacitación y evaluar constantemente los procesos implementados son pasos fundamentales para consolidar estos avances. Al adoptar estas estrategias, los despachos legislativos pueden desempeñar un rol más activo en la promoción de la

eficiencia, la transparencia y la confianza ciudadana.

Gestión del tiempo y prioridades

La gestión del tiempo es una competencia esencial en cualquier entorno profesional, pero adquiere una importancia crítica en los despachos legislativos. Según el Tesoro Mundial de la Educación (UNESCO, 2021), la gestión del tiempo y la modernización administrativa son componentes clave para optimizar procesos en entornos organizacionales complejos. La verdadera eficiencia no radica en hacer más cosas, sino en hacer las cosas correctas en el momento preciso (Peter Drucker).

Priorización de tareas

La Matriz de Eisenhower² emerge como una herramienta invaluable para priorizar tareas. Este modelo clasifica las actividades en cuatro categorías según su urgencia e importancia, proporcionando un marco claro para la toma de decisiones. Por ejemplo, en un despacho legislativo, la revisión de un proyecto de ley que aborda una crisis nacional sería urgente e importante, mientras que actividades administrativas de menor impacto podrían delegarse o programarse para otro momento. La implementación consistente de esta herramienta reduce el riesgo de sobrecarga laboral y asegura que las tareas críticas reciban la atención necesaria.

Para una representación visual de la Matriz de Eisenhower, se puede utilizar el siguiente diagrama:

Planificación estratégica

	URGENTE	NO URGENTE
IMPORTANCIA	TAREA A Haslo	TAREA B planifica
NO IMPORTANCIA	TAREA A Delega	TAREA B Elimínalo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

² Ejemplo de referencia: Los modelos de Portugal y Uruguay se basaron en la implementación de sistemas digitales y procesos simplificados en sus asambleas legislativas.

Más allá de la priorización, la planificación estratégica es fundamental. Esto incluye la creación de cronogramas detallados que contemplen objetivos específicos, plazos definidos y asignación de recursos. Por ejemplo, un despacho podría diseñar un cronograma semanal que divida las horas del día entre actividades relacionadas con la investigación legislativa, la redacción de informes y las reuniones con partes interesadas. Esta planificación no solo mejora la productividad, sino que también permite anticipar desafíos y coordinar esfuerzos de manera más eficiente.

Delegación estratégica

La delegación estratégica es otra piedra angular de la gestión del tiempo. Distribuir tareas entre los miembros del equipo según sus habilidades y competencias asegura que cada actividad sea realizada por la persona más adecuada. Este enfoque no solo incrementa la eficiencia, sino que también fomenta el desarrollo profesional de los colaboradores, quienes tienen la oportunidad de asumir nuevas responsabilidades y adquirir habilidades adicionales. Una delegación efectiva tiene el potencial de aumentar la productividad de un equipo hasta en un 20%.

Manejo de imprevistos

Finalmente, el manejo de imprevistos es una habilidad esencial. Desde cambios repentinos en las agendas legislativas hasta crisis políticas, la capacidad para adaptarse rápidamente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Según el PMBOK® Guide (Managing Project Risks and Uncertainties, 2021), el establecimiento de protocolos claros incluye la implementación de sistemas de notificación inmediata y planes de contingencia que asignen roles específicos a cada miembro del equipo. Estas estrategias fortalecen la capacidad de los despachos para manejar crisis con agilidad y efectividad.

Comunicación y coordinación efectiva

La comunicación efectiva es un pilar fundamental para el éxito de cualquier equipo, y los despachos legislativos no son la excepción. Una comunicación clara y estructurada evita malentendidos, reduce la duplicación de esfuerzos y mejora la coordinación interna, lo que resulta en un entorno de trabajo más cohesionado y eficiente.

Protocolos de comunicación

Establecer protocolos de comunicación es una práctica esencial. Pueden incluir directrices claras para la redacción y gestión de correos electrónicos, el uso de plataformas de mensajería interna como Slack y procedimientos para documentar reuniones. Por ejemplo, un despacho podría implementar un sistema donde todos los correos relacionados con un proyecto de ley incluyan un asunto estándar, como “[Proyecto de Ley X] Actualización”, para facilitar su clasificación y seguimiento.

En otros contextos legislativos, como el Parlamento Europeo, se han adoptado sistemas similares para estandarizar la gestión de la información, mejorando el acceso a datos clave y reduciendo errores administrativos (Parlamento Europeo, 2021). Este enfoque asegura que la información crítica esté siempre accesible y bien documentada.

Escucha activa y relaciones interpersonales

La escucha activa es una herramienta esencial para mejorar la comunicación en los despachos legislativos. Esta práctica implica tanto escuchar las palabras del interlocutor como interpretar el mensaje subyacente, las emociones y las intenciones. Aplicar técnicas como el parafraseo para confirmar la comprensión, la clarificación de puntos ambiguos y la empatía ante diferentes perspectivas fortalece las relaciones interpersonales y fomenta un ambiente de trabajo colaborativo y productivo.

La escucha activa es ampliamente reconocida en la literatura de gestión y comportamiento organizacional como una herramienta efectiva para mejorar la comunicación, aumentar la satisfacción laboral y reducir conflictos en equipos de trabajo. Un artículo publicado en *The International Journal of Listening* destaca que la escucha activa puede mejorar la comprensión y la cohesión del equipo, lo que contribuye a una mayor satisfacción laboral y una reducción de conflictos internos.

Reuniones y retroalimentación

La retroalimentación continua es esencial para mantener un flujo de comunicación efectivo. Establecer reuniones regulares, tanto formales como informales, para discutir avances, desafíos y ajustes necesarios fomenta un ambiente de transparencia y colaboración. Estas reuniones pueden estructurarse utilizando herramientas visuales como tableros Kanban, que permiten a los equipos visualizar el progreso de las tareas y ajustar prioridades en tiempo real.

En el Parlamento del Reino Unido, por ejemplo, el uso de herramientas como tableros visuales y plataformas digitales ha mejorado la coordinación interna, permitiendo a los equipos identificar rápidamente obstáculos en la gestión de tareas y priorizar proyectos estratégicos (Parlamento del Reino Unido, 2023). Este enfoque asegura que todos los actores involucrados estén alineados y comprometidos con los objetivos establecidos.

Superando la procrastinación

La procrastinación es un obstáculo común en entornos de alta presión como los despachos legislativos. Las causas de este problema son diversas, desde la falta de claridad en los objetivos hasta el perfeccionismo paralizante y las distracciones constantes. Sin embargo, sus efectos son siempre negativos, retrasando el cumplimiento de plazos y afectando la calidad del trabajo

como áreas de mejora. Un despacho podría utilizar esta herramienta para evaluar la efectividad de su liderazgo, la claridad de la comunicación interna y la calidad del trabajo entregado.

Este tipo de evaluación contribuye a mejorar las relaciones interpersonales dentro del equipo, ya que promueve la empatía y la comprensión mutua. Programas similares han mostrado resultados positivos en organizaciones legislativas al fomentar una mayor colaboración y desempeño grupal (Agora-Parl).

Monitoreo constante

El monitoreo continuo es esencial para anticipar problemas y ajustar las estrategias en tiempo real. Un análisis regular de los KPI podría revelar que el principal cuello de botella en el procesamiento de proyectos de ley radica en la revisión inicial. Con esta información, los despachos pueden reasignar recursos, rediseñar procesos o implementar herramientas tecnológicas específicas para abordar directamente este problema.

Herramientas como dashboards interactivos y sistemas de gestión de datos permiten a los equipos legislativos visualizar el estado de las tareas en tiempo real, facilitando la toma de decisiones informadas. El Senado de Chile ha implementado sistemas digitales que mejoran la gestión de tareas y plazos, promoviendo una mayor eficiencia operativa (Senado de Chile, 2023).

Retroalimentación continua

La retroalimentación constante es un componente crucial del monitoreo efectivo. Establecer reuniones periódicas para revisar el progreso, discutir desafíos y ajustar estrategias garantiza que los equipos estén alineados con los objetivos organizacionales. Estas reuniones también proporcionan un espacio para reconocer logros y fomentar la motivación del equipo.

En Canadá, las reuniones semanales en entornos legislativos han sido recomendadas como una práctica eficaz para mejorar la comunicación interna y optimizar la asignación de tareas (Parliament of Canada, 2023).

Beneficios adicionales

La evaluación y el monitoreo mejoran la eficiencia operativa y fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas. Al documentar y analizar los resultados de manera regular, los despachos legislativos pueden demostrar su compromiso con la mejora continua y la responsabilidad institucional. Esto genera confianza dentro del equipo y entre los ciudadanos, quienes perciben a la Asamblea Legislativa como una institución proactiva y eficiente.

Además, estas prácticas fomentan una cultura de innovación. Al identificar áreas de mejora,

realizado. El equipo de psicólogas de Espai Nun señala que “la falta de un propósito claro o la percepción de la tarea como abrumadora puede conducir a la procrastinación”. Establecer metas claras y comprender el significado de la tarea puede aumentar la motivación y reducir la tendencia a posponer actividades.

Establecimiento de metas claras

Una estrategia efectiva para combatir la procrastinación es el establecimiento de metas claras y alcanzables. El modelo SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y con Tiempo definido) ofrece un marco útil para definir objetivos que motiven a los equipos y proporcionen un sentido de dirección. Así las cosas, en lugar de plantear un objetivo genérico como “mejorar la productividad”, un despacho podría establecer una meta SMART como “incrementar en un 20% la cantidad de proyectos revisados mensualmente en los próximos tres meses”.

Conexión con un propósito mayor

Conectar las tareas cotidianas con un propósito mayor puede ser un poderoso motor de motivación. Recordar a los equipos cómo su trabajo contribuye al bienestar de la sociedad y al fortalecimiento de las instituciones democráticas les permite encontrar significado en sus actividades diarias, lo que a su vez reduce la tendencia a procrastinar. En el contexto costarricense, un ejemplo podría ser mostrar cómo la aprobación oportuna de un proyecto legislativo impacta directamente en la mejora de políticas públicas clave, reforzando el compromiso de los colaboradores.

Herramientas de gestión del tiempo

Otra estrategia clave es el uso de herramientas de gestión del tiempo que fomenten un enfoque disciplinado y estructurado. Aplicaciones como Focus Booster, basadas en la técnica Pomodoro, ayudan a los equipos a trabajar en intervalos cortos y productivos, seguidos de pausas regulares. Este método no solo mejora la concentración, sino que también reduce la fatiga asociada con sesiones de trabajo prolongadas.

En el Parlamento Europeo, la integración de técnicas como Pomodoro con plataformas digitales permitió una mejor distribución de las tareas legislativas, optimizando los tiempos de revisión de proyectos y evitando acumulaciones innecesarias (Parlamento Europeo, 2021).

Casos prácticos de éxito

En un caso práctico implementado en la Cámara de Representantes de Uruguay, se combinó la técnica Pomodoro con objetivos SMART para reducir la procrastinación. Los equipos trabajaron en intervalos de 25 minutos enfocados en tareas específicas previamente definidas, lo que resultó en

una disminución del 25% en los retrasos en la entrega de proyectos legislativos clave. Esto permitió completar iniciativas importantes antes de los plazos establecidos (Cámara de Representantes de Uruguay, 2023)

Ambiente de apoyo y capacitación

Fomentar un ambiente de apoyo y reconocimiento es fundamental para superar la procrastinación. Reconocer los logros, incluso los más pequeños, motiva a los equipos a mantenerse enfocados y comprometidos. La implementación de un sistema de recompensas simples, como el reconocimiento público durante reuniones, puede mejorar significativamente la moral del equipo. Asimismo, proporcionar capacitación en manejo del estrés y técnicas de mindfulness puede ayudar a los colaboradores a gestionar mejor las presiones inherentes a su trabajo.

En un estudio del Harvard Business Review (2020), se demostró que los equipos que participaron en talleres de manejo del estrés mejoraron su productividad en un 18% y reportaron menores niveles de procrastinación, reforzando la importancia de estas iniciativas en entornos legislativos.

Herramientas tecnológicas clave

Entre las soluciones tecnológicas más relevantes se encuentran las plataformas de gestión de proyectos, sistemas de almacenamiento en la nube y aplicaciones de comunicación interna. Herramientas como Trello o Asana, permiten a los equipos asignar tareas, establecer plazos y monitorear el progreso de manera eficiente (Asana). Además, servicios como Google Workspace o Microsoft 365 proporcionan plataformas integradas para la colaboración en tiempo real, esenciales en entornos legislativos donde la coordinación es clave (Google Workspace).

En Portugal, la modernización tecnológica en la Asamblea de la República ha mejorado la accesibilidad y la eficiencia operativa a través de sistemas digitales avanzados. Aunque no se dispone de cifras específicas sobre el impacto en tiempos de procesamiento legislativo, estos esfuerzos han sido reconocidos por organizaciones internacionales que promueven la innovación en parlamentos (Agora-Parl).

Asimismo, el Parlamento de Canadá utiliza tecnologías avanzadas, como sistemas en la nube, para garantizar la seguridad y accesibilidad de su información legislativa, permitiendo a los equipos trabajar de forma remota sin comprometer la confidencialidad (Parliament of Canada, 2023).

Estrategias para la implementación

Adoptar nuevas tecnologías requiere una estrategia integral que contemple la capacitación del personal, la actualización de infraestructuras y la gestión del cambio cultural. La capacitación es un componente crítico; los equipos necesitan entender no solo cómo utilizar las herramientas, sino

también cómo integrarlas en sus rutinas diarias. Por ejemplo, el Senado de Chile ha implementado talleres para formar al personal en el uso de herramientas digitales como Microsoft Teams y Slack, logrando mejoras en la eficiencia y comunicación interna (Senado de Chile, 2023).

Otro factor clave es la personalización de las herramientas para adaptarlas a las necesidades específicas del entorno legislativo. El diseño de sistemas de seguimiento para proyectos de ley debe reflejar las particularidades del proceso legislativo costarricense, asegurando que los equipos puedan acceder fácilmente a información relevante y actualizada. Además, se deben establecer protocolos claros para garantizar el uso consistente de estas tecnologías en toda la organización.

Impacto de la tecnología en la transparencia y la rendición de cuentas

La modernización tecnológica no solo incrementa la eficiencia, también fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, dos pilares fundamentales en cualquier sistema democrático. Según el Informe Mundial sobre el Parlamento Electrónico (Unión Interparlamentaria, 2022), la digitalización de procesos legislativos ha permitido a los parlamentos globales mejorar el acceso a la información y optimizar sus operaciones.

El Parlamento del Reino Unido ofrece herramientas en línea que permiten a los ciudadanos rastrear el progreso de proyectos legislativos, consultar documentos y acceder a información en tiempo real, mejorando la percepción de transparencia y fomentando una mayor interacción ciudadana (Parlamento del Reino Unido, 2023).

En Costa Rica, la implementación de tecnologías similares podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la Asamblea Legislativa. Un sistema de rastreo legislativo en línea permitiría a los ciudadanos interactuar con sus representantes, monitorear avances legislativos y acceder a información relevante, fortaleciendo la confianza ciudadana y fomentando una cultura de participación.

Retos y oportunidades

A pesar de sus múltiples beneficios, la incorporación de tecnologías modernas también enfrenta desafíos significativos. La resistencia al cambio es uno de los obstáculos más comunes, especialmente en instituciones con estructuras jerárquicas tradicionales. Para superar este reto, es esencial involucrar a todos los niveles de la organización en el proceso de implementación, asegurando que los equipos comprendan los beneficios tangibles de la tecnología.

Otro desafío es el costo asociado con la adquisición e implementación de nuevas tecnologías. Sin embargo, los beneficios a largo plazo en términos de eficiencia operativa, transparencia y confianza ciudadana suelen justificar la inversión inicial. Además, existen oportunidades para

acceder a financiamiento externo o colaborar con organizaciones internacionales que promuevan la modernización institucional en países en desarrollo.

Podemos concluir que la incorporación de tecnologías modernas en los despachos legislativos no es simplemente una opción, sino una necesidad en el contexto de un entorno legislativo globalizado y dinámico. Al adoptar soluciones tecnológicas adecuadas y establecer estrategias de implementación bien planificadas, los despachos pueden transformar radicalmente su capacidad operativa, fortaleciendo tanto la eficiencia interna como la relación con la ciudadanía. Esta modernización no solo posiciona a Costa Rica como un modelo en la región, también refuerza los pilares fundamentales de su democracia.

Evaluación y monitoreo como pilares de mejora

La evaluación y el monitoreo son herramientas indispensables para garantizar la mejora continua en los despachos legislativos. Estas prácticas no solo permiten medir el progreso de las estrategias implementadas, sino también identificar áreas de mejora y optimizar recursos de manera efectiva.

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son métricas objetivas que proporcionan una visión clara sobre el desempeño de los despachos legislativos. Estos indicadores permiten evaluar aspectos como el tiempo promedio de tramitación de proyectos de ley, la eficiencia en la comunicación interna y la satisfacción del equipo con los procesos actuales. Un KPI relevante podría ser el número de proyectos de ley revisados dentro de un período determinado en comparación con el promedio histórico.

En la práctica, la Asamblea Legislativa de Costa Rica podría implementar un sistema de KPI que mida la efectividad de las reuniones semanales, la velocidad en la respuesta a solicitudes externas y la puntualidad en la entrega de informes. Este enfoque permitiría no solo mejorar la productividad, sino también garantizar que los recursos sean utilizados de manera estratégica.

En Portugal, la Asamblea de la República ha avanzado en la digitalización de procesos legislativos, mejorando la accesibilidad y la eficiencia operativa a través de herramientas tecnológicas avanzadas (Agora-Parl). Estos esfuerzos han sido reconocidos como fundamentales para incrementar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana.

Evaluación 360 grados

La evaluación 360 grados es un enfoque integral que recopila retroalimentación desde múltiples perspectivas, incluyendo superiores, colegas y colaboradores directos. Este método fomenta una cultura de aprendizaje continuo, permitiendo a los equipos legislativos identificar tanto fortalezas

los equipos legislativos pueden explorar nuevas soluciones y adoptar prácticas innovadoras que optimicen aún más su desempeño. Un despacho que identifique problemas en la comunicación interna podría implementar tecnologías avanzadas como plataformas de colaboración en tiempo real, aumentando así la productividad y la cohesión del equipo.

Finalmente, la evaluación y el monitoreo son pilares fundamentales para la mejora continua en los despachos legislativos. Al implementar indicadores clave de rendimiento, adoptar evaluaciones 360 grados y establecer sistemas de monitoreo constante, los equipos legislativos pueden garantizar un desempeño eficiente y alineado con los objetivos estratégicos de la institución.

Estas prácticas optimizan los procesos internos, fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. En un entorno legislativo cada vez más dinámico y complejo, la capacidad para evaluar y ajustar estrategias en tiempo real es esencial para garantizar el éxito a largo plazo. Por lo tanto, los despachos legislativos de Costa Rica tienen una oportunidad única para liderar con el ejemplo, adoptando un enfoque integral y proactivo hacia la evaluación y el monitoreo.

Un camino hacia la transformación

La optimización de los despachos legislativos no es simplemente una tarea técnica, es un compromiso con la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Las propuestas presentadas en la guía de Valerín (2024) ofrecen un marco integral para alcanzar estos objetivos. Este proceso requiere una combinación de estrategias bien definidas, la implementación de tecnologías modernas y el desarrollo de una cultura organizacional que valore la mejora continua.

El primer paso hacia esta transformación radica en reconocer la importancia de los despachos como motores del cambio legislativo. Crear un entorno laboral que fomente la colaboración, la innovación y el uso eficiente de recursos no solo mejora la productividad, también refuerza la confianza ciudadana en las instituciones.

La modernización tecnológica, acompañada de una estrategia de capacitación adecuada, representa un avance significativo hacia una operación más ágil y efectiva. Sin embargo, estos esfuerzos deben complementarse con una evaluación constante de las estrategias implementadas, garantizando que sigan siendo relevantes y alineadas con los objetivos generales.

El impacto de esta transformación trasciende las paredes de los despachos. Una Asamblea Legislativa más eficiente y transparente fortalece las bases de la democracia, generando beneficios tangibles para toda la sociedad. Al adoptar un enfoque integral y sostenido, los despachos legislativos pueden liderar el camino hacia un futuro más prometedor, donde las instituciones estén verdaderamente al servicio del bien común.

Discusión

La optimización de los despachos legislativos en Costa Rica enfrenta numerosos desafíos culturales,

estructurales y tecnológicos que limitan su capacidad para responder de manera ágil y eficiente a las demandas de la ciudadanía. Como pilar fundamental del sistema democrático, la Asamblea Legislativa debe implementar cambios estratégicos para superar estas barreras y consolidar su rol en la toma de decisiones. Estos esfuerzos no solo mejorarán la operatividad interna, sino que también fortalecerán la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Uno de los mayores retos es la resistencia al cambio, común en entornos jerárquicos tradicionales. Este obstáculo afecta la implementación de nuevas tecnologías y prácticas organizacionales, ralentizando los avances hacia una gestión más moderna y eficiente. Según John P. Kotter, en su libro *Leading Change* (2012), la resistencia puede mitigarse mediante estrategias de liderazgo transformacional que incluyan la comunicación efectiva de los beneficios esperados y la participación de los equipos en el proceso de transición. En legislaturas como la de Uruguay, la implementación de plataformas digitales avanzadas ha demostrado un impacto positivo en la agilización de procesos legislativos, promoviendo una mayor transparencia y eficiencia operativa (Cámara de Representantes de Uruguay).

Otro desafío crítico es la duplicación de tareas y la falta de estandarización en los procesos internos. Estas redundancias generan cuellos de botella que disminuyen la productividad y afectan la moral del personal legislativo. Diversos estudios han mostrado que metodologías como los tableros Kanban y la Matriz de Eisenhower ayudan a priorizar tareas críticas y eliminar actividades innecesarias, aumentando significativamente la eficiencia organizacional. En legislaturas de países como Chile y Portugal, herramientas como Trello y Asana han optimizado la distribución de recursos y mejorado los flujos de trabajo, mostrando resultados alentadores en la gestión parlamentaria (Asamblea de la República de Portugal, 2023; Gobierno de Chile, 2024).

La comunicación interna emerge como un factor crucial para la optimización de los despachos legislativos. Las deficiencias en este ámbito dificultan la coordinación entre equipos, aumentan los errores y fomentan los malentendidos. Protocolos claros respaldados por herramientas tecnológicas como Microsoft Teams o Slack pueden transformar la dinámica de comunicación interna, promoviendo la transparencia y la eficiencia. Un informe sobre legislaturas internacionales destaca que la implementación de estas plataformas mejora la coordinación de equipos en al menos un 20%, reduciendo conflictos y facilitando la toma de decisiones (Espacio Impulsa).

El monitoreo y la evaluación constante son esenciales para garantizar la sostenibilidad de las mejoras implementadas. Los indicadores clave de rendimiento (KPI) ofrecen una base objetiva para medir el progreso y ajustar estrategias según sea necesario. Un análisis regular de KPI puede identificar cuellos de botella en etapas específicas del procesamiento legislativo, permitiendo rediseñar procesos o reasignar recursos de manera efectiva. La experiencia de legislaturas como la portuguesa subraya la importancia de estas herramientas para mantener la eficacia operativa y fortalecer la confianza ciudadana (Agora-Parl, 2023).

Finalmente, la transformación cultural es indispensable para lograr una modernización integral de los despachos legislativos. Este cambio incluye no solo la adopción de nuevas tecnologías y prácticas organizacionales, sino también un cambio en la mentalidad de los equipos. Promover una cultura de aprendizaje continuo y mejora constante puede canalizarse mediante incentivos claros y programas de reconocimiento. Además, involucrar a todos los niveles jerárquicos en el diseño e implementación de estrategias asegura un mayor compromiso y aceptación del cambio.

La combinación de estos enfoques ofrece una hoja de ruta clara para superar los desafíos actuales y construir un sistema legislativo más ágil, transparente y eficaz. Estos esfuerzos no solo mejorarán la capacidad operativa de la Asamblea Legislativa, también contribuirán a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, reafirmando su papel como un pilar clave del desarrollo nacional.

Conclusiones

La optimización de los despachos legislativos en Costa Rica es un proyecto que trasciende lo técnico y operativo, tocando las fibras culturales, estructurales y tecnológicas de las instituciones democráticas. Este proceso implica mejorar procedimientos internos, así como transformar la manera en que estas oficinas interactúan con la ciudadanía y responden a las demandas sociales. Al analizar las estrategias necesarias para alcanzar esta transformación, se hace evidente que la eficiencia legislativa no debe medirse únicamente en términos de tiempos y procedimientos, sino en su impacto directo en la ciudadanía, fortaleciendo la percepción pública de transparencia y confianza en las instituciones.

Los despachos legislativos no son simples oficinas administrativas, son el eje central del engranaje parlamentario donde se gestionan proyectos de ley, se articulan intereses diversos y se construyen las políticas públicas que impactan a la ciudadanía. Este rol estratégico les otorga una relevancia única dentro de las instituciones democráticas, pero también los convierte en puntos críticos de presión. La saturación de responsabilidades y la falta de sistemas organizados para priorizar tareas representan desafíos significativos que, a menudo, ralentizan los procesos legislativos y reducen la efectividad del trabajo en equipo. Sin embargo, estos obstáculos no son insuperables. Metodologías probadas como la Matriz de Eisenhower y los tableros Kanban ofrecen soluciones prácticas que permiten priorizar tareas según su urgencia e importancia, lo que asegura un enfoque más productivo en las actividades de mayor impacto. Experiencias internacionales, como las de Uruguay y Portugal, demuestran que, con estrategias claras y aplicables, es posible transformar estos entornos en espacios más dinámicos y eficientes.

La adopción de herramientas tecnológicas modernas constituye otro pilar esencial para lograr una operación más ágil y transparente en los despachos legislativos. Tecnologías como la digitalización de procesos legislativos en Portugal y el uso de plataformas colaborativas en Canadá y Chile han

demostrado ser efectivas para mejorar la eficiencia interna y fortalecer la rendición de cuentas. Estas herramientas permiten un acceso más rápido y preciso a la información, beneficiando tanto a los legisladores como a los ciudadanos. Empero, el éxito de estas tecnologías depende en gran medida de la capacitación continua del personal. Es crucial que los funcionarios no solo comprendan cómo utilizar estas herramientas, sino también cómo integrarlas en sus rutinas diarias para maximizar su efectividad. Además, personalizar estas soluciones tecnológicas para reflejar las necesidades y características específicas del contexto legislativo costarricense garantizará una mayor aceptación y uso efectivo.

La gestión eficiente del tiempo es otro componente indispensable en la optimización de los despachos legislativos. Este aspecto mejora la productividad general y reduce la presión sobre los equipos, permitiéndoles abordar tareas con mayor concentración y calidad. La implementación de cronogramas estratégicos que dividan el tiempo entre tareas prioritarias, la delegación de responsabilidades según las competencias de cada miembro del equipo y el manejo adecuado de imprevistos aseguran que los despachos puedan adaptarse a las demandas cambiantes sin comprometer su desempeño. Estas prácticas no solo mejoran los resultados inmediatos, sino que también generan un ambiente laboral más organizado y motivador.

La comunicación interna clara y estructurada se presenta como la columna vertebral de cualquier equipo eficiente. Proveer herramientas tecnológicas como Microsoft Teams o Slack, establecer protocolos para el manejo de información y promover prácticas como la escucha activa son acciones que pueden transformar significativamente la dinámica de los equipos legislativos. Además de mejorar la coordinación interna, estas estrategias fortalecen las relaciones interpersonales, reducen los conflictos y crean un entorno colaborativo. Los casos del Parlamento Europeo y el Parlamento del Reino Unido muestran cómo estas herramientas y enfoques pueden traducirse en una comunicación más transparente y eficaz, lo que resulta en un desempeño legislativo más sólido (Parlamento Europeo, 2021).

El monitoreo constante y el uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) son indispensables para garantizar que las estrategias implementadas se mantengan efectivas con el tiempo. Estas herramientas permiten medir el progreso, identificar áreas de mejora y realizar ajustes oportunos. Cuando se combinan con evaluaciones 360 grados y dashboards interactivos, los KPI proporcionan una visión integral del desempeño organizacional, fomentando una cultura de mejora continua. El Senado de Chile ha utilizado sistemas digitales de monitoreo para reducir significativamente los retrasos en la gestión de proyectos legislativos, lo que refuerza la importancia de estas herramientas para optimizar la operación diaria de los despachos.

El cambio cultural es quizás el ingrediente más importante para garantizar la sostenibilidad de las mejoras implementadas. La resistencia al cambio es un desafío común en entornos jerárquicos tradicionales, pero puede superarse mediante liderazgos transformacionales que inspiren y

motiven a los equipos a adoptar nuevas prácticas y tecnologías. Incentivos claros, programas de reconocimiento y oportunidades de capacitación continua son herramientas clave para fomentar una cultura organizacional que valore la innovación y el aprendizaje constante. Esta transformación cultural facilita la implementación de estrategias y asegura que las mejoras sean sostenibles a largo plazo.

En última instancia, la implementación de estas estrategias posicionará a la Asamblea Legislativa de Costa Rica como un modelo de eficiencia y transparencia en la región. Transformar los despachos legislativos en entornos dinámicos, colaborativos y tecnológicos no solo fortalecerá el sistema democrático, también permitirá a las instituciones responder de manera más ágil y efectiva a las necesidades de la ciudadanía. Con un enfoque integral y sostenido, la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, sentando las bases para una gobernanza más participativa, transparente y eficiente.

Referencias

- Agora-Parl. (2021). Informe global sobre parlamentos electrónicos. Recuperado de https://agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/World%20eParliament%202022-SP_LR_0.pdf
- Agora-Parl. (2023). Experiencias internacionales en legislaturas modernas. Recuperado de <https://www.agora-parl.org/resources/library/international-experiences-modern-legislatures>
- Asamblea de la República de Portugal. (2023). Modernización tecnológica y productividad legislativa. Lisboa: Asamblea de la República.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2010). *Estructura y funciones de la Asamblea Legislativa*. Recuperado de https://www.asamblea.go.cr/sd/Publicaciones_T_C/Asamblea%20Legislativa%20Estructura%20y%20Funciones.pdf
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2023). *Dictamen afirmativo de mayoría del expediente N° 23.213: Modernización, optimización y eficiencia de la Asamblea Legislativa*. Recuperado de https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/05/Dictamen_23213DICTAMEN-AFIRMATIVO-MAYORIA.pdf
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2019). *Mecanismos de relación con la ciudadanía en el Parlamento de Portugal*. Recuperado de https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio%2F10221%2F27923%2F1%2FBCN_participacion_ciudadana_y_formacion_de_la_ley_Portugal_2019.pdf
- CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. (2019). *Portugal: superando la transformación digital*. Recuperado de <https://www.caf.com/es/blog/portugal-superando-la-transformacion-digital/>
- Cámara de Representantes de Uruguay. (2023). Informe sobre el uso de la técnica Pomodoro y metodologías de gestión del tiempo. Montevideo: Cámara de Representantes de Uruguay.
- CEPAL. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 de Costa Rica*. Recuperado de <https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/PNDIP%202023-2026%20Main.pdf>
- Congreso de Chile. (2024). Estrategias de priorización y acuerdos legislativos optimizados. Santiago: Congreso Nacional de Chile.
- Disraeli, B. (1881). *El secreto del éxito*. Londres: Editorial Clásica Británica.
- Drucker, P. (2006). *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. Harper Business.
- EBSCO. (2021). Biblioteca digital: Reformas legislativas internacionales. Recuperado de <https://www.ebsco.com/>
- Espai Nun. (n.d.). ¿Qué es la procrastinación y cómo evitarla? Recuperado de <https://www.espainun.com/blog-psicologia/que-es-la-procastinacion-como-evitarla/>
- Gobierno de Chile. (2023). *Estrategia de Chile para la implementación de la Agenda 2030*. Recuperado de https://www.chileagenda2030.gob.cl/storage/docs/Estrategia_de_Implementacion_Agenda2030.pdf

- Gobierno de Chile. (2024). *6° Plan de Acción de Estado Abierto*. Recuperado de <https://www.ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2024/05/6to-Plan-de-Accion-de-Estado-Abierto-2024-1.pdf>
- Harvard Business Review. (2020). *Delegating Effectively: Strategies for Success*. Recuperado de <https://online.hbs.edu/blog/post/how-to-delegate-effectively>
- International Journal of Listening. (n.d.). Active listening: Enhancing team cohesion and satisfaction. Recuperado de <https://www.taylorandfrancis.com/journals/international-journal-of-listening>
- Kotter, J. P. (2012). *Leading change*. Harvard Business Review Press.
- Manzi, J., Mardones, R., Riveros, A., Toro, S., & Cortés, F. (2011). *Un enfoque de gestión para mejorar la eficacia legislativa en Chile*. En *Propuestas para Chile: Concurso Políticas Públicas 2011* (pp. 23-48). Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado de <https://repositoriodigital.uct.cl/bitstreams/3e862238-a1e3-4770-8f38-4e70122f064c/download>
- OpenAI. (2025). ChatGPT (versión GPT-4). <https://openai.com/chatgpt>
- Parlamento del Reino Unido. (2023). *Herramientas digitales y tableros Kanban en la gestión legislativa*. Londres: Parlamento del Reino Unido.
- Parlamento Europeo. (2021). *Transformación digital: La estrategia de la UE*. Recuperado de <https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20210414STO02010/transformacion-digital-la-estrategia-de-la-ue>
- Parliament of Canada. (2023). *Estrategias de gobierno electrónico y accesibilidad legislativa*. Ottawa: Parliament of Canada.
- PNUD Uruguay. (2023). *El pacto digital global y el liderazgo de Uruguay*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de https://www.undp.org/es/Blog_DPI_Uruguay
- Project Management Institute. (2021). *PMBOK® Guide: Managing Project Risks and Uncertainties*. Project Management Institute. Recuperado de <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>
- ProQuest. (2021). *Base de datos académica: Estudios en innovación legislativa*. Recuperado de <https://www.proquest.com/>
- Senado de Chile. (2023). *Capacitación y uso de herramientas digitales en procesos legislativos*. Santiago: Senado de Chile.
- Tesoro Mundial de la Educación (UNESCO). (2021). *Base de datos sobre gestión del tiempo y modernización administrativa*. Recuperado de <https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/>
- Unión Interparlamentaria. (2022). *Informe mundial sobre el parlamento electrónico 2022*. Recuperado de https://agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/World%20eParliament%202022-SP_LR_0.pdf
- Valerín, C. (2024) *Optimización de Despachos Legislativos: Una guía para mejorar la Eficiencia en Gestión del Tiempo, Coordinación y Comunicación*.

ENSAYO

El precio de la denuncia en América latina

The price of whistleblowing in Latin America

Claire Launay Gama ¹

Como citar:

Launay Gama, C. (2025). El precio de la denuncia en América Latina. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 180-189. Doi: 10.63058/des.v19i1.314

Fecha de ingreso: 15 de enero de 2025. **Fecha de aprobación:** 22 de enero de 2025.

¹ Claire Launay Gama es Directora programática Iniciativas con Sociedad Civil en la Corporación Transparencia por Colombia e Investigadora en el Observatorio Político sobre América latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po; Historiadora con Maestría en Historia política (Universidad de Lille, Francia) y postgrado en Cooperación internacional y Desarrollo (Universidad París I, Sorbonne, Francia); ha acumulado una experiencia de más de 25 años en gestión de proyectos, en investigación y docencia combinando su trabajo entre las organizaciones sociales y el mundo académico; su área de experticia incluye teorías y prácticas de gobernanza, control ciudadano de la acción pública, lucha contra la corrupción, denuncia y protección a denunciantes de corrupción. ORCID: 0009-0007-7167-5215. Correo electrónico: claire.launay@transparenciacolombia.org.co. Correo electrónico: claire.launay@transparenciacolombia.org.co.

Resumen

América Latina vive una recesión democrática. En su balance del año político 2023 en América Latina, David Recondo y Olivier Dabène mencionan “un voto de rechazo”, “un desafecto a la democracia” así como la corrupción que habría fuertemente contribuido a la desconfianza en los sistemas democráticos. A ello se suman la débil capacidad y eficiencia en la gestión pública, los altos niveles de desigualdad y la violencia sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En este espacio cívico, aunque limitado, las/los “alertadores”, más comúnmente llamados “denunciantes”, destapan escándalos de corrupción, defienden lo público y el bien común. ¿Quiénes son los denunciantes? ¿Cuál es la naturaleza de sus alertas? ¿Cómo actúan? y ¿Qué resultados tienen sus alertas? A partir de siete testimonios de alertadores latinoamericanos, el presente artículo analiza el proceso de la alerta y su precio en América latina.

Palabras clave: América Latina, alertador, denunciante, protección a denunciantes, derechos humanos, corrupción.

Abstract

Latin America is experiencing a democratic recession. In their assessment of the political year 2023 in Latin America, David Recondo and Olivier Dabène mention ‘a rejection vote’, ‘a disaffection with democracy’ as well as corruption, which is said to have strongly contributed to the distrust of democratic systems. This is compounded by weak governance capacity and efficiency, high levels of inequality and systematic violence against social leaders and human rights defenders. In this civic space, although limited, ‘whistleblowers’, more commonly known as ‘denunciantes’, uncover corruption scandals, defend the public and the common good. Who are the whistleblowers, what is the nature of their alerts, how do they act and what are the results of their alerts? Based on the testimonies of seven Latin American whistleblowers, this article analyses the whistleblowing process and its price in Latin America.

Keywords: Latin America, alert, denunciation, whistleblower protection, human rights, corruption, whistleblower, whistleblower protection.

Introducción

En América latina, en reacción a usos y abusos de poder, a un acceso limitado a los derechos humanos y a la inequidad, la ciudadanía se moviliza, denuncia, alerta. En este espacio cívico aunque limitado, las/los “alertadores” destapan escándalos de corrupción, defienden lo público y el bien común.

² Definición resumida del grupo de investigadores del Observatorio Político sobre América latina y el Caribe (OPALC) adoptada en 2021. (1) Acción de denuncia de irregularidades basada en hechos tangibles, (2) de una situación o acto ilegal o ilegítimo, (3) ocurriendo en el entorno del denunciante (amigos, familia, trabajo, organización, vecindario, etc.), (4) perjudicial para el bien común y el interés general (5) a través de canales legales y / o medios informales, (6) por medio de un individuo (7) con una autoridad, (8) para que eventualmente se puedan tomar medidas para resolver la situación denunciada.
<https://www.sciencespo.fr/opalc/> <https://transparenciacolombia.org.co> <https://www.sciencespo.fr/opalc/content/alertas-0.html>

Los alertadores, más comúnmente llamados “denunciantes” en América latina, hacen referencia a cualquier ciudadano que denuncia de manera individual un acto perjudicial para el bien común y el interés general mediante canales legales y/o medios informales así como con el apoyo, en ciertos casos, de organizaciones facilitadoras². Sin embargo, más allá de esta definición, es importante preguntarse ¿Quiénes son los denunciantes? ¿Cuál es la naturaleza de sus alertas? ¿Cómo actúan? y ¿Qué resultados tienen sus alertas?

Durante el período 2021-23, siete investigadores del Observatorio de América Latina y del Caribe (OPALC) de Sciences Po³, en alianza con Transparencia por Colombia y con el apoyo de la Fundación Charles Leopold Mayer (FPH)⁴, estudiaron las motivaciones, los medios de acción, la naturaleza de las alertas y sus efectos producidos. Este equipo de investigación entrevistó a siete alertadores de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Venezuela. Estos testimonios han sido grabados y editados bajo la forma de un podcast y dieron lugar a la serie de podcast *Alertas!*⁵. El presente artículo propone, por un lado, un acercamiento conceptual a la alerta y alertadores en América Latina y, por otro, un análisis transversal de los contenidos de los podcasts así como las lecciones aprendidas de estas experiencias relatadas. En una primera parte se plantean algunos conceptos y definiciones así como una descripción del contexto en el cual actúan los alertadores. En una segunda parte se detallan las alertas realizadas y la trayectoria de sus autores. En la tercera y última parte se plantean algunas lecciones aprendidas de los siete testimonios.

Alerta y alertadores en contextos de receso democrático

*Acercamiento conceptual: whistleblowers, denuncia, alerta, alertadores*⁶

El estudio de los “whistleblowers” en América latina es marginal en la literatura académica, en comparación con contextos europeos o anglosajones⁷. En efecto, en la región, el análisis se concentra principalmente en los ámbitos de la sociología y de las ciencias de gestión; y, en particular en el caso brasileño (Behrens, 2015; Guelber Fajardo & Lopes Cardoso, 2014; Sampaio & Sobral, 2013). Según estos autores América Latina se caracterizaría por una tendencia histórica a generar instituciones informales y organizaciones basadas en relaciones interpersonales, con poca propensión al conflicto y la toma de responsabilidades individuales. Estos funcionamientos serían contrarios a sistemas de

⁶ Esta parte conceptual resume un trabajo interno de revisión bibliográfica realizada en 2022 con el apoyo de Roman Perdomo, miembro del equipo OPALC.

⁷ Sobre los principales estudios sobre denunciantes en el mundo anglo-sajón o en Europa, ver principalmente Alford (2002), Cailleba (2019), Chateauraynaud, Gilbert & Torny (2013), Lipman (2011), Nader, Petkas & Blackwell (1972), Near & Miceli (1985), Peters & Branch (1972), Schehr (2008) y Stolowy, Gendron, Moll e.a. (2019).

⁸ Ver por ejemplo Levy (2020).

⁹ Real Academia Española, definición de denunciante y denuncia. [En línea]. <https://dle.rae.es/denunciante> et <https://dle.rae.es/denuncia?m=form> (actualizado en 2021).

¹⁰ “We, therefore, define whistle-blowing to be the disclosure by organization members (former or current) of illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their employers, to persons or organizations that may be able to effect action” (Near & Miceli, 1985, p.4; Nader, Petkas & Blackwell (1972); Peters & Branch (1972).

denuncia legalistas, importados desde sociedades más individualistas o liberales.

En español, la traducción más admitida de whistleblowing, no sin tensiones semánticas o jurídicas⁸ sería denuncia, es decir, “la acción y el efecto de denunciar”, pero también un “documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta” . También, el whistleblowing, en su sentido original y estricto, designaba, en el mundo anglosajón de los años 1970 y 1980, una acción de denuncia por un insider, testigo o víctima de una situación ilegal, inmoral o ilegítima, que se produce en el seno de una organización¹⁰. Esta denuncia puede dirigirse a una autoridad interna o externa para que se puedan tomar medidas (Jeon, 2017). Sin embargo, el “denunciante”, como categoría jurídica y categoría de uso en América Latina no es necesariamente un insider. En efecto, la denuncia puede ser relativa a un entorno próximo (familia, trabajo, barrio, amigos, organización, etc.). Además, el uso corriente del término puede referirse a pronunciamientos a través de canales informales como las redes sociales, la prensa, organizaciones sociales, carteles, etc.

En conclusión, no existe una traducción clara del concepto de whistleblowing. En efecto, en español no existe una palabra que recoja adecuadamente su sentido. Es más, en español, denunciante, delator, filtrador, pueden tener una connotación peyorativa, que se vuelve más explícita a la hora de calificar coloquialmente a un whistleblower: como soplón, chivato, hasta buchón en Argentina, o sapo en Colombia. Sin embargo, aparece últimamente, la palabra más neutra pero poco usada de informante así como un uso más reciente de parte de organizaciones de la sociedad civil españolas y latinoamericanas de la palabra “alertadores”.

Finalmente, impulsados por la intención de encontrar un equilibrio entre las definiciones clásicas de denunciantes y una adecuada adecuación al contexto latinoamericano, nuestro grupo de investigadores franco-latinoamericanos (OPALC, 2021) propone los siguientes elementos de definición del whistleblowing en América latina : (1) Acción de denuncia de irregularidades basada en hechos tangibles, (2) de una situación o acto ilegal o ilegítimo, (3) ocurriendo en el entorno del denunciante (amigos, familia, trabajo, organización, vecindario, etc.), (4) perjudicial para el bien común y el interés general (5) a través de canales legales y / o medios informales, (6) por medio de un individuo (7) con una autoridad, (8) para que, eventualmente, se puedan tomar medidas para resolver la situación denunciada.

Alertar en contexto de recesión democrática

Desde la década de 2010, América Latina vive una recesión democrática que se refleja en un apoyo limitado a la democracia y una creciente indiferencia ciudadana por el tipo de régimen, autoritario o democrático, siempre que resuelva problemas considerados urgentes, como la seguridad, la estabilidad económica y el empleo. Según el informe Latinobarómetro 2023, «sólo el 48% de los encuestados apoya la democracia en la región, lo que representa una caída de 15 puntos porcentuales respecto a 2010 (63%)» (Corporación Latinobarómetro, 2023, p.18). El mismo informe también afirma que «el fenómeno más negativo en las democracias latinoamericanas en los últimos años

es la corrupción al más alto nivel» (ibíd., p.8). También, en su balance del año político 2023 en América Latina, David Recondo y Olivier Dabène mencionan “un voto de rechazo”, “un desafecto a la democracia” (2024) así como la corrupción que habría fuertemente contribuido a la desconfianza en los sistemas democráticos.

A ello se suman la débil capacidad y eficiencia en la gestión pública, los altos niveles de desigualdad y la violencia sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. De hecho, Transparencia Internacional ha demostrado que los países con mayores niveles de corrupción (i) invierten menos en sectores prioritarios como la salud y la educación, (ii) son más propensos a violar las normas democráticas o el Estado de derecho, y (iii) tienen un espacio cívico insuficiente y, por lo tanto, un control limitado del ejercicio del poder por parte de los ciudadanos. Por último, las sanciones sociales y judiciales por actos de corrupción o violaciones de los derechos humanos siguen siendo bastante débiles.

Pero no solamente la noción de “alertador” sigue confusa, en muchos países de la región, las políticas públicas para proteger a los denunciantes siguen siendo incompletas o están débilmente institucionalizadas (Sandoval, 2019). Esto tiene el efecto de ralentizar el proceso de denuncia, que puede tardar muchos años antes de que se tome una decisión judicial o una acción pública. Por último, las medidas de protección siguen siendo a menudo inadecuadas, lo que expone a los denunciantes a represalias, especialmente en forma de acoso y amenazas de muerte.

Los testimonios de las y los alertadores entrevistadas/os confirman este difícil entorno de la denuncia. Todas/os afirman que su proceso de alerta ha sido debilitado y a veces impedido por la crisis democrática que ocurre en sus diferentes países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela. En efecto, la indiferencia institucional a sus demandas, la reducción de su libertad de expresión, la violencia política y la corrupción generalizada son factores que explican los obstáculos en sus alertas.

En 2020-21, en el Brasil bajo Bolsonaro y actualmente en Nicaragua y Venezuela se hace muy complicado denunciar una violación a los derechos humanos. No solo ambos gobiernos autoritarios reprimen cualquier crítica, sino que las instituciones judiciales y/o órganos de control funcionan muy poco. La alertadora de Brasil ha sido eliminada de las redes sociales y las alertadoras de Nicaragua y Venezuela deben acudir al anonimato así como a campañas de sensibilización internacional. Las condiciones de participación ciudadana y la libertad de expresión están fuertemente erosionadas.

En Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, las investigaciones sobre hechos de presunta corrupción denunciados por los alertadores, o no han culminado, o han generada batallas judiciales contra el alertador, o han provocado su despido. Los alertadores chileno y peruano han sido acusados de difamación. Es más, ellos cuestionan tanto la eficiencia como la independencia judicial de sus países. Esta hipótesis ha sido ratificada por el índice de percepción de corrupción de 2023 realizado por Transparency International, pues en América Latina, la encuesta confirma la falta de

independencia judicial. Sin duda, en América Latina, los alertadores actúan en un espacio cívico más que limitado.

Las alertas y los alertadores

Cuadro1. Descripción de los casos de alerta

País	Autores	Título podcast	Resumen	Alertador
1. Colombia	Claire Launay Gama, Christian Castro	Corrupción hasta en la comida	Caso de pre sunta corrupción en el abastecimiento de alimentación para un batallón del ejército Dentro del ejército colombiano, un oficial se entera de que las cuentas no son correctas en su batallón. Denuncia corrupción.	Sergio Ramírez, oficial del ejército, cargo directivo
2. Costa Rica	Dennis Petri y David Gamboa	Cooperativas para beneficio personal	Caso de presunta corrupción denunciado e investigado El sistema de cooperativas es bastante funcional en Costa Rica. Sin embargo, algunos han tratado de sacarle beneficio propio a ciertas de estas cooperativas.	
3. Perú	Román Perdomo	El Catastro fantasma	Caso de presunta corrupción denunciado En un barrio de Lima, un concejal se da cuenta de que el último catastro se pagó, pero nunca se hizo. Investiga y decide alertar, a pesar de las amenazas.	
4. Brasil	Olivier Dabène	Intenciones criminales de Bolsonaro en Bresil	Caso relacionado con salud pública. El tratamiento del COVID 19 por la Presidencia de la República. Cuando empieza la pandemia de Covid-19, un grupo de académicos brasileños, encabezados por Deisy Ventura, investiga la política sanitaria del entonces gobierno de Jair Bolsonaro. Juntan pruebas de que el presidente de extrema derecha, en lugar de frenar la propagación del virus, trata de diseminarlo.	Gustavo Fernández, funcionario, cargo directivo
5. Chile	Antoine Mallet/ Antoine Faure	De denunciante a gobernador por el agua	Robo de agua y consecuencias negativas sobre cultivos de aguacate En la provincia de Petorca, tres horas al norte de Santiago, mientras los árboles de aguacate se han multiplicado en los cerros, la tierra y los ríos se han secado, afectando a pequeños campesinos. Rodrigo Mundaca, junto a otros activistas por el medio-ambiente, inició una campaña para denunciar la privatización, la concentración y el robo de agua en la provincia. Algunos años después, de alertador se convirtió en el primer gobernador democráticamente electo de la región de Valparaíso (de la cual forma parte Petorca).	Ángel Bustamante, contador, ex Concejal
6. Venezuela-Nicaragua	Dennis Petri y David Gamboa	Alertadoras en dictaduras	Caso de violaciones de derechos humanos, ausencia de libertad de expresión y represión. ¿Cómo alertar en dictaduras como la de Nicaragua o la de Venezuela? Dos activistas mujeres cuentan desde estos dos países las formas de denuncia que usan para defender los derechos fundamentales y las libertades democráticas, a pesar de la represión. Entrevistas grabadas en noviembre de 2022 y marzo de 2023.	Deisy Ventura, profesora de Universidad

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CLAIRE LAUNAY. 2024

Naturaleza y efectos de las alertas

En primer lugar, todas las alertas se refieren a temáticas de interés general, es decir, están a favor de un mayor desarrollo y calidad de vida. En efecto, el acceso al agua (caso chileno), la alimentación (caso colombiano) y la salud (caso brasileño); la implementación de un catastro (caso peruano) y la defensa de los derechos humanos (casos de Nicaragua y Venezuela) constituyen problemáticas públicas. También si bien los casos son nacionales y/o locales, todos consideran temas estructurales, como la debilidad de los servicios públicos, la explotación de la naturaleza o el autoritarismo político.

En segundo lugar, cuatro alertas sobre seis se refieren a casos de presunta corrupción y, las dos últimas a la defensa de derechos humanos.

En cuanto a la corrupción, ya sea en Colombia, en Costa Rica, en Perú o en Chile, los hechos revelan la firma irregular de documentos, la deficiencia de la contratación pública, el abuso de poder de algunos funcionarios, y la ausencia de control institucional. Cabe mencionar que estos casos revelan un desvío de recursos públicos que afectan el acceso a derechos fundamentales: agua, salud, alimentación, tierra.

En cuanto a los casos de violación de derechos humanos, la alertadora brasileña denuncia “una estrategia política del Presidente de propagar el virus COVID 19 con el argumento de la inmunidad colectiva, cuando por un lado 850.000 personas murieron, y por otro lado existía en Brasil un sistema de salud capaz de enfrentar esta crisis de salud pública”. En el caso de Nicaragua y Venezuela, las alertadoras insisten en la imposibilidad de recurrir a instituciones para garantizar el acceso a derechos básicos. En estos tres últimos casos la denuncia se vio claramente imposibilitada, pues, por un lado, la institucionalidad misma no garantizaba los derechos humanos y, por otro, no recibía ni atendía las denuncias. Es más, en estos países cualificados de regímenes autoritarios (o tendiendo hacia el autoritarismo) en el momento de la denuncia, los alertadores entrevistados sólo consideran el apoyo de las instituciones internacionales.

En tercer lugar, según los contextos de los países, la forma o el método de la denuncia varían. Los casos han sido denunciados de forma individual ya sea de manera anónima como en Costa Rica, ya sea a través de la identificación del alertador en Perú, Colombia, Costa Rica, Brasil. En Nicaragua y Venezuela se trata más de denuncias colectivas, es decir, realizadas a través de organizaciones de defensa de derechos humanos, que de denuncias individuales. En el caso de Brasil, la denuncia está a nombre de la Universidad de la denunciante, y recibe el apoyo de una organización social. En todos los países, menos en Nicaragua y Venezuela, las denuncias han sido realizadas ante las autoridades competentes y cursan un proceso judicial. Finalmente, en Chile, Perú y Brasil las/os alertadoras difunden sus denuncias o sus alertas mediante las redes sociales o medios de comunicación. Sin embargo, en Venezuela y Nicaragua, las alertadoras no cuentan con este apoyo mediático, sino que se dirigen a la institucionalidad internacional o a la sociedad civil internacional.

En cuarto lugar, los efectos de la denuncia son más que limitados. Aún todas están en curso de investigación judicial, menos en el caso de Chile donde ha sido fallado. Sin embargo, en Brasil, a pesar de no contar con una condena jurídica, la alerta ha permitido la apertura de una Comisión Parlamentaria de investigación. En Costa Rica, un vice ministro involucrado en los hechos ha sido destituido. Si bien algunos casos tienen resultados, los tiempos de respuesta institucional y judicial son muy largos.

En conclusión, si bien las alertas tienen diferencias en cuanto a su método y a su contexto, tienen en común la defensa de temas estructurales y de interés general, así como un alcance limitado. Sin embargo, las/los alertadores manifiestan su deseo de seguir luchando. Miremos a continuación sus perfiles y trayectorias.

El perfil y trayectoria de las/los alertadores

Las/os alertadores entrevistadas/os tienen distintas profesiones. Se cuenta con una profesora de Universidad, un contador, un oficial del ejército, un funcionario público, un ingeniero agrónomo, una abogada y una responsable de proyectos en una Organización No Gubernamental. Sin embargo, comparten un nivel de formación alto, un interés por el activismo social, y sobre todo la voluntad de defender el acceso a los derechos humanos y al bien común. En cuanto a su origen social, provienen de la clase media latinoamericana. Sólo dos de las siete personas entrevistadas han asumido funciones políticas. El contador peruano ha sido Concejal y el agrónomo chileno ha ejercido varios cargos públicos.

También, sus testimonios confirman la situación adversa y agobiante del proceso de alerta. Todas/os, sin excepción, han recibido amenazas, han sufrido represalias laborales y judiciales, y se encuentran sin mayor protección. El alertador chileno declara “lo he perdido todo”. El funcionario costarricense afirma haber sufrido hostigamiento. El militar colombiano ha tenido que renunciar al ejército y exiliarse. La profesora brasileña ha recibido insultos y ha sido censurada en las redes sociales. El contador peruano fue amenazado de represalias físicas, así como su familia, y sufrió varios procesos falsos por parte de la administración municipal. Sin embargo, todas/os comparten esperanza. “Quiero saber la verdad”, dice el alertador costarricense; “seguiré cada vez que sea necesario, nuestro trabajo contribuye a la memoria”, cuenta la académica brasileña; “yo quiero luchar por una mejor calidad de vida”, afirma el concejal peruano, “yo no puedo quedarme callado”, reitera el agrónomo chileno. Finalmente, “si no se denuncia, nunca va a haber cambio”, expresa el militar.

A pesar de los obstáculos, todas y todos los denunciantes entrevistados/as comparten la convicción de que su denuncia tiene sentido y que podrá contribuir a un cambio. Se plantean en la siguiente y última parte algunas lecciones aprendidas.

¿Es relevante denunciar?

El estudio de los testimonios de los alertadores traducidos en podcast llevan varios aprendizajes. En primer lugar, a pesar de los resultados judiciales limitados, los alertadores valoran su acción de activismo cívico y reivindican su rol de defensor de los derechos humanos y del bien común. Por lo tanto, los alertadores y/o denunciantes de corrupción constituyen un grupo de ciudadanas/os que ejercen un rol activo en la vida democrática. Sin embargo, sus testimonios transmiten un cierto sentimiento de soledad, pues la denuncia sigue siendo una acción individual.

En segundo lugar, su acción de alerta está obstaculizada por la debilidad institucional, así como por un espacio cívico limitado. Recíprocamente, la misma debilidad institucional, así como la restricción de la libertad de expresión provocan su acción y reacción. ¿El trabajo de un/a alertador/a sería provocado y condicionado por un contexto democrático debilitado? Esta claro que en América Latina, sí.

En tercer lugar, en estos contextos de represión, la mediatización de sus alertas, el apoyo de organizaciones sociales así como de la cooperación internacional han sido necesarios. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las investigaciones jurídicas no han culminado y los alertadores siguen esperando.

Finalmente, si bien los alertadores comparten cualidades de voluntad y perseverancia, están expuestos a múltiples riesgos y no han recibido medidas de protección

Estos testimonios han permitido relatar la trayectoria de alertadores y de su trabajo en un contexto de receso democrático. Sin embargo, aún falta profundizar los estudios sobre este grupo social vulnerable y aún invisibilizado en la región. Las recientes iniciativas de las Naciones Unidas sobre el tema, así como las actividades de incidencia de varias organizaciones de la sociedad civil, dejan ver buenas perspectivas. También, El Observatorio Político sobre América latina y Caribe seguirá investigando.

Referencias

- Alford, C. F. (2002). *Whistleblowers: Broken lives and organizational power*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Behrens, A. (2015). The impact of culture on the efficacy and fairness of whistleblowing: A contrast between Brazil and the United States. *Thunderbird International Business Review*, 57(5), 359–365.
- Cailleba, P. (2019). Quel risque pour le lanceur d'alerte? L'accusation de déloyauté. *Institut de Socio-Économie des Entreprises et des Organisations (Écully, Rhône), Recherches en Sciences de Gestion*, (132), 235–257.
- Chateauraynaud, F., Gilbert, C., & Torny, D. (2013). *Les sombres précurseurs*. Paris: EHESS.
- Guelber Fajardo, B. A., & Lopes Cardoso, R. (2014). Does the occasion justify the denunciation?: A multilevel approach for Brazilian accountants. *Brazilian Business Review (English Edition)*, 11(5), 24–48.
- Indice de percepción de la corrupción 2022. Transparency International. Retrieved from <https://www.transparency.org/es/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent>.
- Jeon, S. H. (2017). Where to report wrongdoings? Exploring the determinants of internal versus external whistleblowing. *International Review of Public Administration*, 22(2), 153–171.
- Levy, S. (2020, January 14). Xnet claims that the Spanish translation of the European Directive on whistleblowers jeopardizes their protection. Retrieved from <https://xnet-x.net/en/xnet-claims-spanish-translation-european-directive-whistleblowers/>.
- Lipman, F. D. (2011). *Whistleblowers: Incentives, disincentives, and protection strategies*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Nader, R., Petkas, P. J., & Blackwell, K. (1972). *Whistle Blowing: The report of the conference on professional responsibility*. New York: Grossman Publishers.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1–16.
- Observatoire Politique Amérique latine et Caraïbe (OPALC). (2021). Estudio sobre el perfil y la acción de los whistleblowers en América Latina. Documento interno. Recuperado de <https://www.sciencespo.fr/opalc/content/alertas-0.html>.
- Peters, C., & Branch, T. (1972). *Blowing the Whistle: Dissent in the public interest*. New York: Praeger.
- Real Academia Española. (2021). Definición de denunciante y denuncia. Retrieved from <https://dle.rae.es/denuncianteand> <https://dle.rae.es/denuncia?m=form>.
- Recondo, D., & Dabène, O. (2024). Confrontation sociale, vote de rejet et gouvernements minoritaires. In D. Recondo (Dir.), *Amérique latine. L'année politique 2023/Les Études du CERI* (n° 271–272). Retrieved from <https://www.sciencespo.fr/cei/fr/papier/etude>.
- Sandoval, I. E. (2019). Papel de los informantes internos (whistleblowers) en el combate a la corrupción. In *Lo que todos sabemos de la corrupción y algo más* (pp. 199–210). México: UNAM (Biblioteca Jurídica Virtual).
- Schehr, S. (2008). L'alerte comme forme de déviance: Les lanceurs d'alerte entre dénonciation et trahison. *Déviance et Société*, 32(2), 149–162.
- Stolowy, H., Gendron, Y., Moll, J., et al. (2019). Building the legitimacy of whistleblowers: A multi-case discourse analysis. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 7–49.

ENSAYO

El peritaje cultural: Puente para el entendimiento intercultural en procesos judiciales con pueblos indígenas

Cultural Expertise: A Bridge for Intercultural Understanding in Judicial Processes with Indigenous Peoples.

Cindy Ariana Céspedes López¹ & Glen Calvo Céspedes²

Como citar:

Céspedes López, C.A. & Calvo Céspedes, G. (2025). El peritaje cultural: Puente para el entendimiento intercultural en procesos judiciales con pueblos indígenas. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 190-202. Doi : 10.63058/des.v19i1.315

Fecha de ingreso: 13 de enero de 2025. **Fecha de aprobación:** 20 de enero de 2025.

¹ Cindy Ariana Céspedes López es fiscal del Ministerio Público, combina 16 años de experiencia, incluyendo 13 años en la Fiscalía de Asuntos Indígenas y su actual labor en la Fiscalía de Fraudes; Master en Derecho Penal por la Universidad Internacional de las Américas; cuenta con una Especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Salamanca; desde 2013, se desempeña como profesora universitaria, enfocándose en la enseñanza de Derecho Penal. ORCID: 0009-0000-2783-2550. Correo electrónico: a.cespedesl28@gmail.com.

² Glen Calvo Céspedes es juez de crimen organizado, cuenta con una sólida experiencia profesional que incluye 18 años como fiscal en las fiscalías de Crimen Organizado, Penal Juvenil y Probidad; maestro en Derecho Penal por la Universidad Internacional de las Américas y en Victimología por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística; desde 2009, combina su práctica judicial con la docencia universitaria, siendo actualmente profesor en la Universidad Estatal a Distancia (UNED). ORCID: 0009-0002-9696-4658. Correo electrónico: klvo32@hotmail.com

Resumen

El peritaje cultural es una herramienta esencial para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, al incorporar su cosmovisión y sistemas normativos en los procesos judiciales. Este artículo examina los fundamentos jurídicos, el impacto y la aplicabilidad del peritaje cultural en Costa Rica, un Estado multiétnico y pluricultural. A través del análisis de casos prácticos, se demuestra cómo esta prueba pericial promueve el respeto a la diversidad cultural y asegura un debido proceso intercultural. Además, se subraya la necesidad de sensibilizar a los operadores de justicia sobre las especificidades culturales de los pueblos indígenas, fortaleciendo así la justicia intercultural y los derechos colectivos e individuales.

Palabras clave: peritaje cultural, justicia intercultural, pueblos indígenas, diversidad cultural, acceso a la justicia, Costa Rica, cosmovisión indígena, sistemas normativos.

Abstract

Cultural expertise is an essential tool to ensure indigenous peoples' access to justice by incorporating their worldview and normative systems into judicial processes. This article examines the legal foundations, impact, and applicability of cultural expertise in Costa Rica, a multiethnic and multicultural state. Through case analysis, it demonstrates how this expert evidence fosters respect for cultural diversity and ensures intercultural due process. Furthermore, it highlights the need to sensitize justice operators to the cultural specificities of indigenous peoples, thereby strengthening intercultural justice and collective and individual rights.

Keywords: cultural expertise, intercultural justice, indigenous peoples, cultural diversity, access to justice, Costa Rica, indigenous worldview, normative systems.

Introducción

El peritaje cultural se posiciona como una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Esta práctica permite incorporar la cosmovisión y las particularidades culturales de estos pueblos en los procesos judiciales, evitando que los conflictos sean resueltos exclusivamente desde la perspectiva de los operadores de justicia. Su importancia radica en la capacidad para construir puentes interculturales que enriquecen la comprensión del caso y aseguran un tratamiento más equitativo.

En un país como Costa Rica, definido constitucionalmente como multiétnico y pluricultural, este enfoque se convierte en un imperativo jurídico y ético. La diversidad de sus ocho pueblos indígenas, distribuidos en 24 territorios, demanda un tratamiento diferenciado que considere sus sistemas normativos, tradiciones y cosmovisión. Así, el peritaje cultural se erige como un medio para garantizar el respeto de sus derechos colectivos e individuales en un marco de justicia intercultural.

Tal como lo establece la Ley de Acceso a la Justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica (2018) "...

El Estado costarricense deberá garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, tomando en consideración el derecho indígena siempre y cuando no transgreda los derechos humanos, así como tomando en cuenta su cosmovisión...” (Artículo 1)

Así las cosas, el peritaje cultural se constituye en una prueba fundamental dentro de los procesos judiciales sin que ello represente un análisis de la cultura en abstracto, sino como una herramienta que, a través de diálogos culturales con los pueblos indígenas, contribuya a que los operadores del derecho resuelvan los conflictos con pertinencia cultural.

Con el presente artículo se pretende brindar insumos generales respecto a la pericia en mención, su fundamento jurídico, los alcances que tiene en distintas jurisdicciones y su impacto dentro de un Estado multiétnico y pluricultural como lo es nuestro país.

Nociones generales sobre el peritaje cultural

El peritaje cultural es un medio de prueba especializado que proporciona insumos al juzgador para comprender las diferencias culturales involucradas en un conflicto judicial. Este dictamen pericial es realizado por expertos en ciencias sociales – dependiendo del objeto a peritar-, siendo que en los casos que corresponden elementos culturales los peritos adecuados son profesionales en antropología social que emplean metodologías rigurosas para analizar los aspectos culturales pertinentes al caso.

Según diversos estudios, esta herramienta actúa como un traductor entre lógicas culturales, permitiendo que los sistemas normativos indígenas sean comprendidos y considerados dentro del derecho positivo. De este modo, evita que las decisiones judiciales se basen en prejuicios o desconocimiento, asegurando que los conflictos se resuelvan con pertinencia cultural.

Para la realización de dichos peritajes, los científicos sociales son los peritos idóneos puesto que tienen el conocimiento científico y el manejo de técnicas y metodologías propias de la Antropología y otras ciencias, además conocen el entorno social y cultural de las comunidades indígenas (Ixchú García, 2010).

En este sentido conceptualmente se entiende como pericia cultural

“un instrumento fundamental para conocer y entender lo normativo en las comunidades indígenas al “objetivizar” lo jurídico, inmerso en las relaciones sociales de estas (...) se constituye como un instrumento de traducción de un lenguaje a otro, o de una lógica cultural a otra, del lenguaje del sentido común y oral de la comunidad y de su lógica cultural propia del lenguaje especializado del juez y a la lógica jurídica del derecho positivo” (Aida, 2018).

De modo que ante el desconocimiento de la persona juzgadora sobre los elementos culturales que deben ser tomados en cuenta al momento de resolver el conflicto, el peritaje cultural constituye una prueba fundamental que llega a brindar insumos vitales para garantizar que las diferencias culturales no serán analizadas desde la perspectiva dominante del juzgador sino tomando en cuenta los distintos sistemas normativos, sociales y/o culturales que mediaron.

De tal suerte, es el medio de prueba que ilustra al juzgador sobre el marco cultural en donde se desarrollaron los hechos que versan el conflicto sometido a su conocimiento, aportando con ello al proceso judicial datos del contexto social en que se desenvuelve el caso y las pruebas sobre una conducta que proviene de parámetros culturales distintos.

Con ello se garantiza un debido proceso intercultural mediante el respeto y reconocimiento de derechos colectivos e individuales indígenas, a través de diálogos con los pueblos indígenas que permitan conocer, entender y aplicar su cosmovisión para la resolución del conflicto y no desde la perspectiva de la justicia convencional.

El peritaje cultural busca sobrepasar la visión de un único derecho, balanza desde la cual se mide la conducta de todas las personas, para incorporar el conocimiento de una pequeña parte del mundo cultural que envuelve a cada uno de los individuos pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados. (Ariana, 2014)

Su principal aporte a los procesos judiciales es brindar los parámetros culturales necesarios para que se respete y reconozca en cada caso la diversidad cultural; que dentro del marco de los derechos humanos sea tenido en cuenta el sistema jurídico de los pueblos indígenas tan válido como el sistema jurídico oficial, además que los operadores de justicia tomen en cuenta para la resolución de los conflictos el contexto cultural, que puede ser crucial para brindar un verdadero acceso a la justicia.

En la interpretación jurídica sobre el principio de diversidad étnica y cultural, respecto a la solución constitucional a conflictos con otros principios de igual jerarquía, se desarrolló la idea diálogo intercultural como un mínimo de convivencia entre las distintas culturas. Mínimo que debe ser tenido en cuenta en la administración de justicia (Rosembert, 2010).

Siendo la pericia aquí analizada una herramienta de vital importancia que garantiza el acceso a la justicia de los pueblos indígenas es de especial relevancia establecer su utilidad en los diversos procesos judiciales y su fundamento jurídico, tanto a nivel de ordenamiento jurídico costarricense como a nivel de control de convencionalidad que deben aplicar las personas operadores del derecho, ya que los pueblos indígenas son titulares de derechos individuales y colectivos que deben tutelarse adecuadamente.

Fundamento jurídico

El marco normativo costarricense e internacional respalda la aplicación del peritaje cultural. En el ámbito nacional, la Constitución reconoce la naturaleza multiétnica y pluricultural del país, lo que implica obligaciones concretas para los operadores de justicia. Asimismo, leyes como la de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas exigen considerar sus costumbres y tradiciones en los procesos judiciales.

A nivel internacional, instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerzan la necesidad de garantizar que las decisiones judiciales respeten los valores y sistemas normativos indígenas. Además, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos destaca el derecho a la identidad cultural como fundamental en una sociedad multicultural y pluralista.

Al respecto la jurisprudencia del Sistema Interamericano establece (Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, 2012):

“La Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o puede incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización. En este mismo sentido, el Convenio N° 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a “asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven.”

Del citado voto se desprende que la tutela y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, garantiza una tutela efectiva de los derechos humanos que le asiste a la población indígena los cuales se encuentran contemplados en diversas normas nacionales e instrumentos internacionales que son de aplicación obligatoria con la finalidad de garantizar adecuadamente el acceso a la justicia.

Para lo cual se desglosa a continuación los diferentes instrumentos que fundamentan la utilidad de la pericia aquí analizada:

LEGISLACIÓN NACIONAL

Artículo	Cuerpo normativo	Comentario
1	Constitución Política	Se reconoce que nuestro país es multiétnico y pluricultural.
33	Constitución Política	Contempla el principio de igualdad
8	Ley de Acceso a la Justicia de los pueblos indígenas en Costa Rica	Obligación de gestionar en los procesos judiciales el peritaje cultural, cuando se requiera el conocimiento de costumbres, tradiciones y conceptos normativos
339	Código Procesal Penal	Peritaje especial dentro del proceso penal por normas culturales diferenciadas.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Artículo	Cuerpo normativo	Comentario
1	Constitución Política	Se reconoce que nuestro país es multiétnico y pluricultural.
33	Constitución Política	Contempla el principio de igualdad
8	Ley de Acceso a la Justicia de los pueblos indígenas en Costa Rica	Obligación de gestionar en los procesos judiciales el peritaje cultural, cuando se requiera el conocimiento de costumbres, tradiciones y conceptos normativos
339	Código Procesal Penal	Peritaje especial dentro del proceso penal por normas culturales diferenciadas.

De los instrumentos normativos anteriormente expuestos se desprende la obligación, por parte del Estado, que el sistema de justicia ordinaria considere, al momento de resolver los conflictos donde personas indígenas están involucradas, su derecho propio, costumbres, instituciones propias, espiritualidad, tradiciones, procedimientos y prácticas.

Para lograr un reconocimiento pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la pericia cultural toma especial relevancia pues es la que nutre los procesos de los conocimientos especializados necesarios para que se tomen en cuenta desde la cosmovisión de cada pueblo, mediante diálogos interculturales.

La interculturalidad no busca ni la secesión judicial ni la subsunción de la jurisdicción indígena en cualquier otra ni viceversa; por el contrario, busca que se puedan conectar – eso sí- preservando la identidad judicial y construyendo la cooperación, para que los sistemas jurídicos se desarrollen manteniendo celosamente sus respectivas independencias y armonías internas (Rosembert, 2010).

En Costa Rica, este tipo de pericia se ha incorporado en los procesos desde el año 2009 y a pesar de que mayoritariamente se aplica en procesos penales y agrarios, ello no obsta que pueda ser utilizado en otras jurisdicciones donde el requisito principal es que, para dirimir el conflicto, sea necesario tomar en cuenta aspectos culturales que median entre las partes de lo cual tiene desconocimiento el juzgador, siendo además indispensable que se analice desde la premisa que coexisten normas de conducta diferenciadas.

El peritaje jurídico antropológico se presenta como un instrumento fundamental para conocer y entender lo normativo en las comunidades indígenas al “objetivizar” lo jurídico, inmerso en las relaciones sociales de estas. Del mismo modo, se constituye como un instrumento de traducción de un lenguaje al otro, o de una lógica cultural a otra, del lenguaje al sentido común y oral de la comunidad y de su lógica cultural propia al lenguaje especializado del juez y a la lógica jurídica del derecho positivo (Ariza Santamaria, 2010).

Para ahondar un poco más en su aplicación práctica y la experiencia en el sistema judicial costarricense, de seguido se analizan dos casos de distintas jurisdicciones donde la pericia cultural fue vital para la resolución del caso.

Caso Territorio Indígena Alto Chirripó

Datos generales

Recurso de amparo (16-000052-0007-CO) (Recurso de Amparo , 2016)
Resolución 2016-7536. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. de las nueve horas cinco minutos del tres de junio de dos mil dieciséis.

Extracto:

“esta Sala solicitó como prueba para mejor resolver a la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, que emitiera un peritaje cultural para aclarar si la exclusión de una mujer indígena de la asignación de un terreno para sembrar y vivir dentro de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba debido a una relación de convivencia con una persona no indígena, corresponde o no a una norma consuetudinaria propia de esa comunidad indígena. Las conclusiones a las que se arribó en dicho informe pericial fueron las siguientes: 1) sobre la unión de personas indígenas y no indígenas, queda claro que ocurren y que no están prohibidas, mas sí la posibilidad de que tales parejas vivan y posean tierras dentro del territorio indígena; 2) sobre la legitimidad de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba, las entrevistas y la documentación señalan que esta goza de respeto entre los habitantes indígenas y no indígenas, además de que se ha caracterizado por tener orden y llevar con coherencia los asuntos relacionados con la administración y defensa del territorio indígena en nombre de la comunidad indígena que representa; 3) sobre la posición de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba frente al caso, queda claro que es contundente pero que no es arbitraria, por cuanto sus actuaciones demuestran que siempre ha tendido a tratar de evitar que personas no indígenas residan en el territorio indígena en cumplimiento de su papel como representante de la comunidad indígena como dueña legítima del mismo; 4) sobre las normas consuetudinarias sobre participación y acceso a la tierra, se concluye que reflejan la posición de una asamblea numerosa de personas miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba y se basan en elementos de cosmovisión y cultura cabécar, o en lo que se considera necesario para protegerlas; 5) sobre la razón de la expulsión de la mujer indígena implicada en el caso, se verifica que no es un acto aislado, sino fundamentado en la costumbre, que no se trata de un acto en contra de ella como persona específica, sino contra la situación de estar en unión de una persona no indígena y que esta es considerada como condición que puede vulnerar los derechos territoriales y culturales de la comunidad indígena en su conjunto.

Así las cosas, resulta claro que lo dispuesto por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba no es arbitrario, toda vez que responde a la cosmovisión y cultura cabécar”

Derechos culturales tutelados

Acceso a la tierra dentro del territorio indígena Propiedad colectiva (Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 13 y 14 Convenio 169 OIT

Formas de resolver sus conflictos

Artículo 8 inciso 2 Convenio 169 OIT

Instituciones propias Artículo 8 inciso 2 Convenio 169 OIT

Comentario

Con la presente resolución el máximo Órgano constitucional le da contenido a los principios básicos de interculturalidad, donde a través de una pericia cultural se incorporaron en la resolución del conflicto los aspectos atinentes al pueblo indígena Cabécar del Territorio Indígena Alto Chirripo, de manera que para resolver si existía un quebranto constitucional, se valoró desde la perspectiva del acceso a la tierra, según las normas y costumbres de dicho pueblo, así como la figura de la Asociación de Desarrollo, su aceptación dentro la sociedad y el papel que cumple para dirimir los conflictos valorando no solo los intereses individuales sino colectivos del pueblo que representan. Con ello, se fortalecen distintos derechos sociales y culturales que le asisten a todas las personas indígenas que pertenecen a la colectividad y, consecuentemente, se garantizó dentro del proceso gracias al aporte brindado por la pericia cultural un acceso a la justicia con pertinencia cultural.

El caso que de seguido se analizará corresponde un asunto resuelto en la vía penal, donde se acusó a una persona indígena Bribri del territorio indígena Cabagra, por homicidio calificado. Durante el desarrollo del proceso la defensa técnica del encartado alegó que por motivos culturales el acusado no se le podía reprochar la conducta dado que, desde su cosmovisión, tales situaciones se valoran de forma distinta a la sociedad dominante; de esta manera se ordenó la realización de una pericia cultural que fue elaborada de forma interdisciplinaria ya que no solo se requerían peritar aspectos culturales sino su incidencia en el entorno social en que se cometió la conducta delictiva.

Caso Territorio Indígena Cabagra

Datos generales

Recurso de casación (10-000037-0990-PE) (Recurso de Casación, 2011)

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Resolución N° 01423 - 2011 de las 11:06 del 24 de Noviembre del 2011.

Extracto

“así como la valoración realizada por el antropólogo Bohian Pérez Stevanov y la trabajadora social Gabriela Castro Escalante sobre el tema indígena. Al respecto, el Tribunal señaló: “La defensa del acusado E hizo mención de que por ser el mismo de origen indígena no estaba en capacidad de entender la naturaleza y consecuencias del hecho realizado: ese argumento debe ser totalmente desechado por las siguientes razones. Si bien es cierto el Convenio 169 de la OIT indica en sus artículos 5 y 10, expresa la obligación de tomar en cuenta los valores y prácticas sociales de las personas indígenas al momento de aplicar la legislación penal, ello no implica en forma alguna que un indígena deba ser

considerado, de forma automática como lo pretende la defensa, una persona incapacitada por razones culturales para conocer la legislación nacional e im-posibilitada por ello para comprender la naturaleza y consecuencias de sus actos. Es indispensable hacer un análisis de las características del grupo indígena al que la per-sona pertenece, y de las condiciones particulares del acusado, para poder concluir en la existencia de alguna forma de error de prohibición. La prueba recibida en el proceso especialmente lo informado por el antropólogo Bohian Pérez Stevanov y la trabajadora social Gabriela Castro Escalante, hacen ver que en el grupo de origen del acusado E existe claridad en cuanto a que matar a otra persona, aún para resolver conflictos de tierra es una conducta reprochable y sancionada con prisión. En ese sentido el perito Pérez Stevanov señaló "...Dar muerte a una persona es visto como algo impropio en la comunidad, como algo que necesita ser castigado o penado. La comunidad no vi-sualiza la agresión física como algo culturalmente aceptado. Ellos consideran que el castigo debe ser el que imponga la autoridad judicial en el proceso, ellos entienden cuál es ese castigo, entienden que será privada de libertad la persona e irá a la cárcel, pero no saben si son ocho o veinte años de cárcel ...", en tanto que la trabajadora so-cial Castro Escalante declaró "... Quitarle la vida a una persona es delito para ellos, y saben que existe el sistema judicial ... Don E se comunica en bribri con su familia, la esposa dice que también hablan español. Se les dificulta traducir al bribri los términos legales ... A ha tenido un proceso de trasculturación importante, pero don E no ha salido de la comunidad de Cabagra, su familia es netamente indígena. Ella, la esposa de E, tiene claro qué es matar, dice que se puede hacer con cuchillo o con el sukia o brujo a través de maleficios, pero ella entiende que esas formas de matar no son buenas y tienen consecuencias ... Dentro de sus mismas normas es reprochable matar a otra persona, eso atenta contra sus propios principios de convivencia y solidaridad, ellos no tienen una institución que resuelva estos casos y delegan en el sistema judicial la resolución o castigo de estos asuntos, ellos reconocen que existe esa autoridad, el Poder Judicial"

Derechos culturales tutelados

Tomar en cuenta valores y costumbres del pueblo indígena	Artículo 5 y 10 Convenio 169 OIT
Sistemas jurídicos propios	Artículo 9 Convenio 169 OIT
Identidad cultural	Artículo 1 Convenio 169 OIT

Comentario

Del voto en análisis se evidencia como, a través de la pericia cultural que fue realizada no solo a nivel antropológico sino social, fue posible tomar en cuenta elementos culturales para la represión

de un delito, siendo que se brindaron insumos importantes respecto al sistema normativo propio de la sociedad a la que pertenecía la persona imputada y como su condición de indígena no podía constituir un justificante para cometer una acción que atenta contra la vida de otras personas, pues tales conductas son reprochables por el pueblo Bribri de Cabagra. En el caso que nos ocupa se fortalece la identidad de indígena de las partes y como, a través de un diálogo intercultural con la comunidad, fue posible incorporar tales elementos para efectos de valoración de la prueba y el análisis de culpabilidad para la imposición de la pena.

Del anterior análisis pragmático, se desprende la funcionalidad de la pericia aquí expuesta a nivel de procesos judiciales, garantizando con ello un acceso a la justicia, tal como lo contempla el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la implementación de medidas diferenciadas que garanticen igualdad de trato y un procedimiento justo.

También encierra la obligación de otorgar un trato, según las necesidades de cada quien, atendiendo a condiciones de vulnerabilidad, discriminación social, grado educativo, edad, grupo étnico, etc (Monge Pizarro, 2009).

Aunado a lo anterior, podemos decir que, más allá de brindar un acceso a la justicia a las partes, la función primordial que tuvieron los peritajes culturales, en los dos casos aquí analizados, fue sensibilizar a los operadores del derecho que participaron en dichos procesos para que se tomara en cuenta las características y especificidades culturales de las personas involucradas, lo que se refleja en la resolución de cada caso en concreto, logrando con ello el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que impera en Costa Rica.

Las garantías judiciales aplican de igual manera, no solo a los victimarios, sino también a la víctima del delito. Cuando la persona afectada por un delito es un indígena o varios individuos miembros de una comunidad, las autoridades jurisdiccionales deben garantizar su derecho particular de acceso a la justicia, verdad y reparación (Ginna, 2022).

Reflexiones finales

El peritaje cultural enriquece los procesos judiciales al incorporar la diversidad étnica y cultural en la administración de justicia. En un Estado pluricultural como Costa Rica, esta herramienta no solo facilita el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, sino que también sensibiliza a los operadores del derecho sobre la necesidad de respetar las especificidades culturales en cada caso.

La garantía del acceso a la justicia de los pueblos indígenas entre otros aspectos analizados por la jurisprudencia del sistema interamericano, establece la obligación de tomar en cuenta las particularidades propias que los diferencian de la población dominante, pues son estos aspectos que en todo conforman la identidad cultural (características económicas, sociales, vulnerabilidad, valores, costumbres, sistemas jurídicos propios y su relación con la tierra).

Al momento de administrar justicia a los pueblos indígenas, se debe partir de la premisa que es indispensable generar diálogos interculturales como mínimo de convivencia entre ambas culturas.

Su aplicación debe ser rigurosa y focalizada, garantizando que el dictamen pericial responda a un tema específico del conflicto. Al hacerlo, el peritaje cultural se convierte en un puente que conecta sistemas normativos diversos, fortaleciendo la justicia intercultural y promoviendo la convivencia armoniosa entre culturas.

Algunos aspectos culturales que pueden ser peritados:

1. Condición de indígena: La condición de indígena requiere dos elementos: el autoidentificación y reconocimiento comunal, este segundo elemento puede ser acreditado mediante una pericia cultural entre otros aspectos.
2. Sistemas de parentesco: Dentro de los pueblos indígenas Bribri, el sistema de parentesco es matrilineal. La concepción de familia se basa en el grado de pertenencia al clan, y no en el grado de parentesco. Estos elementos pueden identificarse mediante un análisis antropológico.
3. Sistema de transmisión de tierras: La forma en que se transmite la tierra es distinta de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, ya que se tutela la propiedad colectiva. A través de un peritaje cultural se puede identificar ese sistema de transmisión propio pues no es el mismo en todos los territorios.
4. Sistemas jurídicos propios: Para la resolución de conflictos cada territorio puede tener sus propias instituciones y procedimientos. Por ejemplo, en Talamanca Bribri cuentan con un Tribunal de Derecho propio que resuelve los conflictos de diversa naturaleza.
5. Sistemas normativos: Es posible identificar si la conducta es reprochada desde la cosmovisión de pueblo indígena.

Referencias

- Aida, H. R. (2018). Retos y posibilidades de los peritajes antropológicos: reflexiones desde la perspectiva mexicana. *Abya-yala: Revista sobre acceso a la justicia y derechos nas Américas*, 57–85.
- Ariana, C. L. (2014). *Doble análisis del error: tipicidad y culpabilidad en los casos de los pueblos indígenas*. San José: Universidad Internacional de las Américas.
- Ariza Santamaría, R. (2010). Peritazgo socio-antro-jurídico y administración de justicia intercultural en Colombia. En *Acceso a la justicia de los pueblos indígenas: los peritajes culturales y la visión de pobreza desde su cosmovisión* (pp. 13–33).
- Aroon, G. A. (2015). *Entre la reflexión y la práctica*. Lima: Centro de Investigación.
- GINNA, P. G. (2022). El debido proceso en perspectiva intercultural. En *Pluralismo jurídico: Manual para la práctica de la justicia intercultural* (pp. 134–145).
- Ixchiú García, P. (2010). Ponencia sobre peritaje cultural. En *Acceso a la justicia de los pueblos indígenas: los peritajes culturales y la visión de pobreza desde su cosmovisión* (pp. 36–56).
- Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 27 de junio de 2012).
- Monge Pizarro, L. (2009). *Manual de principios, derechos y garantías constitucionales en el proceso penal*. San José, Costa Rica: Escuela Judicial.
- Recurso de Amparo, 7536 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, 3 de junio de 2016).
- Recurso de Casación, 01423 (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, 24 de noviembre de 2011).
- Rosembert, A. S. (2010). *Coordinación entre sistemas jurídicos y administración de justicia indígena en Colombia*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

ESSAY

Freedom of Conscience and Religion in the Americas: Following OAS General Assembly resolutions to promote pluralism and strengthen communities

Libertad de conciencia y religión en las Américas: Siguiendo las resoluciones de la Asamblea General de la OEA para promover el pluralismo y fortalecer las comunidades

Emily A. Cole ^{1 2}

How to cite:

Cole, E.A. (2025). Freedom of Conscience and Religion in the Americas: Following OAS General Assembly resolutions to promote pluralism and strengthen communities. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 203-213. Doi: 10.63058/des.v19i1.316

Submission received: 22 January 2025. **Accepted:** 10 February 2025.

¹ Emily A. Cole is a human rights lawyer currently involved in international religious freedom advocacy through Pepperdine University's Program on Global Faith and Inclusive Societies in Washington, DC. ORCID: 0009-0009-2571-1339. Email: emily.cole@pepperdine.edu / emilyacole2@gmail.com.

² This manuscript builds upon a publication that originally appeared in Canopy Forum, a digital platform from the Center for the Study of Law and Religion at Emory University: canopyforum. <https://bit.ly/3E3zWkH>

Abstract

This article aims to highlight the directive placed on OAS member states to engage with the topic of freedom of conscience and religion or belief in a meaningful way through promoting pluralism. By its own language, this is to occur through (1) refocused efforts to protect places of worship and sacred sites, (2) building on or developing inclusive mechanisms through public policy aimed at promoting tolerance and peace, and (3) by engaging in regional or international forums that provide a platform for discussing best practices. This essay analyzes the language of the General Assembly Resolution that deals with this topic and suggests useful mechanisms and regional forums for member states to engage with. It also provides a framework under which to work and better discuss the concept within the Inter-American System. It is important to recognize the ways promoting pluralism (through protection of places of worship and sacred sites) strengthens community engagement with government leaders and equips individuals and groups to confront unjust laws, foster interfaith dialogue, and better protect human rights. By exploring aspects of engagement and the benefits they create, the OAS can better lead on issues of pluralism in the region and advance a framework for member states to adopt and build upon.

Keywords: OAS, pluralism, sacred sites, places of worship, religious freedom, community engagement, interfaith dialogue, cultural heritage framework.

Resumen

El objetivo de este artículo es poner de relieve la directiva impuesta a los Estados miembros de la OEA para que aborden el tema de la libertad de conciencia y religión o creencia de forma significativa mediante la promoción del pluralismo. Según su propio lenguaje, esto debe ocurrir a través de (1) esfuerzos reorientados para proteger los lugares de culto y los sitios sagrados, (2) la construcción o el desarrollo de mecanismos inclusivos a través de políticas públicas destinadas a promover la tolerancia y la paz, y (3) mediante la participación en foros regionales o internacionales que proporcionan una plataforma para discutir las mejores prácticas. Este ensayo analiza el lenguaje de la Resolución de la Asamblea General que aborda este tema y sugiere mecanismos útiles y foros regionales en los que los Estados miembros pueden participar. También proporciona un marco bajo el cual trabajar y discutir mejor el concepto dentro del Sistema Interamericano. Es importante reconocer el modo en que la promoción del pluralismo (a través de la protección de los lugares de culto y los sitios sagrados) refuerza el compromiso de la comunidad con los líderes gubernamentales y capacita a individuos y grupos para enfrentarse a leyes injustas, fomentar el diálogo interreligioso y proteger mejor los derechos humanos. Al explorar los aspectos del compromiso y los beneficios que generan, la OEA puede liderar mejor las cuestiones de pluralismo en la región y avanzar en un marco que los Estados miembros puedan adoptar y aprovechar.

Palabras clave: OEA, pluralismo, lugares sagrados, lugares de culto, libertad religiosa, compromiso comunitario, diálogo interreligioso, marco del patrimonio cultural.

Introduction

As Latin America and the Caribbean face increasing challenges related to freedom of religion or belief (FoRB) and conscience, the region's approach to promoting and protecting its bundled nature must evolve. Attacks on places of worship and religious or cultural sites are damaging anywhere, and this is certainly true in the Western Hemisphere. Desecration of sacred sites or hostilities towards places of worship (and their leaders) threaten not only the rights of individuals but also the cultural fabric of entire communities.

To address these threats and build a stronger foundation for freedom of conscience and belief, the Organization of American States (OAS) must refocus its efforts on General Assembly Resolution XXVI, which emphasizes protection of these sites through new or strengthened mechanisms. By prioritizing this resolution in the upcoming months and years, OAS member states can take meaningful steps to ensure FoRB's multifaceted nature is not only enshrined in law but also respected in practice throughout the Americas.

While OAS resolutions and declarations are not legally binding, they carry significant political weight and should be taken advantage of. Certainly, the region faces a range of pressing issues apart from human rights, including rising crime and violence, foreign influences through authoritarian regimes and ports, the ongoing crisis in Haiti, and complex foreign policy debates over trade and migration. But for the OAS, protecting places of worship should remain a top priority as it will strengthen both individual and collective rights while equipping communities to engage in dialogue that helps confronts many of these challenges. The promotion of pluralism across the Americas strengthens the rule of law and aligns domestic laws and policies with regional principles that keep human rights protection at the center.

This purpose of this essay is twofold. On one hand, it reiterates the directive placed on OAS member states to engage with the topic of freedom of conscience and religion or belief in a meaningful way through promoting pluralism. By its own language, this is to occur through (1) refocused efforts to protect places of worship and sacred sites, (2) building on or developing inclusive mechanisms through public policy aimed at promoting tolerance and peace, and (3) by engaging in regional or international forums that provide a platform for discussing best practices. The first part of this essay will therefore analyze the language of the General Assembly Resolution, suggest useful mechanisms and regional forums, and provide a framework under which to work. On the other hand, this essay simply seeks to touch on the ways promoting pluralism (through protection of places of worship and sacred sites) strengthens community engagement, thereby equipping individuals and groups to confront unjust laws, foster interfaith dialogue, and protect human rights. The argument is that the OAS can lead on this, and that it should.

A Clear Directive from the 54th General Assembly

In its 54th General Assembly (GA) hosted in Asunción, Paraguay in June 2024, the OAS adopted important resolutions for the upcoming year. Of those, one resolves to “strengthening protection and promotion of the right to freedom of conscience and religion or belief” in the region. There, drafters reiterated the need to better promote and protect “religious pluralism, respect, and tolerance” in the hemisphere, encouraging member states to direct their attention to places of worship and sacred sites. Indeed, this focus understands that central to religious freedom is human dignity since, to fully affirm an individual’s humanity, their search for truth—in whatever peaceful form that takes shape—must be protected.

Places of worship, or physical spaces for religious practice, includes both buildings – like churches, mosques, or synagogues – and locations designated for spiritual or ritualistic activities. Similarly, sacred sites hold religious, spiritual, or cultural significance and include both man-made and natural sites or landmarks (as is the case for various indigenous communities). Cultural heritage is a broader concept that encompasses customs, traditions, and places of cultural and/or spiritual significance. Indeed, cultural heritage includes tangible and intangible elements as well as natural sites which are often integral to a community’s identity and preservation of tradition.

Given the essential role each of these play in the context of human rights, it is commendable that they were given attention at the 54th GA. Still, their promotion requires targeted action. To achieve this, the OAS might consider, broadly, cultural heritage protection as a framework for religious freedom promotion, appreciating the impact places of worship and sacred sites have on the vibrancy – and vitality – of their communities. As my Pepperdine colleague Emily Scolaro writes, “Challenges facing persecuted and minority faith communities in exercising their freedom to worship at ancient heritage sites with deep religious significance have only become more prominent,” making preservation of cultural heritage “a central component of protecting the human right to freedom of religion or belief.”

A cultural heritage framework can play a pivotal role in strengthening FoRB in Latin America by recognizing, preserving, and promoting the diverse religious and spiritual traditions that are integral to the region’s cultural fabric. This type of framework recognizes the inherent link between cultural spaces and full enjoyment of religious or spiritual practices, and in Latin America and the Caribbean, this is vital. Appreciation for these specific sites and places across the region will not only foster peace, dialogue, and interfaith tolerance among diverse communities but will strengthen an array of other human rights that build upon FoRB’s protection.

Resolution XXVI

General Assembly Resolution XXVI explicitly reaffirms a series of declarations related to places of worship and sacred sites in the Western Hemisphere:

RECALLING Article 12 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that: “the right to maintain, protect, and have access in privacy to their religious and cultural sites”;

RECOGNIZING that deliberate destruction of, or otherwise harmful actions against, places of worship and religious and cultural sites impede individuals’ abilities to worship and undermine the right to freedom of conscience and religion or belief; and

REAFFIRMING that all human rights, including freedom of conscience, religion or belief, and freedom of expression are universal, indivisible, interdependent and interrelated and mutually reinforcing.

From there, areas of focus for 2025 are clear as the resolution resolves:

...

To urge member states to end discrimination based on religion or belief, or non-belief, especially against persons belonging to marginalized or minority religious groups.

To call upon member states to protect the ability to worship and other expressions of religion or belief, as well as all places of worship and sites of religious, cultural, and spiritual significance, so as to allow individuals to peacefully and safely practice and live out their religions or belief and observe religious, belief, faith, and spiritual traditions individually or in community with others.

To encourage member states to develop and present reports on best practices to ensure the protection of places of worship and other sacred spaces, to include the religious and cultural sites of Indigenous peoples.

Ending discrimination based on religion or belief (or non-belief) is a bold request. While member states will not eradicate all forms of discrimination or hate against their minority faith communities this year, they can start to by emphasizing the need for greater interfaith dialogue at local levels. Protecting places of worship and sacred sites provides a starting point for fostering these discussions. Furthermore, in order to better advocate for policies that will protect community needs, citizens must be empowered to speak to unjust laws or disparate impact. They must be given the space to communicate with each other and local officials, and that space must be equipped to handle diverse groups. Sacred sites and places of worship may provide neutral spots to foster such discussions.

OAS member states can also encourage their nations’ ministers of religious affairs and other government officials to convene with key religious leaders to discuss community challenges

specifically regarding safety and tolerance. Ministers of religious affairs are positioned well to organize national and regional interfaith forums and encourage interfaith collaboration with respect to various issues—one being education. With respect to education, in addition to interfaith dialogue, curriculum that emphasizes living in pluralistic societies is vital for elementary schools, high schools, and universities. Certainly, the nuances of freedom of conscience and conscientious objection is a ripe debate for the university setting across the Americas.

The resolution also determined to strengthen or develop “inclusive mechanisms” that protect and promote FoRB-focused public policies. Specifically,

To encourage member states to strengthen or to develop inclusive mechanisms to protect and promote freedom of conscience and religion or belief through public policies aimed at promoting and protecting religious pluralism, respect, and tolerance.

Yes, developing and presenting reports on best practices around protecting places of worship and sacred sites will require greater scholarship into the area of law and religion, but it will also hinge largely on access to religious communities. In this respect, member states can work with civil society organizations on the ground who are connected to faith leaders, since it is they who understand the complexities of their respective communities. Indeed, public policies cannot be implemented, let alone generated, without first engaging with the diverse faith communities that make up a given society.

Regarding other general efforts to help protect sacred sites and promote FoRB in Latin America and the Caribbean, key considerations might include: (1) reviewing policies and the interplay between international, domestic, and customary laws, including differentiating between doctrine, implementation, and enforcement; (2) understanding the legal mechanisms that already exist both at local and federal levels as well as within the Inter-American System; (3) examining precautionary measures requested before the Inter-American Commission on behalf of faith groups or religious communities (including indigenous communities) to determine if any violations implicated places of worship/sacred sites and what implementation, if any, followed the Commission’s recommendation(s). (See American Convention Art. 21; OAS Charter Art. 3(m), 45(a).)

Enhancing the role of institutions like the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court to address specific FoRB violations is an important place to start. By encouraging the submission of petitions before the Commission related to FoRB violations involving sacred sites or places of worship, the region can develop a more robust legal framework for member states to build from. With this, analyzing previous precautionary measures submitted before the Commission may be helpful in shaping dialogue. It is important to determine what cases were referred to the Inter-American Court, and what recommendations by the Commission were implemented or enforced at the state levels that have had an impact on strengthening pluralism.

Additionally, by formally recognizing sacred sites and places of worship as part of cultural heritage, the state can acknowledge the legitimacy of the customary laws that govern these spaces. This helps integrate indigenous and local customary legal systems into national legal frameworks, ensuring that they are respected and upheld alongside formal legal systems. The OAS is the perfect place to foster discussions around this topic and highlight the positive impact it could have at the grassroots levels in various countries with large indigenous populations.

Supporting public policies that emphasize community-led peace building and security initiatives is also an important aspect of developing inclusive mechanism. Member states could seek to prioritize bridging these topics at regular sessions to highlight their value and protect human rights broadly. Again, the goal of discussions around these initiatives at the OAS would be to ultimately trickle down and naturally lead to community dialogue that fosters a culture of trust across religious and political lines, strengthening the common good.

Getting youth involved in these peace building projects is also imperative. With that, OAS member states could reiterate a call for the drafting of education initiatives that emphasize pluralism and cultural preservation as key aspects of learning across diverse schools and universities.

With respect to policy and legislation, a cultural heritage framework for discussing freedom of religion or belief in the OAS setting may spur conversations about inclusive heritage legislation at the state and local levels in the future. Member state representatives should therefore model this idea. While the OAS itself has no legislative power, its influence is clear.

Finally, the last point of Resolution XXVI is key:

To encourage member states, as well as the General Secretariat, to organize and participate in global, regional, and subregional conferences, where appropriate, and events that commemorate or promote respect for the right to freedom of conscience and religion or belief and to share any conclusions and best practices, discussed during these events.

Member states should inform the OAS General Secretariat of their desire for dialogues within its structure where these topics can be explored in more details, allowing religious freedom experts to facilitate. A 2025 OAS event modeled after the September 2023 “Dialogue in Support of Freedom of Conscience, Religion or Belief and Pluralism in the Americas” would be helpful. It could emphasize ways to protect places of worship and sacred sites in specific regional contexts—including the distinct challenges Caribbean nations face—and offer details into refining a cultural heritage framework to address those challenges.

Additionally, promoting interfaith dialogue gains support through the inclusion of civil society perspectives. The Interreligious Forum of the Americas (FIDELA) is one strong example of this. Similarly, attendance at annual platforms such as the G20 Interfaith Forum would also be positive.

And finally, more Latin American and Caribbean countries joining the International Freedom of Religion or Belief Alliance (IRFBA) would afford development alongside other nations committed to the promotion of this right.

Religious and Cultural Sites of Indigenous Peoples

Notably, Resolution XXVI also resolves to develop and present reports on best practices to ensure the protection of places of worship and other sacred spaces include “the religious and cultural sites of indigenous peoples.” This means member states cannot simply acknowledge physical spiritual sites exist but also understand (at least generally) what these sites mean to those respective communities as it relates to FoRB. Importantly, this aspect of the resolution cannot come at a cost to, or be elevated to greater importance than, the rights of other faith communities, such as Christian, Jewish, Muslim, or Afro-Indigenous communities, who do not observe land in the same way. One community’s FoRB right is not greater than another’s.

To better approach this part of the resolution, recognizing the connection between indigenous worldviews and ancestral lands is important. In other words, because indigenous ancestral lands are often inherently linked to spiritual and cultural practices, full enjoyment and exercise of the right to freedom of religion or belief often depends on their protection. Customary laws may provide insight into communal faith practices to help inform government interactions with these communities, especially those regarding forestry, mining, or other natural developments on their lands.

Indeed, our research at Pepperdine’s Program on Global Faith and Inclusive Societies has found the connection between land rights violations and FoRB cannot be overstated in Latin America. While territory is important in and of itself with respect to property rights, the ability to hold ceremonies and practice spiritual traditions in these communities often hinges on land or landmarks. Still, member states will have compelling interests regarding development on many of these territories.

In this respect, a difficult but necessary balancing act is inevitable regarding use of land for the development of a society and the collective rights of a particular people group. Nevertheless, when decisions have a direct effect on a fundamental right such as FoRB, those considerations should not be examined lightly.

Greater Emphasis on Protection of Places of Worship and Sacred Sites to Help Slow the Spread of Organized Crime and Strengthen Communities

Organized crime exerts a profound impact on freedom of religion or belief (FoRB) in the region, though its influence is often underestimated due to its pervasive reach across citizen life. Multiple countries in Latin America and the Caribbean remain overwhelmed by violence which both disrupts community life and undermines government efforts to safeguard human rights, including FoRB. While this is especially true in Ecuador, Brazil, Colombia, and Mexico today, it is endemic

to this part of the world. Indeed, with high rates of homicidal violence related to organized crime, the Americas have the highest regional homicide rate in the world.

Even so, the impact organized crime has on FoRB rights and specifically, on religious leaders is underappreciated, and the effect on community development or the ability for citizens to react to unjust laws or government impunity “from below” is greatly diminished. As the United Nations Plan of Action to Safeguard Religious Sites states, “Religious leaders play a crucial role in building trust, fostering dialogue, stressing unity, solidarity, and mutual understanding, and in offering positive and moderate narratives in response to hatred and division.” If places of worship are not protected, religious leaders become more vulnerable, and the community life inevitably suffers.

In this way, a cultural heritage framework to FoRB (which reinforces protection of places of worship and sacred sites) can foster community cohesion, reinforce the rule of law, and promote social resilience, deterring gang violence. But again, this framework needs directed government measures to work, measures that will naturally impact ethnoreligious minorities as well who battle their own separate challenges alongside gang oppression. As Teresa Flores keenly observes, “The level of violence exercised by criminal groups [...] affects entire communities and, on many occasions, causes massive, forced displacement [...] particularly affect[ing] indigenous leaders defending ancestral territory, who are the targets of threats, assassinations, and even disappearances.”

But religious communities in Latin America and the Caribbean, particularly those that are predominantly Catholic or Protestant, may be less vulnerable to the impact of organized crime if (1) the social environment is reinforced by norms rooted in shared beliefs and (2) faith leaders are held out as key figures of advocacy and support for economic and humanitarian aid. In societies that are or becoming more pluralistic, especially in South America, ongoing public interfaith dialogues will reinforce a sense of shared humanity and help promote social cohesion, fostering peace and tolerance which, again, may reduce the ability for gangs to acquire or maintain footholds in certain areas. Places of worship can again be points of reference to begin these dialogues. In countries like Brazil, Peru, and Colombia where local resources are often exploited through illegal mining, drug trafficking, and extortion, emphasizing the value of cultural heritage sites may help limit, or perhaps deter, gang reach.

Indeed, the recognition and protection of sacred spaces demonstrate a commitment to inclusive legal reform that takes into account the cultural, spiritual, and social needs of all communities. By embedding pluralism into legal and political frameworks, judicial systems become more attuned to the realities of diverse groups, ensuring that laws are applied more equitably and that judicial reforms reflect the interests and rights of all citizens, regardless of their religious or cultural background. The positive outcomes of this include deterring crime and violence as well as reducing divisive narratives around certain religious or spiritual practices, fostering more just societies. With this comes greater tolerance, greater peace, and stronger leadership at the local and national levels to uphold human rights.

Conclusion

The protection of places of worship and sacred sites in Latin America and the Caribbean must be elevated as a central concern for OAS Member States in 2025. General Assembly Resolution XXVI provides a powerful starting point. By acting on this resolution and appreciating the framework of cultural heritage protection, OAS members can strengthen the broader human rights landscape. In an increasingly fragmented region, where communities face ongoing challenges, prioritizing the protection of sacred and cultural spaces reinforces a collective commitment to tolerance, peace, and the flourishing of human dignity. Member States should commit to ensuring that religious pluralism, freedom of conscience, and cultural heritage are upheld as foundational pillars of community life in the upcoming year. As a recent OAS General Secretariat Declaration noted,

“...[R]eligious pluralism goes beyond religious diversity. This distinction emphasizes the fact that the recognition of the diversity of belief and spirituality must be translated into concrete actions and policies of inclusion, dialogue and articulation in broader instances. It is important to value the role of religion and spirituality in the construction of democracy and social well-being, together with States, religious leaders, faith-based organizations, civil society, social movements and international organizations.”

Importantly, incorporating mandates from Resolution XXVI into concrete policies will also help safeguard other human rights which depend upon, and are strengthened by, the protection of freedom of religion or belief and conscience. Indeed, protecting places of worship and sacred, spiritual, or cultural sites ultimately advances free thought and expression, freedom of movement and development as well as various facets of economic, social, and cultural rights. This alone should encourage member states to act.

Protecting places of worship and sacred sites to promote pluralism will strengthen community engagement in Latin America and the Caribbean because it necessitates a collective vision, urges collaboration, and requires the reaching across of ethnoreligious lines.

References

- Roura, A. M., Wittenberg, D., & Moncada, B. (2024, April 10). *How Ecuador went from tourist haven to a nation in the grip of gangs*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68778773>
- Migliorini, D. (2023, December 22). *Organized crime blamed for half of Latin America's homicides*. InSight Crime. <https://insightcrime.org/news/organized-crime-blamed-for-half-of-latin-americas-homicides/>
- Kincaid, E. R. (2024, June 6). *Law from below: How the thought of Francisco Suárez, SJ, can renew contemporary legal engagement*. Canopy Forum. <https://canopyforum.org/2024/06/06/law-from-below-how-the-thought-of-francisco-suarez-sj-can-renew-contemporary-legal-engagement/>
- G20 Interfaith Forum (IF20). (2024). *2024 G20 Interfaith Forum – Brazil*. <https://www.g20interfaith.org/2024-g20-interfaith-forum-brazil/>
- International Religious Freedom or Belief Alliance. (n.d.). *International Religious Freedom or Belief Alliance*. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/international-religious-freedom-or-belief-alliance/>
- Interreligious Forum of the Americas (FIDELA). (2024). *2024 Asunción General Assembly*. <https://www.fidela.org/2024-asuncion-general-assembly/>
- Thames, K. (2024, March 28). *Promoting peace and stability in the Americas through religious freedom: As authoritarians crack down on religious freedom, Western Hemisphere nations need to increase protection of human rights*. U.S. Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2024/03/promoting-peace-and-stability-americas-through-religious-freedom>
- Nula, M. (2024, May 9). *The world's most violent region needs a new approach to crime*. The Economist. <https://www.economist.com/the-americas/2024/05/09/the-worlds-most-violent-region-needs-a-new-approach-to-crime>
- Observatory of Religious Freedom in Latin America. (n.d.). *Observatory of Religious Freedom in Latin America*. <https://olire.org>
- Organization of American States (OAS). (2024). *Declarations and resolutions of the General Assembly, Fifty-fourth regular session, AG/RES. 3028 (LIV-O/24)*. <https://www.oas.org/en/council/ag/resdec/>
- Organization of American States (OAS). (1969). *American Convention on Human Rights*. https://www.oas.org/dil/treaties_b-32_american_convention_on_human_rights.pdf
- Organization of American States (OAS). (2023, September 27). *Press advisory: OAS to host dialogue in support of freedom of conscience, religion or belief and pluralism in the Americas*.
- Organization of American States (OAS). (2023, October 27). *Press release: Declaration of the OAS General Secretariat on the International Day of Religious Freedom*. https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-070/23
- Pepperdine University. (n.d.). *Program on Global Faith and Inclusive Societies, Center for Faith and the Common Good*. <https://www.pepperdine.edu/center-for-faith-common-good/research/global-faith-inclusive-societies.htm>

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global study on homicide 2023: Homicide and organized crime in Latin America and the Caribbean*. United Nations.
- Scolaro, E. (2023, December). *New approaches to protecting religious freedom: Cultural heritage protection as a framework for IRF advocacy*. LSE Religion and Global Society Blog. <https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2023/12/new-approaches-to-protecting-religious-freedom-cultural-heritage-protection-as-a-framework-for-irf-advocacy/>
- Flores, T. (2024, December 12). *Regulation of FoRB rights by organized crime in Mexico: A real although largely overlooked issue*. Canopy Forum. <https://canopyforum.org/2024/12/12/regulation-of-forb-rights-by-organized-crime-in-mexico-a-real-although-largely-overlooked-issue/>
- United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC). (2019). *The United Nations Plan of Action to Safeguard Religious Sites: In unity and solidarity for safe and peaceful worship*. <https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/12-09-2019-UNAOC-PoA-Religious-Sites.pdf>

ESSAY

Global Cities: A New Hierarchy and Critical Assessment of the Post-Colonial Legacy

Ciudades Globales: Una Nueva Jerarquía y una Evaluación Crítica del Legado Postcolonial

David Garnier Méndez ¹

How to cite:

Garnier Méndez, D. (2025). Global Cities: A New Hierarchy and Critical Assessment of the Post-Colonial Legacy. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 214-222. Doi: 10.63058/des.v19i1.317

Submission received: 3 January 2025. **Accepted:** 5 February 2025.

¹ David Garnier Méndez es Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Cuenta con una licenciatura con énfasis en Estudios de Paz por la Universidad Ritsumeikan Asia Pacific; realizó sus estudios de pregrado en Relaciones Internacionales en la misma universidad; tiene más de 6 años de experiencia docente en el ámbito universitario, actualmente se desempeña como profesor asociado en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología; ha publicado recientemente dos artículos en la revista Rhombus; es asesor del prestigioso programa de investigación Delfin para los años 2024 y 2025; ha sido reconocido por su labor docente en los años 2023 y 2024 en San José, Costa Rica; a lo largo de su trayectoria académica, ha sido beneficiario de diversas becas, entre las que destacan la Beca de la Universidad Ritsumeikan de Asia Pacífico (2019-2021), la Beca de honor Monbukagakusho (2017-2019), la Beca JASSO (2017-2018) y la Beca Rupee (2015-2017). ORCID: 0009-0003-8532-0088. Correo electrónico: davidgarniermendez@outlook.com

Abstract

With the increasing human migration to cities, the relevance of global cities at the international level is becoming more evident. Nonetheless, a concrete definition of what is needed for a city to become global has not been formulated. The existing system that identifies cities as global is highly embedded in the colonial past and perpetuates a hierarchical system born from the colonial legacy. Therefore, this research paper intersects the significant factors that indexes utilize to evaluate a city in terms of its global output and highlights the relevant connection of the factors to the colonial legacy of yore. The social normative conditioning of the citizenry inhabiting these urban centers and the discrepancy in city resiliency byproduct of a disparity in resource availability. Furthermore, the inequality in resource allocation has created a perpetuation in the inability to become resilient to modern transnational problems and transboundary issues, fostering the disparity between emerging cities and global cities. Finally, this paper seeks to aid in the post-colonial discourse of the international relations discipline and calls for a conjoint interdisciplinary approach to emancipate the classification of cities from the contemporary colonial hierarchical system.

Keywords: global cities, post-colonialism, urbanization, hierarchical systems, international relations, Marxism, normative behavior, city resiliency.

Resumen

Con el aumento de la migración humana a las ciudades, la relevancia de las ciudades globales a nivel internacional se hace más evidente. No obstante, no se ha formulado una definición concreta de lo que se necesita para que una ciudad se convierta en global. El sistema existente que identifica a las ciudades como globales está altamente arraigado en el pasado colonial y perpetúa un sistema jerárquico nacido del legado colonial. Por lo tanto, este trabajo de investigación cruza los factores significativos que los índices utilizan para evaluar una ciudad en términos de su producción global y destaca la conexión relevante de los factores con el legado colonial de antaño. El condicionamiento normativo social de la ciudadanía que habita estos centros urbanos y la discrepancia en la resiliencia de las ciudades como subproducto de una disparidad en la disponibilidad de recursos. Además, la desigualdad en la asignación de recursos ha creado una perpetuación en la incapacidad de ser resiliente a los problemas transnacionales modernos y los problemas transfronterizos, fomentando la disparidad entre las ciudades emergentes y las ciudades globales. Finalmente, este artículo busca ayudar en el discurso poscolonial de la disciplina de las relaciones internacionales y hace un llamado a un enfoque interdisciplinario conjunto para emancipar la clasificación de las ciudades del sistema jerárquico colonial contemporáneo.

Palabras clave: ciudades globales, post-colonialismo, urbanización, sistemas jerárquicos, relaciones internacionales, marxismo, comportamiento normativo, resiliencia urbana.

Introduction

What do the cities of Xi'an during the Han Dynasty in ancient China, Athens during ancient Greece, and Rome during the Roman Empire have in common? Despite differing in time and space, these major cities of old were crucial cornerstones for trade and communication on a global scale during their respective eras. They became staples of foreign relations and served as hubs of information and networking. In the past century, cities like London, Tokyo, and New York have taken on similar roles, becoming new crown jewels for human interaction and information. Today, they are regarded as 'global cities.'

The term 'global city' has had many attempts to be defined. The most relevant definition for the term has come to be understood as "an image of an urban place that is contemporary, international, multicultural, 'wired,' cosmopolitan, polarizing and having geographically boundless power" (Boschken, 2008, p.3). These hubs of global power have been developing since the rise of nation-states. Nonetheless, their importance has spiked, particularly during the past 20 years due to globalization. These emerging epicenters for human networking in migratory, economic, social, and political dimensions have expanded beyond conventional borders and delimitations. An estimated projection has evaluated that these centers of human interaction will become a permanent settlement for more than "68 % of the worldwide population by 2050" (United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2018).

Consequently, this projection creates the desire for any city to be regarded as 'global.' However, the road towards achieving the status of 'global' has not been smooth and without complications; similarly, to the langsyne cities of the past, the membership to the club of 'global cities' has a lot of restrictions and requirements. The Global-Northern metropolises have ostracized and defined the characterization of what is required for a city to become 'global,' and as a consequence, other cities that do not fit the model have been relegated to the status of developing or aspiring cities. The repercussion of such action has created a new hierarchical structure in the international order. Therefore, what factors are needed for a city to become global? Hence, this paper will analyze the factors and indicators required for a city to become 'global' to evaluate the impact of the hierarchical structure on aspiring global cities.

Global Cities a reflection of Traditional Multilateralism and the resilience of post-colonial theory

Global Cities, like traditional multilateralism, have been shaped by figures of authority and power commonly found within the Global North. Similar to the dominant powers in multilateralism (e.g., nation-states with nuclear weapons), Global-Northern metropolises have influenced and narrowed the factors that define a city as "global" under a Foucauldian panoptic view. Consequently, emerging cities primarily located in the Global South have automatically fallen into a hierarchical system where the agents of power (Global-North metropolises) are at the top, dictating the requirements

to join the club of 'global cities.' Lake (2003) elaborates on this similarity between the hierarchical system within global cities and multilateralism by arguing that units of power define international structures. As long as significant powers flourish within the system, the structure will be defined and shaped according to them (Lake, 2003, p.306). In other words, as long as the major powers at the pinnacle of the system continue to gain power, the system is unlikely to change; hence, the current 'global cities' (e.g., London, New York, Tokyo) establish the conditions required to become a 'global city.'

The existence of the hierarchical system presents a problem that is often criticized, especially by proponents of post-colonial theories. These scholars focus on the intersections of empire, race/ethnicity, gender, and class (among other factors) in the workings of global power that reproduce a hierarchical international relations (IR) system (Nair, 2018, p.1). Therefore, the factors necessary for a city to become 'global' must be examined to evaluate how the prevalence of oppression operates within this system. However, the factors that define a 'global city' are not consistent within the available data and literature. Consequently, the Global Power City Index (GPCI) and Global Cities Outlook (GCO) represent the most reliable data sources for establishing a pattern or identifying factors.

Prevalence of Colonial Heritage at the 'global'

The GPCI and GCO measure the 'global' status of cities differently; however, both indexes agree that the necessary attribute for a city to become global relies on the ability to harvest power in terms of economic, political, and social areas. The GPCI (2021) identifies global cities as harvesting hubs of "magnetism," or their ample power to attract people, capital, and enterprises from around the world." (Mori Foundation, 2021, p.1). Similarly, the GCO (2021) identifies global cities as centers that create "conditions for their future status as global hubs. These are measured across four dimensions: personal well-being, economics, innovation, and governance" (Nasar et al. 1, 2021, p.4).

Both indexes utilize different indicators for determining the level of 'global' for cities; nonetheless, three central components seem to be shared among both data sources: economy, welfare, and governability. The economic dimension evaluates wealth in terms of investment and material aspects. Within these dimensions, the leading cities in terms of the economy between both indexes are predominantly Global-Northern metropolises such as London, New York, and Tokyo. This accentuates the predominant supremacy of developed nations' economies over developing economies.

The assessment of the economic nexus within the indexes does not consider aspects such as the global history of development. This concept is related to the historical antecedent of developed nations in terms of the industrialization gained during the exploitation of the colonial period by developed nations. In other words, these cities have profited from the inherited post-colonial

legacy in the form of being hubs of production. As a byproduct of the colonial institutionalization during the colonial era, developing cities have been forced to compete against developed cities with unstable economies and a severe lack of opportunities.

Moreover, Acemoğlu & Robinson (2017) explain that these institutions left from the colonial period are the prime causes for the modern inconveniences that developing nations economies face today, which as a consequence “strip the vast mass of the population of incentives or opportunities, [which are] associated with poverty. It is also not a coincidence that such African societies are today as unequal as Latin American countries” (Acemoğlu & Robinson, 2017) in comparison to their European and North American counterparts. Hence, there is a significant disparity in terms of the index’s ranking in terms of economic wealth. The indexes reveal cities belonging to colonial metropolises at the top and cities belonging to previous colonies at the bottom of the list.

Welfare and governability, similar to the economic factor, are influenced by the colonial past and are often overlooked when addressing the status of ‘global.’ Racial capitalism and neoliberal urbanization have predominantly impacted cities in the Global South, preventing them from competing on an equal footing with the Global Northern metropolises. Moreover, in terms of welfare, the racial motives intertwined with capitalism have affected post-colonial cities by not “rendering all labor, resources, and markets across the world identical, but by precisely seizing upon colonial divisions, identifying particular regions for production and others for neglect, certain populations for exploitation and still others for disposal” (Danewid, 2020, p.291). Thus, the economic and welfare aspects intertwined with the colonial past have created an uneven playing field for cities, significantly disadvantaging those primarily located in the Global South.

Furthermore, in terms of governability, another crucial factor in the indexes to identify ‘global cities,’ there is a congruent alliance between racial capitalism and neoliberal urbanization. This alliance manifests in strategies for cities to become more ‘global,’ relying on “racialized policies and practices designed to ‘clean up the streets’ through revitalization programs and plans to displace existing inhabitants, who are cast as deviant, criminal, violent, and out of place” (Danewid, 2020, p.291). This, in turn, produces a racial structuring within ‘global cities.’ For instance, London, a leading city in both indexes, has maximized its power output according to the indexes, making it a leading global city.

An increasing problem remains within the city regarding racial structuring. Khan & Elahi (2017) elaborate on this notion by explaining that “although London is indeed a relatively open and global city, this does not mean that black and minority ethnic people experience equal opportunities or outcomes” (Khan & Elahi, 2016, p.5). Therefore, it questions whether the evaluation of the indexes in defining cities as ‘global’ should be replicated and proposed as a standard for all cities to achieve.

These three significant factors that both indexes consider essential for cities to become ‘global’ are remnants of the colonial legacy, and they inadvertently perpetuate the hierarchical system of oppression of yore. The standards from which cities are to become ‘global’ reveal a colonial bias

and explain how the standards of 'global cities' are skewed in favor of the once metropolises of the colonial empires.

Conditioning of the Normative Behavior of City Dwellers

The conditioning of normative behavior under the gaze of prime cities and the global north concerning the citizenry at these global hubs; prevents easy policy diffusion and convergence, creating a new stopping block for the spread and interchange of ideas between 'global cities' and emerging cities. Within the conditioning, the blocks that enable this normative change may be understood as the conformity, obedience, and compliance perceived by the urban dwellers in these metropolises.

Conformity as explained by Colombo & Lisciandra, 2024 can be linked to the geometry of the urban dwell center and what constitutes the good moral behavior of the citizenry. Furthermore, "cities can exemplify conformality by embodying some desired moral, as well as social and political order. In this sense, cities themselves exemplify compliance with normative principles by being designed in a way that reflects such principles" (Colombo & Lisciandra, 2024, p.4). It is therefore that ordered polity within the urban centers may foster an internalization of its inhabitants to adapt and adopt certain norms reinforcing socio-political norms described in a colonial system. Such norms could be considered resource competition and inequality to certain ethnic, social, economic, or political minorities.

Obedience is interpreted as a result of a new form of compliance and conformity within these urban centers. Byung Chul Han (2022, p.10) explains that societal behavior has defaulted into a surveillance system in which everyone is watching over everyone making oddities against conformity or in the understanding of constructivism; the agent primacy on the structure a feeble attempt to change the normative behavior. Furthermore, neoliberal institutional models utilize emotions within the mechanism of psych politics, as a form of capital that makes the individual whole (Chul Han, 2022, p. 48). Therefore, utilizing the psyche as a tool for obedience within societal normative behavior. Additionally, the usage of Big Data has become integral to the unconscious, and as a tool of obedience; the replication of the individual in terms of the self- quantity and self-surveilling is interpreted as an internal all-encompassing understanding. Causing the replication of the normative and moral standard within cities to be acceptable and it transcends into the metaphysical. An example of the latter is the role of social media in permutating what is morally accepted within society, making disobedience highly unfavorable and almost self-harming.

Compliance within the paradigm of normative behavior acceptable within these metropolises is understood therefore as a combination of the conformity and obedience mechanisms enacted within these urban hubs. Compliance at the societal level can be observed in qualitative aspects such as city laws and neighborhood laws. For example, women-only carts in the case of Tokyo or the cultural etiquette expected in places such as Osaka. The quantitative aspects of compliance can

be measured as it is within the aforementioned indexes with a positivist mindset. For example, they assess the quantity of embassies located within a city or the quantity of transnational companies situated in the city, It is the compliance of the system within these global cities that prolongs the inability to change and hence making those cities that do not fit the societal expectation so these metropolises unavailable to be named one. Permutating, therefore, the discourse of colonialism of the 'civilized cities' and the 'uncivilized cities'.

A Marxist Approach to Global Cities

Marx and Engels in their communist manifesto expressed the clash that exists between the 'proletariat' and the 'bourgeoisie'. This clash today is expressed within the gaze of the 'Global North' and 'Global South'. As shown within the data set of the World Bank of Income and Region distribution (2024), in which the high income is located within the 'Global North' meanwhile a discrepancy in terms of GINI per capita remains in the 'Global South'. Correlating this economic discrepancy with global cities, it can be understood in the accessibility to capital and hence the ability to be resilient against transboundary issues.

Most of these global cities have a vast amount of income to mitigate the adverse effects of climate change. Curtis and Acuto (2018) remark on the ability of cities to combat climate change by arguing that "cities have offered the possibility of an emergent political assemblage that can offer forms of governance that can match the scale and complexity of global challenges" (p.3). It is therefore not abnormal to see examples of thriving global cities such as Stockholm with its geothermically heating system or Tokyo's great barrier to mitigate the impact of the rising sea level.

Ribeiro & Gonçalves (2019 as cited in Holling (1973, p.17) explain that this ability of cities to endure transboundary and anthropogenic challenges can be understood as the phenomenon of "resilience [which] determines the persistence of relationships within a system and is a measure of the ability of these systems to absorb changes of state variables, driving variables, and parameters, and persist. In this definition, resilience is the property of the system, and persistence or probability of extinction is the result." Therefore, city resiliency can be understood as the ability of a city to persist and resist change brought by these transnational challenges.

City resiliency is directly correlated to the ability to amass resources. The inability of emerging cities to amass these resources accentuates the inability to evolve and fit the criteria of a global city under the gaze of the aforementioned indexes. Additionally, this discrepancy in resource allocation exacerbates and catalyzes the speed and magnitude in which these transboundary and anthropogenic challenges affect the quotidian of the citizens of these 'emerging cities'. For instance, in the effect of the rise of the sea level, for comparison, Tarawa would be affected disproportionately by this phenomenon than a city like Tokyo; due to the inability of the former to procure the capital to build a great sea barrier. This is further evidenced in the master's dissertation of Garnier (2022) in which as a conclusion it was found that a "second rivaling hypothesis arising from [the] study's

findings is that cities located within the global north have more opportunities to attenuate sea level rise than global south cities. This can be attributed to inequality in economic resources, economic growth, demographics, lack of investment and partners, development and sustainable capabilities, and the deep-rooted societal and economic problems within intra-generations” (p.23).

It is therefore until the breach in terms of resource allocation is solved, the city resiliency that permits these cities to keep contending and host a high number of urban dwellers will exacerbate the distinction between a ‘global city’ and an emerging city’. By solving this discrepancy an easier intercommunication and exchange of ideas could be achieved, bringing variety and innovation to the realm of global cities.

Conclusion

The status of ‘global cities’ correlates with good standings in terms of welfare, economy, and governance at the global level. Nonetheless, this research has demonstrated that these factors are deeply embedded in the colonial past, creating an alienation between the Northern Global cities and the Global Southern ones. Moreover, cities considered ‘global’ set a standard and precedent that aspiring cities must follow to join the fellowship. The emulation of these cities may perpetuate the ongoing colonial legacy that has impacted and affected many lives. Furthermore, the conditioning of global citizenry in terms of normative behavior found within these metropolises, through the application of conformity, obedience, and compliance, creates a new challenge for policy diffusion and convergence. Therefore, it is imperative to emancipate from this colonial heritage and rethink what ‘global cities’ are and what their thriving force should aspire to be.

With the projection of human migration increasing towards urban spaces (cities), the future and current ‘global cities’ must emancipate themselves from the colonial legacy. Furthermore, the discrepancy in resource allocation from a financial and economic dimension must be addressed to foster a break from the delineated division of the ‘Global North’ and the ‘Global South’. Moreover, the idea of a ‘global city’ should not be relevant only to the International Relations discipline. However, it should be prioritized through an interdisciplinary point of view to ensure that these future and current hubs of human networking will become more inclusive, progressive, innovative, and equal. Tucker (2018) elaborates on this by stating that scholars must “set out visions of how the coloniality of IR—the reproduction of colonial patterns of racial domination, hierarchization, and marginalization in the discipline—might be overcome.” (Tucker,2018, p.215). Therefore, a call for further research through other disciplines’ points of view on the topic of this paper is vital; this is to guarantee an effective and collective solution to the problem found within cities.

References

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2017, January 30). The economic impact of colonialism. VOX, CEPR Policy Portal. Retrieved December 20, 2024, from <https://voxeu.org/article/economic-impact-colonialism>
- Boschken, H. L. (2008). A Multiple-perspectives Construct of the American Global City. *Urban Studies*, 45(1), 3–28. <http://www.jstor.org/stable/43198367>
- Chul Han, B. (2022). *Psico-Política* (A. Berges, Trans.; 2 edición). Herder.
- Colombo, M., & Lisciandra, C. (2024). Norms and the City. *Transactions of the Association of European Schools of Planning*, 8(1). <https://doi.org/10.24306/TrAESOP.2024.01.001>
- Curtis, S., & Acuto, M. (2018). The Foreign Policy of Cities. *The RUSI Journal*, 163(6), 8–17. <https://doi.org/10.1080/03071847.2018.1562014>
- Danewid, I. (2020). The fire this time: Grenfell, racial capitalism and the urbanisation of empire. *European Journal of International Relations*, 26(1), 289–313. <https://doi.org/10.1177/1354066119858388>
- Garnier, D. (2022) *City-led Science Diplomacy and Delta Cities: The Thwart of a Modern Tale of a New Atlantis* [Master's Dissertation]. Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
- Khan, O., & Elahi, F. (2016, March). *Ethnic Inequalities in London*. Runnymede. <https://www.runnymedetrust.org/uploads/images/London%20Inequality%20report%20v3.pdf>
- Lake, D. A. (2003). The New Sovereignty in International Relations. *International Studies Review*, 5(3), 303–323. <http://www.jstor.org/stable/3186572>
- Mori Foundation. (2021). *Global Power City Index 2021*. The Mori Memorial Foundation. Recovered 2021, de <https://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml>
- Nair, S. (2018, August 6). Introducing Postcolonialism in International Relations Theory. E-International Relations. Retrieved February 1, 2022, from <https://www.e-ir.info/2017/12/08/postcolonialism-in-international-relations-theory/#:%7E:text=Postcolonialism%20examines%20how%20societies%2C%20governments,rul e%20are%20now%20long%20gone.>
- Nasar, A., Lohmeyer, R., Mendoza Pena, A., Hales, M., al Habr, A., & Buckstaff, B. (2021). *Global Cities: Divergent prospects and new imperatives in the global recovery*. Kearney.Com. Retrieved December 20, 2024, from <https://www. Kearney.com/global-cities/2021>
- Ribeiro, P. J. G., & Gonçalves, L. a. P. J. (2019). Urban resilience: A conceptual framework. *Sustainable Cities and Society*, 50, 101625. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101625>
- Tucker, K. (2018). Unraveling Coloniality in International Relations: Knowledge, Relationality, and Strategies for Engagement. *International Political Sociology*, 12(3), 215–232. <https://doi.org/10.1093/ips/oly005>
- United Nations: Department of Economic and Social Affairs. (2018, May 16). *68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN | UN DESA | United Nations Department of Economic and Social Affairs*. United Nations. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html>
- World Bank (n.d.). The World by Income and Region. Retrieved December 20, 2024 from <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html>

ESSAY

The Fintech Revolution: Why the Predictions Have (Not) Come True

La revolución fintech: Por qué las predicciones (no) se han hecho realidad

Jeroen Haans ¹

How to cite:

Haans, J.A.G. (2025). The Fintech Revolution: Why the Predictions Have (Not) Come True. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 223-230. Doi: 10.63058/des.v19i1.31

Submission received: 21 May 2024. **Accepted:** 5 October 2024.

Abstract

Fintechs in the Netherlands appear unable to compete on fundamental grounds with major banks such as ABN AMRO, ING Bank and Rabobank. By means of interviews with representatives of fintechs, policymakers, supervisors and academics, research was conducted into the extent to which the predicted fintech revolution has failed, which obstacles fintechs experience and whether the introduction of a CBDC can stimulate the fintech revolution. Banks may not have been outcompeted by fintechs, but financial services have indeed been fundamentally changed by the application of digital technologies. Fintechs appear to face five obstacles in their competition with large banks. Depending on design choices, the introduction of a CBDC could reduce the dependency relationship of fintechs on banks and promote diversity in the monetary-financial system.

Keywords: Fintech, banks, Netherlands, CBDC, digital technologies, financial services, competition

Resumen

Las fintechs de los Países Bajos parecen incapaces de competir por razones fundamentales con grandes bancos como ABN AMRO, ING Bank y Rabobank. Mediante entrevistas con

¹ Jeroen Haans is a Lecturer and Researcher at The Hague University of Applied Sciences (The Netherlands) and at the Latin American University of Science and Technology (Costa Rica). ORCID: 0009-0003-9312-5864. Email: jaghaans@hotmail.com.

representantes de fintechs, responsables políticos, supervisores y académicos, se investigó hasta qué punto ha fracasado la revolución fintech pronosticada, qué obstáculos experimentan las fintechs y si la introducción de una CBDC puede estimular la revolución fintech. Puede que las fintech no hayan superado a los bancos en competencia, pero los servicios financieros sí se han visto fundamentalmente modificados por la aplicación de las tecnologías digitales. Las fintech parecen enfrentarse a cinco obstáculos en su competencia con los grandes bancos. Dependiendo de las opciones de diseño, la introducción de un CBDC podría reducir la relación de dependencia de las fintech respecto a los bancos y promover la diversidad en el sistema monetario-financiero.

Palabras clave: Fintech, bancos, Países Bajos, CBDC, tecnologías digitales, servicios financieros, competencia

Introduction

For decades, a global fintech revolution has been predicted in which established banks will be replaced by financial technology (fintech) companies (Boyd & Gertler, 1995) (McMillan, 2014) (Hernaes, 2017). Fintechs would make better use of (the latest) digital technologies and, through their innovative strength and greater agility, would be better able to respond to customer demand. The functions of banks would be taken over by specialist fintechs. That was and still is often the prediction.

In the Netherlands, in the decade following the financial crisis of 2008-9, there have often been calls for a more diverse financial landscape (WRR 2016, 2019) (Sanders & Zhang, 2018). These calls show that the fintech revolution has not (yet) taken place within the Dutch financial sector. In 2021, the three major banks (Rabobank, ING Bank and ABN AMRO) still have an oligopoly position in various areas, particularly in current and savings accounts and lending to SMEs and consumers. The concentration of market share calculated on the basis of the size of the balance sheet has also increased in recent decades for the ‘big three’ (WRR, 2019). Entrants appear to face various obstacles.

In addition, there have been various initiatives in the Netherlands over the past decade that aimed to achieve a more diverse landscape by implementing a safe alternative. Three suggested variants are a private deposit bank (Buitink & Van der Linde, 2019), a public deposit bank (Alkaya, 2018) and ‘central bank digital currencies’ (CBDCs) (DNB 2020). In all these variants, citizens and companies gain direct or indirect access to safe public digital money. Various institutes have stated objectives for this new form of money. For example, the WRR (2019) emphasises the macro-economic (system) importance of a “safe alternative”:

The fact that there is a real alternative will have a disciplining effect on the existing banks. It will force banks to finance themselves more responsibly, with more equity (capital) and debt with a long

term. The creation of money and debt by commercial banks will also be better limited in this way. DNB (2020), on the other hand, considers the preservation of public money and having a backup for private bank money to be the most important (see objectives pyramid in appendix 3). Subsequently, 'diversity and privacy in the payment market' are mentioned as objectives. DNB's focus is therefore on payments and the WRR's (2019) focus on macroeconomic (system) effects. In the coming years, experiments will be carried out, DNB has announced (Business Insider, 2020), and crucial design choices will have to be made. The choices about, for example, the maximum amount (a cap) will largely determine the scope of CBDC.

This article examines three questions: 1) To what extent has the fintech revolution failed? 2) What are the causes of the (partial) failure? and 3) Could a system change contribute to (the success of) the revolution in order to create a more diverse monetary-financial landscape? The structure of this article is as follows: section 2 explains the method, section 3 presents the results, and section 4 draws conclusions and provides recommendations.

Methods

In the period May-September 2020, nine experts were interviewed in two rounds (see appendix 1 for the interview overview). In the first round, five experts who work with or for a fintech company were interviewed about the mission/vision of their organization, obstacles experienced, the relationship with banks, legislation and regulations, the predicted revolution, dependency on other players and the possibilities of a structural change within the monetary-financial system (see appendix 2 for the interview schedule). The focus was on CBDC because the other proposals for the establishment of a deposit bank did not make it in the Netherlands. It turned out to be impossible to establish a private deposit bank within the current legislation and regulations and in June 2020 the House of Representatives narrowly rejected a proposal for a public deposit bank, 71 in favor, 79 against (Tweede Kamer, 2020). In order to gain a broader view, four experts who are indirectly involved with the fintech sector were interviewed in the second round: policymakers, supervisors and academics. These experts were asked about the developments within the sector, the predicted revolution and the possible impact of a system change. The interviews were held digitally and audio recordings were made. The recordings were then fully transcribed. The interviews were then divided into thematic categories in order to be able to analyse the text.

All interviewees have indicated that they are participating in the research in a personal capacity. The results therefore consist solely of personal positions, analyses and recommendations. The individual opinion is not representative of the vision of the organisation to which he/she is affiliated.

Results

The failed revolution

In order to answer the question of whether the fintech revolution has failed, a distinction must be made between financial services and financial service providers. The predicted revolution concerns the service providers. The prediction was and still is that emerging relatively new companies will eventually outcompete the established (large) banks. The interviewees stated that in practice fintechs mainly specialise in ‘front-end’ user convenience and payment services. Developments in this area are currently moving very quickly. All interviewees felt that it is going too far to state that the revolution has failed in its entirety. Much progress has been made in the area of financial services. Examples include digital services such as applications (e.g. Tikkie) that focus on user convenience. Interviewee 9 summarised it as follows: “There is more of an evolution than a revolution.”

In short, there is broad consensus that fintechs play a complementary role and not a fundamentally disruptive role. According to interviewees, the fundamentally disruptive role lies more in the corner of BigTech. These companies have the capacity to take disruptive steps regardless of the activities that fintechs develop. They can develop their own system outside the current frameworks.

Obstacles faced by fintechs

Interviewees mentioned several obstacles faced by fintechs. The (interdependent) obstacles can be divided into five categories: 1) regulation and protection; 2) small market with well-established players; 3) lack of tradition; 4) exit strategy, and; 5) market power.

Rules and protection

According to interviewees, the complexity, volume and continuous innovation of financial legislation and regulations offer established institutions an unintended form of protection and makes it difficult for fintechs to start and scale up.

Interviewees noted that major banks have invested heavily in recent years in complying with the rules within the framework of the ‘Money Laundering and Terrorism Financing (Prevention) Act (Wwft)’. What distinguishes major banks from fintechs is that they have great financial clout to meet legal requirements, have experience and have access to legal guarantees. Fintechs, on the other hand, have less clout, less experience and often do not have access to legal guarantees. The relative costs they incur (the costs per customer) are therefore generally higher. Interviewee 5 concluded that there is unfair competition and mentioned the corona emergency aid as an example: “There is an uneven playing field. Banks have guarantees from the state when they grant credit, BMKB guarantee for SMEs. Fintechs cannot claim that scheme because they are not a bank, while in some cases they finance the same companies”. According to four interviewees, this could be due to the influence of lobbyists. For example, interviewee 3 stated: “As with most laws, they are developed from a certain intellectual ideology and lobby, so they are subservient in that way. Power is always defended.” In addition, the position of banks is strengthened by the deposit guarantee scheme to

which all institutions with a banking license are affiliated. This mandatory insurance for private companies is intended to prevent bank runs and ensures that bank financing is insured. Fintechs without a banking license cannot rely on this insurance and are therefore seen as riskier.

Even after the 2008-9 crisis, “more legislation and regulation has been the political preference” (interviewee 6). In other words, politicians have chosen to stabilize the current system with more and stricter legislation and regulation rather than make major structural changes.

Netherlands: small market, well-established players

A second obstacle is the combination of a relatively small Dutch market and the efficient digital banking payment system that was co-developed by the major banks. With a population of 17 million, fintechs will soon have to look beyond the national borders to be able to grow substantially, according to the interviewees. In addition, the implementation of the payment system iDeal in 2005 has strengthened the position of banks in the field of payments. Due to the success of iDeal, it has become more difficult for new players to gain a foothold. The relatively small population and the mature payment infrastructure are therefore obstacles for Dutch fintechs.

Fintechs and their lack of tradition

The big banks rely on their name recognition and tradition for a significant part of their new recruits. Fintechs generally do not have either. Interviewee 2 put it this way: “Trust, many fintechs do not have that yet and there are two reasons for that. First, they have no history and track record. And second, they are not understood by many people”. Research confirms that most people stay with the same bank their entire lives. For example, 90 percent of young customers stay with ING their entire lives (Dormaar, 2019). Banks try to bind young customers to them by means of special offers and children’s accounts. Tradition is important because many parents choose the bank where they also do their banking.

Exit strategy

In recent years, the three major banks have made money available to invest in new financial-technological innovations. As a result, many owners and shareholders of fintechs with disruptive potential are confronted with the possibility of an early takeover. Interviewee 4 explained it as follows: “A large proportion of fintechs start with a noble goal, but they soon focus on making a good exit.” For fintechs, being taken over by a larger organization has two advantages: the organization gains access to the professional network, financing and knowledge and expertise (including legislation and regulations) that are already present at the purchasing party, and in addition, in many cases it is financially attractive for the owners/shareholders of the fintech to be taken over.

Market power

All interviewees indicated that the three major banks use their market power to protect their

profitable business model.

Interviewee 1 gave the following example: “I strongly suspect that banks will use the billions on their balance sheets to exert influence, including on policy”. Research confirms that Dutch banks spend several million euros annually on interest groups and lobby groups. Over the years, this has led to a distortion in which banks have much shorter lines of communication with policymakers than, for example, citizens or fintech companies (Stichele, 2016).

Another more direct form of market power is ‘mergers and acquisitions’ (M&A). Potentially promising fintechs are acquired at a relatively early stage by established players, as explained in the previous point. An example is ING Ventures. With 190 active partnerships between 2015 and 2019, this investment fund is the most active fintech fund in Europe (Banken, 2019). ABN AMRO and Rabobank also invest in fintechs. The amount of the ABN AMRO Ventures investment fund doubled in 2019 to 100 million euros per year (Banken, 2019). Rabo Frontier Ventures has 60 million euros available annually (Rabobank, n.d.). The figures show that the ‘big three’ use their market power to appropriate promising financial innovations. This is a win-win situation: banks gain access to the latest technologies, investments can pay off and the ‘competition’ is eliminated. “Join them if you can’t beat them” in the words of interviewee 3.

Structural change in the system

Fintechs have a one-sided dependency relationship with banks. As a rule, they need banks for a bank account and often for capital. Banks, on the other hand, do not need fintechs. Interviewee 7 states: “ Does a fintech have a bank account? Yes, then banks are still important.”

According to four interviewees, the development of CBDC could alleviate the dependency on commercial banks to some extent. The interviews in the first round showed that CBDC and the possible system-wide effect do not currently play a major role in business operations. More clarity will first have to be provided before it can be stated that fintech can benefit from CBDC, according to interviewee 2.

The interviewees in the first round had rarely considered the impact of the introduction of a CBDC on their business(operations) and the system. The interviewees in the second round all had a vision on this. Two of them emphasized the importance of public money and a public digital payment system. The objectives they mentioned were in line with those of DNB (2020). Two others focused mainly on the possibilities that a CBDC offers to improve the entire monetary-financial system, much more in line with the recommendations of the WRR (2019).

Interviewee 6 indicates that stimulating innovation is not the only reason to experiment with CBDC. An additional reason is that a public alternative undermines the market power of commercial banks, as consumers then have a choice regarding digitally holding capital. This is in line with the aforementioned recommendations of the WRR (2019), which speaks of a disciplinary effect when

an actual alternative becomes available.

With the planned implementation of CBDC, the position/opportunities for fintechs could therefore change for the better according to interviewees. An important question is whether a CBDC is used to improve the payment system or to improve the entire system. According to some interviewees, a CBDC makes it possible to liberalize the banking system. For example, interviewee 6 proposed phasing out the deposit guarantee scheme (DGS) so that commercial banks can no longer fall back on collective insurance. This would result in more market forces within the monetary-financial system and fewer government guarantees.

Conclusions

Based on the interviews, three conclusions can be drawn. First, stating that the fintech revolution has failed is too simplistic because a distinction needs to be made between financial service providers and service provision. In the service provider sector, there is an oligopoly with three major players in various areas, while in the service domain, many new services have become available for customers who use digital technologies. Second, there are at least five interdependent obstacles that hinder the growth potential of Dutch fintechs: 1) regulations and protection; 2) small market with well-established players; 3) lack of tradition; 4) exit strategy, and; 5) market power. Third, CBDC has the potential to strengthen the position of fintechs compared to large banks. When making design choices, it is important to take into account the widely shared desire to create a more diverse monetary-financial landscape. There is also a fundamental difference between diversity in payment instruments and diversity in the system as a whole. Some interviewees stated, in line with the WRR (2019), that a CBDC could lead to an improvement of the entire monetary-financial system; others, in line with DNB (2020), focused on payments.

Based on the conclusions of this exploratory study, the following recommendations can be made:

- 1) In designing CBDC, fintech will have to be approached in its own 'individual' way. If more diversity at system level is an objective, then the limit on CBDC should be high.
- 2) The objectives and design choices of a CBDC are subjects that concern political decision-making. It is so much about monetary matters but mainly about the (market) organization of the system.
- 3) Further research could map out in which areas fintech companies will use a CBDC and how high the limit should be to stimulate competition.

References

- Alkaya, M. (2018, December 12). *Initiative note by member Alkaya: 100% safe saving and paying*. Retrieved from Tweedekamer.nl: <https://www.tweedekamer.nl/kamerstuk/detail?id=2018Z23562&did=2018D59390>
- Banks. (2019, November 20). *ABN AMRO doubles fund for investments in fintech*. Retrieved from Banken.nl: <https://www.banken.nl/nieuws/22028/abn-amro-verdubbelt-fonds-voor-investeringen-in-fintech>
- Banks. (2019, November 28). *ING most active European investor in fintech in 2019*. Retrieved from Banken: <https://www.banken.nl/nieuws/22048/ing-meest-actieve-europese-investerder-in-fintech-in-2019>
- Boyd, J. H., & Gertler, M. (1995). *Are banks dead? Or are the reports greatly exaggerated?* Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Buitink, P., & Van der Linde, R. (2019, January 17). The economist in charge of bank accounts without credit risk. *ESB new money*, pp. 21-23.
- Business Insider, N. (2020, April 21). *De Nederlandsche Bank wants to offer a digital payment account as a 'pioneer' - and thus also offer an alternative to initiatives such as Facebook's Libra*. Retrieved from Business Insider: <https://www.businessinsider.nl/dnb-payment-account-centrale-bank-digitaal-geld-cryptomunten/>
- DNB. (2020). *Digital central bank currency: objectives, preconditions and design choices*. Amsterdam: De Nederlandsche Bank nv
- Dormaar, F. (2019, January 9). *Banks compete for your child: young inside is often a customer for life*. Retrieved from RTL Nieuws: <https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/4544831/banken-concurrentie-kinderen-betaalrekening>
- Hernaes, C. (2017, September 11). *hernaes.com*. Retrieved from Banking is necessary, banks are not: <https://hernaes.com/2017/09/11/banking-is-necessary-banks-are-not/>
- McMillan, J. (2014). *The End of banking; money, credit, and the digital revolution*. Zurich: Zero/One economics GMBH.
- Rabobank. (n.d.). *FinTech & Rabobank*. Retrieved from Rabobank: <https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/innovation/money2020/rabobank-and-fintech.html>
- Sanders, M., & Zhang, L. (2018, October 11). Diversity in the financial sector is of great importance. *ESB review*, pp. 20-24.
- SparePencil. (nd). *What is the history of iDEAL? Who invented it and more...*. Retrieved from SparePencil: <https://sparepencil.com/wat-is-de-geschiedenis-van-ideal-wie-heeft-het-thought-of-and-more/>
- Stichele, vd (2016). *A structural problem in the shadows: the lobbying of Dutch banks at the Ministry of Finance*. Amsterdam: SOMO.
- House of Representatives, d. S. (2020, June 30). *Motions submitted during the policy document consultation on the Future of the monetary system*. Retrieved from House of Representatives of the States General: <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P10483>
- WRR. (2019). *Money and Debt, the public role of banks*. The Hague: Scientific Council for Government Policy.

ESSAY

Global Suppliers and their effect on the global supply chain for food

Los proveedores mundiales y su efecto en la cadena mundial de suministro de alimentos

Abigail Orozco Bolaños,¹ Hans Johann Burckhardt²
& Léonie Menard³

How to cite:

Orozco Bolaños, A., Burckhardt H.J., Menard, L. (2025). Global Suppliers and their effect on the global supply chain for food. *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 231-243. Doi: 10.63058/des.v19i1.319

Submission received: 20 December 2024. **Accepted:** 6 February 2025.

Abstract

This conceptual article examines the effects of global suppliers on the global food supply chain, emphasizing the impact of globalization, COVID-19, digitization, sustainability, and geopolitical events. Drawing on 15 academic sources, the analysis is structured around six key research questions that explore the interdependence, disruptions, technological advances, and complexities associated with food supply chains. The findings highlight the ambivalent nature of globalization, which enhances efficiency and interconnectivity while increasing vulnerability to shocks. This review also highlights the role of pandemics in exposing systemic inequalities and inefficiencies, making the case for resilience and adaptability. The environmental impact of global food supply chains and trade-offs within sustainability are analyzed. In addition, technological innovations, particularly blockchain and IoT, are identified as transformative tools for improving traceability and transparency in the food supply chain industry. This review concludes by emphasizing the urgent need for strategic reforms to ensure stable, safe, and sustainable global food supply systems.

Keywords: food supply chains, globalization, sustainability, digitization, impact of COVID-

Resumen

¹ Abigail Orozco Bolaños is a student of International Relations at the Latin American University of Science and Technology. ORCID: 0009-0002-4789-3240. Email: aorocob505@ulacit.ed.cr.

² Hans Johann Burckhardt is a student of International Business at the Karlshochschule International University. ORCID: 0009-0002-4789-3240. Email: johann-burckhardt@outlook.com.

³ Léonie Menard is a student of International Business at Ipac Bachelor Factory in France and at the Latin American University of Science and Technology. ORCID: 0009-0009-7656-1668. Email: lmenardx238@ulacit.ed.cr.

Este artículo conceptual examina los efectos de los proveedores globales en la cadena de suministro global de alimentos, enfatizando el impacto de la globalización, el COVID-19, la digitalización, la sostenibilidad y los eventos geopolíticos. Basándose en 15 fuentes académicas, el análisis se estructura en torno a seis preguntas clave de investigación que exploran la interdependencia, las interrupciones, los avances tecnológicos y las complejidades relacionadas con las cadenas de suministro de alimentos. Los hallazgos destacan la naturaleza ambivalente de la globalización, que mejora la eficiencia y la interconectividad al tiempo que aumenta la vulnerabilidad ante las crisis. Esta revisión también subraya el papel de la pandemia al exponer desigualdades e ineficiencias sistémicas, abogando por la resiliencia y la adaptabilidad. Se analiza el impacto ambiental de las cadenas de suministro de alimentos globales y los compromisos dentro de la sostenibilidad. Además, se identifican innovaciones tecnológicas, particularmente blockchain e IoT, como herramientas transformadoras para mejorar la trazabilidad y la transparencia en la industria de la cadena de suministro de alimentos. Esta revisión concluye enfatizando la necesidad urgente de reformas estratégicas para garantizar sistemas de suministro de alimentos globales estables, seguros y sostenibles.

Palabras clave: cadenas de suministros de alimentos, globalización, sostenibilidad, digitalización, impacto del COVID-19.

Introduction

This literature review focuses on global suppliers and their effect on the global food supply chain. It is strongly connected to the topic of Globalism and Agri-Food supply chains, which is increasingly important due to the rise of geopolitical disruptions and other threats to international agri-food supply chains. To assess this topic, the research has been divided into six key research questions, each focusing on a specific dimension and thus contributing to the overall understanding of the subject. These research questions are as follows:

1. How does globalization increase the interdependence of food supply chains?
2. How did COVID-19 impact the food supply chain?
3. What are some challenges in balancing food supply chain efficiency with sustainability?
4. Has dependence on global suppliers affected food security in vulnerable regions?
5. In the era of digitalization, how has technology impacted in the food supply chain, like Blockchain database for example?
6. What are the environmental impacts of maintaining global food supply chain, such as carbon emission and water consumption?

The research is based on fifteen academic sources comprising 401 pages. This shorter conceptual article summarizes the findings and critical assessment of the bibliography and topic. Articles

have been read, analyzed, and assessed for their contributions and gaps supporting this research. The critical analysis is divided into six research questions and the related articles to maintain the structure and focus of the research.

Critical Analysis

How does globalization increase the interdependence of food supply chains?

The research question “How does globalization increase the interdependence of food supply chains?” aims to analyze the connection between globalization and global food supply chains, focusing on the role of multinational enterprises (MNEs) and their impact on international agri-food supply chains. These MNEs are crucial actors in today’s globalized world, influencing the complexity and interdependency of food supply chains. Geopolitical events, such as the Ukraine-Russia war, further highlight this interdependence.

The article “Globalization in Agriculture and Food: The Role of Multinational Enterprises,” by Maria Scopolla (2021, p. 2-34), discusses the influence of MNEs on international agri-food supply chains. MNEs exemplify the international integration of organizations in food supply chains, holding significant responsibility and power. The article highlights the complexity of these supply chains and the role of MNEs as global actors. However, it has a limited focus on interdependence and lacks a detailed discussion on how globalization increases the interdependence of food supply chains. The sector-specific analysis and the absence of policy implications are notable gaps.

The case study, “Impact of Ukraine War on Global Energy and Food Supply Chains: A Case Study of South Asia,” by Farah Naz and Martin Kear (2022, p. 2-16), examines the effects of the Russia-Ukraine war on international food supply chains, particularly focusing on food security in emerging and developing nations. The study shows how disruptions in international food supply chains highlight the world’s dependence on globalization. However, the article also covers energy, broadening its scope beyond food. It lacks solution strategies and future outlooks on geopolitical events’ impact on global supply chains.

In summary, globalization significantly increases the interdependence of food supply chains by integrating MNEs into the agricultural and food sectors. These MNEs play a crucial role in shaping the economy and society, impacting food security and resource availability in developing countries. The complexity of global supply chains, exemplified by products like bananas and Nutella, highlights the necessity of international trade and the interdependence it creates. These supply chains rely on efficient and cost-effective production methods enabled by globalization, but they also become vulnerable to geopolitical events and crises, which can disrupt the flow of goods and affect global food security. The ongoing Ukraine-Russia war demonstrates how conflicts can severely impact international food supply chains, illustrating the fragility of global food supply chains and the

critical role of globalization in maintaining food security. Sustaining these supply chains is essential, as any disruption can lead to global food shortages, emphasizing the interconnected nature of the world's food systems.

How did COVID-19 impact the food supply chain?

This literature review explores the research question, “How did COVID-19 impact the food supply chain?” by examining existing research. The pandemic caused disruptions in global systems such as healthcare, economics, and supply chains, along with lockdowns and travel restrictions, resulting in food insecurity, rising costs, and shifts in consumer behavior. The pandemic exposed the fragility of traditional supply chain models and highlighted the need for greater resilience and adaptability.

In the book *Beyond Global Food Supply Chains Crisis, Disruption, Regeneration*, the authors Victoria Stead and Melinda Hinkson (2015, p. 19-29, 33-43, 79-88, 93-101, 155-164) discuss the challenges and weaknesses in the global food supply chain due to the pandemic. Key impacts include the vulnerability of food supply chains, border closures, labour shortages, and panic buying. Agriculture gained visibility as agro investors saw it as a profit opportunity, but this approach ignored the basis of food insecurity.

The book highlights the impacts of the pandemic on global food supply chains, exposing their vulnerability and the need for change. However, the focus on Australia may limit the broader global implications.

This article from Michael Omotayo Alabi and Ojelanki Ngwenyama (2023, p. 2-15) discusses the disruptions caused by the pandemic on global food supply chains, focusing on North America. It highlights food shortages, border closures, food wastage, and farm labour shortages, leading to food insecurity. The article emphasizes the need for stronger technology and better management to mitigate future crises. The focus on Canada and the United States provides a global perspective.

In the article by Shilpa Aggarwal et al. (2020, p. 6-8, 8-16) “Did covid-19 market disruptions disrupt food security? Evidence from households in rural Liberia and Malawi,” the authors explore whether COVID-19 market disruptions affected food security in rural areas. The impact was different from the rest of the world, with these rural areas relying on agriculture to mitigate the negative effects. The article highlights the resilience of rural areas due to their dependence on agriculture. However, it presents some gaps, as the findings may not fully apply to other regions.

The authors explore the impact of the COVID-19 pandemic on global food supply chains and food security, offering different perspectives. Alabi and Ngwenyama focus on high-income countries, while Aggarwal et al. focus on rural areas in Africa. The literature highlights the need for transformation and reshaping of global food supply chains for more efficiency, especially during

crises. According to Hinkson and Stead, the vulnerabilities and inequalities in the global food system have been intensified by COVID-19, revealing new possibilities for transformation. 4

What are some challenges in balancing food supply chain efficiency with sustainability?

This research question assesses the challenge of international supply chains in relation to their environmental impact. It examines several factors influencing the degree of sustainability in an environmental context, focusing on how global agri-food supply chains are affected by sustainability efforts and their aftermath.

The academic paper “Environmental Impacts Along Food Supply Chains: Methods, Findings and Evidence Gaps” from Koen Deconinck and Lucinda Toyama (2022, p. 2-17) examines the environmental impact on various stages of the agro-food supply chain. It assesses the impact and emissions related to international trade of agro-food products, and relates the importing country, consumers, and their consumption habits to the environmental impact. The article does not specifically focus on the effectiveness of international food supply chains and lacks current geopolitical events and developments.

The book *Beyond Global Food Supply Chains Crisis, Disruption, Regeneration* by Victoria Stead and Melinda Hinkson (2015, p. 33-43) examines the impact of the COVID-19 pandemic on global food supply chains. The chapter “COVID-19 as a Push for Sustainability” explores the pandemic as a test for the resilience and sustainability of global agri-food supply chains. The book is not sufficiently focused on sustainability and examines the connections and relations of the topics.

The academic review from Gaufang et. al. (2024, p. 1-6, 15-26), “Sustainability in Global AgriFood Supply Chains: Insights from a Comprehensive Literature Review and the ABCDE Framework”, summarizes numerous articles on sustainability in agricultural food production. It assesses the interrelation of international trade and different regions regarding food and agriculture, focusing on the differences between consumer and producer countries and related production efficiency. The review does not focus on supply chains and their specific impact, and it focuses more on research methods and methodologies than on the scientific topic itself.

Balancing food supply chain efficiency with sustainability presents several challenges. Deconinck and Toyama highlight the environmental impact of different stages of the agro-food supply chain, while Stead and Hinkson discuss the pandemic’s role in testing the resilience and sustainability of these supply chains. Gaufang et al. focus on the interrelation of international trade and regional differences in food production. The literature emphasizes the need for strategic planning, consumer education, and policy interventions to address these challenges and achieve a balance between efficiency and sustainability in global food supply chains.

Has dependence on global suppliers affected food security in vulnerable regions?

Dependence on global suppliers is inevitable. International trade concerns every country, and they cannot produce everything they need independently. This dependence impacts food security, especially in vulnerable regions, which are more exposed to disruptions in the global supply chain. Events like the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict have highlighted these vulnerabilities.

This thesis from Trésor-Éco and Jean-Philippe (2015, p. 1-8) focuses on improving reforestation efforts to combat climate change by optimizing reforestation value chains. It develops decision-making tools and models to improve coordination and planning within the reforestation process, including a seed allocation model and a tool for integrated production and transportation planning.

The thesis addresses key issues in reforestation, enhancing sustainability and operational efficiency. However, it needs to consider application in different regions, financial aspects, and social implications.

The report from the Government of Canada (2024, p. 1-6) analyses Costa Rica's agro-food market, highlighting opportunities for Canadian exporters. Despite favorable conditions, exporters face challenges such as tariffs, import regulations, and competition from U.S. suppliers. The report suggests focusing on niche markets and building local partnerships. The report identifies opportunities but lacks deep analysis of competitive profiles, consumer behavior, and regulatory barriers. It also needs detailed solutions for logistical challenges and strategies for sustainability practices.

The article from the World Economic forum (2022, p. 1-5) discusses the impact of the Ukraine war on global food security, highlighting disruptions in food exports and rising food prices, especially affecting low-income countries. It stresses the importance of global cooperation to stabilize markets and assist vulnerable populations.

The article effectively addresses the food insecurity crisis but could benefit from exploring local agricultural innovations and specific policy actions to stabilize prices and supply chains. The article from Sovini Mondal (2024, p. 1-3) emphasizes the need for sustainable agriculture to achieve global food security. It suggests increasing agricultural resilience through sustainable practices, strengthening local food systems, and international cooperation.

The article argues for systemic change in food systems, highlighting the importance of sustainable practices and local food systems. It calls for investment in agriculture and collaboration among governments, international organizations, and the private sector.

Dependence on global suppliers significantly impacts food security in vulnerable regions, especially

during international crises. Strengthening local and regional production, investing in sustainable agricultural systems, and promoting food self-sufficiency are crucial to reducing vulnerability. The literature highlights the need for strategic planning, consumer education, and policy interventions to address these challenges and ensure food security.

In the era of digitalization, how has technology impacted on the food supply chain, like Blockchain database for example?

In today's digital age, technology has transformed global food supply chains. This literature review explores different methods that have influenced this process, improving security, stability, and identifying gaps. The article "Unleashing the Potential of Digitalization in the Agri-Food Chain for Integrated Food Systems," by Krupitzer, C., & Stein, A. (2023, p. 2-16), examines how technology can transform food supply chains. It focuses on trends in information technology such as AI, machine learning, IoT, cyber-physical systems, cloud computing, and blockchain technology. The article aligns with the researchers' approach, exploring how these technologies can transform global food supply chains. It provides a broad concept and contextualization of current trends and technologies in the food industry.

The paper "The Rise of Blockchain Technology in Agriculture and Food Supply Chains" by Kamilaris, A., Fonts, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2019, p. 1-15, 17-27), explores the impact and implementation of blockchain technology in food supply chains. It highlights blockchain's ability to increase traceability, transparency, and efficiency, while also addressing challenges such as uneven adoption, high costs, and governance issues. The article is relevant to the research question, exploring the impact of blockchain technology on food supply chains. It highlights the challenges and gaps that prevent widespread implementation, providing valuable insights for the literature review.

The article "Processes, Benefits, and Challenges for Adoption of Blockchain Technologies in Food Supply Chains: A Thematic Analysis" from Si-Chen et. al. (2020, p. 3-9, 11-13, 17-24) focuses on the benefits and challenges of implementing blockchain technology in food supply chains. It highlights blockchain's potential to improve efficiency, traceability, and safety, while also addressing challenges such as integration, costs, and scalability. The article aligns with the literature review, exploring the impact of new technologies on food supply chains. It addresses the gaps and challenges, providing a comprehensive analysis.

The article from Stefanella Stranieri et. al. (2020, p. 2-13, 16- 18) examines three food supply chains that have implemented blockchain technology, highlighting its positive impact on efficiency, quality, security, and trust. It also notes that the benefits vary depending on the chain and expected efficiency. The article is relevant to the literature review, exploring the impact of blockchain technology on food supply chains. It provides case studies that illustrate the benefits and challenges

of implementing blockchain technology.

The literature review demonstrates how digital technologies, particularly blockchain, are reshaping and transforming food supply chains. The articles collectively address the potential and challenges, offering a comprehensive understanding of how to leverage blockchain and other technologies for a more secure, transparent, and efficient food supply chain. Krupitzer and Stein (2023, p. 2-16) focus on broader IT trends, while the other articles provide specific insights into blockchain technology's impact on food supply chains.

What are the environmental impacts of maintaining global food supply chain, such as carbon emission and water consumption?

The thesis from Mahtabalsadat Mousavijad (2023, p. 1-19, 74-86) focuses on improving reforestation efforts to address climate change through better planning and decision-making tools for managing multi-product, multi-site value chains. It aims to optimize the reforestation process by enhancing coordination among stakeholders, improving seed allocation, and integrating production with transportation planning. The research, applied to the Quebec reforestation system, uses models to match seeds with appropriate sites, balance inventories, and improve efficiency. This thesis offers valuable insights into optimizing reforestation systems. It addresses challenges in large-scale reforestation by ensuring the right seeds are planted in the right areas at the right time. The framework and collaborative planning approach could improve cooperation between stakeholders. The decision-making tool for integrated production and transportation planning considers resource constraints and environmental sustainability. The study's focus on Quebec provides a real-world application, showing how changes in planning can improve both short-term and long-term sustainability.

While comprehensive, the thesis could be expanded to consider other regions with different challenges. It could also delve deeper into financial aspects and social factors, such as local community involvement. Incorporating a broader social perspective could make the models more universally applicable and ensure the benefits of reforestation reach all segments of society.

This thesis significantly contributes to reforestation planning by introducing models that improve seed allocation, operational planning, and sustainability. It provides practical tools for reforestation efforts, particularly in regions like Quebec, and helps stakeholders optimize their processes. Future work could expand the scope to include different regions, financial analyses, and social considerations to further strengthen the applicability and effectiveness of the proposed solutions.

Conclusion

To conclude this review about global suppliers and their effect on global agri-supply chains, one must consider the numerous aspects and facets connected to this topic. Another important point is the interconnection between the topics seen throughout the research and review.

Globalization significantly affects the interdependence of food supply chains by integrating multinational enterprises (MNEs) into the agricultural and food sectors. MNEs influence food security and resource availability in developing countries, highlighting the complexity and necessity of international supply chains. The efficiency and cost-effectiveness brought by globalization often come at the expense of resilience and sustainability.

Geopolitical events further underscore the interdependence of food supply chains. The Ukraine-Russia war, for instance, has disrupted global food supply chains, particularly affecting countries dependent on imports from these regions. The war's impact, combined with the ongoing challenges posed by the COVID-19 pandemic, demonstrates the need for strategic planning and resilience to ensure food security in an interconnected world.

The COVID-19 pandemic exposed and exacerbated the vulnerabilities and inequalities inherent in global food supply chains, highlighting the fragile balance between availability, distribution, and accessibility of food. Developing countries faced the most severe impacts due to border closures, transportation restrictions, and labor shortages, which compounded existing food insecurity. However, the pandemic also illuminated disparities in food systems, as some agricultural regions, particularly in Africa, were less affected due to their subsistence farming practices but remained vulnerable.

These insights underscore the urgent need for transformative changes in global food systems, focusing on building resilience, addressing inequalities, and reducing reliance on fragile supply chains. Strengthening local food production, fostering sustainable agricultural practices, and ensuring equitable access to resources are critical steps toward a more secure and inclusive global food system.

Another topic linked to global agri-food supply chains and MNEs is sustainability. Balancing food supply chain efficiency with sustainability presents several challenges. One major challenge is considering the environmental performance of both producing and consuming countries. Factors such as consumer awareness, sustainability labeling, and diligence by importing firms significantly influence the sustainability of agro-food supply chains. Consumers' preferences for regional and seasonal products versus imported and non-seasonal goods can heavily impact overall sustainability.

When looking at sustainability, it is also important to consider ethics. Especially in vulnerable regions, stable agri-food supply chains are important to maintain food security. Countries specialize

in certain products, benefiting from economies of scale and advanced technology tailored to their natural conditions. This specialization and the global demand for diverse food products drive international trade. For example, Costa Rica imports 55% of its supermarket food, despite being a significant agri-food exporter, to satisfy consumer preferences for diverse and affordable products.

Urbanization and population growth further increase dependence on global suppliers. Global trade agreements facilitate this dependence by eliminating trade barriers and promoting economic cooperation. Climate change exacerbates the situation, especially for vulnerable regions, particularly those with high poverty rates, limited economic resources, and exposure to natural disasters, face significant food security risks. Political instability and conflicts further disrupt food production and access, making these regions even more dependent on global food supply chains.

Another challenge lies in the inherent trade-offs between efficiency and sustainability. Globalization has enabled highly efficient and interconnected supply chains, maximizing resource efficiency and profitability. However, this often comes at the cost of sustainability. Additionally, the agricultural sector is highly vulnerable to natural events such as climate change, droughts, and floods, which can disrupt supply chains and exacerbate sustainability issues. Geopolitical factors, such as trade tariffs and market fluctuations, further complicate the balance between efficiency and sustainability. The COVID-19 pandemic highlighted the fragility of global food supply chains and underscored the need for resilience, which is crucial for both efficiency and sustainability.

Technology has become increasingly important in today's globalized world of supply chains. The global food supply chain, while essential for delivering food across continents, comes with significant environmental costs, primarily due to greenhouse gas emissions from transportation, deforestation for agriculture, and excessive water usage. Transportation is a major contributor to carbon emissions, as products often require multiple modes of transport, each adding to the overall emissions.

Companies are increasingly focusing on reducing emissions by improving energy efficiency, using renewable energy, and investing in green projects like reforestation. The concept of a circular economy, which reduces waste by reusing materials, is gaining traction to create more resilient and eco-friendly supply chains. Additionally, storage operations contribute to pollution and climate change. Inefficient inventory management can lead to excess stock and significant resource wastage, further impacting the environment. Balancing efficiency with sustainability in the global food supply chain requires strategic planning and the adoption of innovative technologies and practices.

The era of digitalization has brought transformative advancements to the food supply chain, addressing critical challenges such as inefficiency, lack of transparency, and food safety. Technologies like blockchain, IoT, and artificial intelligence have played pivotal roles in enhancing traceability, optimizing logistics, and ensuring the quality of food products from production to consumption.

IoT has improved the monitoring and management of perishable goods, reduced waste, and ensured food safety. Ultimately, embracing these technologies fosters a more efficient, equitable, and sustainable global food system.

Globalization integrates multinational enterprises (MNEs) into agricultural and food sectors, increasing interdependence. MNEs impact food security and resource availability in developing countries. The complexity of global supply chains, like those for bananas and Nutella, shows the necessity of international trade. However, these supply chains are vulnerable to geopolitical events, such as the Ukraine-Russia war, which disrupts food supply and highlights the fragility of global food security. Sustaining these supply chains is essential, as any disruption can lead to global food shortages, emphasizing the interconnected nature of the world's food systems.

The COVID-19 pandemic disrupted global food supply chains, affecting food availability, distribution, and accessibility. Restrictions like border closures and transportation limits exposed the vulnerabilities and inequalities in food systems, particularly in developing countries. Some African countries, reliant on agriculture, were less affected but still faced significant challenges. The pandemic highlighted the need for greater resilience and adaptability in food supply chains.

Balancing efficiency with sustainability in food supply chains is challenging. Environmental impacts must be considered for both producing and consuming countries. Consumer preferences and the high carbon footprint of certain products complicate sustainability efforts. Globalization has increased efficiency but often at the cost of sustainability, leading to exploitation and higher emissions. The agricultural sector is highly vulnerable to natural events such as climate change, droughts, and floods, which can disrupt supply chains and exacerbate sustainability issues. Geopolitical factors, such as trade tariffs and market fluctuations, further complicate the balance. The COVID-19 pandemic highlighted the fragility of global food supply chains and underscored the need for resilience. Achieving a balance requires addressing these challenges through strategic planning, consumer education, and policy interventions.

Dependence on global suppliers impacts food security in vulnerable regions, especially during crises. These regions rely on imports for basic nutrition, making them susceptible to disruptions. Strengthening local production and sustainable agricultural systems can reduce this vulnerability. However, many countries prioritize exporting for income over local consumption, complicating efforts to achieve food self-sufficiency. Investing in sustainable agricultural systems, improving logistical infrastructure, and promoting food self-sufficiency could help alleviate pressure on global supply chains. Adopting sustainable farming practices and strengthening local food systems could significantly reduce dependence on global food supply chains.

Digital technologies like blockchain, IoT, and AI have transformed food supply chains by improving traceability, transparency, and efficiency. Blockchain ensures accurate tracking of food products,

enhancing food safety and benefiting small-scale farmers. IoT devices monitor conditions in real-time, optimizing logistics and reducing waste. These technologies address global challenges like food fraud and equitable market access. For example, companies like Walmart have adopted blockchain to reduce the time it takes to trace food origins, significantly enhancing food safety during contamination outbreaks. Together, these technologies optimize logistical processes and address global challenges such as food fraud, waste reduction, and equitable market access, paving the way for a more efficient and sustainable food system.

Global food supply chains have significant environmental costs, including carbon emissions, water consumption, and biodiversity loss. Transportation and production processes contribute heavily to emissions. Inefficient water management and excessive packaging worsen environmental degradation. Sustainable practices like renewable energy, efficient water use, and local sourcing are essential to mitigate these impacts and ensure a more resilient system. Food production, transportation, and packaging consume substantial amounts of water, further straining water resources, particularly in areas already facing water scarcity. Protecting biodiversity through responsible sourcing, supporting agroecological farming practices, and collaborating with stakeholders like NGOs and local communities are critical steps toward reducing the environmental footprint of the food supply chain. While the global food supply chain plays a vital role in meeting global demand, its environmental costs necessitate urgent changes to ensure a more sustainable and resilient system.

References

- Aggarwal, S., Jeong, D., Kumar, N., Park, D. S., Robinson, J., & Spearot, A. (2020). Did COVID-19 market disruptions disrupt food security? Evidence from households in rural Liberia and Malawi (No. w27932). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w27932>
- Alabi, M. O., & Ngwenyama, O. (2023). Food security and disruptions of the global food supply chains during COVID-19: Building smarter food supply chains for the post-COVID-19 era. *British Food Journal*, 125(1), 167–185. <https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2021-0333>
- Chen, S., Liu, X., Yan, J., Hu, G., & Shi, Y. (2020). Processes, benefits, and challenges for adoption of blockchain technologies in food supply chains: A thematic analysis. *Information Systems and e-Business Management*, 19(3), 909–935. <https://doi.org/10.1007/s10257-020-00467-3>
- Dekonink, C., & Toyama, L. (2022, September). *Environmental impacts along food supply chains*. OECD. <https://www.oecd.org/en/publications/environmental-impacts-along-food>
- Government of Canada. (2024, November 6). *Marché agroalimentaire au Costa Rica*. AMC. <https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/costa-rica/market-reports-etudes-de-marches/0007710.aspx?lang=fra>
- Kamilaris, A., Fonts, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2019). The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains. *Trends in Food Science & Technology*, 91, 640–652. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.07.034>
- Krupitzer, C., & Stein, A. (2023). Unleashing the potential of digitalization in the agri-food chain for integrated food systems. *Annual Review of Food Science and Technology*, 15(1), 307–328. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-012422-024649>
- Mondal, S. (2024, September 22). *Global food security demands sustainable food systems*. Policy Circle. <https://www.policycircle.org/society/food-security-sustainable-farms/>
- Mousavijad, M. (2023). *Planning models for a multi-product, multi-site reforestation value chain*. Corpus ULaVal. <https://corpus.ulaval.ca/server/api/core/bitstreams/515bf0d3-575d-464e-8f55-56a05fc43220/content>
- Naz, F., & Kear, M. (2022). Impact of Ukraine War on global energy and food supply chains: A case study of South Asia. *Strategic Studies*, 42(2), 38–53. <https://www.jstor.org/stable/48732349>
- Scoppolla, M. (2021, July). *Globalisation in agriculture and food: The role of multinational enterprises*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/353613687>
- Stead, V., & Hinkson, M. (Eds.). (2022). *Beyond global food supply chains: Crisis, disruption, regeneration*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-3155-0>
- Stranieri, S., Riccardi, F., Meuwissen, M. P., & Soregaroli, C. (2020). Exploring the impact of blockchain on the performance of agri-food supply chains. *Food Control*, 119, 107495. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107495>
- Trésor-Eco. (2015, November). N° 158 - *La spécialisation industrielle de sept grands pays avancés: Quelle évolution depuis les années 1990?* <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/69fb7b01-0e5b-4d04-ab16-62bf6c1d018c/files/c50b45cb-0fd9-41ea-9c70-1df2362160a8>
- Wang, G., Wang, Y., Li, S., Yi, Y., Li, C., & Shin, C. (2024, September 14). *Sustainability in global agri-food supply chains: Insights from a comprehensive literature review and the ABCDE framework*. MDPI Foods. <https://www.mdpi.com/2304-8158/13/18/2914>
- World Economic Forum. (2022, July). *The war in Ukraine is pushing countries short on food to famine*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2022/06/war-ukraine-global-food-insecurity-rising/>

ENSAYO

El antisemitismo en las redes sociales de Costa Rica: Análisis de comentarios en medios de alta circulación (octubre 2023 - diciembre 2024)

Antisemitism in Costa Rica's social media: Analysis of Comments in High-Circulation Media (October 2023 - December 2024)

María D. Rodríguez Rodríguez ¹

Cómo citar:

Rodríguez Rodríguez, M.D. (2025). El antisemitismo en las redes sociales de Costa Rica: Análisis de comentarios en medios de alta circulación (octubre 2023 - diciembre 2024). *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 244-270. Doi: 10.63058/des.v19i1.321

Fecha de ingreso: 22 de enero de 2025. **Fecha de aprobación:** 2 de febrero de 2025.

Resumen

El artículo analiza la propagación del antisemitismo en las redes sociales de Costa Rica, especialmente en Facebook, tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023. Mediante un enfoque cualitativo, se evaluaron comentarios en medios de alta circulación, clasificándolos en positivos, negativos y otros. Se encontró que casi la mitad de los comentarios eran antisemitas, mostrando patrones de odio similares a los observados globalmente. Este fenómeno refleja la influencia de eventos internacionales en la dinámica local y destaca la urgencia de implementar políticas públicas que promuevan la tolerancia y regulen el discurso en plataformas digitales. Además, se subraya la necesidad de educación y colaboración entre gobiernos y organizaciones para mitigar el impacto del discurso de odio en línea.

Palabras clave: antisemitismo, conflicto Israel, Hamás, redes sociales, discursos de odio, Facebook

Abstract

The article examines the spread of antisemitism on Costa Rica's social media, particularly Facebook, following the onset of the conflict between Israel and Hamas in October 2023. Using a qualitative approach, comments from high-circulation media were categorized as positive, negative, or neutral. Nearly half of the comments analyzed were antisemitic, revealing hate patterns similar to those seen globally. This phenomenon highlights the influence of international events on local dynamics and underscores the need for public policies to promote tolerance and regulate digital discourse. Additionally, it emphasizes the importance of education and collaboration between governments and organizations to mitigate the impact of online hate speech.

Keywords: Antisemitism, Israel, Hamas conflict, social media, hate speech, Facebook.

Introducción

El 7 de octubre de 2023, estalló un conflicto bélico de gran impacto global entre Israel y el grupo paramilitar palestino Hamás en la Franja de Gaza. Este enfrentamiento desató una escalada de violencia, marcada por intensos ataques aéreos, incursiones terrestres y secuestros, lo que resultó en una crisis humanitaria con miles de víctimas y heridos. Además de respuestas diplomáticas y militares, el conflicto generó una intensa actividad en redes sociales, donde se difundieron tanto mensajes de solidaridad como discursos de odio.

En este entorno digital, las redes sociales se convirtieron en un espacio de confrontación. Mientras algunos promueven apoyo y comparten información acerca del conflicto, otros aprovecharon para propagar discursos de odio, incluidos comentarios antisemitas. Estos mensajes trascendieron las fronteras de los países directamente involucrados, alcanzando incluso a Costa Rica, donde también se evidenciaron discusiones y expresiones influenciadas por la dinámica global.

Esta investigación analiza cómo el antisemitismo se manifestó en las redes sociales costarricenses, particularmente en la plataforma Facebook, durante el período de octubre 2023 a diciembre 2024. En este marco, se busca comprender los patrones de discurso de odio, identificar los factores que lo impulsaron y evaluar las implicaciones sociales y culturales de su presencia en un país con un contexto histórico y político particular.

El Antisemitismo como concepto

Recientemente, en distintas publicaciones, se ha visualizado el término antisemitismo. Este término como menciona Zadof, (2004), fue acuñado por primera vez hacia finales de la década de 1870, y desde entonces ha sido utilizado con referencia a todos los tipos de odio antijudío a lo largo de la historia. Este prejuicio, hostilidad o discriminación contra los judíos, se puede distinguir en aspectos religiosos, étnicos o culturales.

Ahora bien, según La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés, 2016), brinda la siguiente definición:

El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto.

La comunidad judía ha estado expuesta al antisemitismo desde la Edad Media, se ha visto perjudicada por las acciones antisemitas a causa de falsas acusaciones y la exclusión de la comunidad. Las discriminaciones no finalizaron ahí, sino que el antisemitismo adquirió más fuerza y evolucionó hacia formas más generales como un racismo sobre la comunidad judía que giraba en torno a argumentos pseudocientíficos, como lo ocurrido en la Alemania nazi y las acciones genocidas del Holocausto.

Se podría decir que el antisemitismo nazi fue actor principal en izar la bandera de esta ideología racista promoviendo el antisemitismo entre los pueblos de Europa y que no tardaría en expandirse al resto del mundo. Sin embargo, Martínez (2020), menciona en su escrito que hombres de la Ilustración francesa como Voltaire escribían: “No hay pueblo en el mundo que haya sido tanto tiempo miserable y bárbaro como el pueblo judío”, y además el autor mencionaba que el antisemitismo también fue representado en lugares impensables como la música. Richard Wagner opinaba que los judíos son “los pudridores del mundo”.

Es así como el antisemitismo siempre ha permanecido en las sociedades oculto entre las sombras y perjudicando y lastimando la integridad del pueblo judío. El antisemitismo no creó el Holocausto por sí solo, pero este odio profundo por la comunidad judía contribuyó a generar un entorno favorable para los prejuicios, los discursos de odio y la violencia.

Esfuerzos globales para combatir el antisemitismo

Con el reciente aumento de los discursos de odio y antisemitismo que se ha generado desde ya hace unos años con más fuerza, múltiples organizaciones han unido fuerzas para combatir el antisemitismo tanto en el ámbito físico en donde se ha presentado en manifestaciones y han luchado por resguardar la integridad de la comunidad judía, así como también, en el ámbito digital, donde ha tenido un mayor auge en la actualidad acerca del antisemitismo. Un ejemplo destacado de una organización que se ha encargado de combatir el antisemitismo es el Combat Antisemitism Movement (CAM), una asociación global que trabaja activamente para monitorear, denunciar y contrarrestar el antisemitismo. CAM no solo promueve iniciativas legislativas y educativas, sino que también actúa como un observatorio que analiza patrones de odio antisemita en las plataformas digitales, facilitando reportes y estrategias para reducir su impacto.

Así como lo menciona CAM en su visión, la organización ha trabajado arduamente, creando espacios e iniciativas de aprendizaje. Cuenta con más de cinco millones de activistas y personas influyentes en las redes sociales, para combatir las acciones discriminatorias y discursos de odio; también ha logrado trabajar en alianzas con grupos de origen no judío para así lograr un mayor alcance en las sociedades. Entre las alianzas de CAM se destacan comunidades afrodescendientes, cristianas, musulmanas, entre otras, lo que les permite estrechar relaciones interreligiosas y de alto nivel con entidades como el Vaticano, la Liga Musulmana Mundial y la Iglesia Ortodoxa Griega.

Entre las figuras influyentes de CAM, se encuentra Pilar Rahola, periodista y escritora española, quien ha desempeñado un papel crucial en la visualización del antisemitismo contemporáneo en el entorno global. Rahola ha denunciado, en sus escritos y conferencias internacionales, la persistencia de los prejuicios antisemitas y ha señalado cómo el entorno digital se ha convertido en un espacio para la difusión de noticias falsas, llenas de desinformación y discursos de odio hacia la comunidad judía. Su postura firme y sus análisis han contribuido a desnormalizar estas actitudes y a promover el respeto y la tolerancia en los debates públicos.

La propagación del antisemitismo y los discursos de odio en redes sociales

En la actualidad, nos encontramos en una era digital, en donde los medios de comunicación han sembrado raíces en las redes sociales. El fácil acceso a una red social como Facebook, X, Instagram, entre otras, ha permitido que las sociedades se mantengan conectadas de una manera más directa sobre las noticias tanto nacionales como internacionales, ocasionando así la libre interacción entre los usuarios para analizar y opinar sobre los eventos actuales.

Los algoritmos están diseñados para maximizar la visibilidad de contenido controversial, y esto facilita la viralización de noticias. Por ejemplo, la utilización de “hashtags” relacionados con eventos internacionales suelen ser convenientes para promover cadenas de odio, mientras que los comentarios en medios recurrentes se comparten una y otra vez y amplifican estas posturas, muchas veces sin moderación adecuada en donde se utilizan palabras ofensivas que dañan la integridad de las personas.

El discurso del odio juega un papel fundamental en la perpetuación de estereotipos discriminatorios, la estigmatización de colectivos, la contribución a su marginación, etc. Constituye un mecanismo lingüístico de importancia fundamental en la deshumanización de ciertos colectivos, a los que se trata de negar su pertenencia a la ciudadanía en condiciones de igualdad. En este sentido, el discurso del odio envía un mensaje que divide y segrega a la sociedad. Pero al mismo tiempo, también juega un papel cohesionador para los emisores del discurso del odio, reforzando su sentimiento de pertenencia a un grupo (Gagliardone et al. 2015).

Como menciona el autor en el párrafo anterior, los discursos de odio no son neutrales, ya que estos manifiestan y perpetúan estructuras de poder que buscan mantener la subordinación de los grupos

a los que se dirigen. Con este mecanismo se refuerzan los sistemas de desigualdad social al tratar de justificar y normalizar las actitudes agresivas en contra de un grupo específico. Los conflictos en Oriente Medio no son la excepción y, por el contrario, desde el inicio del conflicto, el antisemitismo resurgió bajo formas como teorías de conspiración, memes discriminatorios y comentarios cargados de odio profundo en contra de las comunidades judías. Estas dinámicas antisemitas no solo refuerzan estereotipos históricos, sino que contribuyen a normalizar la intolerancia y el irrespeto en las plataformas digitales.

Importancia de estudiar los discursos de odio en el entorno digital de Costa Rica

En Costa Rica, aunque no existen registros de antisemitismo sistémico como tal, la globalización de discursos en redes sociales ha permitido la propagación de contenido antisemita influenciado por dinámicas internacionales recientes. La importancia de realizar un estudio también radica en la falta de investigaciones previas sobre la influencia que poseen las redes sociales en la proliferación del antisemitismo en países de América Latina. Abordar este vacío académico permitirá visibilizar el fenómeno, generar conciencia y establecer un marco para futuras investigaciones y políticas públicas orientadas a la promoción de la tolerancia y la convivencia en el espacio digital.

El análisis de los discursos de odio en el ecosistema digital de Costa Rica resulta fundamental para comprender las dinámicas sociales y las nuevas formas de discriminación en el país. Es importante llevar a cabo estos estudios para así analizar cómo se expresan y se adaptan los discursos de odio internacionales al contexto de la población costarricense. Con base en estos estudios es posible informar a las instituciones y a la sociedad sobre los riesgos y perjuicios que pueden llegar a tener los discursos de odio en línea y de esta manera poder combatirlos mediante campañas educativas y herramientas de moderación de las plataformas digitales.

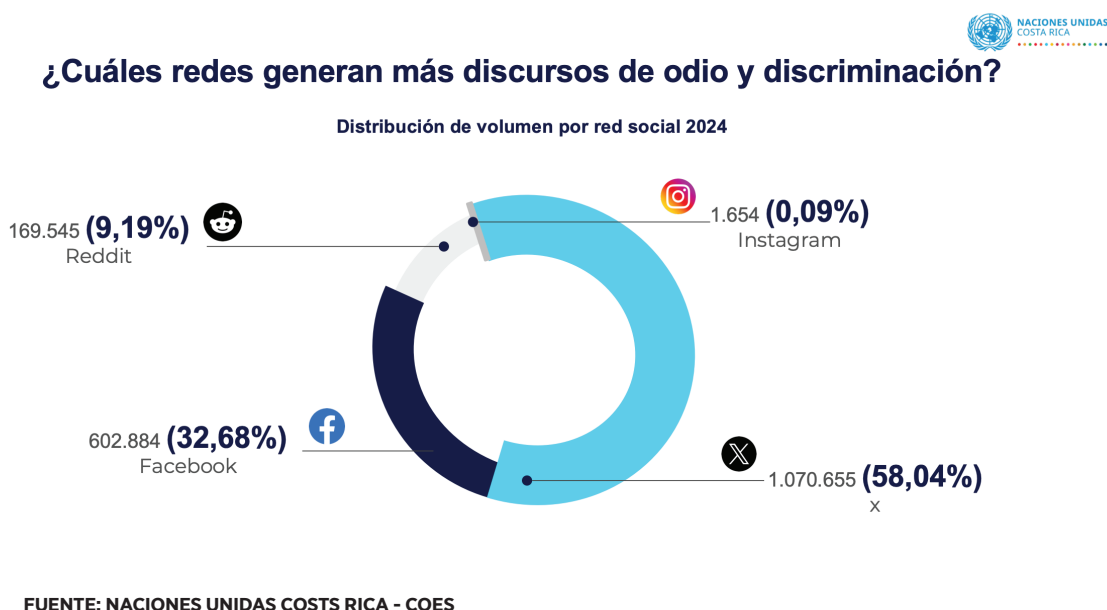
La Agencia de Derechos Fundamentales de Unión Europea, durante el período de enero a junio de 2023, realizó una encuesta a personas judías mayores de 16 años, de la cual 96% de los encuestados afirmó que ha experimentado algún tipo de antisemitismo. Además, se menciona en el informe del observatorio antisemitismo (2023): “En España, Italia, Países Bajos y Suecia, entre el 90 y 94 % de los judíos encuestados aseguran enfrentarse a todo tipo de estereotipos. Más de nueve de cada 10 describieron el antisemitismo en Internet y las redes sociales como un problema muy grande”.

Como lo menciona el observatorio antisemitismo en la información anterior, los datos reflejan una preocupante realidad que no se limita únicamente al contexto europeo, sino que también incluye a América Latina. En países como Costa Rica, aunque la población judía es más reducida, se han identificado expresiones de antisemitismo que se han manifestado principalmente en espacios digitales. Los comentarios en redes sociales y secciones de opinión de medios de comunicación han reproducido estereotipos y narrativas que asocian a la comunidad judía con los discursos de odio. Esta dinámica evidencia la necesidad de una vigilancia constante y de la implementación de políticas regulatorias e iniciativas educativas y preventivas que frenen la propagación del discurso de odio en sus diversas manifestaciones, especialmente en plataformas de alcance masivo como las

redes sociales de hoy en día.

En el siguiente gráfico, se expone un panorama sobre los discursos de odio y las manifestaciones de discriminación en Costa Rica durante el año 2024. Este análisis se enfoca en identificar las principales tendencias en plataformas digitales y medios de comunicación más utilizados por los costarricenses, con especial atención a grupos vulnerables como comunidades étnicas, religiosas y minorías sociales. Los datos reflejan cómo las dinámicas globales de intolerancia son parte de la sociedad actualmente, destacando la prevalencia de ciertos estereotipos y la presencia de odio en redes sociales. Este estudio busca no solo visibilizar los medios más frecuentes en donde se dan estas conductas discriminatorias, sino también generar conciencia sobre la urgencia de estrategias efectivas para contrarrestar el impacto de los discursos discriminatorios en la sociedad costarricense.

Figura 1. Discursos de Odio y Discriminación en Costa Rica 2024

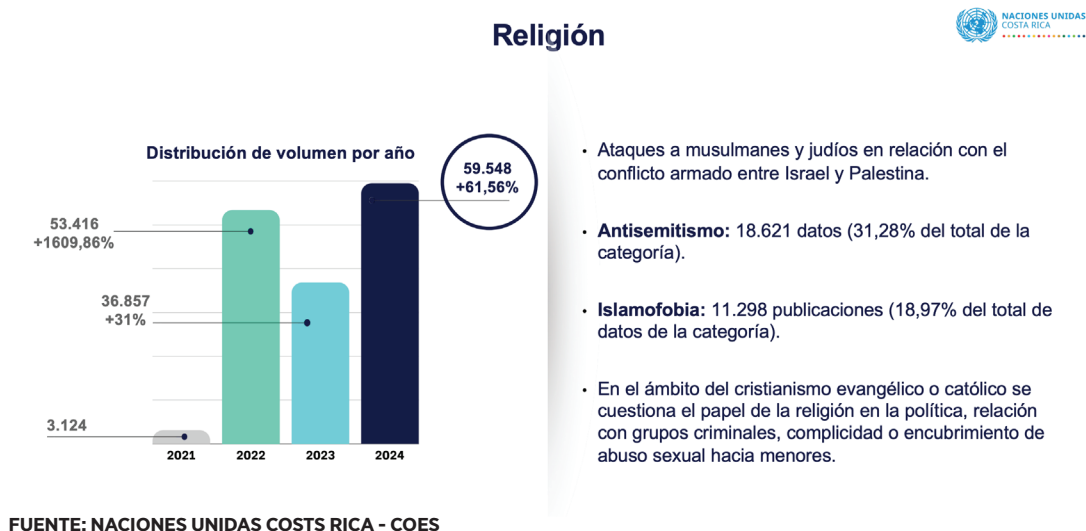


En el gráfico anterior se logra observar que los discursos de odio en las plataformas digitales de Costa Rica han experimentado un notable incremento en 2024. Además, se logra observar que la red social Facebook y X (antes Twitter) son las dos plataformas que concentran la mayoría de los discursos de odio y discriminación, lo que resalta la necesidad de mayor monitoreo y regulación.

El siguiente gráfico presenta la evolución porcentual de las discriminaciones registradas en la región en el período del 2021 al 2024, el cual permite observar las tendencias en la incidencia de distintos tipos de discriminación, específicamente en la religión. Al comparar los datos anuales, se

busca identificar patrones significativos, o algunos cambios en los niveles de discriminación. Este enfoque es crucial para comprender las dinámicas sociales en la región y para impulsar estrategias que fomenten la inclusión y la equidad.

Figura 2. Distribución de volumen por año: Religión



Como se logra apreciar en el gráfico anterior, las dinámicas y discursos de odio se han incrementado desde el 2022, destacando los ataques a los judíos y a los musulmanes. En el caso del antisemitismo recibe el 31,28% de la categoría, mientras que la islamofobia recibe el 18,97% del total de la categoría.

Diseño de la investigación

Recolección y análisis de datos

Para el presente estudio se utilizó un enfoque cualitativo-descriptivo para analizar la propagación del antisemitismo en las redes sociales de Costa Rica. Se centró en los comentarios publicados en páginas de medios de alta circulación en Facebook durante el período comprendido entre octubre de 2023 y diciembre de 2024. Este diseño permitió explorar patrones discursivos, identificar narrativas antisemitas y comprender el contexto en el que se producen los discursos de odio en el entorno digital costarricense.

La recolección de datos se llevó a cabo en dos fases: En la primera, se realizó una selección de páginas de Facebook, de los principales o más visitados medios de comunicación de los costarricenses, como diarios digitales, sitios de noticias y canales de televisión en los cuales se publican noticias sobre el conflicto Israel - Palestina. Posteriormente, se analizaron las noticias y se recopilaron los comentarios realizados por los internautas utilizando herramientas de monitoreo digital y métodos manuales para garantizar la identificación de palabras clave y expresiones antisemitas relevantes. Estos comentarios se dividieron en tres categorías: comentarios positivos, comentarios negativos y otros comentarios.

Cuadro 1. Clasificación de los comentarios obtenidos durante el análisis.

Comentarios positivos	Se catalogó como positivo todo aquel comentario que mostrara apoyo hacia la comunidad judía o que no generalizara la crítica de las acciones del Estado de Israel a todos los ciudadanos del país, considerando la designación de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA)
Comentarios negativos	Se catalogó como negativo todo aquel comentario antisemita y discurso de odio que atacara a la comunidad judía.
Otros comentarios	Se catalogó como otros comentarios aquellos que no tenían relación alguna con el tema sobre el conflicto Israel - Palestina.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Para esta investigación se llevaron a cabo técnicas de análisis de contenido y categorización temática, con el propósito de identificar y comprender las dinámicas del discurso antisemita en las redes sociales. Estas técnicas permitieron examinar los comentarios recopilados, detectando patrones de conducta y expresiones repetitivas en las publicaciones de usuarios. Para este análisis se incluyó la identificación de variables clave, como la frecuencia de términos antisemitas, para determinar la recurrencia de expresiones discriminatorias en el contenido publicado.

También se analizó el uso de lenguaje explícitamente hostil, evaluando el nivel de agresividad y la carga emocional de los comentarios. Para la clasificación de las noticias obtenidas de los medios digitales de la plataforma Facebook se consideraron algunos parámetros de las categorías, por ejemplo: Se categorizaron en Antisemitismo, genocidio, Israel (críticas hacia Israel como políticas

de gobierno), política (en general donde haya involucrado el tema judío) y finalmente, sionismo (cuando se usa la palabra para no decir judío y se ataca bajo el paraguas del antisionismo²).

Justificación de la metodología

La razón principal por la cual se le dio un enfoque cualitativo al análisis es que este método permite visualizar de manera directa y comprender en profundidad el contenido, el contexto y las dinámicas de los discursos de odio que se generan en las redes sociales dentro de la sociedad costarricense. De acuerdo con Creswell (2007).

El objetivo de la investigación cualitativa es el proceso inductivo en lugar del resultado deductivo. Los datos objetivos de la investigación cualitativa proporcionan información no sobrecargada, por lo tanto, el investigador tiene que buscar patrones narrativos explicativos entre las variables de interés, y llevar a cabo la interpretación y descripción de dichos patrones.

Un enfoque cualitativo permite que se construyan teorías para comprender fenómenos a partir de los datos obtenidos directamente de participantes, en lugar de imponer hipótesis premeditadas. La investigación cualitativa se caracteriza por su flexibilidad y profundidad. Por consiguiente, la investigación cualitativa no sólo identifica relaciones entre variables, sino que también se enfoca en revelar los significados profundos y las perspectivas que subyacen a las experiencias humanas, esto la convierte en un recurso esencial para comprender a fondo los fenómenos sociales, culturales y psicológicos dentro de un ámbito particular.

Continuando con la metodología del análisis, la selección de Facebook como plataforma principal se justificó por su alto nivel de uso en Costa Rica y su relevancia como espacio de debate público. Además, el período de estudio (octubre 2023 - diciembre 2024) fue definido estratégicamente para abarcar desde el primer momento en que estalló el actual conflicto entre Israel y Palestina y que se ha generado hasta el día de hoy.

Para garantizar la validez y credibilidad de la investigación, se documentaron todos los pasos del proceso, incluyendo los criterios de selección de páginas y comentarios, los parámetros de codificación y las herramientas utilizadas. Esto asegura que futuros estudios puedan replicar o ampliar los hallazgos obtenidos en este análisis. Además, se detallaron las elecciones metodológicas en cada etapa del estudio, incluyendo la explicación del marco teórico utilizado y las estrategias adoptadas para reducir cualquier sesgo potencial. Esta transparencia no solo fortalece la credibilidad

² El antisionismo es la oposición al sionismo, el movimiento por la autodeterminación y la condición de Estado del pueblo judío en su patria ancestral, la tierra de Israel. El antisionismo a menudo se expresa, explícita o implícitamente, en el rechazo de la nación judía y su derecho a la autodeterminación; la denigración de individuos y grupos asociados al sionismo; y la minimización o negación de la conexión histórica y espiritual judía con la tierra de Israel (ADL, 2022)

de los resultados encontrados, sino que también facilita que otros puedan reproducir el estudio y permite que investigaciones futuras puedan validar o contrastar estos resultados en contextos similares o distintos.

Resultados de la investigación

Así pues, se presentan los resultados obtenidos tras el análisis de los comentarios recopilados en las noticias publicadas en Facebook, principalmente obtenidas de los medios más recurrentes de Costa Rica. Los resultados se encuentran organizados en tres períodos, los cuales se explicarán con mayor detalle con el apoyo de tablas y gráficos para facilitar su comprensión.

Período de octubre a diciembre de 2023

Se recolectaron 244 comentarios por parte de los usuarios de la plataforma Facebook, en donde se analizaron un total de 18 noticias recopiladas de ocho medios digitales.

Cuadro 2. Datos generales

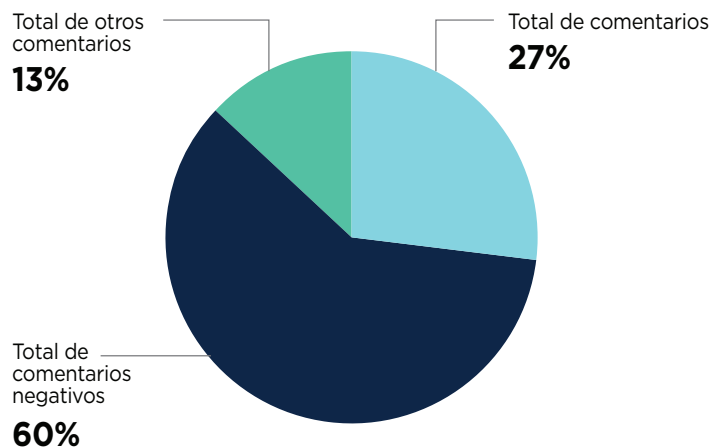
Total de noticias	18
Total de comentarios	244
Total de comentarios positivos	65
Total de comentarios negativos	145
Total de otros comentarios	31

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el cuadro 2, se puede observar el total de comentarios obtenidos en el período de octubre - diciembre 2023, mediante el cual se pretende dar a conocer visualmente cómo se distribuyó entre comentarios positivos, negativos y otros comentarios.

Gráfico 1. Total de comentarios revisados entre octubre a diciembre 2023

Total de comentarios revisados período: octubre - diciembre
(en términos porcentuales)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como se logra apreciar en el gráfico anterior, del 100% de la información recopilada el 60,2% representa los comentarios negativos antisemitas contra la población judía con juicios de odio, discriminatorios y burlas entre otros. El 27,0% abarca los comentarios positivos o de apoyo sobre la comunidad y finalmente el 12,9% menciona otros comentarios en los cuales los usuarios de Facebook aprovechan para tocar otros temas que no tienen relación alguna con el conflicto.

En seguida, se muestran algunos de los comentarios obtenidos durante la investigación por medio de la plataforma digital Facebook, para el período de octubre a diciembre de 2025, estos se encuentran con su fecha de publicación y el medio digital por el cual se obtuvo.

Cuadro 3. Comentarios obtenidos en las noticias de la plataforma Facebook

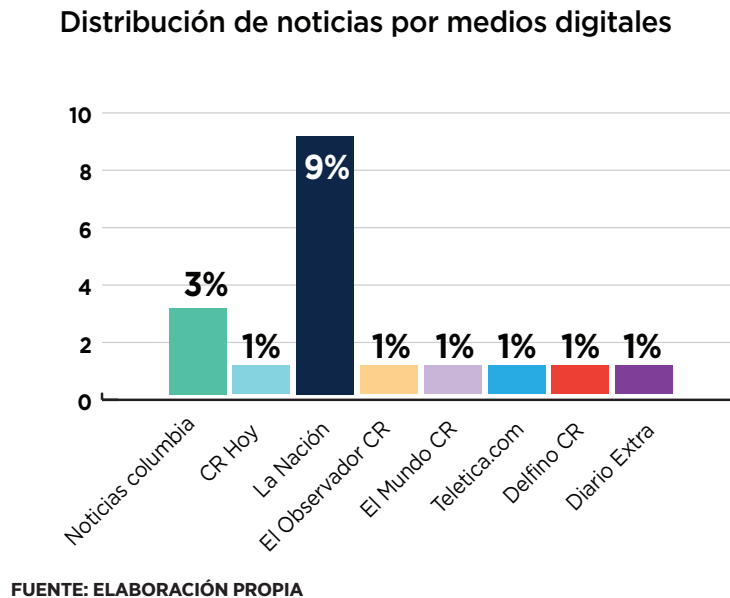
Fecha	Medio digital	Comentario	Positivo	Negativo
10/7/2023	Noticias Columbia	Dios bendiga y guarde Su pueblo Israel.	X	
9/10/2023	CR Hoy	Genocidas		X
10/10/2023	La Nación	Los colonos, el Likud y Netanjahu son los únicos responsables de esta masacre		X
16/10/2023	El observador cr	No apoyamos el terrorismo, gracias presi.		X
17/10/2023	La Nación	El sionismo israelí masacrando inocentes...		X
27/10/2023	El mundo cr	Es un pueblo, es un genocidio! N4z1!!		X
7/11/2023	La Nación	Así es los nazisraelíes dirigidos por Netanyahu tienen similitud con Herodes		X
14/11/2023	La Nación	Israel es peor que Hamás puro TERRORISMO.		X
15/11/2023	Teletica.com	lavandose las manos del genocidio		X
12/31/2023	Diario Extra	Que triste! El pueblo de Dios	X	

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el cuadro 3 se podrá observar que se seleccionaron 10 comentarios al azar, de las noticias del período octubre-diciembre 2023. De los 10 solo dos son comentarios positivos, el resto de los comentarios generados por los usuarios de la plataforma Facebook son completamente antisemitas, los cuales denigran y ofenden profundamente a la comunidad judía en su totalidad.

Continuando con los resultados obtenidos durante el análisis, se detalla la cantidad de noticias publicadas por los principales medios digitales navegados por los costarricenses sobre el conflicto Israel-Palestina, durante el período analizado octubre 2023 a diciembre 2024.

Gráfico 2. Distribución de noticias por medios digitales



En el gráfico dos, se presenta la información recolectada correspondiente a los medios de noticias de los cuales se extrajeron las noticias utilizadas para este análisis. En este se logra observar que para este período de octubre-diciembre 2023 La Nación fue el medio digital que más noticias publicó con respecto al conflicto Israel - Hamás

Período de enero a diciembre de 2024

Se recopilaron 1.045 comentarios, en este período se analizaron un total de 46 noticias publicadas en 10 medios digitales a través de Facebook.

Cuadro 4. Datos generales

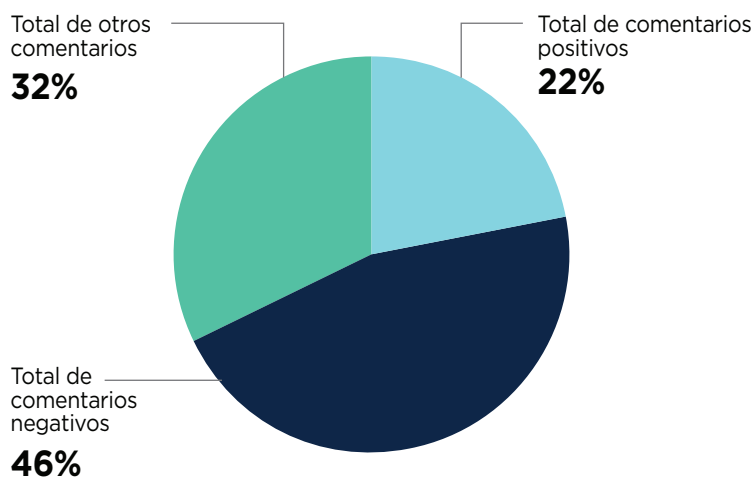
Total de noticias	46
Total de comentarios	1.045
Total de comentarios positivos	234
Total de comentarios negativos	500
Total de otros comentarios	340

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

De acuerdo con el cuadro 4, se podrá observar el total de comentarios obtenidos en el período de enero - diciembre de 2024, mediante el cual se puede conocer de mejor manera la distribución entre comentarios positivos, negativos y otros comentarios.

Gráfico 3. Total de comentarios entre enero - diciembre 2024

Total de comentarios período: enero - diciembre 2024
(en términos porcentuales)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Analizando el gráfico de la figura 2, se logra observar que, del 100% de la información recopilada, el 46,6% representa los comentarios negativos antisemitas en los que destacan juicios de odio y de discriminatorios. Los comentarios positivos abarcan el 21,8% y, finalmente, el 31,7% menciona otros comentarios que no son relevantes.

Posteriormente, se muestran algunos de los comentarios obtenidos durante la investigación por medio de la plataforma digital Facebook, para el período de enero a diciembre de 2024; se encuentran con su fecha de publicación y el medio digital por el cual se obtuvo. Estos comentarios se clasifican en positivos y negativos.

Cuadro 5. Comentarios obtenidos en las noticias de la plataforma Facebook

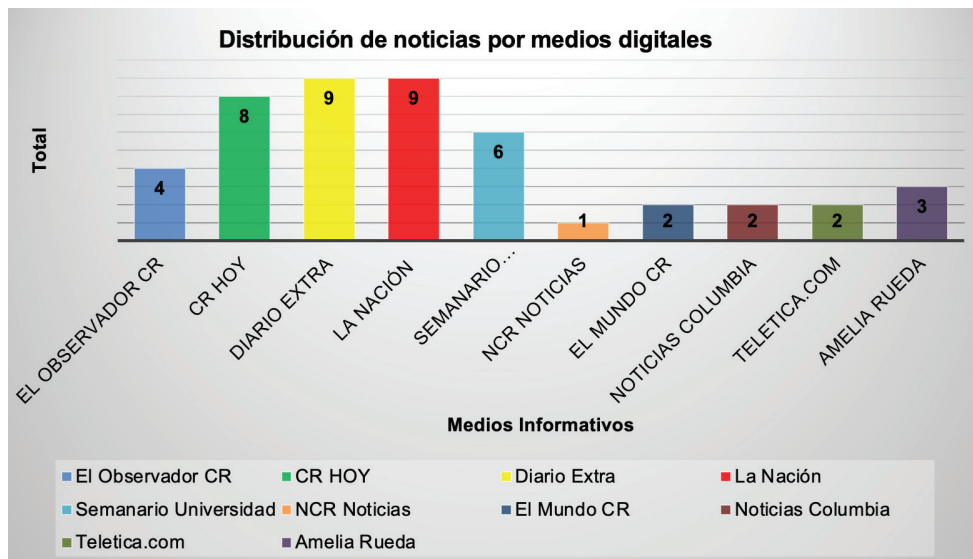
Fecha	Medio digital		Positivo	
3/1/2024	CR Hoy	Dios está con Israel y nadie podrá destruirlo	x	
14/4/2024	Diario Extra	Como nunca se pronunció el gobierno en contra del genocidio y la matanza de niños palestinos que hizo Israel vale que estamos en un país de "derecho"		x
2/6/2024	Seminario Universidad	Los genocidas de Israel.		x
16/7/2024	Seminario Universidad	Los n@zis de siempre		x
8/8/2024	CR Hoy	Que más terroristas que el estado Israel..!!! Está buenísimo para los genocidas..!!		x
1/9/2024	La Nación	Dios no bendice los genocidas asesinos de niños		x
9/30/2024	Amelia Rueda	Israhell terrorista y genocida		x
13/10-2024		Así o más arrastrados...apoyando genocidios		x
17/10/2024	Diario Extra	DIOS BENDIGA Y PROTEJA A ISRAEL POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE.	x	
5/12/2024	La Nación	Otro Genocida		x

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el cuadro cinco se puede observar que se seleccionaron 10 comentarios al azar, de las noticias del período enero-diciembre 2024. Analizando la información obtenida sólo dos son comentarios son positivos, el resto de los comentarios generados por los usuarios de la plataforma Facebook son completamente antisemitas, denigrando y ofendiendo profundamente a la comunidad judía en su totalidad.

Finalmente, en el último gráfico de este apartado, se analizará en el período de enero a diciembre 2024, donde se detallada la cantidad de noticias publicadas por los principales medios digitales navegados por los costarricenses sobre el conflicto Israel-Palestina.

Gráfico 4. Distribución de noticias por medios digitales



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el gráfico cuatro, se presenta la información recolectada correspondiente a los medios de noticias de los cuales se extrajeron las noticias utilizadas para este análisis. En este se logra observar que para este período de enero-diciembre 2024 La Nación y Diario Extra fueron los medios digitales que más noticias publicaron con respecto al conflicto Israel - Hamás

Análisis final de los períodos de análisis

A continuación, se mostrarán los resultados al unir los datos recolectados de ambos períodos de análisis (octubre a diciembre de 2023 y enero a diciembre de 2024). De esta manera, se podrá observar de una manera más amplia la distribución y las tendencias generales en las publicaciones y comentarios. Además, esta integración permitirá identificar patrones comunes en los datos, como la frecuencia de publicación de cada medio digital, la proporción de comentarios positivos, negativos y otros comentarios.

Cuadro 4. Datos generales

Total de noticias	64
Total de comentarios	1.289
Total de comentarios positivos	299
Total de comentarios negativos	645
Total de otros comentarios	371

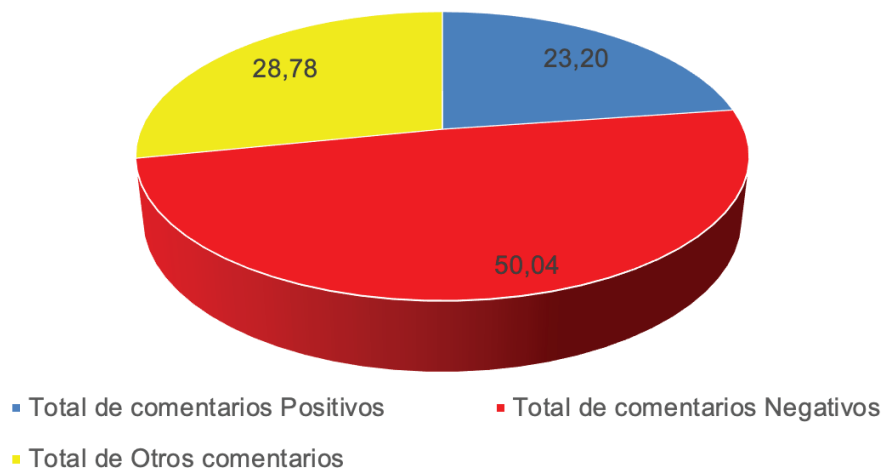
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

De acuerdo con el cuadro 6, se puede observar el total de comentarios obtenidos en el período de octubre 2023 - diciembre de 2024, mediante el cual se puede conocer de mejor manera la distribución total entre comentarios positivos, negativos y otros comentarios.

A continuación, en el gráfico cinco, se podrá observar el total de comentarios obtenidos en el período de enero - diciembre de 2024, mediante el cual se puede conocer de mejor manera la distribución entre comentarios positivos, negativos y otros comentarios.

Gráfico 5. Total de comentarios entre octubre 2023 - diciembre 2024

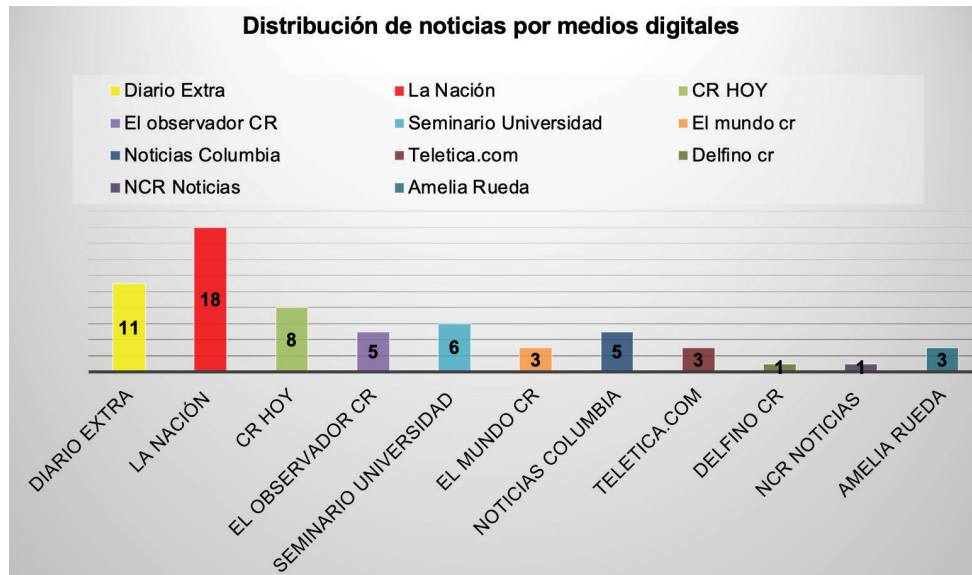
Total de comentarios período: octubre 2023 - Diciembre 2024
(En términos porcentuales)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el gráfico cinco, se observa que del 100% de la información recopilada de ambos períodos de tiempo el 49,0% representa los comentarios negativos antisemita; el 22,7% de los comentarios resultan ser positivos y, finalmente, el 28,2% menciona otros comentarios.

Gráfico 6. Distribución de noticias por medios digitales



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el gráfico seis, se detalla la cantidad de noticias totales publicadas por los principales medios digitales navegados por los costarricenses sobre el conflicto Israel-Palestina, durante el período analizado (octubre 2023 a diciembre 2024). Como se logra apreciar, de las 68 noticias obtenidas la mayor cantidad se extrajo de La Nación, seguido por Diario Extra.

Exploración adicional en Instagram

Con el fin de ampliar la comprensión sobre la percepción del antisemitismo en redes sociales, se llevó a cabo un ejercicio no vinculante a través de la plataforma Instagram, en donde participó un grupo de 50 personas costarricenses. Este consistió en plantear una serie de preguntas abiertas y encuestas breves dirigidas a personas allegadas, con el objetivo de explorar sus conocimientos y opiniones sobre el tema. Las preguntas incluían:

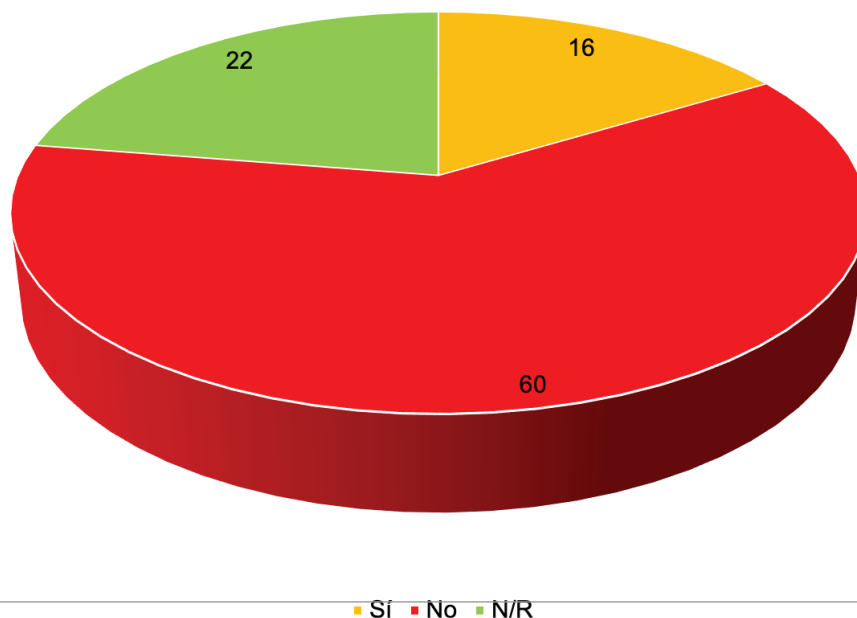
1. ¿Estás al tanto de la situación que vive el pueblo judío hoy en día?
2. ¿Sabes lo que es antisemitismo?
3. ¿Sabías que antisemitismo es la discriminación hacía los judíos?
4. ¿Has observado comentarios o actitudes antisemitas en tu entorno (redes sociales)?
5. En qué plataformas o medios crees que se manifiestan más noticias sobre la comunidad judía y/o Israel?

Para el inicio de la encuesta fue primordial si el público conocía la situación que atraviesa Israel en

el Medio Oriente; esto es importante, ya que, según el nivel de conocimiento que posee un usuario de las plataformas digitales, puede influir directamente en la percepción y actitud hacia el tema, incluyendo la posibilidad de emitir opiniones informadas o, por el contrario, replicar prejuicios y desinformación.

Gráfico 7. PREGUNTA #1 ¿Estás al tanto de la situación que vive el pueblo judío hoy en día?

Estás al tanto de la situación que vive el pueblo judío hoy en día?
(En términos porcentuales)

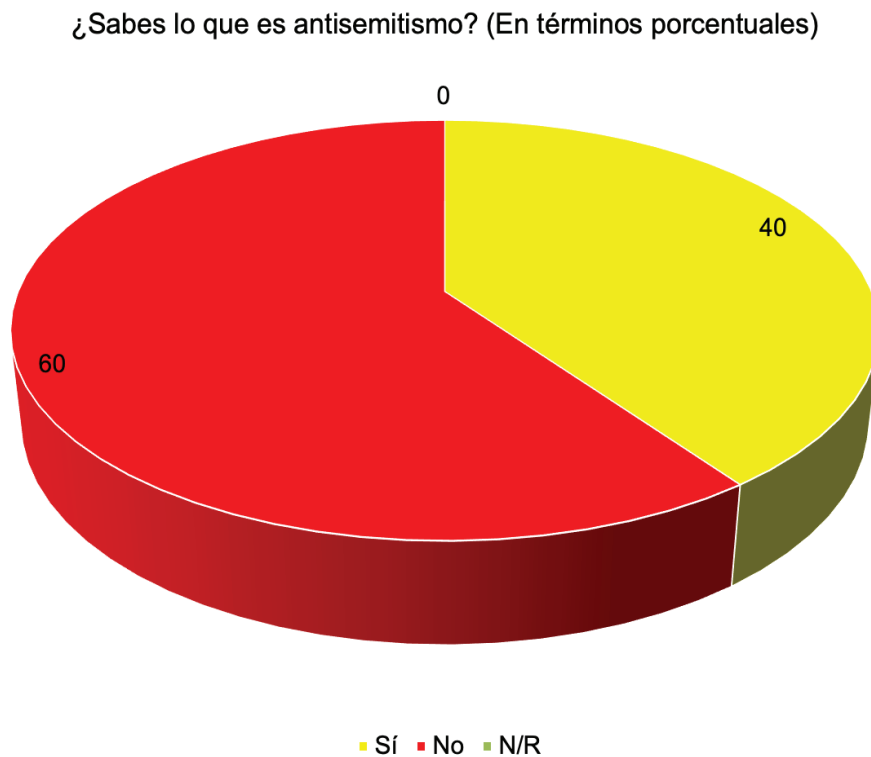


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como se logra observar en el gráfico siete, sólo el 16% de los encuestados conocía sobre la situación por la que atraviesa el pueblo judío, y la mayor cifra del gráfico corresponde al grupo de personas que no conocía nada con respecto a esto, siendo esto el 60%, mientras que el 22% no tenía opinión para poder votar al respecto.

Con el listado de preguntas que se realizaron a los allegados, a través de Instagram se obtuvieron los siguientes datos:

Gráfico 8. PREGUNTA #1 ¿Sabes lo que es antisemitismo?

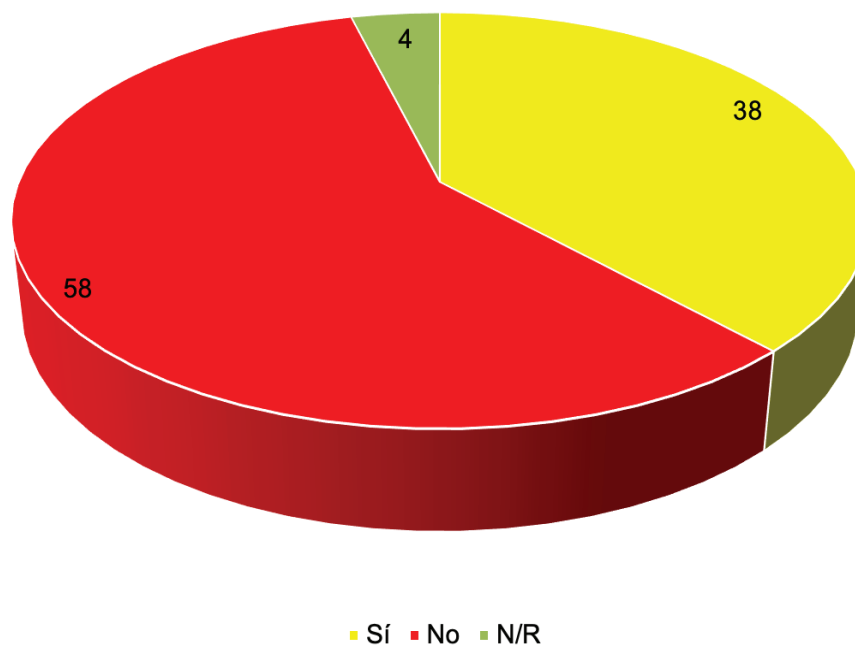


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como se observa en el gráfico anterior, el 60% de las personas encuestadas no conocen la definición de antisemitismo, mientras que sólo el 40% conocía el término. Esto puede ayudar a comprender qué tanto conoce en este caso la población encuestada sobre la discriminación que sufren los judíos en diferentes aspectos, y da pie para poder señalar la siguiente pregunta.

Gráfico 9. PREGUNTA #3 ¿Sabías que antisemitismo es la discriminación hacía los judíos?

Sabías que antisemitismo es la discriminación hacía los judíos?
(En términos porcentuales)



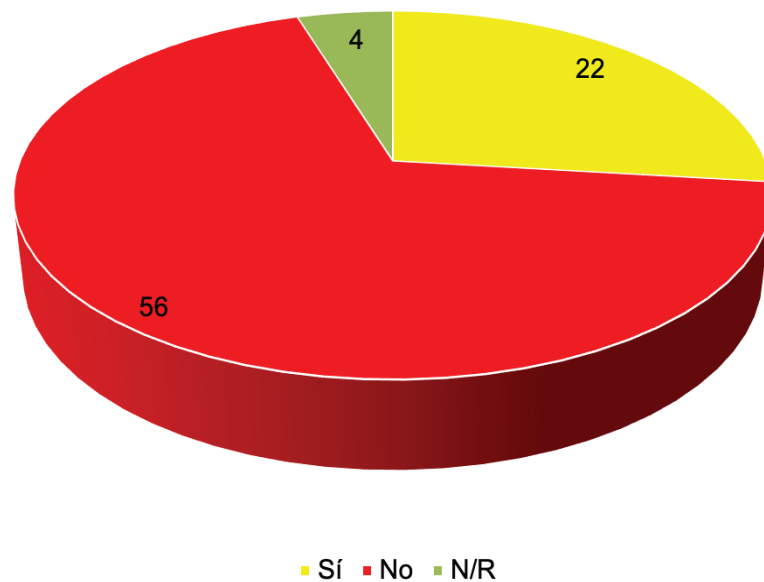
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Ahora bien, en el gráfico nueve se puede observar que el 58% de las personas no sabía que el término antisemitismo, diferenciándose del 60% que conocía la palabra, pero no tenía claro que se trata de la discriminación hacía la comunidad judía, mientras que el 38% sí lo sabía y el 4% no tenía una respuesta clara sobre la pregunta.

Para la siguiente pregunta el objetivo principal era conocer qué tan informados se encontraban los encuestados y conocer sus opiniones sobre las actitudes antisemitas que pudieran llegar a observar en su entorno.

Gráfico 10. Pregunta #4 ¿Ha observado comentarios o actitudes antisemitas en tu entorno (redes sociales)?

Ha observado comentarios o actitudes antisemitas en tu entorno (redes sociales)? (En términos porcentuales)



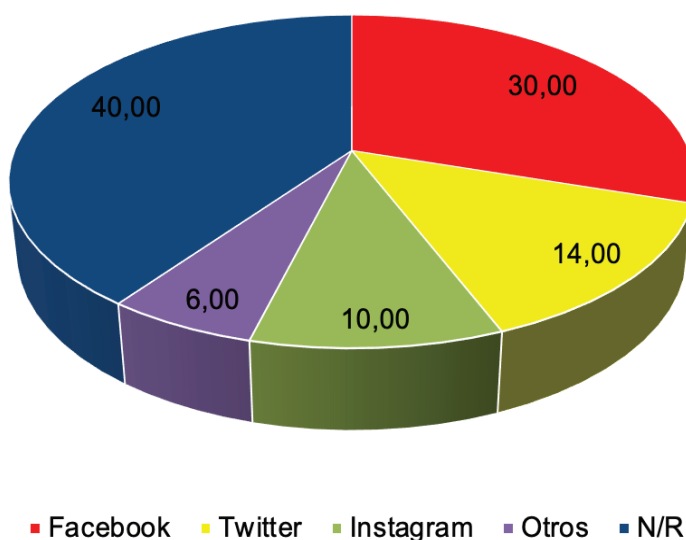
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el gráfico 10 se muestra que solamente el 27% de los encuestados había sido testigo de comentarios de discriminación contra los judíos en las redes sociales mientras que el 68% no había visto noticias con respecto al tema; para este apartado el 5% no votó.

En una última consulta, 30 personas de las 50 respondieron a la pregunta sobre los medios digitales más vistos por ellos y donde eventualmente podrían encontrarse los comentarios de naturaleza antisemita.

Gráfico 11. Pregunta #5 ¿En qué plataformas o medios crees que se manifiestan más noticias sobre la comunidad judía y/o Israel?

En qué plataformas o medios crees que se manifiestan más noticias sobre la comunidad judía y/o Israel? (En términos porcentuales)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Observando el gráfico 11 según la opinión de los encuestados, los medios digitales en donde habrían observado noticias con comentarios antisemitas, “memes” ofensivos o discurso de odio sobre la comunidad judía es Facebook, con 30%, seguido de Twitter (X) con un 14%, e Instagram con un 10% mientras que un 6% mencionó que visualizó noticias en otros medios no recurrentes. También se puede observar que 40% de los 50 encuestados decidieron no responder a esta pregunta.

Discusión

El objetivo principal de este estudio fue analizar las dinámicas que se dan en los comentarios en medios digitales de Costa Rica relacionados con el tema del antisemitismo, considerando su clasificación en comentarios positivos, negativos y otros, bajo el marco de la interacción social en redes.

Al analizar los resultados obtenidos, en relación con los objetivos planteados y el marco teórico, se identificó que La Nación fue el medio que publicó la mayor cantidad de noticias en la red social Facebook. Este hallazgo evidencia que La Nación es el medio digital con mayor alcance en Costa Rica.

Además de analizar los comentarios en Facebook, se decidió incorporar un ejercicio exploratorio en Instagram para complementar los hallazgos. Instagram, como plataforma digital y altamente interactiva, permite un acercamiento distinto al tema, dado que sus usuarios tienden a ser más jóvenes y a consumir contenido de forma diferente. Este ejercicio no vinculante buscó explorar si las percepciones sobre el antisemitismo y el conflicto en Medio Oriente variaban en función de la plataforma utilizada y del nivel de conocimiento de los participantes.

Al incluir esta dinámica, se buscó enriquecer el análisis cualitativo, contrastando cómo distintas redes sociales pueden influir en la formación de opiniones y en la propagación de discursos de odio. Los resultados invitan a reflexionar sobre la importancia de desarrollar políticas públicas que controlen la seguridad digital y regulen los discursos en redes sociales para combatir la desinformación, la discriminación y discurso de odio. Estos aportes contribuyen a la construcción de nuevas dinámicas comunicativas en entornos digitales y destacan la relevancia de los medios digitales en el contexto tanto costarricense como global.

Desde una perspectiva práctica y sin dejar de lado el marco teórico del análisis, los hallazgos tienen implicaciones con un profundo significado, particularmente para entender la realidad que se vive sobre el antisemitismo y los discursos de odio a los que se han visto expuesto en los últimos meses las comunidades judías alrededor del mundo.

En el informe titulado Discurso de odio y antisemitismo en redes sociales del Observatorio WEB (2024) se detalla los porcentajes de antisemitismo obtenidos únicamente en el mes de noviembre. Este menciona que en X (Twitter) se recopiló un antisemitismo del 20,23%, en línea con el promedio del primer semestre 2024 (21,98%). En Facebook, el antisemitismo mensual fue de 13,08%, por encima del promedio del primer semestre 2024 (11,72%) y siendo la cifra más alta del semestre. En los comentarios en portales digitales se registró un nivel de antisemitismo de 21,77%, por encima del promedio anual del 2023 (15,39%). En YouTube, el nivel de antisemitismo del mes fue 2,50%, por debajo del promedio anual 2023 (4,17%). En Google, el antisemitismo fue de 3,33%, en línea con el promedio anual 2023 (2,78%).

Los datos presentados en el informe reflejan una preocupante presencia de discurso de odio y antisemitismo en diversas plataformas digitales. En particular, Twitter y los comentarios en portales digitales destacan por mantener niveles de antisemitismo elevados en comparación con otros resultados, lo que evidencia una persistencia del problema en este espacio. Plataformas como YouTube y Google muestran un descenso o estabilidad en sus cifras, lo que podría ser indicativo de medidas más efectivas de moderación de contenido o mayor tolerancia por parte de sus usuarios.

Estos resultados subrayan la necesidad de abordar el antisemitismo con mayor seriedad y velar por la integridad de las comunidades judías en el entorno digital y fomentar la colaboración entre gobiernos, plataformas y organizaciones civiles para combatir esta problemática de manera integral.

Para futuras investigaciones se podría incluir un análisis más amplio que abarque otros años o plataformas como X o Instagram para explorar cómo varían las dinámicas de interacción. Además, sería interesante analizar el contenido de los comentarios para identificar patrones temáticos más específicos relacionados con el discurso de odio y el antisemitismo.

Conclusiones

El antisemitismo continúa siendo una problemática en las redes sociales de Costa Rica, a pesar de los avances en leyes contra la discriminación y las políticas de moderación en plataformas digitales. Los comentarios que se analizaron para este análisis muestran cómo se siguen reproduciendo estereotipos y prejuicios, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar este asunto de manera más amplia. Además, eventos internacionales relacionados con Israel y la comunidad judía actúan como desencadenantes del discurso antisemita, provocando picos de actividad en las redes sociales y que reflejan tensiones tanto globales como locales.

Una de las tácticas más comunes es disfrazar el antisemitismo como una crítica legítima, algo que se observa en frases como “criticar a Israel no es antisemitismo”, en muchas ocasiones las personas no conocen realmente el significado de antisemitismo, pero en ocasiones los medios de comunicación juegan un doble papel y esto favorece la desinformación. Esta práctica revela la falta de entendimiento sobre la diferencia entre la crítica política y el discurso de odio, lo que requiere una mayor sensibilización por los acontecimientos que se están atravesando.

Esta es una oportunidad para fortalecer la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y plataformas digitales con el fin de diseñar estrategias y políticas públicas más efectivas para combatir el antisemitismo en los medios digitales. Esto podría incluir el mejoramiento de los mecanismos de denuncia, el uso de algoritmos más precisos para identificar discursos de odio y la promoción de programas de educación en contra del antisemitismo y cualquier discriminación sobre la comunidad judía.

Referencias

- ADL. (2022). *Antisionismo*. Recuperado de <https://www.adl.org/es/resources/backgroundunder/antisionismo>
- Combat Antisemitism Movement. (2024). *Meet the Combat Antisemitism Movement: Who we are*. Recuperado de <https://combatantisemitism.org/about/#who-we-are>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Recuperado de https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html?utm_source
- Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). *Countering online hate speech*. Programme in Comparative Media Law and Policy, University of Oxford. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231>
- IHRA. (2016, 26 de mayo). *Definición del antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto*. Recuperado de <https://holocaustremembrance.com/resources/definicion-del-antisemitismo#:~:text=El%2026%20de%20mayo%20de,el%20odio%20a%20los%20jud%C3%ADos>
- Martínez, C. (2020). *Racismo y antisemitismo en el Mein Kampf de Adolfo Hitler*. Recuperado de https://www.coordinacioneditorialfacultadderecho.com/assets/racismo_y_antisemitismo.pdf
- Observatorio Antisemitismo. (2023). *Informe anual sobre el antisemitismo en España*. Recuperado de <https://observatorioantisemitismo.fcje.org/wp-content/uploads/2024/08/Informe-antisemitismo-2023-FCJE-Pag-1.pdf>
- Observatorio WEB. (2024). *Discurso de odio y antisemitismo en redes sociales*. Recuperado de https://mcusercontent.com/5701a4c863971cca6bcd39eed/files/92821d80-35a4-189d-772f-ce2d8d623e70/Informe_11_24.pdf
- Zadoff, E. (2005). *Antisemitismo*. Recuperado de <https://www.yadvashem.org/yv/es/holocaust/about/pdf/antisemitism.pdf>

ESSAY

What do Constitutions say about religious freedom?
More than you would think, and less than you would like!

¿Qué dicen las Constituciones sobre la libertad religiosa?
Más de lo que cree, ¡y menos de lo que le gustaría!

Dennis P. Petri ¹ & Jonathan Fox ^{2 3}

How to cite:

Rodríguez Rodríguez, M.D. (2025). El antisemitismo en las redes sociales de Costa Rica: Análisis de comentarios en medios de alta circulación (octubre 2023 - diciembre 2024). *Derecho en Sociedad*, 19(1), PP. 271-284. Doi: 10.63058/des.v19i1.322

Fecha de ingreso: 22 de enero de 2025. **Fecha de aprobación:** 2 de febrero de 2025.

Abstract

Constitutions frequently affirm religious freedom, but their clauses often fail to translate into practice, making them unreliable indicators of actual religious freedom. However, their widespread inclusion highlights the global importance of religious freedom as a legitimizing principle. Using the RAS-Constitutions dataset from the Religion and State Project, this study examines constitutional provisions on religious freedom from 1990 to 2022, noting their increasing prevalence despite constitutional stability. Clauses such as official religion, separation of religion and state (SRAS), and general religious freedom show limited impact on reducing government (GRD) or societal

¹ Dennis P. Petri (PhD, Vrije Universiteit Amsterdam, 2020) is International Director at the International Institute for Religious Freedom, founder of the Observatory of Religious Freedom in Latin America, and Professor of International Relations and Humanities at the Latin American University of Science and Technology. ORCID: 0000-0002-7473-2576. Email: dp.petri@gmail.com.

² Jonathan Fox (Ph.D. in Government & Politics, University of Maryland, 1997) is the Yehuda Avner Professor of Religion and Politics at Bar Ilan University in Ramat Gan Israel and director of the Religion and State Project (www.religionandstate.org). ORCID: 0000-0002-0422-7275. Email: Jonathan.Fox@biu.ac.il.

³ This manuscript builds upon a publication that originally appeared in Canopy Forum, a digital platform from the Center for the Study of Law and Religion at Emory University: <https://canopyforum.org/canopy-forum-in-collaboration-with-derecho-en-sociedad/>

religious discrimination (SRD). Instead, clauses prohibiting religious hate speech and safeguarding the right not to have a religion prove more consequential, particularly in contexts of anti-religious secularism, where they act as constitutional red flags. Additionally, constitutions in 13 Muslim-majority nations that base laws on religion impose significant restrictions. The findings underscore the need for a comprehensive approach to assess religious freedom, extending beyond constitutional analysis to include legislation, jurisprudence, and broader policies. This aligns with the goals of the International Institute for Religious Freedom (IIRF) and the Religion and State Project in developing the Global Religious Freedom Index, a multi-year initiative to holistically evaluate religious freedom worldwide.

Keywords: religious freedom, constitutions, religious discrimination, secularism, Religion and State-Constitutions dataset, religious policy, Global Religious Freedom Index.

Resumen

Las constituciones suelen afirmar la libertad religiosa, pero sus disposiciones rara vez se traducen en la práctica, lo que las convierte en indicadores poco fiables de la libertad religiosa real. Sin embargo, su inclusión generalizada resalta la importancia global de la libertad religiosa como principio legitimador. Usando el conjunto de datos RAS-Constitutions del proyecto Religion and State, este estudio examina las disposiciones constitucionales sobre libertad religiosa de 1990 a 2022, observando su creciente prevalencia a pesar de la estabilidad constitucional. Cláusulas como religión oficial, separación entre religión y Estado (SRAS) y libertad religiosa general muestran un impacto limitado en la reducción de la discriminación religiosa gubernamental (GRD) o social (SRD). En cambio, las cláusulas que prohíben el discurso de odio religioso y garantizan el derecho a no tener una religión resultan más relevantes, especialmente en contextos de secularismo antirreligioso, donde actúan como alertas constitucionales. Además, las constituciones de 13 naciones de mayoría musulmana que basan sus leyes en la religión imponen restricciones significativas. Los hallazgos destacan la necesidad de un enfoque integral para evaluar la libertad religiosa, extendiéndose más allá del análisis constitucional hacia legislaciones, jurisprudencias y políticas amplias. Esto se alinea con los objetivos del Instituto Internacional para la Libertad Religiosa (IIRF) y el proyecto Religion and State para desarrollar el Índice Global de Libertad Religiosa, una iniciativa plurianual para evaluar la libertad religiosa a nivel mundial.

Palabras clave: libertad religiosa, constituciones, discriminación, secularismo, conjunto de datos Religion and State-Constitutions, política religiosa, Índice Global de Libertad Religiosa.

Introduction

Whilst constitutions are often overlooked in practice, rendering them poor indicators for actual religious freedom on the ground, it is essential to recognize that the prevalence of religious freedom clauses within these constitutional documents serves as a testament to the enduring legitimacy and value of religious freedom in global politics. Even if many countries may disregard these clauses in practice, the fact that they find it necessary to pay lip service to the concept underscores its considerable standing in world politics. In other words, most countries feel compelled to at least pretend that they provide religious freedom.

In this study, we take a closer look what national constitutions say about religious freedom, and explore their practical significance. To achieve this, we rely on the RAS-Constitutions dataset that was recently updated by the Religion and State Project at Bar-Ilan University under the leadership of Jonathan Fox, which we introduce in section 2. After presenting the methodology of this data collection instrument, in section 3 we conduct a descriptive analysis of the most important data pertaining to the treatment of religious freedom within national constitutions, tracing their evolution between 1990 and 2022. We find that religious freedom has become more prevalent in constitutions, even as constitutions exhibit notable stability.

In section 4, we discuss the limited significance of official religion and separation of religion and state (SRAS) clauses concerning actual religious freedom. We find that countries featuring official religions or SRAS clauses do not uniformly uphold or impede religious freedom. Consequently, drawing simplistic conclusions based solely on the presence or absence of these clauses proves unwarranted. In section 5, we delve into specific constitutional clauses that grant religious freedom. Again, we confirm that their mere existence poorly predicts instances of religious discrimination, whether instigated by governments (government religious discrimination, GRD) or non-state actors (societal religious discrimination, SRD). This underscores the necessity of examining all dimensions of religious policy to accurately assess the status of religious freedom in a given country, moving beyond constitutional text.

We further delve into the question why constitutional promises of religious freedom are so ineffective to guarantee actual religious freedom in section 6, by exploring several complementary hypotheses. Perhaps the most important hypothesis is the one we already mentioned at the start of this introduction: constitutional commitments to religious freedom are often just window dressing, yet countries continue to feel compelled to enact them.

In section 7 we discuss the only constitutional clauses that do have some impact on religious freedom. These are not the ones that might be expected and that we explored in sections 4 and 5 (presence of official religion, SRAS or religious freedom clauses) but rather clauses related to the prohibition of religious hate speech as well as safeguards for the right not to have a religion.

Following Fox (2023), we find that these kinds of constitutional clauses have more bearing on religious freedom, because they transcend symbolic affirmations and mandate specific actions from states. Significantly, they hold particular relevance in the context of anti-religious forms of secularism, where their presence serves as constitutional red flags for religious freedom, which we further discuss in section 8. In this section we also present the thirteen countries, which all have a Muslim majority, that constitutionally base their laws on religion and/or significantly subject specific rights and topic areas to religion.

Our ultimate conclusion underscores that a comprehensive understanding of religious freedom requires a holistic analysis of religious policy, extending beyond constitutional analysis. Except for the identified red flags, constitutional scrutiny alone proves largely inadequate. We must delve into lower-level legislation, jurisprudence, and broader government practices to obtain a thorough grasp of a country's religious freedom landscape. This comprehensive approach aligns with the objectives of the International Institute for Religious Freedom (IIRF) in partnership with the Religion and State Project in developing the Global Religious Freedom Index, a project that will take three years to complete.

Introducing the religious freedom variables in the RAS-Constitutions dataset

The RAS-Constitutions dataset looks at the constitutions of 176 countries globally, covering the period from 1990 to 2022 (Fox & Sandler, 2020). An earlier version covered 169 constitutions from 1990 to 2008. The dataset has 154 variables that examine aspects like whether the constitution declares an official religion, separates religion and state, includes religious policies, guarantees religious freedom, limits other freedoms based on religion, makes symbolic references to religion, and bans religious discrimination.

The data was collected by getting English translations of constitutions from academic websites like www.religlaw.org and <https://www.constituteproject.org>. If these sites didn't have copies, they were obtained from other academic sources or official government sites. When not available in English, Google Translate was used.

Each constitution was checked for various religion-related keywords like religion, religious, names of religions in the country, God, specific deity names, conscience, Bible, Koran, holy, sacred, etc. Coders marked relevant clauses related to religion for coding. A code of 1 means the clause is present, while 0 means it's not.

The unit of analysis in RAS-Constitutions is country-year. The dataset covers national constitutions and doesn't include data from sub-units of federal governments like individual states in Nigeria or India.

In this study, we focus on the variables of the RAS Constitutions dataset that directly pertain to religious freedom: official status of religion, which includes clauses on separation of religion and state (SRAS), and religious freedom clauses. The variables considered in this study are the following:

- **Official Status of Religion**
 - o No relevant clause
 - o SRAS clause
 - o Official religion clause
 - o both types of clauses
- **Religious Freedom Clauses**
 - o Freedom of religion or conscience
 - o Freedom of worship, observance, or to practice religious rituals or rites
 - o Freedom to change one's religion
 - o The right to profess (choose, etc.) a religion
 - o The right to not profess a religion or freedom from religion or be an atheist
 - o Hold or express religious opinions
 - o Right not to join or be a member of a religious organization
 - o The right to propagate or spread a religion
 - o No one is required to disclose their religion or religious beliefs
 - o Education or instruction in public schools or at the government's expense
 - o Education or instruction at one's own expense or does not list at whose expense (also right to teach)
 - o Raising children in one's religion
 - o Form religious groups or practice religion in groups. This includes the right to a religious community
 - o Have a place of worship or own property (for religious organizations)
 - o Religious organizations may manage their own affairs
 - o Right to a chaplain in hospitals, the military, etc.
 - o Protection of religious rights even in states of emergency or war
 - o Freedom from coercion with regard to religion
 - o In public
 - o In private
 - o Other

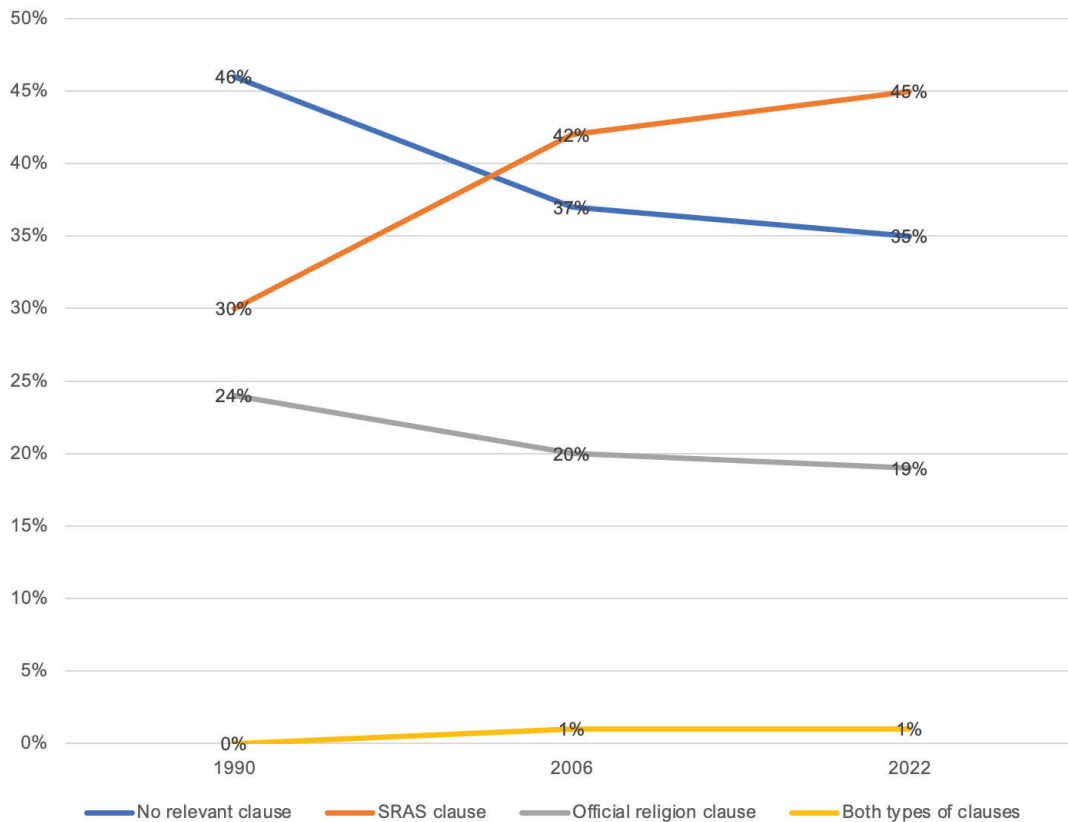
The RAS Constitutions dataset contains many more detailed variables, which all bear some degree of relevance to religious freedom, particularly when adopting a multidimensional perspective on the concept. These variables include things as the specific language and types of SRAS clauses, the specifics of the establishment of religion in the case of official religions, as well as the protections and qualifications for religious freedom. However, for the sake of brevity, our analysis is limited to the variables previously mentioned. Moreover, the conclusions we reach in this study would not be

greatly altered if the full set of variables would have been considered. For a more in-depth analysis of the RAS Constitutions dataset, please refer to Fox (2023).

Descriptive analysis

In this section, we present distributions of the chosen variables and show changes over time, using 1990, 2006, and 2022 as reference points.

Graphic 1. Official Status of Religion (1990, 2006, 2022)



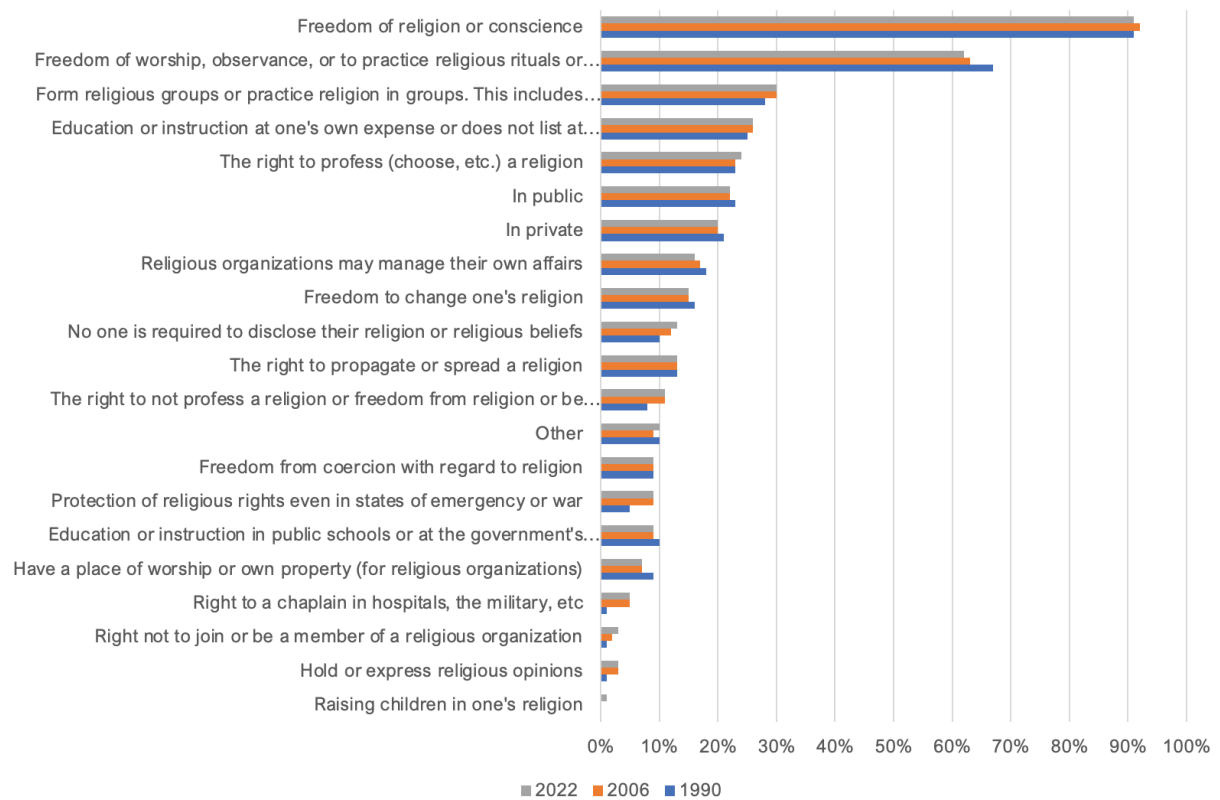
SOURCE: RAS-CONSTITUTIONS DATASET (2022).

As can be expected, constitutional clauses regarding religion tend to remain stable over time, even when countries adopt new constitutions. The main variation in the data took place shortly after 1990, when a historic number of new countries was created, most of which following the dismantlement of the former Soviet Union. Between 2006 and 2022, changes were minor.⁴

⁴ Data tables used for this study are available in Petri & Fox (2023).

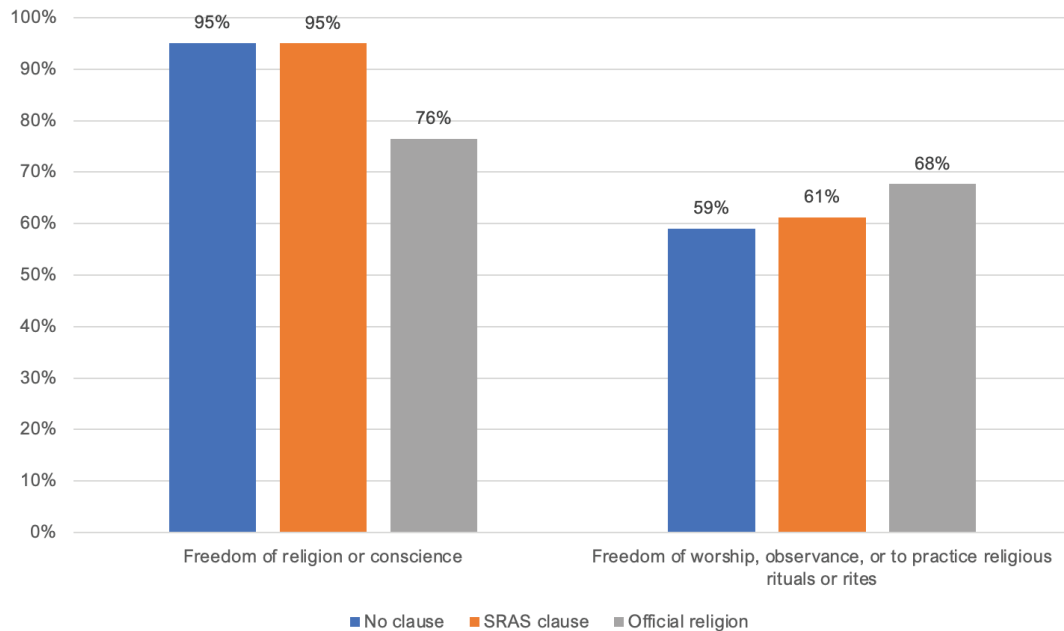
A few trends can be observed. First, even though the percentage of countries that does not have a relevant status of religion clause in their constitutions went down between 1990 and 2022, it went up in absolute numbers. Second, the percentage of countries with an official religion clause went down slightly. The percentage of countries with a SRAS clause went up more significantly, suggesting a growing consensus on the importance of the principle of separation of religion and state. Finally, the odd country that has both an official religion clause and an SRAS clause is Bulgaria, a country that both establishes Eastern Orthodox Christianity as the country’s “traditional” religion, but also establishes SRAS (US State Department, 2022).

Graphic 2. Religious Freedom Clauses (1990, 2006, 2022)



SOURCE: RAS-CONSTITUTIONS DATASET (2022).

Graphic 2. Religious Freedom Clauses (1990, 2006, 2022)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Let's take a closer look at the relation between the two most common religious freedom clauses, "freedom of religion or conscience" and "freedom of worship, observance, or to practice religious rituals or rites" and official status of religion using the most recent data available (2022). We find that the standard freedom of religion clause is present in 95% of the countries that have either no religion clause or a SRAS clause, and in 76% of the countries that do establish an official religion. The second type of religious freedom clause, whilst less frequent, exists in roughly two thirds of the constitutions, regardless of their official status of religion.

Whilst it seems logical for constitutions that do not have any official religion clause or a SRAS clause to have a religious freedom clause, it may seem counterintuitive for countries that have an official religion. At least on paper, however, having an official religion can coexist with the constitutional protection of religious freedom. It is also revealing that 5% of the countries with a SRAS clause do not have a religious freedom clause. This suggests that religious freedom clauses are often viewed as compatible with SRAS, even though this is not necessarily the case.

The limited significance of official religion and SRAS clauses

As is true for many policy fields, there often is a gap between what constitutions say, and the reality on the ground. This is also true for religious policy. In fact, as we discuss below, the analysis

of constitutional protections for religious freedom cannot be considered a sufficient proxy for religious policy. In order to truly understand religious policy, a more holistic approach is necessary to account for lower legislation that complements constitutional provisions, as well as government practices.

To begin, whether a country has an official religion or not, is not a good indicator of the overall state of religious freedom. Countries with an official religion are relatively rare, as only 34 (out of 176) countries had such a clause in 2022, though a few additional countries declare official religions extra-constitutionally. The countries that do have an official religion are very heterogeneous. They include democratic countries such as Costa Rica, Denmark or Israel, but also authoritarian theocracies such as Afghanistan, Iran and Saudi Arabia, which are all listed as Countries of Particular Concern (CPC) by the US Commission on International Religious Freedom (2023). We thus conclude that having an official religion, is not, per se, incompatible with the religious freedom of minority religions.

In 2022, 80 countries had a SRAS clause. When considering SRAS clauses, we are faced with a similar heterogeneity as among countries with an official religion, as not all forms of separation are the same. As Fox clearly describes in his book *Political Secularism, Religion, and the State* (2015), a whole typology of secular states can be developed with varying implications for religious freedom. To keep the analysis simple, two general types of political secularism can be distinguished: a form of secularism that is in practice antireligious and a form secularism that is neutral toward religion. In other words, SRAS can be both a friend and an enemy of religious freedom. The United States would be an example of a neutral, and perhaps even accommodating, form of political secularism, whereas countries like France, Mexico (although a bit less since constitutional reforms in 1992) and Turkey (at least until 2003), could be categorized as anticlerical (see Fox, 2015; Petri, 2021; Petri, 2023).

In both cases, whether a country has an official religion and/or a SRAS clause does not say much about the overall state of religious freedom. To understand the overall state of religious freedom, it is necessary to consider actual religious policy, and specifically look at the nature and level of the involvement of the state in religion, as well as state practices of favoritism of the majority religion and discrimination of minority religions.

The difference between religious freedom clauses and actual religious policy

Even when religious freedom finds its place within a constitution, this alone proves to be insufficient. The refusal to allow freedom of religion in constitutional texts cannot even be considered as a glaring red flag. The following countries do not include any mention to religious freedom in their constitutions: Austria, Comoros, France, Mauritania and Saudi Arabia. In some of these countries, however, religious freedom is protected by ordinary legislation and through general government practice.

As Fox (2023) shows, few of the constitutional religion clauses prove to be robust indicators of Government Religious Discrimination (GRD). The most reliable predictors of GRD are not constitutional causes, but other variables such as autocracy, tangible state support for religion, and societal religious discrimination (SRD) against religious minorities (see Fox 2016, 2020; Grim and Finke 2011).

Fox finds that the lack of correlation between most constitutional religion clauses and GRD, coupled with the capacity of other religion-related variables to predict GRD, implies that these clauses provide a suboptimal measure of a country's genuine policies and attitudes toward religion. Even when official religion clauses in constitutions predict GRD with marginal significance, it is practical levels of state support for religion that consistently predict GRD. As already mentioned, constitutional support for an official religion barely influences GRD unless it reflects a practical commitment to a state religion. Fox further indicates that religious freedom clauses, including qualifications and protections for specific religious freedoms, exhibit no discernible indirect influence on GRD. Their consistent failure to predict GRD underscores their status as common constitutional rhetoric that may or may not be applied in practice.

What holds true for GRD is equally applicable to SRD. We can employ a *contrario* reasoning by examining some highly significant cases. According to the Violent Incidents Database of the International Institute for Religious Freedom, which tracks incidents of violence against religion by systematically analyzing media sources and other public information, Nigeria consistently ranks as the country with the highest number of violent incidents related to religion, with the majority perpetrated by non-state actors (Observatory of Religious Freedom in Africa, 2023). This is in stark contrast with Nigeria's ostensibly favorable constitution regarding religious freedom. Another illustrative example pertains to many Latin American states, which boast excellent religious freedom provisions on paper but still grapple with some degree of SRD (Petri, 2021). This underscores that constitutional provisions do not guarantee the protection of religious freedom by the state.

Why constitutions' promises often fail to protect religious freedom

In the complex landscape of religious freedom, there is a puzzling discrepancy between the lofty promises enshrined in constitutions and the actual respect for religious freedom on the ground. Several factors contribute to this disconnect.

Firstly, it's crucial to recognize that many constitutional clauses pertaining to religious freedom are often symbolic in nature and lack any practical implications (see Fox, 2023). This paradox does not apply to religious freedom only, but to other human rights as well. It is well-known that authoritarian states adopt constitutional structures, establish parliaments, and conduct elections, seemingly embracing democratic norms while undermining them in practice. They do so for many reasons, but most of the time this is window-dressing, i.e. a way to provide a fig leaf of democracy (see Hague, Harrop & McCormick, 2019).

Secondly, a substantial number of restrictions on religious freedom find their place not within constitutional texts but in lower-level legislation, bureaucratic practices, or remain concealed within various legal measures (see Fox, 2023). One prominent example is the presence of blasphemy laws, which can severely limit religious expression and freedom in many countries (see USCIRF, 2020), but are rarely included in national constitutions.

In this complex landscape, a multidimensional perspective on religious freedom is key. Indeed, religious discrimination also manifests itself beyond the purview of legal analysis. Indeed, even when religious rights are protected by constitutions and other legislation, religious groups may also be subject to a variety of human security threats that at first sight have nothing to do with the free exercise of their religion, but that actually constitute an alternative form of discrimination. For example, most religious groups in Cuba enjoy freedom of worship, but that does not mean they have full religious freedom. They are often hindered in ways that, at first glance, have little to do with religious freedom: they may be accused of violating zoning laws because religious services are often held in houses, as permits for the construction of places of worship are rarely granted. Additionally, religious leaders critical of the regime may be accused under fabricated charges (see Petri, 2021).

Lastly, the dissonance between the legal framework's promises and their practical implementation is a classic issue within the international human rights system. The capacity of the international human rights system to get states to enforce human rights, including the right to religious freedom, is limited by the principle of national sovereignty, which often implies there are no guarantees that constitutional and international human rights commitments, including to religious freedom, are respected in practice (see Mingst & McKibben, 2021).

The constitutional clauses that do matter for religious freedom

As Fox finds, alternative constitutional clauses may wield more substantial influence over religious freedom (2023). He suggests that clauses denouncing religious hate speech and safeguarding the right not to have a religion tend to correlate with higher GRD levels when coupled with anti-religious forms of secularism.

The clauses within constitutions that significantly influence GRD do not pertain to central declarations of a state's relationship with religion or its commitment to religious freedom. Instead, they focus on more specific religious matters, which may not be perceived as the primary indicators of religious freedom in constitutional texts. Specifically, clauses safeguarding the right not to profess a religion and those banning religious hate speech both demonstrate a noteworthy association with higher levels of GRD. This observation suggests that these clauses better represent an anti-religious form of secularism compared to constitutional declarations of a state's secularity.

The prohibition of religious hate speech may appear reasonable on the surface, but its potential

implications can be complex. It raises questions about the interpretation of religious texts that criticize other religions, potentially categorizing them as hate speech. Furthermore, any limitations on speech, including hate speech restrictions, have illiberal connotations, challenging the principle of free speech essential to liberal philosophy and governance. These restrictions tend to be vague and open to interpretation, posing a risk to religious and other fundamental freedoms.

Additionally, clauses protecting the right not to profess a religion may signify a desire to shield secular or non-religious individuals from religious influence, potentially reflecting a fear or distrust of religion. This protection is often present in states with substantial societal discrimination against religion, suggesting that this concern largely arises from a non-religious perspective.

Furthermore, among the countries with such clauses, several are former Communist states where anti-religious aspects of Communist ideology still exert influence, indicating a correlation between this protection and anti-religious sentiments rooted in history. Therefore, understanding secularism as a political ideology requires distinguishing between positions advocating for state separation from religion and those promoting anti-religious agendas. This differentiation is crucial for analyzing the complexities of secularism's various facets in constitutional contexts.

Constitutional red flags

As argued above, most constitutional provisions regarding religion are inadequate predictors of religious discrimination. The only three constitutional clauses that have some bearing on GRD, according to a study by Fox (2023) are the following:

- The government must support religious education or provide religious education (optional or mandatory, specify which) in schools.
- The right to not profess a religion, or freedom from religion or be an atheist.
- Bans on incitement, hate speech, animosity, enmity, or hostility based on religion (includes by political parties or other organizations).

The only country that combines all three constitutional clauses is Lithuania. In a way, the constitution of Lithuania can therefore be considered the worst for religious freedom. Eight countries have two of these clauses: Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Germany, Laos, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan. 54 countries have one such clause.

Beyond these three constitutional clauses, there are 13 countries that constitutionally base their laws on religion and/or significantly subject specific rights and topic areas to religion. These countries, all of which have a Muslim majority, include Afghanistan, Bahrain, Brunei, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Maldives, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, and Yemen.

Conclusions

To truly understand the scope of the protection of religious freedom, it is necessary to examine religious policy holistically. In essence, it is the government's support for religion, as reflected in its laws, administrative practices, and judicial decisions, that significantly influences religious freedom. Official religion clauses within constitutions only impact religions to the extent that they signify a genuine commitment to a state religion in practical terms. The evidence presented here clearly indicates that such clauses, at best, offer weak indications of this commitment. The Global Religious Freedom Index of the International Institute for Religious Freedom, developed in partnership with the Religion and State Project at Bar-Ilan University thanks to the generous funding from Global Christian Relief, will provide a much more comprehensive overview of religious policy, considering it across nearly 200 variables. Regional reports of this index started to come out as early as 2024. By 2026, a global report will be made public.

References

- Fox, J. (2015). *Political Secularism, Religion, and the State*. New York: Cambridge University Press.
- Fox, J. (2016). *The Unfree Exercise of Religion: A World Survey of Religious Discrimination against Religious Minorities*. New York: Cambridge University Press.
- Fox, J. (2020). *Thou Shalt Have No Other Gods before Me: Why Governments Discriminate against Religious Minorities*. New York: Cambridge University Press.
- Fox, J. (2023). Do Religion Clauses in Constitutions Predict Government-Based Discrimination against Religious Minorities? *Religions* 14(1): 92. <http://dx.doi.org/10.3390/rel14010092>
- Fox, J., & Sandler, S. (2020, December 16). The Religion and State Project, Constitutions Dataset, 1990-2002. <https://www.thearda.com/data-archive?fid=CONST02>
- Grim, B.J. & Finke, R. (2011). *The Price of Freedom Denied*. New York: Cambridge University Press.
- Hague, R., Harrop, M., McCormick J. (2019). *Comparative Government and Politics*. 11th edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- International Institute for Religious Freedom (IIRF) (2023). Violent Incidents Database. www.violentincidents.com.
- Mingst, K.A. & Mckibben, H.E. (2021). *Essentials of International Relations* (9th edition). New York: W. W. Norton & Company.
- Observatory of Religious Freedom in Africa (ORFA) (2023). Killings and Abductions in Nigeria (10/2019 – 9/2022). <https://orfa.africa/wp/wp-content/uploads/2023/06/Nigeria-Killings-and-Abduction-10-2019-9-2021-final.pdf>
- Petri, D.P. (2021). *The Specific Vulnerability of Religious Minorities*. Bonn: International Institute for Religious Freedom. <https://iirf.global/publications/books/the-specific-vulnerability-of-religious-minorities/>
- Petri, D.P. & Fox, J. (2023). What do Constitutions say about religious freedom? More than you would think, and less than you would like! IIRF Report 2023/11, International Institute for Religious Freedom. https://iirf.global/wp-content/uploads/2023/11/2023-11_IIRF-Reports.pdf
- Petri, D.P. (2024). Religious Freedom. In J. Haynes (ed.). *The Routledge Handbook of Politics and Religion in Contemporary America*. Abingdon/New York: Routledge.
- US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) (2023). Countries of Particular Concern (CPC) and Special Watch List (SWL). USCIRF 2023 Annual Report. <https://www.uscirf.gov/countries/2023-recommendations>
- US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) (2020). *Violating Human Rights: Enforcing the World's Blasphemy Laws*. https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Blasphemy%20Enforcement%20Report%20_final_0.pdf
- US State Department (2022). 2022 Report on International Religious Freedom. <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/>

Normas de publicación

La revista *Derecho en Sociedad* es una publicación electrónica semestral de la Facultad de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) de San José, Costa Rica. Puede ser accedida en <https://www.ulacit.ac.cr/publicaciones/>

Los artículos e investigaciones están relacionados con el campo de las ciencias jurídicas, aún buscando, igualmente, un carácter interdisciplinar. En la revista pueden publicar estudiantes, profesores y graduados de ULACIT, así como especialistas en cualquier área del Derecho, aunque no formen parte de esa comunidad universitaria.

Contenido de la revista

La revista prevé la publicación de artículos de fondo que sean resultado de investigaciones realizadas de forma individual o colaborativa en materias relacionadas con el campo de las ciencias jurídicas.

Normas de publicación

1. No se recibirán artículos impresos. Los artículos remitidos para su publicación deberán escribirse en idioma español, ser originales e inéditos y no deberán estar en proceso de revisión por otra revista. El artículo inédito supone que este no ha sido publicado ni considerado en otra revista o publicación.
Excepcionalmente, a criterio del Consejo Editorial y de la Dirección de la revista, se podrán admitir artículos, ensayos, ponencias o conferencias de otras publicaciones en consideración a su relevancia. En este último caso, deberán indicarse, de modo expreso, los datos de la publicación previa, siempre y cuando el autor releve de toda responsabilidad a ULACIT frente a terceros.
2. El autor deberá ceder los derechos de publicación o copia de sus artículos, con los efectos y alcances que figuran en la parte de la revista dedicada a la cesión de derechos patrimoniales y otros extremos. A tal fin, habrá de suscribir el correspondiente documento de cesión de derechos que figura como anexo en la Revista Derecho en Sociedad y que le será facilitado antes de la publicación del trabajo. Si el autor, con posterioridad, desea publicar su artículo en otro medio, tendrá que hacerlo con autorización expresa de la Dirección de la revista Derecho en Sociedad.
3. Los contenidos y opiniones que se puedan verter en cada artículo son responsabilidad exclusiva del autor, no de la revista, de su Dirección, de su Consejo Editorial, ni de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

4. La solicitud, junto con el artículo, han de enviarse al editor en jefe de la revista, Dr. Dennis P. Petri.
5. Además, se deberá indicar la información que figura a continuación respecto de la cual se guardará la debida confidencialidad:
 - ✓ Número de documento de identidad, con indicaciones del país, en su caso.
 - ✓ Teléfono con prefijo del país
 - ✓ Resumen del currículum vitae
 - ✓ Dirección de correo electrónico
6. La revista tiene una periodicidad semestral. Cada número aparece en los meses de marzo y setiembre, salvo que la Dirección y el Consejo Editorial dispongan otras fechas.
7. La solicitud de publicación de un artículo para el volumen de marzo debe presentarse antes del 1° de diciembre previo. La solicitud de publicación de un artículo para el volumen de setiembre debe presentarse antes del 1° de julio previo.
8. La selección de los artículos por publicar estará a cargo del Consejo Editorial de la revista y el documento sometido a su consideración deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 - ✓ Artículo en procesador tipo Word.
 - ✓ Texto principal, en idioma español
 - ✓ Márgenes de 2,54 cm en margen superior, inferior, derecha e izquierda.
 - ✓ Texto justificado
 - ✓ Tipo letra Times New Román, tamaño 12
 - ✓ Párrafos sin sangría
 - ✓ Espaciado sencillo, con un espacio entre párrafos
 - ✓ Formato APA, 7a edición, para referenciación, con carácter obligatorio
 - ✓ Archivos (en caso de que existan): imágenes, diagramas o fotografías en formato digital, tipo JPEG o similar (mínimo de 300 dpi)
 - ✓ Archivos XML para tablas

Los trabajos comenzarán con el título del artículo, en español e inglés, nombre y apellidos de la persona o personas autoras, indicación a pie de página de su afiliación institucional, calidades y correo electrónico.

Seguidamente, en el texto se incluirá el Resumen y el Abstract, de máximo 250 palabras en un solo párrafo. Se incluirán de cinco a seis palabras claves y Keywords, con las que se identifiquen los trabajos. A continuación, se iniciará el texto del trabajo de acuerdo con las normas generales de un artículo científico/académico, debiéndose utilizar la metodología IRMD (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión).

Las referencias se incluirán al final del trabajo, de acuerdo con los parámetros establecidos por la APA (7a edición). No se debe utilizar el estilo APA generado automáticamente por el procesador Word: es obligatorio confeccionar la lista de referencias en forma manual.

Las notas se relacionarán numeradas al pie de página. Si dichas notas incluyesen referencias bibliográficas o virtuales, se citarán también según el formato establecido por la normativa APA.

Todo el texto debe tener una extensión entre 8000 y 9000 palabras (excluyendo el resumen/Abstract, palabras clave/Keywords y las referencias).

Los artículos serán enviados a revisión filológica, por lo que los autores deberán aceptar los cambios recomendados por el profesional contratado por ULACIT.

Además de los requisitos antes descritos, debe tenerse en cuenta las siguientes indicaciones, también de carácter obligatorio:

- No se utilizará la redacción en primera persona. Por ejemplo, usar “Se debe considerar...” en lugar de “El suscrito considera...” o “Considero...”. “El ordenamiento jurídico costarricense...” en lugar de “Nuestro ordenamiento jurídico...” o “El Código de Trabajo...” en lugar de... “Nuestro Código de Trabajo...”, etc. La redacción será siempre en tercera persona.
- No se personalizará comentario alguno hacia terceras personas del sector público o privado.
- Las transcripciones jurisprudenciales deberán ser breves, utilizándose únicamente la parte de las resoluciones de utilidad para la investigación y cumpliendo la normativa APA.
- Debe evitarse anteponer a la cita el nombre de pila, así como “Don...”, “Doña...”, “El Jurista...”, “La Profesora...”, “El doctor...”, etc.
- Las resoluciones jurisdiccionales se deben citar en la siguiente forma:

✓ En el cuerpo del documento:

- Nombre del tribunal
- Entre paréntesis, año de la resolución
- Se omitirán hora y minutos
- Se omitirán nombres y apellidos de quienes integran el órgano jurisdiccional.
Ejemplo.: “Según la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (2014), el tema de fondo...”

✓ En la lista de referencias (Normativa APA vigente):

- Con sangría francesa y doble espacio, el órgano jurisdiccional deberá integrarse como autor con el correspondiente orden alfabético. Ejemplo:

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. (2014). Resolución N.o 1031, de 31.07.2014. Expediente: 06-000884-0163-CA. <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-768928>

9. Los artículos serán enviados por ULACIT a revisión filológica, por lo que los autores deberán aceptar los cambios recomendados por el profesional contratado por la Universidad.
10. El rechazo de los trabajos o cualquier discrepancia sobre ellos se resolverá por el Consejo Editorial ***sin posibilidad de reclamo contra la decisión de dicho órgano.***
11. La Facultad de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en conjunto con la Dirección y el Consejo Editorial de la revista, podrán modificar, parcial o totalmente, las presentes normas cuando lo estimen oportuno.
12. La entrega de los artículos o investigaciones supone la aceptación de las normas anteriores y de lo previsto en el documento de cesión derechos, una vez aceptada la obra para su inserción en la revista.

Cesión derechos de autor

Revista Derecho en Sociedad - Facultad de Derecho de ULACIT

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

El envío del documento a la dirección de la revista, con los campos rellenables cumplimentados, es un requisito indispensable para la postulación de los artículos en la revista Derecho en Sociedad y debe ser firmado los/las autores/as del manuscrito postulante. El formato de este documento es PDF con campos rellenables para la incorporación de los datos básicos del manuscrito y los/las autores/as.



Cesión derechos de autor

Revista "Derecho en Sociedad" de la Facultad de Derecho (ISSN: 2215-2490)
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), San José, Costa Rica

Yo _____, en mi calidad de (estudiante, docente, investigador (a)) _____, de la carrera de _____ y autor (a) del artículo intitolado _____

, manifiesto que cedo a título gratuito y sin limitación alguna la totalidad de los derechos patrimoniales de autor derivados del artículo de mi autoría, incluyendo los de edición y publicación, a favor de la Revista "Derecho en Sociedad" y de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), declarando que el artículo es original y que es de mi creación exclusiva, no existiendo impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que estoy efectuando, respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir, y exonerando de cualquier responsabilidad a las entidades cesionarias.

En virtud de lo anterior, la revista "Derecho en Sociedad" y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) adquieren el derecho de reproducción en todas sus modalidades, incluso para inclusión audiovisual, el derecho de transformación o adaptación, traducción, compilación, comunicación pública, distribución y, en general, cualquier tipo de explotación con fines académicos o comerciales por sí, o por terceros que los citados cesionarios designen, pudiendo crear o modificar resúmenes o extractos de la obra, en español u otros idiomas, editándolos y publicándolos en la forma que se describe anteriormente, y licenciar todos los derechos de los cesionarios aquí señalados a terceras partes

Por tanto, como consecuencia de la presente cesión, autorizo expresamente a la revista "Derecho en Sociedad" para copiar, reproducir, distribuir, publicar, comercializar el artículo objeto de la cesión, por cualquier medio digital, electrónico o reprográfico, conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos morales de autor contenidos en la vigente legislación aplicable, no pudiendo el cedente divulgar ni reproducir por ningún medio la obra objeto de esta cesión a no ser que cuenta con la previa autorización expresa de los cesionarios.

Firma conforme en San José, Costa Rica, a los _____ días del mes de _____ del 20_____

Firma

Número de cédula